

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
“Francisco García Salinas”

Unidad Académica de Ciencia Política

Doctorado en Ciencia Política

Segunda Promoción



**Gestión Estatal del Subdesarrollo y Dominación
Autoritaria en México, (1934-2006).**

**Las Causas Estructurales de las Tendencias Autoritarias en
el Ejercicio del Poder Político en nuestra Formación Social.**

TESIS

Que para obtener el grado de
Doctor en Ciencia Política

PRESENTA

Héctor de la Fuente Limón

Director de Tesis:
Víctor Manuel Figueroa Sepúlveda

Zacatecas, Zac., Junio de 2010.

Dedico este trabajo a mi esposa Carmen por todo su apoyo y esfuerzos en estos años de estudio.

Agradezco a mis queridos amigos y colegas del cuerpo docente de la Unidad Académica de Ciencia Política su decidido respaldo en mi paso por el programa de doctorado. Mención especial merecen la Dra. Silvana Figueroa y el Dr. Leonel Álvarez, quienes sin duda han sido un importante pilar en mi formación como persona y como profesionalista.

De igual forma agradezco al Dr. Víctor Manuel Figueroa su enorme generosidad, su congruencia, y sobre todo su interminable caudal de conocimientos que despertaron en mí la vocación por la investigación.

Índice.

Introducción/ 1

CAPÍTULO I

Subdesarrollo y Democracia: Teoría y Práctica desde América Latina/ 13

1.1 Desarrollo y democracia desde el enfoque de la teoría de la modernización/ 17

1.2 Las teorías cepalina y de la dependencia/ 25

1.3 El cambio de paradigma: Neoliberalismo y Transitología/ 32

1.4 Desarrollo y democracia en la actualidad: la globalización/ 39

Reflexiones finales/ 43

CAPÍTULO II

La Gestión Estatal del Subdesarrollo en México/48

2.1 El Imperialismo y la gestión estatal del desarrollo/ 55

2.2 La gestión estatal del subdesarrollo en México/ 63

2.3 La gestión estatal del subdesarrollo bajo el patrón de crecimiento relativo/ 68

2.3.1 Despegue y consolidación/ 70

2.3.2 Agotamiento/ 76

2.4 La gestión estatal del subdesarrollo bajo el patrón de crecimiento absoluto/ 79

2.4.1 El neoliberalismo en México/ 83

2.4.2 La gestión estatal del subdesarrollo en la globalización neoliberal/ 90

Reflexiones finales / 104

CAPÍTULO III

Los Excedentes de Población: Rasgo Estructural del Subdesarrollo en Nuestro País/ 108

3.1 Subdesarrollo y excedentes de población/ 109

3.2 Patrones de crecimiento y excedentes de población en México/ 113

3.3 Población en activo y sector informal de la economía/ 119

3.4 Efectos de la reforma agraria y su contrarreforma en la producción campesina/ 128

3.5 El fenómeno migratorio/ 137

Reflexiones finales / 150

CAPÍTULO IV

La Dominación en México: Las Causas Estructurales de sus Tendencias Autoritarias/ 154

4.1 Estado y dominación en la sociedad capitalista/ 155

4.2 La democracia liberal y el ejercicio de la ciudadanía/ 159

4.3 La dinámica que dificulta la generación de consensos sociales en el subdesarrollo/ 169

4.4 El Estado populista y la constitución del presidencialismo mexicano/ 175

4.5 La reformulación de la alianza populista, la vigencia del Estado desarrollista y la consolidación del presidencialismo/182

4.6 La ruptura del pacto social, la constitución del Estado Neoliberal y la truncada transición a la democracia/ 191

Reflexiones finales / 215

Bibliografía/ 221

Introducción.

Las preocupaciones por comprender la relación entre desarrollo y democracia en las sociedades modernas no son nuevas. Varios estudios enmarcados en perspectivas teóricas distintas han tratado de contribuir a la comprensión de este tema. Sin embargo, hasta la fecha éste sigue siendo un debate abierto, ya que las contribuciones hasta ahora registradas no han logrado formular una explicación lo suficientemente sólida que supere la prueba del tiempo.

Desde el pensamiento latinoamericano dicha relación encontró en las teorías de la modernización, cepalina y de la dependencia referentes teóricos que desarrollaron explicaciones que ponían el acento en el desarrollo, como prerequisite para que la población latinoamericana accediera a mayores niveles de bienestar social, y con ello alcanzar un óptimo desenvolvimiento de la democracia.

En estas teorías la democracia viene a ser resultado del bienestar social y habría que alcanzarlo para acceder a mayores niveles de inclusión política en la toma de decisiones. Por eso es que los estudios de entonces giraron en torno a temas como el desarrollo, el crecimiento económico, así como el estudio de los procesos de urbanización, secularización, e incorporación de sectores sociales marginados o excluidos. Pero la democracia siempre fue un tema subsidiario, que no preocupó en demasía las reflexiones de aquel momento.¹

Con la crisis económica de finales de los años setenta y la década de los ochenta, así como la generalización de regímenes autoritarios en la región, las inquietudes de los estudios viraron hacia la explicación de los problemas de democratización, cuestionando además el fracaso de los desarrollos teóricos propiamente latinoamericanos para explicar dicha problemática.

Es así como se introduce el paradigma del neoliberalismo para explicar los problemas del desarrollo latinoamericano a partir del funcionamiento del mercado, y se generaliza la teoría de la transición para explicar el cambio político hacia la democratización que estaban viviendo entonces los regímenes de América Latina. Priva la concepción de que la democracia es un prerequisite para el desarrollo, idea que para

¹ Lidia Girola. "Del desarrollo y la modernización a la modernidad", en *Sociológica*, núm. 67, mayo-agosto. México, UAM, 2008, pp. 16-26.

la década de los noventa iba a ser sustituida por el tema de la “inevitabilidad” de la globalización de los mercados, con lo que el foco de la atención vuelve a pasar a la esfera económica.

Pero además este trayecto histórico del pensamiento en la región sigue sin agotar la discusión sobre la importante relación entre desenvolvimiento económico y democracia, y de hecho esto ha llevado a los estudios sobre el tema a un callejón sin salida. Nuestra percepción es que el problema radica en la forma en que ambas variables han sido tratadas desde la teoría. En el caso de la teoría de la modernización, sus deficiencias interpretativas en los estudios sobre el tema se encuentran, no tanto en las sofisticadas metodologías utilizadas en la medición de las variables desarrollo y democracia, sino en la base común que a nivel teórico han compartido estos estudios. Por otra parte, en el caso de las teorías cepalina y de la dependencia, a pesar de sus originales contribuciones a la comprensión de los desafíos que encuentra el desarrollo económico en la región, estas contribuciones no elaboraron un cuerpo teórico igualmente amplio y profundo en el tratamiento de la democracia. Finalmente, las teorías más influyentes en los últimos años no han hecho otra cosa que tratar el estudio de ambos procesos de manera separada, o simplemente han subordinando una u otra variable a un cuerpo explicativo que no aborda el tema de una forma integral.

En México, la gran aportación de la obra *La democracia en México* de Pablo González Casanova a la sociología política, fue llamar la atención sobre la necesidad de incorporar al análisis de la democracia no sólo las categorías que tradicionalmente utiliza el politólogo, sino también aquéllas que utilizan el economista y el sociólogo enfocándolas hacia un análisis multifactorial del régimen político. Por una parte, planteó el tema de la desigualdad en la distribución de la riqueza como una condicionante del subdesarrollo, y por otra, analizó la forma en que la estructura de poder, o en otros términos, la particular forma que adopta la democracia en nuestro país, limita o condiciona el desarrollo económico.²

La influencia de esta obra escrita en 1965 ha perdurado hasta nuestros días, aunque su vigor perdió fuerza desde mediados de los ochenta cuando irrumpen una serie

² Pablo González Casanova. *La democracia en México*. 14ª Edición, México, Ediciones Era, 1983, pp. 13-20.

de estudios que intentan ubicar la especificidad del fenómeno político en el análisis del cambio de régimen en nuestro país. El importante efecto de la teoría de la tercera ola democratizadora³ en la teoría de la transición política en su corriente conductista –que por mucho fue la que más difusión encontró en Latinoamérica-,⁴ constituyó un parte aguas en los estudios sobre el régimen político en México, que ha llevado a la preponderancia de investigaciones abocadas a capturar su dimensión institucional y cultural.

Con las reformas político-electorales desarrolladas desde 1977 hasta 1996 en nuestro país y la alternancia política que se registró en el 2000 en la presidencia de la República, después de más de setenta años de hegemonía de un solo partido en el poder, se impuso la idea de que México había transitado a la democracia y que en el país, desde la reforma político-electoral de 1996, existían las condiciones para garantizar elecciones periódicas, libres y equitativas.⁵ Los problemas de la democracia se ubicaron entonces en su consolidación, es decir, en la forma en que la democracia debería llegar a las organizaciones de la sociedad civil y todos los rincones de la vida pública; en la interiorización de la cultura democrática por la ciudadanía, argumentándose que después de tantas décadas de autoritarismo el objetivo debería centrarse en transformar los usos y costumbres que definían las percepciones sobre el poder público entre la ciudadanía, a través de la interiorización de normas y pautas de conducta más democráticas; y el perfeccionamiento del andamiaje institucional y normativo, cuya propuesta más acabada ha sido sin duda la propuesta de una reforma integral del Estado que lleve a la promulgación de una nueva Constitución.

³ Samuel Huntington. *La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX*. Barcelona, Paidós, 1994.

⁴ El estudio más significativo sobre la teoría de la transición política en esta perspectiva es sin duda la obra de cuatro tomos compilada por Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter y Lawrence Whitehead, *Transiciones desde un gobierno autoritario*. Aquí hacemos referencia al volumen IV de dicho trabajo, *Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas*. Buenos Aires, Paidós, 1998.

⁵ Tal vez el exponente más entusiasta de esta idea ha sido José Woldenberg, que dejó para la posteridad un documental televisivo de varios capítulos titulado *México: la historia de su democracia*, coordinado y conducido por él mismo, en el que termina haciendo una versión apologética de la transición mexicana y de su contribución como Presidente del Instituto Federal Electoral en la alternancia política en el 2000. Dicho documental fue comercializado en formato DVD por Televisa Home. César Cansino ha evidenciado a los investigadores y agentes sociales que se sumaron a este consenso, y la particular forma en que desde el poder político este paradigma de la transición fue promovido y auspiciado, con el objetivo de generar un consenso en torno a la legitimidad del régimen surgido de la transición. Véase César Cansino. *El evangelio de la transición. Y otras quimeras del presente mexicano*. México, Editorial Debate, 2009, pp. 37-67.

Sin embargo, el abierto cuestionamiento de una buena parte de la población a los resultados de las elecciones presidenciales del año 2006, echaron por la borda muchas de las percepciones que se tenían en torno al proceso de democratización en el país, y ha abierto nuevas interrogantes sobre las causas que pudieran estar determinando el rumbo de dicho proceso. Particularmente, el papel que el escaso desarrollo del país tiene en los niveles de la población y esto en el funcionamiento de la democracia, tema poco recurrente en las investigaciones de los últimos años.

El hecho de que Andrés Manuel López Obrador, el único candidato presidencial que cuestionó abiertamente el modelo económico neoliberal y los estragos que ha ocasionado (en la concentración del ingreso, el incremento de la pobreza, la escalada de la criminalidad, el desempleo generalizado, el desastre ambiental, la crisis energética y el colapso de la soberanía alimentaria, entre otros), perdiera la elección por menos de un punto porcentual respecto a la votación total frente a Felipe Calderón Hinojosa, candidato que postulaba la continuidad de dicho modelo, en medio de graves cuestionamientos a la forma en que se condujo el proceso electoral, ha vuelto a poner sobre la mesa el tema de la viabilidad de la democracia en nuestro país. Sólo que ahora la falta de desarrollo y la desigualdad, aparecen como los grandes desafíos que arroja el proceso de democratización, y las inquietudes en torno a la persistencia de las tendencias autoritarias del régimen político exigen buscar nuevas rutas explicativas que contemplen estos elementos.

Esa coyuntura electoral evidenció los intereses de los agentes sociales beneficiarios del modelo económico vigente, que apoyados en el aparato institucional del Estado pusieron un freno al proceso de democratización en el país. Las irregularidades en dichas elecciones fueron incluso reconocidas parcialmente en el dictamen del Tribunal Electoral⁶ por el que se hizo el cómputo final de la elección, se declaró la validez de la misma y se declaró presidente electo. Nos referimos al tono en el que se desarrollaron las campañas electorales; la intervención del Presidente Fox durante

⁶ Ver Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación. *Dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, declaración de validez de la elección y presidente electo*. Consultado en internet el 23 de marzo de 2007: www.trife.gob.mx/acuerdo/dictamen.pdf.

el proceso a favor del candidato de su partido; el uso de los programas sociales a favor del candidato panista; la ilegal promoción del voto en los medios de comunicación por parte del Consejo Coordinador Empresarial a favor de Felipe Calderón; y el reconocimiento a una serie de irregularidades en un número importante de casillas.

A pesar de ello, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del país, pese a reconocer todo este conjunto de irregularidades, guiándose por criterios meramente subjetivos, renunciando a su facultad para hacerse de las pruebas objetivas necesarias para normar su criterio, llegó a la conclusión de que estos elementos *no eran suficientes* como para anular la elección. Así se abandonó el criterio *garantista* con el que se habían repuesto procesos locales como el de Tabasco (16 de octubre de 2000) y Colima (8 de agosto de 2001), en los cuales, ante la intervención del ejecutivo a favor del candidato de su partido se optó por proteger los principios constitucionales de equidad y certeza electoral.

Consideramos que en este proceso la democratización fue abortada en cuanto se convirtió en un elemento que puso en peligro la viabilidad del patrón de crecimiento vigente, y con ello nos referimos a una particular forma histórica que ha adoptado la acumulación en su forma subdesarrollada en nuestro país en las últimas tres décadas. La desigualdad originada por una modalidad de crecimiento excluyente de amplias capas de la población, que ha generado desempleo, bajos salarios y precarización del trabajo, creó las condiciones para que emergiera un proyecto político desde la socialdemocracia mexicana orientado a cuestionar la generalizada desigualdad y proponer medidas para mejorar la distribución del ingreso entre la población, con el objetivo de ampliar el ejercicio de la ciudadanía. Y es en este punto donde la democratización encontró sus límites.

Esta coyuntura ha puesto en evidencia las persistentes tendencias autoritarias en el ejercicio del poder político en una formación social subdesarrollada como la nuestra, pero este es un rasgo estructural que ha definido históricamente la forma en la que se ha ejercido la dominación en nuestro país. Por lo que consideramos necesario elaborar una explicación de largo plazo que nos permita capturar el papel que ha jugado el subdesarrollo como determinante de la generalizada desigualdad social que ha privado

entre nuestra población, y los efectos que esto ha tenido en las formas autoritarias que ha adquirido la dominación.

Para ello es necesario reelaborar la relación entre desenvolvimiento económico y democracia desde una perspectiva teórica diferente a la que hasta ahora se ha implementado en los estudios sobre este tópico. Lo que nos lleva a insertar la problemática en el seno de la relación capital-trabajo, es decir, en el análisis de la lucha de clases.

Desde que hizo su arribo la producción industrial, la división del trabajo en la gran masa de los procesos productivos en el sistema capitalista se desdobló en trabajo general y trabajo inmediato, y desde entonces la generación de progreso para el desarrollo de las fuerzas productivas ha estado identificada con el desarrollo científico y tecnológico, y su aplicación práctica con dichos procesos productivos.⁷

El desarrollo entonces hace referencia al desdoblamiento de la relación capital-trabajo en el sentido arriba señalado, y el subdesarrollo a la ausencia de este desdoblamiento, lo que no implica que en nuestros países no exista una subsunción real de trabajo inmediato, sino que ésta procede con métodos que no le son propios. Pero lo que explica esta histórica condición entre diferentes categorías de países, son las importantes funciones políticas y económicas que cumple el Estado en la sociedad capitalista como organización política para el dominio de la burguesía sobre el proletariado.

En relación a sus funciones políticas, la democracia liberal es la mejor forma que adopta el Estado para el dominio burgués, en tanto que está diseñada para resolver los conflictos entre las diferentes fracciones que integran a la clase dominante derivados de la competencia por la ganancia, y por otro, los que se derivan de los consensos entre ésta clase y los dominados.

En cuanto a sus funciones económicas, encontramos lo que se ha denominado la *gestión estatal del desarrollo*, que no es otra cosa que el impulso del Estado al desarrollo científico y tecnológico aplicado a los procesos productivos, así como al abastecimiento

⁷ Ver Víctor M. Figueroa. *Reinterpretando el subdesarrollo. Trabajo General, clase y fuerza productiva en América Latina*. México, Siglo XXI, 1986.

de bienes de consumo colectivo y capital constante social, con el objetivo de crear las condiciones generales para la producción capitalista.⁸

La dimensión social entre ambas variables se manifiesta en términos de las condiciones de subsistencia que el desarrollo aporta a la población y el ejercicio pleno de la ciudadanía, prerequisites fundamentales para la creación de consensos en la democracia. Una gestión estatal óptima del desarrollo crea las condiciones para el ejercicio de la democracia; en sentido opuesto, la ausencia de dicha gestión por el Estado se manifiesta en bajos niveles de bienestar para la población, un limitado ejercicio de la ciudadanía por ésta y en dificultades para crear consensos en torno al ejercicio del poder público.

La existencia de una *población excedente* en el subdesarrollo, que se desenvuelve a la zaga de los procesos de valorización de capital, y que se manifiesta en la condición estructural de este tipo de países para producir comercio informal, piratería, criminalidad y todo un conjunto de actividades, ajenas al proceso de acumulación formal,⁹ indican la transferencia que el polo subdesarrollado hace a los países desarrollados de su capacidad de acumulación para generar empleo. Este es el principal obstáculo que se le presenta a la democracia para que en estas latitudes exista un ejercicio pleno de la ciudadanía por parte de la población.¹⁰

Por eso históricamente, salvo algunas notables excepciones, el desarrollo se ha consolidado en un puñado de países que a través de una pujante y activa gestión del desarrollo han logrado consolidar regímenes democráticos de larga data. A la inversa, la inmensa mayoría del resto de los países del mundo ha oscilado entre el autoritarismo y la democracia, como es el caso de las naciones latinoamericanas.

Pero además el subdesarrollo y la intermitencia de la democracia son procesos que tienden a acentuarse en la medida que el sistema capitalista se desenvuelve. En esto el imperialismo juega un papel fundamental, ya que dicha condición está inscrita en las

⁸ Víctor M. Figueroa. “La Gestión Estatal del Desarrollo”, en *Problemas del desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*. Vol. 26, No. 103, octubre-diciembre, México, 1995.

⁹ Decimos proceso de acumulación formal, porque muchas de estas actividades sí aportan al proceso de acumulación capitalista aunque por vías no reconocidas legalmente, tal es el caso de la piratería, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, etc.

¹⁰ Víctor M. Figueroa. *Excedentes de población*. Mimeo, 2007.

relaciones que los países ubicados en el polo subdesarrollado establecen con los países desarrollados, quienes basarán su dominio precisamente en el monopolio del desarrollo científico y tecnológico, complementándolo con su hegemonía militar, ideológica y cultural.

Es en el esquema descrito hasta ahora, donde proponemos ubicar la discusión en torno a la problemática que encierra el subdesarrollo como determinante de las tendencias autoritarias en el ejercicio del poder político en México.

Partimos del supuesto de que en nuestro país no ha existido una gestión originaria del desarrollo, y que lejos de ello ha existido un activo papel del Estado en hacer una gestión del subdesarrollo, generando las condiciones para que la acumulación se desenvuelva en estas condiciones. Ello ha tendido a acentuar la situación de dependencia de nuestro país respecto al progreso generado en los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, lo que se manifiesta en un intercambio comercial desigual que ocasiona una transferencia de inversión, cuya principal consecuencia es la consolidación de una población excedente de magnitudes desproporcionadas, que tiene un acceso marginal al disfrute de los bienes materiales y culturales producidos por la sociedad, y que por lo tanto no ejerce su ciudadanía plenamente. La sola existencia de esta población que se desenvuelve por canales distintos a los procesos formales de acumulación capitalista, además ha impactado permanentemente a la baja los salarios, ha mantenido altas las cifras del desempleo y en ciertas condiciones ha favorecido procesos de precarización del trabajo. Estos elementos han caracterizado la marcada tendencia al conflicto social en nuestro país, que sería la principal causa por la que la dominación ha descansado menos en mecanismos consensuales y más en mecanismos autoritarios.

Encontramos dos momentos históricos dentro de estas tendencias generales. Bajo el patrón de crecimiento relativo, la intervención del Estado en la economía y la estrategia de industrialización con sustitución de importaciones impulsada por éste, se identifica con un proceso que tiende a hacer cada vez más dependiente a nuestro país de la tecnología generada en el polo desarrollado. La presencia y crecimiento de la población excedente se perfila entonces como el principal obstáculo para la viabilidad de dicho modelo, a pesar de haberse concretado un pacto social corporativo con las organizaciones de trabajadores para sacar adelante un proyecto de nación que prometía

integrar a los sectores de la población excluidos en el porfiriato, a un proyecto de nación que en el discurso buscaba hacer realidad los postulados de la Revolución Mexicana. En este contexto, se configura un régimen político que tiende a concentrar en la institución presidencial amplias facultades constitucionales, el control del sistema electoral, el control de un fuerte aparato corporativo y la conducción de un partido de Estado. Las relaciones de la organización estatal con la sociedad estarán atravesadas por un ejercicio autoritario del poder, regulados por mecanismos corporativos y clientelares de control social que servirán para mantener las condiciones generales para consolidar la acumulación en su forma subdesarrollada.

Bajo el patrón de crecimiento absoluto, la intervención del Estado en la economía como principal impulsor del proceso de industrialización, abre paso a la racionalidad del mercado como estrategia de primer orden para garantizar el crecimiento económico y la acumulación en su forma subdesarrollada. Los objetivos del Estado se dirigen hacia la reestructuración productiva, que lejos de basarse en una estrategia que buscara impulsar el desarrollo científico y tecnológico para fortalecer la organización de los procesos productivos locales, se concentró en introducir procedimientos organizacionales como el toyotismo y la flexibilización laboral. Es decir, la estrategia se dirigió en contra de los logros laborales de los trabajadores, estrategia que se vio complementada con la retirada del Estado en sus funciones sociales. Ello implicó la ruptura del pacto social vigente hasta entonces, aunque no del control corporativo autoritario del Estado sobre las organizaciones de trabajadores ubicadas en los sectores estratégicos de la producción orientada a la exportación, que de hecho fueron utilizadas para llevar a cabo las transformaciones que el nuevo patrón de crecimiento demandaba, con relativos márgenes de paz social. La presencia de excedentes de población en este contexto se desborda, y vuelve dramáticos los problemas de bajos salarios, desempleo y empleo precario en nuestro país, situación que incrementa el conflicto social. La pérdida de legitimidad del régimen coincide con el inicio de un proceso de transición política, caracterizado por consecutivas reformas político-electorales que tienden hacia la democratización de los procesos electorales y a la pluralidad en la competencia política. Dicho proceso parece consolidarse con la alternancia en la presidencia de la República en el 2000 para luego ser abortado en las elecciones de 2006, ante la posibilidad del

triunfo de un proyecto que ponía en peligro la viabilidad de los cambios introducidos hasta entonces. Con ello, el régimen que surge de este largo trayecto conserva elementos autoritarios que conviven con rasgos de la democracia liberal.

La pertinencia de este trabajo se explica entonces por la necesidad de profundizar en el análisis del impacto de lo que consideramos no sólo una nula gestión estatal del desarrollo, sino una activa gestión del subdesarrollo en el ejercicio de la democracia en México. Una dimensión de la problemática subdesarrollo-democracia que hasta ahora prácticamente no ha sido explorada en otros estudios. Esto a pesar de ser una preocupación constante en las investigaciones sobre la democracia realizadas en los últimos años.

En el *Informe sobre la democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*¹¹ realizado por el PNUD en 2004, se pone de manifiesto el franco desprestigio del Estado y de las instituciones democráticas frente a la población. Así mismo, se alerta sobre los elevados niveles de pobreza, de desigualdad social, de exclusión económica y social, de desprotección frente a la violencia y otros problemas sociales, que están incidiendo negativamente en las condiciones de vida de la población y en la consolidación de la democracia en la región. Sin embargo, más allá de diagnósticos de este tipo, las soluciones a la problemática no han dejado de orientarse a proponer una profundización sobre la reforma del Estado y el rediseño institucional, caminos bastante trillados en los desarrollos de este tópico por su comprobada ineficacia.

Por eso consideramos necesario analizar las causas de los problemas que encierra la viabilidad de la democracia en nuestro país por nuevos senderos explicativos, para estar en condiciones de encontrar diagnósticos más pertinentes y nuevas propuestas, que redunden en un futuro más prometedor dentro de la lucha por la democracia en México.

La exposición está integrada por esta introducción, cuatro capítulos al final de cada cual se integran algunas conclusiones, y un apartado con las fuentes consultadas. En el Capítulo I, *Subdesarrollo y Democracia: Teoría y Práctica desde América Latina*, se elabora una evaluación crítica general sobre las aportaciones que desde la teoría y la

¹¹ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. *Informe sobre la democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*. México, Editorial Taurus-Alfaguara, 2004.

práctica latinoamericanas se han orientado a tratar el tema de la relación entre desenvolvimiento económico y democracia, comenzando en la década de los cincuenta del siglo pasado hasta nuestros días, y se postula la necesidad de orientar la discusión a partir de la construcción de un marco interpretativo que ubique la problemática en el seno de la relación capital-trabajo.

En el Capítulo II, *La Gestión Estatal del Desarrollo y su Ausencia en México*, se busca exponer la forma en que el Estado influye en el funcionamiento de la estructura económica en tanto que es producto de relaciones sociales antagónicas que se gestan en el seno de la sociedad capitalista dentro de la producción, a partir de la relación capital-trabajo. Para ello se analiza el concepto gestión estatal del desarrollo y se precisan las consecuencias de su ausencia en formaciones sociales como la nuestra. Estos elementos nos permiten analizar el caso mexicano, caracterizado por una activa intervención estatal orientada a gestionar el subdesarrollo, donde encontramos características y tendencias particulares tanto durante el patrón de crecimiento relativo como durante su modalidad orientada al mercado externo, que evidencian el peso del imperialismo en la generación de proyectos económicos independientes.

El Capítulo III, *Los Excedentes de Población como Rasgo Estructural del Subdesarrollo: El caso Mexicano*, trata sobre las causas profundas que explican la problemática social resultante de una estructura caracterizada por la ausencia de una gestión estatal del desarrollo. Para ello, se dan respuestas a la pregunta del por qué bajo el subdesarrollo se crea de manera estructural una población excedente, y cómo ésta se convierte en un obstáculo para la democracia liberal. En este sentido, el caso mexicano es particularmente representativo al confirmarse a lo largo de todo el siglo XX y el primer lustro del presente siglo, la existencia de una población que se desenvuelve marginalmente en la acumulación capitalista. Además, se explican las razones por las cuales su presencia, ya importante bajo la vigencia del patrón de crecimiento relativo, se desborda bajo la modalidad de crecimiento absoluto, convirtiéndose en un potencial foco de descontento social.

En el Capítulo IV, *La Dominación en México: Las Causas Estructurales de sus Tendencias Autoritarias* se analizan cuáles son los rasgos generales del Estado capitalista y la forma en que la democracia liberal se constituye históricamente como

una eficaz forma de dominación en los países desarrollados. Así mismo, contrastamos las tendencias y la dinámica del conflicto social que determina la generación de consensos sociales en aquellas naciones, y la vigencia que ahí adquiere el ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales por parte de la ciudadanía.

Finalmente, comparamos estos rasgos generales de la democracia en el subdesarrollo, encontrando que aquí los excedentes de población se constituyen en un obstáculo de primer orden en la construcción de consensos sociales, ya que generan una dinámica en el conflicto social que deriva en una lucha permanente por el salario, el empleo y mejores condiciones de vida tanto de la población en activo, como de la población excluida. Por lo que en estas condiciones el ejercicio de la ciudadanía se vuelve precario y es amenazado permanentemente por las tendencias hacia el autoritarismo en el ejercicio del poder político. En el caso mexicano, se confirma que la enorme capacidad de nuestra estructura socioeconómica para producir excedentes de población se ha constituido en el principal obstáculo para la generación de consensos sociales y ello ha derivado en la constitución de formas autoritarias de dominación en nuestro país. Las particularidades y tendencias de este proceso en el espacio y en el tiempo, nos llevan a trazar un trayecto histórico caracterizado por tres etapas: a) La formación del Estado populista y la constitución del régimen presidencialista mexicano; b) La reformulación de la alianza populista, la vigencia del Estado desarrollista y la consolidación del presidencialismo; y c) la ruptura del pacto social, la constitución del Estado Neoliberal y la truncada transición a la democracia.

CAPÍTULO I

Subdesarrollo y Democracia: Teoría y Práctica desde América Latina

Las preocupaciones por estudiar la relación existente entre el desarrollo económico y la democracia, si bien no son nuevas en la ciencia política, sí han tomado un nuevo impulso en la primera década del siglo XXI.

Y no es casualidad que esto esté sucediendo, particularmente si observamos los cuestionamientos que se han hecho en los últimos años a las democracias desde los sectores más desprotegidos de la sociedad -particularmente en las naciones más atrasadas-, ante la incapacidad de este tipo de regímenes para lograr un mayor bienestar social para sus pueblos.

Uno de los principales señalamientos de un estudio realizado por el PNUD en 2004,¹² es el desprestigio del Estado y las instituciones democráticas frente a la población en un contexto de elevados niveles de pobreza, de desigualdad social, de exclusión económica y social, de desprotección frente a la violencia y otros problemas sociales que afectan a grandes sectores de la población.

La población de la región no sólo está inconforme con los logros económicos que la democracia puede ofrecer en términos de bienestar social, sino que estaría dispuesta a legitimar un régimen autoritario que le resolviera sus necesidades materiales más inmediatas.

Esta afirmación pudiera dar cuenta de una relación lineal entre la necesidad de la elevación del desarrollo económico traducido en bienestar social y los problemas de la consolidación de la democracia en Latinoamérica, misma que los estudios empíricos han tratado de ratificar. Pero esto no ha sido nada sencillo.

Si tomamos a manera de ejemplo los datos del estudio *El Mundo en 2007*, publicado por el diario inglés *The Economist* y relacionamos las calificaciones que otorga a los regímenes políticos en el mundo con sus niveles de renta, observaremos que prácticamente todos los países desarrollados son *democracias plenas*, mientras la mayoría de los países mas subdesarrollados cuentan con regímenes autoritarios; pero los

¹² Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, op. cit.

países con ingresos medios en su mayoría tienden a concentrarse en nebulosas categorías intermedias denominadas *democracias plenas* o *regímenes híbridos*.¹³

Pero además, el problema aquí y en otros estudios similares es la renta *per cápita* como indicador de desarrollo, ya que dicho concepto arbitrariamente divide el valor monetario de los bienes totales producidos por los países en un año y los divide entre su número de habitantes, haciendo abstracción de la forma en que realmente se distribuyen entre los miembros de la sociedad. Lo que puede llevar a conclusiones equivocadas.

Sin embargo, el interés por analizar la relación entre desarrollo y democracia ha inquietado a diferentes corrientes de pensamiento, particularmente aquéllas que podemos identificar dentro de la teoría de la modernización. Desde que apareció la obra pionera de Seymour Martin Lipset, *Algunos requisitos sociales de la democracia: Desarrollo Económico y Legitimidad política*, se han desarrollado estudios cualitativos con metodologías cada vez más sofisticadas para dar cuenta de esta relación, contribuyendo de manera notable a la aportación de datos sobre este fenómeno. Sin embargo, cuando se ha pasado al plano explicativo se advierten serias contradicciones y deficiencias analíticas incluso entre enfoques similares. A más de cuarenta años de estudios sobre el tema, no parece haber una explicación lo suficientemente coherente, que haya pasado la prueba del tiempo.

Uno de los problemas explicativos más notorios surge, como se puede observar en el estudio citado anteriormente, cuando se pasa a analizar a naciones con renta media, particularmente en el caso de los países de América Latina¹⁴, que parecen moverse en términos generales a contrapelo de las tendencias generales a nivel mundial. Desde este

¹³ Economist Intelligence Unit democracy index, *The World in 2007*, The Economist, 2006. Para comparar la renta *per capita* entre países ver Banco Mundial, *Ingreso de de las economías*, Julio 2007. (Documento en línea). Disponible en la página Web: [http://www.bancomundial.org/datos/clasificacion_paises.html].

¹⁴ Parece haber consenso en afirmar que el poeta colombiano José María Torres Caicedo, fue quien en 1856 acuñó el término América Latina en su poema *Las dos Américas*, dotándolo cultural, geográfica e incluso racialmente, de un sentido o carácter diferenciador frente a Estados Unidos, en el contexto de las ambiciones expansionistas de este país. Originalmente América Latina hacía referencia a todos aquellos países ubicados al sur del río bravo que habían conquistado su independencia del dominio europeo (aunque Panamá se separó de Colombia en 1903, también se considera parte de la región), y que hablaban ya sea español, portugués o francés, es decir, lenguas provenientes del latín o lenguas romance. Es en ese sentido que aquí utilizamos este término, para designar a un conjunto de 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, Brasil y Haití. Ver Víctor Bulmer-Thomas. *La historia económica de América Latina desde la independencia*. México, FCE, 1998. p. 11-12.

marco interpretativo, pareciera que en esta parte del planeta, en determinadas coyunturas históricas, a un importante incremento de la renta *per cápita* no ha correspondido un mayor grado de democratización de sus regímenes políticos, y en sentido opuesto, como se supone está ocurriendo actualmente, a un descenso de los niveles de ingresos no ha correspondido una “escalada” autoritaria, sino al contrario, un “auge” democrático.

Esto es así porque la historia demuestra que no existe una relación mecánica entre la renta *per cápita* y los niveles de democracia de un régimen político. Actualmente países como Venezuela, Bolivia y Ecuador se caracterizan por tener regímenes que han recibido críticas de diversas organizaciones internacionales por alejarse del paradigma de la democracia liberal, y sin embargo gozan de un enorme respaldo popular ratificado por la vía de las urnas, gracias a que lograron articular la movilización social en sus países contra la globalización neoliberal y constituir gobiernos con un amplio respaldo popular. Por otra parte, hay países como Colombia cuyos regímenes son caracterizados como democracias y viven una franca militarización al interior de sus fronteras, en un permanente conflicto social. Todo apunta a que hay que buscar en la lucha de clases, las claves para caracterizar los posibles vínculos entre desarrollo y democracia.¹⁵

Por lo tanto, consideramos que las deficiencias interpretativas en las investigaciones sobre el tema se encuentran, no tanto en las sofisticadas metodologías utilizadas en la medición de las variables desarrollo y democracia, sino en la base común que a nivel teórico han compartido estos estudios. Es en la interpretación misma de los conceptos donde se debe empezar a buscar respuestas que nos permitan emprender nuevas rutas para el abordaje de este importante tema.

Así mismo, el diagnóstico atribuible a la teoría de la modernización en el tratamiento del tema es aplicable a los aportes de las teorías de origen latinoamericano - particularmente la teoría cepalina y la teoría de la dependencia-, aunque por razones distintas, ya que a pesar de sus originales contribuciones a la comprensión de los desafíos que encuentra el desarrollo económico en la región, estas contribuciones no

¹⁵ Para un análisis de los procesos democratizadores en Venezuela, Ecuador y Bolivia, véase Atilio Borón. “Crisis de las democracias y movimientos sociales en América Latina: Notas para una discusión”, en *Observatorio Social de América Latina*, Año VII, mayo/agosto 2006, Buenos Aires, CLACSO, pp. 289-304.

elaboraron un cuerpo teórico igualmente amplio y profundo en el tratamiento de la democracia.

Desde esta perspectiva analítica la democracia no es un tema relevante, cuando mucho se encuentra subordinado a la problemática del desarrollo o la dependencia, ya que aquél era un periodo histórico en el que el principal desafío que se presentaba a los investigadores sociales y a los gobiernos de la región era explicar la realidad latinoamericana para establecer estrategias que le permitieran acceder a la modernidad. Por eso los temas predominantes entre las décadas de los años cincuenta y setenta son el desarrollo, el crecimiento económico, así como el análisis de los procesos de urbanización, secularización, e incorporación social de las capas poblacionales marginadas o excluidas. En este sentido, Lidia Girola afirma:

Algunos investigadores tenían como referente a los procesos europeos o estadounidenses, y se abocaron a estudiar la viabilidad del cambio estructural en América Latina. Otros asociaron los procesos de modernización con las imposiciones del capital internacional y las clases dominantes nativas. No obstante, en la mayoría de los casos a la modernización se la concibe como un cúmulo de procesos en curso, principalmente el de la industrialización, y a la modernidad como una etapa a alcanzar, si acaso en el futuro. Si algunos trabajos son relativamente optimistas, en la mayoría se reasaltan las falencias, los obstáculos, y se visualiza la situación como de carencia, tanto de las condiciones materiales como de las ‘espirituales’, para el logro de la meta propuesta.¹⁶

En este capítulo revisaremos los desarrollos de los diferentes enfoques teóricos desde los cuales se ha abordado este tema, centrando nuestra atención en las aportaciones, las deficiencias y las omisiones de los mismos, para estar en condiciones de obtener una perspectiva general del estado del arte sobre esta problemática.

El objetivo es analizar la teoría y la práctica del desenvolvimiento económico y la democracia en los países latinoamericanos, para reconstruir dialécticamente las condiciones materiales concretas desde las que se han formulado las explicaciones de esta relación, apuntando críticamente las limitaciones analíticas a las que se ha enfrentado.

¹⁶ Lidia Girola, op. cit., p. 18.

1.1 Desarrollo y democracia desde el enfoque de la teoría de la modernización.

Este tema tiene ya bastante tiempo de ocupar las preocupaciones de la investigación social, particularmente desde la perspectiva de la teoría la modernización.¹⁷ Esta teoría establece un abordaje dualista en la explicación del precario desarrollo de todos aquellos países no-modernos. La premisa central es que existen dos tipos de sociedades, las relativamente modernas y las relativamente no modernas, de donde se desprende que éstas últimas deberán seguir los pasos de las primeras para poder alcanzar el desarrollo.

Esta idea tuvo un importante nivel de influencia y sirvió para exportar un modelo universal de desarrollo para la región, acorde a los intereses de Estados Unidos (no es casualidad que Rostow, uno de los teóricos más importantes de la modernización y creador del *esquema de cinco fases*¹⁸, fungiera como consejero de los presidentes Kennedy y Johnson).

Pero no sólo se han exportado un conjunto de ideas, sino toda una ideología que pretende hacer aparecer el destino de todas las naciones en desarrollo, inevitablemente dirigido a la modernidad, claro, una modernidad dentro del capitalismo, el cual de ninguna forma puede ser cuestionado, y el tema de la democracia no es la excepción.

Dentro de esta perspectiva, los trabajos que han abordado esta temática y que se han basado en muestras grandes de casos, han concluido que el desarrollo económico de un país, normalmente operacionalizado a través de la renta *per capita*, incide en un mayor grado de democratización de su régimen político.¹⁹

El desarrollo aparecerá siempre relacionado de manera positiva con la democracia, determinando el nivel de su avance. En consecuencia, la explicación final, en última instancia, independientemente de los matices que cada autor imponga a su reflexión, estará sujeta a la comparación que se haga entre países modernos y no modernos. Es decir, lo que les falta a estos últimos para parecerse a los primeros.

¹⁷ Alvin Y. So. *Social chance and development. Modernization, dependency and world-system theories*. California, USA, Sage Publications Inc., 1990, p.p. 17-37.

¹⁸ Walter Rostow, desarrollará un esquema de cinco etapas por las que tienen que pasar los países en desarrollo antes de alcanzar la modernidad: i) Fase tradicional con escaso cambio social; ii) precondition para el despegue del crecimiento; iii) Etapa de despegue, que implica elevar la tasa de inversión productiva en un 10% o más del ingreso nacional; iv) El cambio hacia la modernidad; y v) Fase final, una sociedad altamente consumista. Ver *Íbidem.*, p. 30.

¹⁹ Esta tesis es sustentada en Scott Mainwaring y Aníbal Pérez Liñán. "Nivel de desarrollo y democracia: el excepcionalismo latinoamericano (1945-1996)", en *América Latina hoy*, número 36. España, Universidad de Salamanca, 2004.

La teoría de la modernización aplicada al análisis de los regímenes políticos tiene su origen en un célebre artículo de Seymour Martin Lipset,²⁰ publicado originalmente en 1959. Este autor señala como elementos básicos de la democracia el desarrollo económico y la legitimidad política. Para lo cual aborda el tema estudiando la existencia o inexistencia de la democracia en países europeos, anglosajones y latinoamericanos a partir de ciertos indicadores socioeconómicos de lo que se entiende como modernización, como el ingreso *per cápita*, el nivel educativo, la posesión de teléfono y automóvil, el número de médicos por cada mil habitantes, y el grado de urbanización e industrialización. La correlación encontrada entre desarrollo y democracia será explicada poco tiempo después a partir del cambio de valores, el cual, de acuerdo al autor, estará determinado por el cambio producido en la estructura social en relación directa al nivel de industrialización. En la medida que la modernización avance, se generará la emergencia de una clase media más tolerante en relación a las clases alta y baja, que promoverá el cambio político y los procesos de democratización.

El esquema de Lipset sugiere la existencia de una equitativa distribución del ingreso al interior de las sociedades como requisito fundamental para el fortalecimiento de las clases medias y el cambio de valores que potencien la participación política, lo que implica la existencia de un importante proceso de industrialización que establezca las condiciones económicas que hagan posible la democracia. Pues bien, a cinco décadas de que viera la luz el estudio de Lipset y de un proceso de industrialización truncada en la región, dicha distribución del ingreso no ha sido posible, esto incluso bajo una existencia generalizada de regímenes democráticos en la región.

América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo. Por lo tanto, avanzar hacia una mejor distribución de los ingresos y otros activos sigue siendo una de las tareas pendientes más importantes en el futuro. La notable disparidad distributiva que caracteriza a los países de América Latina puede percibirse al comparar la relación de ingresos entre el decil más rico y los cuatro deciles más pobres, y entre el quinto quintil (es decir, el 20% de hogares situados en el extremo superior de la distribución) y el primer quintil. De acuerdo con el primero de estos índices, el ingreso medio por persona de los hogares ubicados

²⁰ Seymour Martin Lipset. "Algunos requisitos sociales de la democracia: Desarrollo Económico y Legitimidad política", en Varios autores, *Diez textos básicos sobre ciencia política*. España, Ariel, 1992.

en el décimo decil supera alrededor de 17 veces al del 40% de hogares más pobres.²¹

Este tipo de sociedad que concebía Lipset hoy más que nunca está lejos de consolidarse en la región, pero el autor no abona mucho a la comprensión de las causas estructurales que originan esta situación, simplemente se limita a relacionar desarrollo con industrialización. Por eso desde nuestro punto de vista su análisis no atiende la esencia de la problemática del atraso económico de la mayoría de los países del orbe, sino simplemente a su descripción.

Según Rueschemeyer, Stephens y Huber, citados por David Altam, a comienzos de los sesenta esta literatura crecería tremendamente y lo seguiría haciendo en las dos décadas siguientes, aunque utilizando dos claros tipos de enfoques metodológicos alternativos. De un lado, se encontraban los autores que siguieron elaborando los clásicos estudios *cuantitativos*, transversales-nacionales, entre quienes destacan Samuel P. Huntington y Hannan y Carroll. El primero defendió la idea de que las demandas de participación y de beneficios económicos desembocarían en dificultades para unos sistemas políticos que carecían de instituciones consolidadas. Los segundos, consideraban que el desarrollo y el crecimiento económico sirven para mantener, e inclusive para reforzar, el régimen político que promueve el desarrollo (independientemente de que éste sea democrático o no).²²

Del otro lado estaban los estudios *histórico-comparativos* entre cuyos autores destacan Guillermo O'Donnell y Barrington Moore. El primero supone una contestación a la teoría de la modernización al sugerir que, en determinados niveles de desarrollo, la modernización podría favorecer la vuelta a regímenes autoritarios. Moore señalaría que existen tres caminos a la modernización en tres contextos diferentes y donde cada uno de ellos conlleva a un régimen político distinto: democracia, comunismo y fascismo, concluyendo que las consecuencias de la modernización están establecidas por una

²¹ Comisión Económica para América Latina. *Panorama social para América Latina 2008, Síntesis*. Chile, ONU, 2008, p. 21. Consultado en Internet el 14 de julio de 2009: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/34732/PSE2008_Versioncompleta.PDF

²² David Altman. "Democracia política y desarrollo económico: ¿Existe alguna relación?", en *Desarrollo Humano e Institucional en América Latina* (DHIAL). 2001. Consultado en Internet el 28 de julio de 2007: http://www.nd.edu/~daltman/Democracia%20y%20desarrollo%20.htm#_ftn6.

constelación histórica del capitalismo temprano, la cual no necesariamente puede repetirse.

Estas dos tendencias tuvieron fuertes diferencias metodológicas, y también sus investigaciones llegaron a conclusiones distintas.

Por otra parte, hacia la década de los noventa Burkhart y Lewis-Beck²³ utilizando series temporales y una metodología rigurosa descubrieron que: a) el desarrollo económico conduce a la aparición de democracias; y b) la democracia por sí misma no ayuda al desarrollo económico. La investigación posterior reveló cual es el proceso material por el que un mayor nivel de renta conduce a la democratización. De acuerdo a estos autores, un mayor nivel de renta favorece la aparición de cambios estructurales en el modo de producción que a su vez favorecen la aparición de la democracia. En este sentido, un mayor nivel de renta favorece mayores niveles educativos, lo cual crea un público más articulado, mejor informado y mejor preparado para la organización; así como un mayor grado de especialización ocupacional, que repercute en el favorecimiento del sector secundario frente al primario y del terciario respecto al secundario.

Además, estos autores encontraron que la relación entre renta *per capita* y la democracia es menos sólida en los países de la periferia y los de la semiperiferia que en los del centro. A pesar de que el efecto era fuerte en tres diferentes categorías de países, su trabajo sugiere que la modernización tiene un efecto más débil sobre la democracia en los países de América Latina que en los del centro.

Hace una década, Samuel Huntington²⁴ escribía un ensayo donde resumía su posición al respecto, estableciendo los siguientes puntos: a) si un país quiere generar democracia, tiene que promover el crecimiento económico; b) el desarrollo económico produce más recursos, públicos y privados, para distribuir entre los grupos de la sociedad, en este sentido, la política se vuelve menos un juego de suma cero y por tanto se fomentan el compromiso y la tolerancia; c) el desarrollo económico produce una economía más compleja y cada vez más difícil de controlar por parte del Estado; d) la

²³ Ross E. Burkhart y Michael S. Lewis-Beck "Comparative Democracy: The Economic Development Thesis", en *American Political Science Review*, No. 88, 1994, pp. 903-910.

²⁴ Samuel Huntington. "After Twenty Years: The future of third wave", en *Journal of Democracy*, vol. 8, núm. 4, octubre de 1997.

liberación del control estatal de la economía conduce a la creación y crecimiento de centros independientes de poder, basados en el control privado de capital, tecnología y comunicaciones; y e) mientras que en el corto plazo el rápido crecimiento económico agudiza la desigualdad económica, en el largo plazo produce una mayor igualdad en la distribución del ingreso.

De acuerdo a este autor, la democracia es incompatible con la total igualdad económica, la cual sólo puede alcanzarse por medio de una dictadura coercitiva, pero también lo es con la grave desigualdad social y económica. Finalmente afirmaba que, los países que crecen económicamente y entran a esta zona de niveles intermedios de desarrollo económico desarrollan presiones dentro de ellos para abrir y democratizar su sistema político. Gran parte de las cuarenta transiciones, o más, a la democracia que han ocurrido en las décadas recientes han sido en países que se encontraban en esta zona de transición.

No podríamos concluir nuestra exposición sobre los desarrollos de la teoría de la modernización, sin citar una investigación publicada en 2004 por Scott Mainwaring y Aníbal Pérez²⁵. En este ensayo los autores bosquejan un resumen de este largo debate en torno a la relación entre democracia y desarrollo, dándose a la tarea de abordar el tema a partir de lo que denominan el “excepcionalismo latinoamericano” contrastando muchas de las más importantes tesis sobre los desarrollos obtenidos hasta entonces. Estos autores afirman que existe un cierto consenso en torno a dos cuestiones de la mayor relevancia: a) casi todos los trabajos sobre el tema basados en una muestra grande de casos han demostrado que el desarrollo económico, operacionalizado normalmente a través de la renta per cápita, es un claro predictor de la democracia; y b) en la mayoría de los casos los autores están de acuerdo en que la relación entre nivel de desarrollo y democracia no es lineal. (Ambos elementos, están presentes en el ejercicio desarrollado en el apartado anterior).

Por otra parte, según Mainwaring y Pérez, la mayoría de los estudios sobre el tema han asumido un impacto uniforme del nivel de desarrollo en el tipo de régimen, aunque señalan que autores como Guillermo O’Donell, han apuntado a que la relación entre modernización y democracia es más débil en América Latina que lo que algunos

²⁵ Scott Mainwaring y Aníbal Pérez Liñán., op. cit.

teóricos sostienen. Particularmente en la década de 1990, varios trabajos encontraron excepciones a la regla de la vinculación entre desarrollo y democracia, particularmente en relación a los efectos peculiares del nivel de desarrollo en los países con rentas intermedias.

A partir de un análisis cuantitativo riguroso, con una metodología muy elaborada, los autores se dan a la tarea de construir modelos explicativos a partir de los indicadores sobre democracia y desarrollo más utilizados en la literatura sobre el tema, y aplicarlos a la realidad latinoamericana en el periodo 1945-1996. Las conclusiones fueron: a) históricamente, la democracia en América Latina ha sobrevivido a pesar del escaso nivel de desarrollo, y por otra parte, ha colapsado a pesar de unos niveles de renta relativamente altos; b) la relación entre el nivel de desarrollo y la democracia en América Latina es diferente a la que existe en el resto del mundo; y c) las explicaciones existentes se centran en el agotamiento de una de las fases de la industrialización, y en el impacto que tienen las desigualdades sociales, pero los resultados sugieren que ninguna de estas explicaciones estructurales resuelve el entramado de las peculiaridades que América Latina presenta en esta cuestión. En este sentido, los autores terminan haciendo una afirmación más inquietante:

El excepcionalismo latinoamericano, en lo que se refiere a la relación entre el desarrollo y la democracia, es el resultado, tanto de países con un nivel sorprendentemente alto de democracia en relación a su desarrollo [...] como de países “rezagados” en su niveles de democratización dado su ingreso per cápita [...] Creemos que una teoría general es incapaz de explicar el excepcionalismo latinoamericano puesto que éste surge de dos componentes absolutamente distintivos.²⁶

¿Es esto lo que han aportado más de treinta años de estudios? ¿Qué es lo que explica tantas divergencias entre los autores que han abordado esta problemática, incluso entre aquéllos que parten de una misma perspectiva teórica? ¿Se ha convertido esto en un callejón sin salida? ¿Es un debate sin visos de solución? ¿Dónde radica el problema, en las teorías, en la metodología o en la realidad misma? ¿Y para el caso latinoamericano, tendremos que quedarnos conformes con la explicación de que

²⁶ Ibíd. p. 192.

simplemente no hay “explicación” teórica alguna, a las peculiaridades históricas que presenta la relación desarrollo-democracia en la región?

Creemos que el estado que guarda el desarrollo de este tema es resultado del estancamiento teórico en que han caído los autores que han abordado este tipo de investigaciones, ya que a pesar de tener divergencias de enfoque entre ellos (algunas de éstas importantes), se puede encontrar una base común de la que parten sus análisis, la cual de una forma u otra estaría reproduciendo de diferentes maneras las imprecisiones y vacíos que históricamente han impregnado estos estudios. Nos referimos a los conceptos desarrollo y democracia.

Casi todos los estudios miden el nivel de desarrollo de los países a partir de una serie de indicadores que permiten comparar las diferencias entre ellos, siendo el más empleado a lo largo del tiempo la renta *per cápita*. Pero cuando se pasa al plano explicativo de esas diferencias -particularmente en los países ubicados en los sitios intermedios de las escalas de dichas mediciones- el análisis se aborda tomando a los países más desarrollados del mundo como el parámetro que permite dar cuenta de la dinámica del desarrollo en otros países. Y aquí es donde se deja sentir la influencia de la teoría de la modernización, porque la explicación a la fuerte o débil relación entre desarrollo o democracia en un país, se ha hecho tomando como referente el modelo de los países desarrollados. Creo que esto explica en gran medida, el callejón sin salida al que han llegado los estudios sobre el tema en la actualidad. Porque no sólo han omitido analizar las condiciones materiales propiamente endógenas en que se desenvuelve la dinámica del desarrollo en los países atrasados, sino que no se han preocupado en incorporar a sus explicaciones el tipo de relaciones que se establecen entre ambas categorías de países, y que de manera definitiva influyen en el desarrollo de una nación. Esto es, no se integra una reflexión sobre el Estado en el subdesarrollo ni sobre la naturaleza del imperialismo como elementos determinantes del desarrollo económico en este tipo de países. Las deficiencias del concepto desarrollo en estos análisis, entonces, tienen que ver menos con una mala elección de los indicadores o la metodología para su estudio, que con una incapacidad explicativa, la cual tiene su origen en la perspectiva teórica elegida.

Por otra parte, la mayoría de los estudios usan definiciones de democracia basadas en Joseph A. Schumpeter²⁷ y en Robert Dahl²⁸, y al margen de las distintas formas en que se han operacionalizado estos conceptos, las explicaciones no han abordado otros senderos teóricos dentro de la teoría social para explicarse todos aquellos elementos que, ubicados fuera de la definición de democracia procedimental, se han hecho presentes al momento de encausar los análisis. Particularmente nos referimos a aquéllos procesos políticos y sociales que inciden en los países con ingresos medios, como los latinoamericanos, y que, como se ha evidenciado, tienen su origen en la estructura económica. La democracia entendida como un simple acto electoral y un mínimo de libertades civiles y derechos políticos, pone el énfasis sobre una plataforma común a todos los ciudadanos desde donde se supone ejercen su ciudadanía, pero omiten integrar a esa plataforma común cualquier ideario igualitario que contravenga el *status quo*. Esto ha dejado fuera de todos estos análisis la explicación del conflicto social, el cual está presente en toda sociedad de clases.

Lo anterior, explicaría por qué dentro de estos estudios, no se ha abordado la cuestión de aquella *población excedente*, y que de manera estructural y creciente se produce en prácticamente todos los países subdesarrollados. Lo acercamientos que se han tenido en su estudio, la consideran un resultado del tránsito de las naciones a la modernidad, y no un obstáculo para la viabilidad de la democracia misma. Aquí hacemos referencia a toda aquella población excluida de los procesos de producción

²⁷ Este autor concibe la democracia como un método cuya ausencia o existencia es, por consecuencia, fácil de comprobar en la mayoría de los casos. De ahí que para este autor el método democrático sea un instrumento institucional para llegar a decisiones políticas, por medio del cual cada individuo logra el poder de decidir mediante una competencia que tiene por objeto el voto popular. Más adelante profundizaremos sobre este tema. Ver Joseph Schumpeter. *Capitalismo, Socialismo y Democracia*. España, Orbis, 1983.

²⁸ Para este autor la democracia se caracteriza fundamentalmente por su continua aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos, sin establecer diferencias políticas entre ellos. Para que esto tenga lugar es necesario que todos los ciudadanos puedan a) formular sus preferencias; b) manifestar públicamente dichas preferencias entre sus partidarios y ante el gobierno, individual y colectivamente; c) Recibir por parte del gobierno igualdad de trato, esto es, que éste no debe hacer discriminación alguna por causa del contenido o el origen de tales preferencias. Así mismo, estas tres condiciones elementales deben ir acompañadas por ocho garantías: Libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, elegibilidad para el servicio público, derecho de los líderes políticos a competir en busca de apoyo, derecho de los líderes políticos a luchar por los votos, diversidad de las fuentes de información, elecciones libres e imparciales, instituciones que garanticen que la política del gobierno dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias. Ver Robert Dahl. *La Poliarquía. Participación y oposición*. Editorial Tecnos. Madrid. 1989.

capitalista, que de manera sistemática resulta marginal en los procesos de acumulación.²⁹ A pesar de estar presente históricamente de manera masiva en los países con niveles medios y bajos de ingresos, este tipo de investigaciones no se han preocupado por incluirla en sus estudios. Consideramos el análisis de este fenómeno central para poder entender el peso de la dimensión social en la relación desenvolvimiento económico-democracia.

Habiendo hecho este breve recorrido sobre los estudios más importantes que han abordado este tema, y habiendo expuesto las deficiencias y omisiones teóricas más relevantes que presentan, se hace necesario centrar nuestra atención en el caso que nos ocupa. A continuación abordamos la situación que ha guardado la dinámica desarrollo-democracia en América Latina desde una perspectiva histórica y teórica. El objetivo es delinear el trayecto que han seguido las explicaciones al fenómeno y su relación con el mismo, resaltando la deficiencias y omisiones que presentan, para construir a partir de ello, un marco conceptual de referencia que nos permita sortearlas y emprender una ruta explicativa para el estudio del caso mexicano.

1.2 Las teorías cepalina y de la dependencia.

La relación entre desarrollo y democracia en los países que integran la región latinoamericana ha tenido principalmente tres características a lo largo de su historia:

- a) Su carácter capitalista. A excepción de Cuba que desde mediados del siglo XX emprendió una ruta al socialismo, todos los países latinoamericanos han estado insertos en el sistema capitalista mundial desde su independencia. Por lo tanto, la ruta al desarrollo se ha dado en el marco de este modo social de producción.
- b) Como algunos teóricos ya lo han señalado, la intermitencia y no correspondencia de dicha relación en el espacio y el tiempo, ya que en diferentes momentos históricos países con rentas elevadas han sufrido regímenes autoritarios, y en sentido contrario, países con bajos niveles de ingreso han construido democracias plenas. Incluso la región en su conjunto tiene ahora la mayor cantidad de regímenes democráticos de su historia, en medio de una baja drástica de su nivel de renta promedio, en contraste con la segunda mitad de la década de los sesenta y principios de los setenta, cuando

²⁹ Ver Víctor M. Figueroa. *Excedentes de población...* op. cit., p. 20.

registró los más altos niveles de renta de su historia a la par de un retroceso autoritario de similar magnitud para la región; y

- c) La desigualdad social estructural en la que se ha desenvuelto. Este fenómeno ha sido constante en relación a su crecimiento en el tiempo, y ha jugado un papel muy importante en la relación entre desarrollo y democracia.

Hasta la década de los ochenta, el interés de las ciencias sociales en América Latina se concentró principalmente en el estudio de la dependencia, la industrialización, el cambio social y el desarrollo, como respuesta a las inconsistencias de la teoría de la modernización (algunos de sus principales exponentes los abordamos en el apartado anterior). La teoría del subdesarrollo de la CEPAL y la teoría de la dependencia, corrientes de pensamiento propiamente latinoamericano, se interesaron en estudiar los problemas del desarrollo en nuestras sociedades, sin profundizar en el estudio de la democracia, tema que se empezó a cobrar importancia hasta la década de los años ochenta.

La democracia aparecía entonces irresolublemente ligada al estudio de los problemas del desarrollo en la región, donde los cuerpos teóricos la incorporan como una variable dependiente de los modelos explicativos que se formulaban. Como quiera, la democracia es en todos los casos identificada con el bienestar social, incluso más allá de las elecciones.

La teoría del subdesarrollo de la CEPAL³⁰, que tiene en Raúl Prebisch a su principal exponente y fundador, surge en buena medida como una crítica a los magros resultados que la aplicación de las tesis modernistas habían reportado en el desarrollo de la región. La principal crítica se orienta al mercado como mecanismo espontáneo de solución de los obstáculos que interna y externamente se oponen al desarrollo de América Latina. Se reconoce una división internacional del trabajo en la cual los países latinoamericanos jugaban un papel subordinado, especializándose en la producción y expansión de bienes primarios y alimentos. En contraparte, los países centrales definían su propio rumbo y se especializaban en la producción de bienes manufacturados.

³⁰ Jaime Estay. “La concepción inicial de Raúl Prebisch y sus transformaciones” en Ruy Mauro Marini y Mágara Millán (coords.), *La teoría social latinoamericana. Subdesarrollo y dependencia*, Tomo II. México, Ediciones el Caballito. 1994. p.p. 17-40.

El centro transmite a la periferia los efectos de su comportamiento cíclico. Las economías industriales, no sólo concentran los frutos de su progreso técnico, sino que además se apropian de aquellos frutos provenientes del progreso de los países atrasados. Todo esto da como resultado que el rezago estructural de los países de la región reproduzca el deterioro de los términos del intercambio, lo que permite la permanencia de un sistema mundial estructurado desigualmente.

Las economías latinoamericanas se caracterizan por una heterogeneidad estructural; una incapacidad estructural de las actividades de exportación para ocupar al sobrante de población; un escaso caudal de conocimientos técnicos y capacidades de producción para aplicarlos a la producción que se desarrolla localmente. De acuerdo a Aníbal Pinto la heterogeneidad estructural tiene su origen en las enormes diferencias de productividad, ingresos grado de desarrollo, que existen en las economías latinoamericanas. Esto se debe a la existencia de tres factores principales: la naturaleza de los recursos que se exportan (bienes primarios principalmente), el elemento institucional, así como el peso y permeabilidad de la sociedad y economía tradicionales. Ello da pie a la configuración de tres estratos: uno primitivo, cuyo grado de productividad e ingreso por habitante de acuerdo al autor son semejantes a los que primaban en la economía colonial e incluso en la precolombina; un “polo moderno” compuesto por las actividades de exportación, industriales y de servicios, con una productividad semejante a los promedios de las economías desarrolladas; un estrato “intermedio” que de alguna forma corresponde de manera más cercana a la productividad media del sistema nacional.³¹

La propuesta de la CEPAL para superar estos obstáculos y acceder al desarrollo será: a) una industrialización acelerada por el proceso de sustitución de importaciones, para la producción doméstica en su etapa inicial; b) la producción de bienes primarios para financiar el pago de los bienes de capital importados, que necesitaría la producción en su despegue; y c) un papel protagónico del Estado en la conducción de la economía.³²

Durante la década de los cincuenta y los sesenta, esta teoría, dada su originalidad, tuvo una gran influencia en la formulación de las políticas económicas de los gobiernos

³¹ Aníbal Pinto. “Naturaleza e implicaciones de la “heterogeneidad estructural de América Latina”, en *El Trimestre Económico*, vol. 37, núm. 145, enero-marzo de 1970, México, FCE, pp. 83-100.

³² Jaime Estay, op. cit. p. 32.

desarrollistas de la región. Sin embargo, a finales de la década de los sesenta la realidad terminó por refutar buena parte de los postulados del modelo industrializador promovido por la CEPAL: a) la industrialización no sólo no había resuelto los problemas que se había planteado resolver, sino que había agravado otros ya existentes; y b) no había logrado reducir la vulnerabilidad exterior de las economías de América Latina.

Hasta entonces la teoría no había abordado el tema de la democracia como un elemento de interés en la explicación de los problemas del desarrollo en la región. Pero fue precisamente cuando la concepción inicial recibió sus más duros reveses, cuando este tema aparece como un requisito político para el desarrollo económico y como principio organizador del orden político institucional que debiera enmarcar el camino hacia el desarrollo. No es casualidad que esta irrupción del tema en el cuerpo de la teoría se diera en un contexto en que la mayoría de los regímenes latinoamericanos habían transitado al autoritarismo. Sin embargo, el tema de la democracia prácticamente no desarrolló ninguna reflexión seria al respecto, que no estuviera subordinada a los factores económicos de la región.³³

Pero la gran aportación de esta teoría, y es esto sobre lo que queremos llamar la atención, es en haber buscado una explicación a la problemática del desarrollo en los países latinoamericanos a partir de causas endógenas y vincularla con el tipo de relaciones que estos países establecen con los países desarrollados. Al margen de las refutaciones que sufrieron algunos de sus más importantes postulados, podemos afirmar que puso por primera vez la atención en el polo del subdesarrollado, y con ello, las posibles soluciones a sus problemas de atraso económico. La relación entre desarrollo y democracia, a diferencia de lo que ocurre en la teoría de la modernización, no es un tema que genere interés porque ambos fenómenos se entienden como las dos caras de una misma moneda. Además, al ser una teoría que busca en las condiciones internas de los países de la región las causas de su atraso económico y las estrategias para su solución, en consecuencia, no estará peleada con explorar rutas de desarrollo político endógenas también.

La teoría de la dependencia surge como una respuesta al declive de la teoría del subdesarrollo en la región, de la cual retoma el esquema bimodal para explicar los

³³ Jaime Estay., op. cit. pp. 37-40.

problemas de atraso de la región, aunque su principal influencia proviene del neomarxismo. A pesar de comprender un cuerpo complejo de teorías y modelos distintos, que no necesariamente forman un cuerpo amalgamado, se pueden extraer de éstos las siguientes premisas: a) Para comprender el sistema de producción dependiente hay que analizarlo como parte integral del sistema capitalista de producción mundial; b) Critica los postulados de las teorías de la modernización y de los costos comparados; c) El sistema de producción dependiente se reproduce al reproducir un sistema productivo, cuyo desarrollo está condicionado por relaciones de explotación y dominación; d) El capitalista del país dependiente es obligado a competir en condiciones de desigualdad con el capital hegemónico; e) Al reproducir tal sistema productivo y tales relaciones internacionales, el desarrollo del capitalismo dependiente, reproduce los factores que le impiden alcanzar una situación favorable nacional e internacionalmente y reproduce el atraso, la miseria y la marginación social en su interior; y, f) Las medidas propuestas por los desarrollistas no han permitido cambiar las condiciones que mantienen atado el desarrollo de los países dependientes, por lo que, las alternativas pasan por el enfrentamiento político, económico y social, de los países dominados respecto a los centrales para alcanzar una ruta distinta al desarrollo.³⁴

Esta teoría, explica los problemas del desarrollo en la región a partir de causas exógenas, es decir, por una relación desigual de los países latinoamericanos con el centro, que tiende a ensancharse bajo la lógica de acumulación capitalista en el esquema imperialista internacional. Y es precisamente por esta razón que el problema de la democracia prácticamente no fue abordado en esta teoría, ya que postula que la única salida de la dependencia pasa por una ruptura con el centro para crear una ruta al desarrollo propia. Pero como esta ruptura no puede ser sino violenta, o al menos llena de episodios trágicos, la democracia no aparece en el centro del debate, sino la revolución.

La teoría de la dependencia, sin embargo, pronto encontró las limitaciones de su enfoque, tanto por sus propias deficiencias teóricas, como por la crisis económica del capitalismo mundial que se registró a mediados de la década de los setenta. En cuanto a sus deficiencias teóricas, tal vez los mayores problemas se encuentren en: a) Definir la

³⁴ Alvin Y. So, op. cit. pp. 91-109. Para un estudio más completo de la dependencia: Theotonio Dos Santos. "El nuevo carácter de la dependencia" en Theotonio Dos Santos y Ruy Mauro Marini (coords.), *El pensamiento social Latinoamericano en el siglo XX*, Tomo I, Venezuela, UNESCO, 1999, p.p. 301-324.

situación de atraso de los países latinoamericanos a partir de factores externos; b) Determinar la relación imperialista con la periferia como un vínculo de dominación impuesto, menospreciando los factores internos que refuerzan y sostienen dicha dominación; c) El error en que incurrió al omitir en sus estudios el fundamento de clase de la relación entre naciones, omitiendo su tratamiento dialéctico a fin de relacionar la dimensión interna a la dimensión externa de la relación de dependencia; d) La desatención de la historia que mostró al explicar el desarrollo interno de cada formación social dependiente, a partir de su articulación con los países centrales, en lugar de haber seguido el camino inverso; f) La inconsistencia teórica en que cayó al explicar que el carácter capitalista de nuestras sociedades, sólo puede ser susceptible de una explicación genética (somos dependientes porque siempre lo fuimos), una idea que llevó a una situación en la que es muy difícil encontrar salidas.

Hecha esta apretada síntesis, podemos entender por qué a comienzos de los años setenta el desarrollo económico y la estabilidad no estaban reñidos con regímenes autoritarios de carácter nacionalista en mayor o menor modo. Esta relación “virtuosa” guardaba estrecha relación con su pretendida capacidad de propiciar condiciones de estabilidad política y capacidad de conducción política de los asuntos estatales, con relativa independencia de las presiones sociales en la toma y ejecución de soluciones, sin trastocar en lo fundamental los intereses más tradicionales.

La democracia entonces tenía que ver menos con derechos y libertades políticas, que con derechos sociales y económicos, o en todo caso, unos no se entendían sin los otros. Pero desde el pensamiento latinoamericano, las repuestas a la solución de los problemas del desarrollo, independientemente si se pensaban en términos de modernización o revolución estructural, estaban llenas de un contenido altamente transformador. Por eso la democracia no encontraba su sitio al margen de las soluciones al desarrollo. Incluso, se puede afirmar que formaba parte de la interpretación del subdesarrollo y su superación.

Prebisch y la escuela cepalina, no buscaban superar los obstáculos a la democracia, sino los obstáculos y resistencias al desarrollo y al cambio social, sólo en este sentido, como ya vimos, se llegó a abordar la democracia como un tema integrante de su cuerpo teórico. Cuando Pablo González Casanova escribe *La democracia en*

México³⁵, está analizando la democracia como producto inseparable de las condiciones de la estructura económico-social mexicana, no en sentido inverso. La articulación de la teoría de la dependencia, con exponentes como André Günder Frank, Teotonio Dos Santos, Ruy Mauro Marini u Octavio Ianni entre otros³⁶; y el proceso de interpretación histórico del subdesarrollo latinoamericano con teóricos como Rodolfo Stavenhagen³⁷ y Agustín Cueva³⁸, respondía a una misma cuestión: explicar el subdesarrollo para superarlo.

Bajo esta perspectiva, la democracia forma parte de una explicación más general, de carácter histórico, que intenta poner de manifiesto las causas profundas del subdesarrollo y la dependencia de los países de la región. La democracia no era un modelo a seguir, sino una construcción política propia, que no necesariamente debía coincidir con el ideal occidental. No había espacio para pensar la democracia como un fin en sí mismo.

En perspectiva, debemos decir que las aportaciones tanto de la teoría cepalina como de la teoría de la dependencia para la comprensión de la realidad latinoamericana son innegables. Sin embargo, la caja de Pandora que abrieron estas teorías de donde se desprendieron todo un conjunto de posibilidades y significados para superar los problemas de la región, no era un lugar sin límites. Sino un marco de contornos definidos por un conjunto de concepciones sobre nuestra realidad, que en ellas mismas encontró sus límites.

Es por eso que el pensamiento latinoamericano a pesar de sus importantes contribuciones a la comprensión de los problemas del desarrollo en la región, a finales de la década de los setenta eclipsó ante los cambios que se venían desarrollando en el sistema capitalista mundial. Era el tiempo del impulso del neoliberalismo a escala global y el cambio en la reorientación del modelo económico para la región.

³⁵ Pablo González Casanova, op. cit.

³⁶ Teotonio Dos Santos y Ruy Mauro Marini, op. cit.

³⁷ Rodolfo Stavenhagen. *Siete tesis erróneas sobre América Latina*. Varias ediciones.

³⁸ Agustín Cueva. *Problemas y perspectivas de la teoría de la dependencia*. Cuadernos del CELA. . México, UNAM, 1974. p.p. 131-142.

1.3 El cambio de paradigma: *Neoliberalismo y Transitología*.

A partir de la década de los ochenta el pensamiento latinoamericano pasa, de haberse ocupado del estudio de la estructura económica-social, la crisis, y -en el caso de la teoría de la dependencia- el conflicto de clases; a la democratización, la ciudadanía y los movimientos sociales. Lo anterior, en buena medida, como reflejo del giro que se da también en el pensamiento ortodoxo de las ciencias sociales estadounidenses, en el que empiezan a cobrar un especial interés los problemas de la democracia en los países de la región.

La preocupación por el estudio de la democracia irrumpió como consecuencia del impacto que tuvieron en los estudios sobre la región las dictaduras impuestas a partir de los setentas.³⁹ Pero hay una irrupción paralela que vino a transformar radicalmente la estructura económico-social de Latinoamérica: el neoliberalismo.

Entonces el interés explicativo se centra en dos puntos: a) conceptualizar el carácter de las dictaduras (burocrático autoritarias, o simplemente fascistas, militares, etc.), para poder dar respuesta al problema de la concreción del frente antidictatorial⁴⁰; y b) Comenzar un debate que ubicó a la democracia como proyecto político, con lo que se trató de construir una teoría de la democracia. Sin embargo, el sentido, la orientación y el contenido que tendría la nueva democracia fue postergado, en el mejor de los casos, cuando no, dejado en el olvido.

Si durante toda una época la pregunta que se planteó el pensamiento latinoamericano fue cómo salir del subdesarrollo, el debate que se impuso en los ochentas giró en torno a cómo salir de las dictaduras. En este sentido, los esfuerzos se dirigieron a recuperar, cuando no construir por vez primera una forma de gobierno que garantizara los derechos humanos, particularmente, los políticos e individuales. Los problemas del desarrollo se subordinan ahora al problema de la democracia.

Es en este contexto, que repercute en América Latina lo que Samuel Huntington llamó “la tercera ola de la democratización mundial”⁴¹. Si en un principio el desarrollo

³⁹ El inicio de tal proceso estuvo en el golpe militar de 1964 en Brasil, el desarrollo de las dictaduras propiamente neoliberales y “pro-transnacionales”, que surgen a lo largo de la década de los setenta en Chile, Uruguay (1973); Bolivia, Perú (1975); y Argentina (1976). A las que hay que unir las dictaduras ya existentes en la época, como las de Paraguay, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Haití.

⁴⁰ Guillermo O'Donnell. *El Estado autoritario-burocrático*. Buenos Aires, Belgrano, 1982.

⁴¹ Samuel Huntington. *La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX...* op. cit.

económico se asoció con instituciones autoritarias, en mayor o en menor grado, para después ceder el paso sólo al autoritarismo promotor de las vías de ajuste neoliberal, hacia los años ochenta la asociación entre liberalización política y ajuste neoliberal parecía firmemente dominar no sólo las agendas políticas, sino también las académicas.

En las décadas de los ochentas y noventas tuvo un importante auge el estudio de las transiciones latinoamericanas, que tuvieron como objeto explicar la forma en que finalizan los regímenes autoritarios y la modalidad que asume la instauración de los regímenes democráticos.

Las características que adoptó este cuerpo teórico son las siguientes⁴²: a) La construcción de periodizaciones que a llevan a definir dónde comienza la transición y dónde termina ésta, y dónde comienza la consolidación democrática; b) Busca también la creación de tipologías que permitan entender los diferentes modos que adoptan las transiciones; c) Definen como objeto empírico la conducta, el accionar y las estrategias seguidas por los actores políticos y las elites más relevantes, con lo que el análisis termina ciñéndose a un conductismo a ultranza, que en el mejor de los casos deriva en el análisis comparativo institucional de los regímenes, con lo que se dejan de lado otros elementos como las condiciones económico-sociales en las que se desenvuelven dichos procesos; y d) La democracia es definida, casi de manera exclusiva, como el resultado de las habilidades, tomas de decisiones y estrategias racionales desplegadas por los grupos dirigentes y los actores políticos más relevantes, por lo que no puede ser más que una democracia mínima.

Pero la nueva identidad que define la agenda de la transición democrática, es la difusión del neoliberalismo en los países de la región, como nuevo paradigma interpretativo de su realidad económica y social, el cual podemos resumir en los siguientes puntos:⁴³

a) Esta corriente relaciona los problemas de la baja de ganancia y la caída del ciclo económico con dos factores fundamentalmente: a) el poder adquirido por los

⁴² Guillermo O'Donnell, Philippe C. Schmitter y Lawrence Whitehead (comps.). *Transiciones desde un gobierno autoritario*. Vol. IV. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Buenos Aires, Paidós, 1998, p.p. 15-61.

⁴³ Cf. Héctor Guillén Romo. *La contrarrevolución neoliberal*. México. Editorial Océano, 1984, p.p. 13-73.

- sindicatos y la presión que ejercen sobre los salarios; y b) el déficit en la balanza de pagos, ocasionado por los cada vez mayores gastos sociales del Estado.
- b) La solución va encaminada entonces a dismantelar los sindicatos y a reorientar la participación del Estado en la economía como promotor del desarrollo y a eliminar el proteccionismo de las empresas locales por éste, ya que lejos de promover el desarrollo se piensa que lo frenan por los obstáculos que presenta el exceso de regulaciones, controles y obstáculos burocráticos.
 - c) Es por eso que se propone el libre comercio y la libre competencia en el mercado para solucionar los problemas arriba mencionados. Lo cual debe dar como resultado la reducción de recursos del estado y la disminución de sus gastos, e implica dejar de imprimir dinero para financiarlo.
 - d) Se debe buscar en todo momento un presupuesto balanceado del Estado, ya que el problema de los desequilibrios económicos se encuentra en el excesivo crecimiento de la oferta monetaria para financiar las actividades del Estado, para los cuales los ingresos del gobierno fueron insuficientes, lo que fomentó la inflación. La inflación es resultado del exceso de dinero y hay que mantenerla a la baja controlando el exceso del circulante, aunque la demanda sea golpeada.
 - e) El Estado no podrá recurrir al déficit para el financiamiento de sus actividades sociales, aunque esta no debe ser una ruptura drástica, sino gradual. Al retirarse de la economía como empresario debe promover la inversión privada a través de contracciones fiscales. En este sentido la estabilidad monetaria y cambiaria es prioritaria, así como atractivas tasas de interés que estimulen la entrada de divisas. En otras palabras, la propuesta neoliberal implica la transformación estructural del crecimiento económico orientado hacia el mercado interno hacia otro que prioriza el mercado externo.

Este recetario sin embargo -en esta su versión más radical- fue establecido para su implementación en los países subdesarrollados. Detrás de esta estrategia se encuentra la intención de los Estados Unidos de aprovechar el señorío de su moneda, para respaldar una estrategia tendiente a mandar a sus empresas a producir en el extranjero y comprar productos baratos. Sin embargo, la fortaleza del dólar se sostiene básicamente gracias a que es la principal forma de reservas en los países del mundo, desde que el

gobierno norteamericano decidió unilateralmente acabar con los tratados de Bretton Woods y establecer el patrón dólar.⁴⁴

Por otra parte, el punto de encuentro entre la transitología y el neoliberalismo, se establece cuando la primera definió dos momentos clave a partir de los cuales se podían definir *todos los procesos democratizadores*: la liberalización, en un primer momento, y la consolidación democrática, después.

Según Adam Przewoski⁴⁵, en la primera etapa, los renovadores tendrían que lidiar simultáneamente con las oposiciones ideológicas de izquierda y derecha a fin de propiciar un proceso de aprendizaje sobre las nuevas reglas del juego democrático transicional. En *esta etapa se tendría que aceptar que los sectores populares deberían renunciar a ventajas económicas o a expectativas de ventajas económicas de un crecimiento económico*, a cambio de la consolidación del régimen democrático.

En la segunda etapa, la consolidación, se establecerían las normas de competencia electoral regularizadas y la capacidad de concertación entre partidos y actores políticos. Según Philippe Schmitter:

[...] la consolidación podría definirse como un proceso en el que se transforman los acuerdos accidentales, las normas prudenciales y las soluciones fortuitas que han surgido durante la transición, con el objeto de lograr relaciones de cooperación y competitividad que han demostrado ser más confiables, que se practican con regularidad y son aceptadas voluntariamente por individuos o colectividades, es decir, por los políticos y ciudadanos que participan en un gobierno ciudadano.⁴⁶

Llama poderosamente la atención que en la conceptualización de estos procesos, se haga explícito que son las elites las que deciden el control de la política, el régimen y el Estado, y no se tome en cuenta la participación de las masas en dichos procesos, al menos, no en un papel protagónico. Incluso se suplanta la categoría pueblo por la del ciudadano individual, en un esfuerzo por separar el conjunto de solidaridades que definen los lazos identitarios del individuo en relación a sus semejantes. De ahí la ausencia, dentro de la mayoría de estos esquemas, de alguna proposición para el

⁴⁴ Más adelante en el Capítulo 2 de este trabajo abundamos sobre este tema.

⁴⁵ Adam Przewoski. "Algunos problemas en el estudio de la democracia" en *Transiciones desde un gobierno autoritario*. Vol. IV. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, op. cit., pp. 79-104.

⁴⁶ Philippe Schmitter. "La consolidación de la democracia y la representación de los grupos sociales", en *Revista Mexicana de Sociología*, No. 3, Julio-Septiembre. México, UNAM, 1992, pp. 3.

establecimiento de un nuevo *pacto social*, que pudiera sustituir aquél generado durante la etapa de los gobiernos desarrollistas. Aquí la separación entre la “esfera política” de la democracia y las esferas económica y social, definitivamente se concreta. La democracia que se impulsa se vuelve mínima, carente de contenido, al menos para las grandes mayorías de ciudadanos que son simples espectadores de un juego de ajedrez, donde de antemano están excluidos.

Como señala Marcos Roitman:

Así, la democracia podría expresar libremente y sin ataduras de ningún tipo una realidad posible de alcanzar en tanto que su referente estructural, la explotación económica, es ocultado y se pone en su lugar una relación más concreta y práctica como la concertación, el pacto [entre elites] y la gobernabilidad. Noción, esta última, que permitiría expresar la democracia no en términos de contenido político, social y económico (propios de una propuesta de tipo de Estado y forma de gobierno), sino vinculada a un fin común: la estabilidad y perdurabilidad de los gobiernos, claro está, al margen de sus políticas concretas [...].⁴⁷

Neoliberalismo y transitología son dos caras de una misma moneda en un contexto de ajuste estructural, su separación se hizo con fines legitimadores de la construcción de un nuevo modelo de crecimiento para la región, basado en las exportaciones y no en el mercado interno. El cambio político que impulsa este modelo explicativo de la transición -no el único pero sí el más difundido- no permite cuestionar los graves problemas de exclusión social, económica, política y cultural, que el neoliberalismo impone a las grandes mayorías. Pero lo más importante es que esta tendencia define una agenda para el desarrollo que será impuesta por los países centrales a los países subdesarrollados, conjurando con ello cualquier esfuerzo de tipo nacional por emprender una ruta propia para salir del atraso.

Es así como se impone lo que se ha dado en llamar la *democracia mínima o procedimental*, que no es más que una forma de referirse a la democracia liberal con las particularidades que adopta en el neoliberalismo. Los principales exponentes de esta concepción y que han tenido una influencia innegable en el desarrollo de la teoría democrática en la región, sin duda han sido Norberto Bobbio y Robert Dahl. Para

⁴⁷ Marcos Roitman Rosenmann. “Teoría y práctica de la democracia en América Latina”, en González Casanova, Pablo y _____ (coords.). *La democracia en América Latina. Actualidad y perspectivas*. Madrid, España, Editorial Complutense, 1992, p.p. 69.

Bobbio⁴⁸, la democracia, a diferencia de toda forma de gobierno autocrático, “es caracterizada por un conjunto de reglas (primas fundamentales) que establecen *quién* está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué *procedimientos*”. las democracias existen para satisfacer un mínimo procedimental, que es necesario a tal grado que se garanticen los siguientes elementos o “ingredientes”: la participación política del mayor número de gente interesada en hacer actos de presencia en la vida política; la regla de la mayoría, es decir, tomar como el criterio central para las decisiones políticas, la opinión de las mayorías; derechos de comunicación usuales, con esto se logra la selección entre diferentes elites y programas políticos; y la protección permanente de la esfera pública.

La expresión más radical de esta concepción la encontramos en la obra de Robert Dahl⁴⁹ al introducir la noción de *poliarquía*. De acuerdo a Dahl más que hablar de democracia, en el sentido genérico, o tal como se conoció en las ciudades-estados griegas, las sociedades modernas han tendido a generar formas de *poliarquía* o *regímenes poliárquicos*. Estos sistemas funcionan a partir de la competencia entre las elites, tal como muchas veces se concibe al momento de identificar y definir los actuales sistemas democráticos. Sin embargo, ello no siempre es posible. Para que exista dicha competencia, o para que exista realmente *poliarquía* es necesario previamente la presencia de siete importantes instituciones: funcionarios electos, elecciones libres imparciales, sufragio inclusivo, derecho a ocupar cargos públicos, libertad de expresión, variedad de fuentes de información y autonomía asociativa.

Según Samuel Huntington, a mediados del siglo XX el debate en torno a la conceptualización de la democracia nacen tres tipos de significados: a) en términos de fuentes de autoridad para el gobierno; b) propósitos perseguidos por éste; y c) procedimientos para constituirlo. Sin embargo, sostendrá que aparecen serios problemas de ambigüedad e imprecisión cuando se define la democracia a partir de los significados a y b, ya que las personas en otros sistemas de gobierno se convierten en líderes por razones de nacimiento, violencia, alianza, aprendizaje, etc. con los que la especificidad de la democracia no puede ser aprehendida a cabalidad a partir de estas premisas. Es por

⁴⁸ Ver, Norberto Bobbio. “El futuro de la democracia”, en *El futuro de la democracia*, Fondo de Cultura Económica, México, 1986.

⁴⁹ Ver, Robert Dahl. *La democracia y sus críticos*. Barcelona, Paidós, 1992.

eso que apuesta a definir la democracia a partir de su procedimiento principal, que no es otro que la selección de líderes a través de elecciones competitivas por parte de las personas gobernadas por ellos.

La genealogía shumpeteriana de esta proposición, es reconocida por el propio Huntington, incluso retoma de este autor el concepto del método democrático, como “[...] el acuerdo institucional para llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos ejercitan el poder de decidir por medio de una lucha competitiva mediante el voto del pueblo.”⁵⁰

Como sabemos, la historia nos dice que en la generalidad del medio académico triunfó la democracia procedimental. Huntington atribuye este triunfo a que esta conceptualización se basaba en definiciones empíricas, descriptivas, institucionales y de procedimientos, antes que en definiciones racionalistas, utópicas o idealistas. El *ser* de la democracia se impuso, de acuerdo a este autor, al *deber ser*.

La contrastación parece ser sólida, la democracia como una “realidad objetiva y tangible”, ante un conjunto de premisas “metafísicas” que en nada ayudan a explicarla. Sin embargo, con el “triunfo” de esta concepción, ha ocurrido precisamente lo contrario. La democracia ha terminado convirtiéndose cada vez más en un modelo a seguir, antes que en una realidad tangible. Esto se debe principalmente a que se le aisló, como lo hemos venido afirmando, de su medio material.

Por lo tanto, no es casualidad que el propio Huntington señale como fecha del triunfo de la concepción de la democracia procedimental, la década de los setenta, ya que es en este periodo que empieza a echar raíces el ajuste neoliberal. Para los ochenta se convierte en pieza indispensable del arsenal teórico con el cual se abordará la tarea de construir una teoría general de la democracia en la región, y en los noventa se convertirá en un nuevo paradigma interpretativo. Pero el desarrollo histórico en la región ha puesto en evidencia la veta ideológica que esta concepción arrastra de origen, como un complemento político perfecto del neoliberalismo económico que se ha impulsado durante más de tres décadas en la región.

Es grande la deuda que la introducción de este tipo de ideas ha dejado en la comprensión de la realidad latinoamericana. No sólo por que no ha sido capaz de dar

⁵⁰ Citado en Samuel Huntington "After Twenty Years: The future of third wave" ... op. cit. p. 20.

cuenta de ella, sino porque en su nombre se han impulsado políticas que han significado un enorme retroceso en términos de bienestar social para la región. La retirada del Estado de la economía en nombre del libre juego de las fuerzas del mercado, sólo ha acarreado descrédito a la democracia electoral, a pesar de que en ciertos contextos los movimientos sociales de resistencia al neoliberalismo han logrado articularse con proyectos políticos populares y constituirse en alternativas de gobierno por la vía de las urnas. Con estas excepciones, la democracia ha legitimado a los gobiernos que han impulsado el neoliberalismo en las últimas décadas en la mayor parte de la región, y es precisamente por esto, que en Latinoamérica la estructura económica y social parece haber corrido en un camino distinto que la democracia, o al menos esa es la idea que se ha tratado de difundir desde este paradigma teórico.

1.4 Desarrollo y democracia en la actualidad: la globalización.

Aunque el término *globalización* fue utilizado por primera vez en 1983, año en que Théodore Lewit publicó un artículo titulado *La globalización de los Mercados* en la revista *Harvard Business Review*, fue hacia finales de la de los noventa el concepto obtuvo carta de naturalización en los estudios sobre el desarrollo y la democracia en la región. Fue utilizado desde su introducción en el pensamiento latinoamericano para analizar los procesos de integración mundial que se supone están ocurriendo en el mundo en cuanto a territorios, poblaciones, recursos, procesos y experiencias culturales, en su actual fase neoliberal.

Desde la teoría, se puso el acento en las bondades que supuestamente traerían consigo la apertura comercial y el libre mercado, como resultado de la introducción de las políticas económicas neoliberales, resumidas hoy en el Consenso de Washington⁵¹. A

⁵¹ Esta idea concreta diez temas de política económica en los que Washington está de acuerdo: 1) Disciplina presupuestaria; 2) Cambios en las prioridades del gasto público (de áreas menos productivas a sanidad, educación e infraestructuras); 3) Reforma fiscal encaminada a buscar bases imponibles amplias y tipos marginales moderados; 4) Liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés; 5) Búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio competitivos; 6) Liberalización comercial; 7) Apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas; 8) Privatizaciones; 9) Desregulaciones; y 10) Garantía de los derechos de propiedad. Citado en Joseph F. Mária Serrano. *El "Consenso de Washington": ¿paradigma económico del capitalismo triunfante?* Revista Papeles. Localizable en Internet, página Web: <http://www.fespinal.com/espinal/realitat/pap/pap46.htm>. Última consulta: 22 de octubre de 2006. Sin embargo, aunque en la actualidad es lugar común señalar el Consenso de Washington para hacer referencia a la política internacional en materia económica desplegada por los Estados Unidos hacia los países bajo

partir de entonces, la globalización fue definida a partir de una serie de premisas que ponían el acento en los aspectos positivos de las importantes transformaciones que se estaban desarrollando en la sociedad capitalista contemporánea.

Entre otras cosas, se ha sostenido que es un fenómeno nuevo que comenzó a cobrar forma a mediados de la década de los setenta; que es un proceso homogéneo en términos de la intensidad y penetración de su desarrollo, en sus niveles históricos, en sus dimensiones comercial, productiva y financiera, y para los sujetos y actores involucrados en ella; que conduce a la homogenización de la economía mundial, superando a la larga las diferencias entre desarrollo y subdesarrollo, y entre países y regiones ricos y pobres; que era una llave del progreso y del bienestar, ya que del mismo modo que conduciría a cerrar brechas internacionales, promovería el ascenso de los grupos menos favorecidos a crecientes niveles de bienestar y calidad de vida; que favorecería la globalización de la democracia, en relación directa con la de la economía; y que llevaría a la desaparición progresiva del Estado, o al menos a una pérdida de importancia del mismo.⁵²

Estas ideas en torno a la globalización tuvieron una gran aceptación en todos los ámbitos de la vida social, y pronto fueron asimiladas y difundidas desde las ciencias sociales a prácticamente todos los países de la región. Una gran cantidad de trabajos empezaron a profundizar sobre esta visión sobre la globalización, siendo recibidos con singular entusiasmo por los centros hegemónicos del poder mundial.

El desarrollo en esta perspectiva, se relaciona con la *integración económica*, que en el caso de nuestros países no puede ser otra que con los Estados Unidos, al menos, como proyecto inmediato. Es decir, la idea es que en la medida que los países logren involucrarse en los circuitos comerciales mundiales y logren romper los obstáculos que en el interior de sus territorios se pudieran generar para ello, estarán en condiciones de incrementar su riqueza y con ello el bienestar social de sus poblaciones. En realidad, el neoliberalismo no es otra cosa que un complemento ideológico de la globalización, que

su influencia hegemónica, lo cierto es que omite al menos dos políticas impulsadas desde el centro, que son indispensables para la viabilidad de aquéllas, como son la flexibilidad laboral y la penetración militar estadounidense en las soberanías de los estados-nación para “salvaguardar” los intereses de sus multinacionales, en nombre de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

⁵² Ver Carlos M. Vilas. “Seis ideas falsas sobre la globalización. Argumentos desde América Latina para refutar una ideología” en John Saxe-Fernández, *Globalización: crítica de un paradigma*. México, Plaza & Janes Editores, UNAM, 1999. Para este autor este conjunto de premisas que han privado en la teoría de la globalización, no son más que una ideología que busca ocultar la verdad de la realidad.

en la actual fase del desarrollo capitalista, busca romper las últimas fronteras al libre juego de las fuerzas del mercado. Aunque este rompimiento, en todo caso, esté ocurriendo sólo en las fronteras de los países subdesarrollados.

Con el concepto globalización se cierra la pinza que abrió el paradigma del neoliberalismo y la democracia procedimental en las dos décadas pasadas, el cual ya tiene larga data en el desarrollo del pensamiento latinoamericano. Se refuerzan sus postulados, dotándolos ahora de un contenido universalista y de un sentido triunfante, particularmente después de la caída del socialismo realmente existente y la emergencia de Estados Unidos como potencia hegemónica militar. A principios de los noventa se hablaba del fin de la historia⁵³, ahora la historia parece haber recobrado su ímpetu gracias a la globalización.

En este contexto, la democracia procedimental en su concepción mínima, como sinónimo de elecciones, termina por echar raíces. Actualmente se identifica con la promoción de determinados actores políticos para consolidar la economía de mercado en su versión neoliberal, en su etapa actual de “integración” económica. Lo democrático va en relación con determinadas garantías institucionales a la libre expansión del capital y a la institucionalización de los ajustes macroeconómicos, mucho más que con un conjunto de derechos y garantías individuales y sociales. Es por ello que a partir de finales de la década de los noventa se puede hablar en las formaciones sociales latinoamericanas, de una tendencia a la baja en términos de participación ciudadana.

Esto ha traído como consecuencia un desprestigio de los regímenes democráticos en América Latina. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo⁵⁴ existe una crisis de confianza en los sistemas democráticos, que no han logrado satisfacer las aspiraciones de los latinoamericanos, particularmente las de carácter material. El crecimiento económico insuficiente, las profundas desigualdades y los sistemas jurídicos y servicios sociales ineficientes han provocado el malestar popular y socavado la confianza en la democracia electoral.

El informe indica que el 54,7 por ciento de los latinoamericanos declaraba que prefería un “régimen autoritario” a uno democrático, si el primero le “resolvía” sus

⁵³ Francis, Fukuyama. *El fin de la historia y el último hombre*. Planeta, Barcelona, 1992.

⁵⁴ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo... op. cit.

problemas económicos. En una proporción de 56,3 por ciento consideran que “el desarrollo económico es más importante que la democracia”, frente a 48,1 por ciento que opina lo contrario.

La visión desencantada sobre el sistema político se expresó igualmente en que 58,1 por ciento de los encuestados estimó legítimo que sus presidentes “vayan más allá de las leyes”. Ante otra pregunta, 43,9 por ciento se mostró escéptico de que “la democracia solucione los problemas del país”, contra 35,8 por ciento que sí confía en los sistemas representativos.

El informe deja constancia también de la desconfianza de los latinoamericanos hacia las instituciones del Estado, ya que 40 por ciento de la población considera que “puede haber democracia sin partidos”, posibilidad que niega solo 34,2 por ciento. Los que estiman que “puede haber democracia sin un Congreso (legislativo) nacional” ascienden a 38,2 por ciento, mientras 32,2 sostiene lo contrario.

Finalmente, otro dato significativo: 79,7 por ciento de los encuestados consideró que son los grupos económicos empresariales y financieros los que ejercen el poder en sus países y 65,2 por ciento atribuyó también poder a los medios de comunicación.

En este escenario, no podemos dejar de señalar que desde el pensamiento crítico hubo una respuesta a estos pronunciamientos, y se pusieron en evidencia muchos aspectos que esta concepción del desarrollo y la democracia desde el concepto de globalización ocultaba. Tal vez Carlos Vilas es quien ha resumido mejor las críticas a estas ideas: a) La globalización dista mucho de ser un fenómeno reciente y que en todo caso ha estado determinado de manera sustancial por el desarrollo del capitalismo desde sus orígenes; b) No es un proceso homogéneo, ni en términos de su penetración en los mercados internacionales, ni de su desarrollo en sus diferentes periodos históricos y dimensiones comercial, productiva y financiera, y que actúa de manera desigual para los diferentes actores y sujetos involucrados en ella; c) Conduce a diferenciaciones crecientes entre regiones del mundo con desiguales niveles de desarrollo en el plano económico, político, social y cultural que tienden a profundizarse en la medida que gana terreno; d) Que se ahondan las diferencias entre los segmentos de la población que logran insertarse en los ámbitos dinámicos de la economía, que son cada vez menos, y los que resultan excluidos, que son cada vez más; que la única democracia posible se

limita al ámbito de las elecciones y cada vez se identifica menos con derechos y garantías individuales y sociales; e) Se mantiene la intervención del Estado, sólo cambian sus modalidades, alcances y estilos de articulación con el mercado para consolidar la reestructuración de las economías locales, su mayor apertura externa y una integración más amplia a las corrientes trasnacionales de capital.⁵⁵

Esta respuesta empieza a tener eco, no sólo a nivel teórico sino a nivel práctico, justamente ahora que la consolidación del paradigma: *desarrollo = neoliberalismo / democracia = democracia procedimental*, parecía consolidarse con la llamada globalización. El resultado es que la visión teleológica de la globalización que especula sobre la integración del mundo en un sólo ente global, a partir de la integración de los mercados y la consolidación mundial de un modelo universal para el desarrollo y la democracia, han sido refutadas por la realidad misma, y han tenido como contraparte la emergencia de procesos que buscan descubrir nuevas rutas para alcanzar el desarrollo y la democracia, como Venezuela, Bolivia y Ecuador.

Por otra parte, ha propiciado una respuesta social organizada que cuestiona el neoliberalismo y la democracia mínima como paradigmas irrefutables de la realidad latinoamericana. Tal es el caso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en México, el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil o los piqueteros en Argentina, sólo por mencionar algunos, que están apostado a una vía alterna a la marcada por la institucionalidad impuesta por este paradigma interpretativo, con el objetivo de construir mejores condiciones económicas, políticas, sociales y culturales para las mayorías.

Reflexiones finales.

Los estudios que han seguido la ruta de la perspectiva de la modernización, a pesar de ser numerosos y haber desarrollado métodos cuantitativos muy sofisticados para explicar la relación de la correlación entre desarrollo y democracia, han llegado a un callejón sin salida porque todos siempre han partido de una base conceptual común que ha influido de diferentes formas en las imprecisiones y vacíos que históricamente han impregnado estos estudios. Nos referimos a los conceptos desarrollo y democracia.

⁵⁵ Ver Carlos Vilas., op. cit.

De esta forma, cuando se operacionalizan los indicadores del desarrollo, se parte de una base en que la explicación de su diferentes niveles de avance está dada de antemano. Es decir, al pasar al plano explicativo de las correlaciones que se encuentran entre los diferentes indicadores de desarrollo y democracia, incluidas sus variaciones regionales e históricas, se ha hecho tomando como referente el *modelo* impulsado en los países desarrollados. Lo cual ha llevado a este tipo de estudios a un callejón sin salida.

Esto se explica porque, a nuestro juicio, se ha omitido analizar las condiciones materiales propiamente endógenas en que se desenvuelve la dinámica del desarrollo en los diferentes tipos de formaciones sociales, de tal forma que el análisis parta de una explicación susceptible de ser contrastada con la realidad. Pero otra omisión derivada de la anterior, es que el tipo de relaciones que se establecen entre ambas categorías de países, y que de manera definitiva influyen en el desarrollo de una nación, tampoco han sido incorporadas a los cuerpos teóricos.

Algo similar sucede con las definiciones del término democracia utilizadas por estos estudios. Todas ellas se basan en Joseph A. Schumpeter y en Robert Dahl, y tienden a buscar indicadores que den cuenta de la situación que guarda el régimen político en estudio, en relación al modelo que priva en la mayoría de los países desarrollados. En nuestra opinión, la democracia como régimen político es el resultado de las condiciones particulares en que se desenvuelven las relaciones sociales de producción en cada país. La explicación a por qué primero echó raíces en los países industrializados occidentales, debe buscarse en las condiciones históricas concretas que han caracterizado su estructura económico-social a partir de entonces. En este sentido, formular una explicación de la presencia o ausencia de la democracia en tal o cual país, a partir de un análisis comparativo, sin tomar en cuenta las determinantes económicas y sociales que lo definen, puede llevar a conclusiones tan vagas y contradictorias como las que hasta ahora este tipo de estudios han aportado, particularmente cuando se intenta comparar dos realidades distintas (países desarrollados y países subdesarrollados), a partir de un modelo “universal” de democracia.

Esto explicaría la gran omisión en la que ha incurrido este tipo de análisis, al marginar de sus explicaciones las condiciones de exclusión social estructural que privan en los países subdesarrollados, como resultado de las particularidades que adoptan las

relaciones sociales de producción en ellos. Esta *población excedente*, que tiene un peso poblacional muy importante, sería un componente elemental a tomar en cuenta para analizar las fluctuaciones que ha tenido la democracia en los países subdesarrollados históricamente, particularmente en aquéllos con niveles medios y bajos de ingresos.

En el caso particular de los países que integran la región latinoamericana la relación entre desarrollo y democracia ha tenido principalmente tres características a lo largo de su historia:

- a) Su carácter capitalista. A excepción de Cuba que desde mediados del siglo XX emprendió una ruta al socialismo, todos los países latinoamericanos han estado insertos en el sistema capitalista mundial desde su independencia. Por lo tanto, la ruta al desarrollo se ha dado en el marco de este modo social de producción.
- b) Como algunos teóricos ya lo han señalado, la intermitencia y no corresponsabilidad de dicha relación en el espacio y el tiempo. Fenómeno que es atribuible en buena medida a la tendencia generalizada en los estudios empíricos sobre el tema, particularmente desde la teoría de la modernización, a utilizar la renta *per cápita* como un indicador irreductible del desarrollo de una nación, concepto que elude el grado de distribución efectiva del ingreso entre la población y por lo tanto las inequidades con la que ésta se desenvuelve en los países más atrasados económicamente; y
- c) La desigualdad social estructural en la que se ha desenvuelto. Este fenómeno ha sido constante en relación a su crecimiento en el tiempo, y ha jugado un papel muy importante en la relación entre desarrollo y democracia. Tendencia que actualmente gobiernos como los de Venezuela, Bolivia y Ecuador han tratado de transformar gracias a la implementación de políticas públicas, que desafiando el paradigma neoliberal, introducen mecanismos redistribuidores y compensatorios de la riqueza.

Ahora bien, hasta aquí hemos analizado desde diferentes perspectivas teóricas los problemas que ha presentado la explicación de la relación desarrollo-democracia en el mundo enfocando nuestra atención en la situación que guarda la región, contrastando en la medida de lo posible esos enfoques teóricos con la realidad histórica concreta. Es por eso que consideramos necesario establecer un marco interpretativo alternativo que nos

ayude a sortear dichos obstáculos, para así poder estar en condiciones de explicar a nivel teórico las condiciones en que se desenvuelve la relación desarrollo-democracia, y apuntar hacia la comprensión de la realidad mexicana, que es el objeto de esta investigación.

El principal obstáculo que encontramos y del cual se han derivado una serie de premisas falsas sobre este tema, es que los análisis de ambos conceptos han corrido de manera separada, como si la existencia del desarrollo estuviera circunscrita al campo de la economía y el de la democracia a la esfera de la política. Los estudios tienden a ponderar una u otra variable como independiente no en relación a su existencia real en el mundo social, sino en razón del campo teórico explorado y el peso específico que en éste tenga la economía o la política.

De lo anterior se concluye que si habremos de construir un marco conceptual que nos permita comprender la relación existente entre el desarrollo y la democracia, debemos empezar por entender las vitales funciones que en relación a ello cumple el Estado en la economía capitalista, así como el impacto que la economía tiene en el funcionamiento del Estado en su forma democrática. Porque ambas realidades comparten un mismo tronco social dentro del modo de producción capitalista que es la relación capital-trabajo, misma que es una relación de explotación que explica la existencia del Estado y sus funciones económicas y políticas.

Se hace necesario entonces precisar las características generales del Estado capitalista en tanto organización política de la burguesía y explicar la importancia de su forma democrática liberal para la dominación. Del mismo modo, es necesario comprender cómo el funcionamiento de la democracia liberal depende de la construcción de consensos, no sólo entre las fracciones que integran la clase dominante, sino sobre todo entre ésta y los dominados, y cómo dichos consensos sólo pueden lograrse en condiciones mínimas de bienestar social para un ejercicio pleno de la ciudadanía por estos últimos. Pero en razón de ello es indispensable analizar también las vitales funciones que el Estado cumple en la generación de progreso para el desarrollo, las relaciones sociales de clase que determinan las posibilidades de su éxito en estas tareas, así como las condiciones históricas concretas en las que se desenvuelve la

acumulación capitalista y el imperialismo a nivel mundial en el devenir de estos procesos.

Tales son las preocupaciones teóricas que motivan el desarrollo de los siguientes capítulos de este trabajo, y consideramos indispensable afrontarlas utilizando categorías y conceptos provenientes del pensamiento crítico. Esto lo haremos explicando el caso mexicano con el objetivo de dar cuenta del impacto que ha tenido en las formas de dominación política, la ausencia de una generación endógena de progreso para el desarrollo y la activa participación del Estado en la consolidación de una estructura socioeconómica que reproduce el subdesarrollo.

Capturar las especificidades y modalidades de estos procesos, es la tarea que a continuación desarrollamos.

CAPÍTULO II

La Gestión Estatal del Subdesarrollo en México

En este apartado nos abocaremos a explicar la forma en que el Estado influye en el funcionamiento de la estructura económica en tanto que es producto de relaciones sociales antagónicas que se gestan en el seno de la sociedad capitalista dentro de la producción, a partir de la relación capital-trabajo, para después analizar el caso mexicano.

De esta forma es necesario precisar cómo se desenvuelve la acción del Estado en la economía y con arreglo a qué objetivos lo hace, si es que se quiere comprender la forma en que su intervención tiene efectos en la organización y la forma que adopta la dominación política de la burguesía en contextos históricos determinados.

Para esto habría que empezar por precisar que las funciones económicas del Estado tienen como medio y objeto el *desarrollo*, por lo que habría que explicar lo que entendemos por este concepto y las condiciones en que ha logrado concretarse su realización material. Claro que rebasa por mucho los objetivos de este trabajo debatir en torno a las diferentes escuelas que han tratado este tema, por lo que nos limitaremos, dado que en el capítulo I se han desarrollado con mayor precisión algunas de las ideas centrales sobre el *desarrollo* desde el pensamiento latinoamericano, a contrastar dichas ideas con la valiosa aportación de Víctor Figueroa⁵⁶ a su tratamiento.

Sin duda, la gran aportación a la comprensión del *desarrollo* por parte del pensamiento latinoamericano de las escuelas cepalina y de la dependencia, fue poner la atención en el análisis de la forma que éste se desenvuelve entre diferentes categorías de países, así como las relaciones desiguales que se producen entre ambos. En el caso de la teoría cepalina, la explicación partió de la ausencia de una industrialización importante en los países subdesarrollados, como la causante de la desigualdad en los términos del intercambio con los países más desarrollados, lo cual llevaba a una recurrencia en al déficit en la balanza de pagos. Sin embargo, la solución propuesta, que fue incentivar la industrialización a largo plazo, agravó aún más los problemas sociales y económicos que pretendió resolver.

⁵⁶Víctor M. Figueroa. *Reinterpretando el subdesarrollo. Trabajo General, clase y fuerza productiva en América Latina...* op. cit.

El problema se originó en el diagnóstico del subdesarrollo, ya que si bien era cierto que la ausencia de industrialización era la manifestación de un problema estructural de las economías latinoamericanas, no se buscaron las respuestas a esa falta de industrialización en las relaciones sociales de producción, sino en las relaciones comerciales desiguales que prevalecían con los países desarrollados. La solución que se ofertó fue la construcción de un sector moderno a partir de un proceso de industrialización con sustitución de importaciones, sin embargo, como ya hemos visto la propia industrialización profundizó el subdesarrollo.

Por otra parte, la teoría de la dependencia tuvo el gran mérito de caracterizar la situación de nuestras formaciones sociales, a partir de su articulación en el sistema capitalista mundial, pero el problema es que buscó en los países desarrollados las causas de los problemas de los países menos favorecidos. La explicación se centró en las relaciones imperialistas de las que han sido presas las economías subdesarrolladas y las condiciones históricas en las que se han desarrollado éstas. Sin embargo, el análisis de las condiciones internas de las formaciones sociales periféricas, resultó de la articulación que guardaban en relación al centro, lo que limitó su nivel explicativo y por lo tanto la viabilidad de las soluciones para salir del atraso. Estas últimas se limitaron a proponer la expropiación de las empresas de los países desarrollados con el objetivo de romper con los vínculos de subordinación, pero la realidad demostró que ello no bastaba para alcanzar salir de la situación de atraso, como lo demostró el caso de Chile en el gobierno de Allende.⁵⁷

Creemos que en ambos cuerpos teóricos está ausente el análisis de la relación de capital *dentro* de los países que integran la región y la atención en el binomio fuerzas productivas y relaciones de producción, puesto que es el condicionamiento recíproco de unas y otras lo que hace a su evolución, y lo que permitiría definir lo que es el *desarrollo* de la relación de capital así como lo que debiéramos entender por *subdesarrollo*.

Al abordar de este modo el estudio de la realidad latinoamericana, estamos asumiendo una ruta explicativa dentro del marxismo, por lo que el análisis de la democracia entra dentro del esquema de la lucha de clases que el estudio de la relación

⁵⁷ Para un análisis sobre la influencia de la teoría de la dependencia en el gobierno de la Unidad Popular en Chile, ver Eligio Meza Padilla. *El trabajo tiene una propuesta democrática para todos*. México. UAZ, 2007. pp. 115-119.

de capital nos arroje. En tal sentido, es necesario redefinir lo que entendemos por desarrollo y en consecuencia, lo que entendemos por subdesarrollo.

Víctor Figueroa define el desarrollo en términos de la relación capital-trabajo asalariado, como la explotación del trabajo general por el capital, y en consecuencia, la separación del trabajo en general e inmediato.⁵⁸ Por lo tanto, “[...] el subdesarrollo de la relación [capital-trabajo asalariado] sólo puede referirse a una situación donde *el capital no ha organizado el trabajo general y, por tanto, no lo explota*. El subdesarrollo, por ello, es una forma particular de la organización de la producción capitalista la cual *no ha generado internamente las condiciones de la subsunción real del trabajo inmediato, sin que por ello deje de recurrir a esos métodos o renuncie a la gran industria*. Produce la subsunción formal del trabajo inmediato a la manera de la gran industria, pero *no* con base a *sus propios fundamentos*.”⁵⁹

En otras palabras, mientras en los países desarrollados el capital ha logrado organizar el trabajo general (TG) y trabajo inmediato (TI), en los países subdesarrollados sólo se ha podido organizar este último. Esta situación es la que define la condición de subdesarrollo de las economías latinoamericanas ya que aquí la acumulación procede descansando en el trabajo general que se ejecuta en los países desarrollados. Por esa razón, el subdesarrollo es inconcebible sin el desarrollo, ya que toma el modo técnico de producción de los países desarrollados, dependiendo enteramente de éste para su funcionamiento. Es un modo técnico que el subdesarrollo no produce, pero del cual depende, es por eso que, en tanto organización social, es una forma contemporánea al

⁵⁸ El autor explica el desarrollo de este proceso en los siguientes términos: a) La revolución industrial logró la separación plena del trabajador de los medios de producción y con ello liberó de toda limitación humana al proceso productivo, gracias al surgimiento de la máquina; b) La máquina impondrá los tiempos de la producción, concretándose la transformación del artesano en obrero, y esta transformación le representará además al obrero la pérdida del dominio intelectual en el proceso productivo, lo que se va a traducir en la separación definitiva entre el conocimiento y el trabajo inmediato; c) Este proceso de separación comenzó en la cooperación simple, se desarrolla en la manufactura, para desembocar finalmente la gran industria, la cual hace de la ciencia una potencia productiva autónoma, separada del obrero; d) Se encuentra en esta separación lo que el autor denomina *trabajo general*, que es todo trabajo científico, conocimiento o invento. Y será precisamente porque el desarrollo del trabajo inmediato guarda una dependencia estrecha del trabajo general, que el capital procurará organizarlo; e) Es con la revolución científico-tecnológica encabezada por Alemania en el último tercio del siglo XIX que la organización del trabajo general se convertirá de manera plena en el motor del desarrollo de las fuerzas productivas dentro del modo de producción capitalista a nivel mundial. Ver *Ibíd.* p.p. 37-53.

⁵⁹ *Ibíd.* p. 34.

desarrollo. Y esto es así porque el método propio de la acumulación pasó a ser el plusvalor relativo.

La manifestación más importante de lo anterior, es la tendencia al déficit en la balanza de pagos en los países subdesarrollados. En estos países, la acumulación se trunca, debido a que hacen compra (productos de TG+TI) sin venta (sólo productos de TI). La sustitución de procesos productivos no necesariamente resuelve el problema de la no-apropiación del T.G. por parte de los países subdesarrollados, sino que tiende a acentuar los desequilibrios en la balanza comercial, ya que los procesos productivos se renuevan constantemente y el proceso de transferencia de valor hacia los países desarrollados no se detiene, antes bien, se acentúa.⁶⁰

Siguiendo esta ruta teórica, la situación de subdesarrollo que priva en los países latinoamericanos la debemos abordar a partir de las situaciones históricas concretas en que se ha desarrollado la acumulación capitalista en la región, y ésta ha registrado las siguientes formas: “[...] *crecimiento absoluto*, cuando la orientación económica general favorece la producción de exportación, y *crecimiento relativo*, cuando esa orientación favorece la acumulación orientada al mercado interno [...]”.⁶¹ En este sentido, es la crisis ocasionada por la caída en la tasa de ganancia en los países centrales lo que provoca las contradicciones inherentes a la acumulación en el subdesarrollo en su forma más extrema. Pero una que por sus propias dimensiones implique una reestructuración de la lucha de clases y por lo tanto se proyecte, no sobre el crecimiento en general, sino sobre su forma en vigencia.⁶² En cuanto las importaciones de bienes de capital y bienes intermedios caigan, los países subdesarrollados entrarán en crisis y con ella el cambio en el patrón de crecimiento económico vigente.

Ahora bien, hasta aquí hemos expuesto lo que es el desarrollo y subdesarrollo de la relación capital-trabajo entre diferentes categorías de países, pero no hemos precisado cuál es el papel del Estado dentro de todo ello. Por tanto, esta función es lo que Víctor Figueroa ha denominado *gestión estatal del desarrollo*.

⁶⁰ Ver los apartados 1 y 2 del capítulo II, “Acumulación y transferencia de inversión” y “Los desequilibrios básicos”. *Ibíd.* p.p. 61-78.

⁶¹ *Ibíd.* p. 153.

⁶² Cf. *Ibíd.*, pp. 194.

En polémica con autores como Nicos Poulantzas, Joachim Hirsch y Michel Aglietta, el autor critica las interpretaciones que dan cuenta de la actividad estatal como garantía para la reproducción del proceso económico-social capitalista, porque dejan fuera en su análisis el desarrollo de las fuerzas productivas, cuya manifestación principal es el incremento de la productividad.⁶³

En tales interpretaciones la función principal del Estado viene a ser reactiva a la caída inherente de la tasa de ganancia dentro del modo de producción capitalista, por lo que su intervención en la economía tiene por objeto la recuperación de la misma y con ello la reproducción de las relaciones sociales de producción. La principal crítica del autor es que estos análisis dan cuenta de un Estado que interviene en la economía pero fuera de ella, es decir, de un Estado que “*no tiene injerencia en el desarrollo de ... [las relaciones sociales de producción], por donde resulta que tampoco participa en el desarrollo de sus contradicciones y en el desencadenamiento de sus crisis.*”⁶⁴

En realidad, el desarrollo está condicionado por el desarrollo de las fuerzas productivas y éstas a su vez tienen una tendencia a entrar en contradicción con las relaciones sociales de producción en cuyo seno se desenvuelven, esto en la medida que el progreso tecnológico desplaza fuerza de trabajo y provoca una caída cíclica y tendencial de la tasa de ganancia. De acuerdo a Figueroa, este es el movimiento al que está sujeto el modo de producción capitalista y es este movimiento el que determinará las funciones del Estado en la economía.⁶⁵

De tal forma que el desarrollo es resultado de las fuerzas objetivas y subjetivas de producción, es decir, de la expansión del poder humano y de su control sobre la naturaleza. En este sentido, desde la aparición de la gran industria y la separación del trabajo en general e inmediato, el desarrollo se convirtió en un proceso científicamente determinado, con la función de resolver los problemas generados en el proceso productivo. A partir de entonces la ciencia se organiza a través de asociaciones, fundaciones, universidades, etc. y con la segunda revolución tecnológica desarrollada en el s. XIX el desarrollo devino en revolución científica como proceso permanente.⁶⁶

⁶³ Víctor M. Figueroa. “La Gestión Estatal del Desarrollo”, op. cit., pp. 139-144.

⁶⁴ *Ibid.*, p. 143.

⁶⁵ Ver *Ídem*.

⁶⁶ Ver *Ibid.*, pp. 144-145.

Lo que se encargará de demostrar el autor es que la participación del Estado en la organización y desarrollo de la ciencia desde entonces y hasta la fecha corresponde a las necesidades de la producción capitalista, y dentro de los motivos del Estado para hacerlo destaca la seguridad nacional con arreglo al fortalecimiento económico de las naciones y al crecimiento de su poderío militar. Dicha participación se concreta en las siguientes actividades⁶⁷:

- Promoción y financiamiento de la investigación básica que busca dar respuesta a los intereses colectivos del capital, en tanto que la presencia de estos desarrollos científicos posibilita la apertura de nuevos campos para la aplicación privada de dichos desarrollos;
- Socialización del conocimiento científico con el objetivo de que esté a disposición del conjunto de los capitalistas, quienes son los agentes directos de sus aplicaciones prácticas;
- Impulso a la formación de investigadores, proceso que opera promoviendo la investigación científica y su desarrollo;
- Fomento de la colaboración entre distintas áreas de la ciencia;
- Responsabilidad creciente sobre la empresa científica que deja a lo menos ciertas áreas fuera del alcance de los capitalistas individuales.

Pero además de la participación del Estado en la creación de progreso tecnológico para la industria privada, su intervención en la economía se relaciona con la aportación de medios colectivos de producción y consumo, mismos que deben ser provistos con arreglo al nivel de desarrollo que han alcanzado de conformidad con las exigencias de la acumulación capitalista. Esto es lo que en su conjunto Víctor Figueroa denomina *gestión estatal del desarrollo*.⁶⁸

Esta formulación ha sido ratificada en una investigación reciente que aborda las experiencias del desarrollo y su relación con marcos proteccionistas, tomando como ejemplos históricos los casos de tres países desarrollados, Estados Unidos, Alemania y Japón. En la investigación se concluye:

En la revisión de los tres casos expuestos, salta a la luz que las condiciones que hicieron posible la conquista del desarrollo y, por tanto, su manifestación en la

⁶⁷ Ibíd., p. 146-147.

⁶⁸ Ibíd., p. 148.

participación industrial, tecnológica y comercial, están estrechamente ligadas con la ingerencia estatal, desplegada en forma generosa. El cobijo de fronteras fue un prerequisite fundamental, e indiscutible, para lograr esta situación. La inteligencia desplegada por estas naciones, al no sólo resguardar productos finales –cuestión que permitió el auge de las manufacturas–, sino también en ocuparse de proteger a los bienes de capital internos –visto particularmente en los casos de Alemania e Inglaterra, donde este último llegó incluso a prohibir el uso de dichos bienes en sus colonias–, fue un elemento audaz para el impulso de la creación interna. De igual manera, se reconoce que el establecimiento de leyes sobre derechos de patentes, resultó en un estímulo adicional.⁶⁹

De la eficacia con que el Estado cumpla con su función de gestionar el desarrollo dependerá su éxito económico y su poderío militar, condicionantes para tener un papel protagónico en el comercio internacional. Pero estos procesos, si hemos de ser fieles a nuestras definiciones anteriores, no son homogéneos entre los distintos países y de hecho se reproducen de manera totalmente asimétrica, de tal forma que en aquellos países donde se ha logrado una gestión estatal del desarrollo exitosa podemos encontrar mejores condiciones económicas y sociales para la población, a diferencia de lo que ocurre en aquellos países donde tal gestión ha sido escasa, insuficiente o simplemente ha fracasado.

Si la diferencia entre desarrollo y subdesarrollo la hace una gestión estatal óptima o nula en la generación de progreso tecnológico y su aplicación a los procesos productivos, entonces las condiciones materiales en las cuales descansa la acumulación en los países ubicados en el polo subdesarrollado nos deben aportar la explicación sobre por qué en dichos países no se ha llevado a cabo una gestión originaria del desarrollo.

Como ya hemos visto, la acumulación en el subdesarrollo descansa en el trabajo general efectuado en los países más avanzados, y esto genera a su vez una dependencia del progreso generado en dichos países, lo que se traduce en una nula organización y explotación del trabajo general en el polo subdesarrollado.

Pero afirmar que en estos países se ha llevado una óptima *gestión estatal del subdesarrollo*, nos lleva a plantear que el Estado no tiene una conducta pasiva dentro de los procesos productivos, sino que lleva a cabo funciones vitales para que la

⁶⁹ Silvana Andrea Figueroa. *El Estado y el trabajo científico en el proceso de desarrollo. La articulación pendiente en América Latina*. Tesis de Doctorado. Zacatecas. Unidad Académica de Ciencia Política-UAZ, 2009. pp. 62-63.

acumulación se desenvuelva de manera subordinada a los centros desarrollados. Estas estrategias se pueden encontrar en la política económica y la inversión en educación, ciencia y tecnología, cuyo objetivo último fue orientar la economía para ser receptora de empresas extranjeras dispuestas a invertir en la economía, al menos hasta los ochentas. A partir de entonces las empresas extranjeras desplazan laboratorios tecnológicos a diferentes países para servir mejor a la acumulación capitalista, con lo que estos procesos se descentralizan, aunque de manera segmentada, dejando algunas de las tareas de desarrollo científico y tecnológico menos urgentes a los países subdesarrollados, con el objetivo de ahorrar los costos de fuerza de trabajo.

Recientemente los casos más exitosos en este sentido han sido Brasil e India en algunas áreas y por supuesto China. Pero el resto de los países latinoamericanos, incluido México, no ha podido insertarse en este nuevo esquema, ya que los porcentajes de inversión en ciencia y tecnología respecto al PIB ni siquiera han llegado al 1%, y cualquier país que tenga como proyecto alcanzar el desarrollo debe invertir al menos el 2% o el 3% de su PIB en estas tareas. Es por eso que afirmamos que en la región persiste un fuerte activismo estatal en sentido inverso a la gestión estatal del desarrollo.

Es este principio el que define las relaciones entre distintas categorías de países, y es lo que explica el imperialismo, tema sobre el que profundizaremos en el próximo apartado.

2.1 El Imperialismo y la gestión estatal del desarrollo.

El imperialismo es una de las formas históricas del desarrollo del capital. Como propuesta teórica es resultado de la búsqueda de explicaciones desde la ciencia, en relación a las importantes transformaciones ocurridas en el seno del mundo capitalista a partir del último tercio del siglo XIX, en particular, el surgimiento de los monopolios a nivel del comercio mundial.

Según John Bellamy Foster⁷⁰ la cuna de la noción del imperialismo económico, como algo opuesto al imperialismo en general, fue Estados Unidos, poco más de siglo atrás, con el ensayo de Charles A. Conant “The Economic Basis of Imperialism”

⁷⁰ Ver John Bellamy Foster. “El redescubrimiento del imperialismo”, en Atilio A. Boron, Javier Amadeo y Sabrina González (compiladores), *La teoría marxista hoy: problemas y perspectivas*. 1a ed. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, Buenos Aires. 2006. p.448.

publicado en 1898 en la revista *North American Review*, quien arguyó que el imperialismo era necesario para absorber capital excedente frente a la escasez de oportunidades de inversiones rentables.

Poco tiempo después hizo su aparición un análisis más exhaustivo, motivado por las importantes transformaciones registradas por el imperialismo en esos años. En *Imperialism: a study* (1902), John A. Hobson desarrolló una importante crítica a este fenómeno, señalando que en todas partes aparecían excesivos poderes productivos y excesivo capital en busca de inversión, que exceden el crecimiento del consumo, por lo que se pueden producir más bienes que los que pueden ser vendidos con ganancias.⁷¹ Hobson creía que el imperialismo se originaba en la posición dominante de ciertos intereses económicos y financieros concentrados, y que la solución se encontraba en reformas radicales que mejoraran la distribución del ingreso y las necesidades de la economía doméstica, por lo que en su perspectiva, el imperialismo no era una condición intrínsecamente estructural al desarrollo del capitalismo⁷².

Este tema, inicialmente atraído por los teóricos liberales, pasó a ser parte de los estudios marxistas en aquella época, de los cuales, el trabajo de Vladimir I. Lenin representa tal vez el análisis más completo, que sintetiza, los avances de todo un periodo en el estudio del tema. En *Imperialismo, fase superior del capitalismo*, publicado en 1916, Lenin busca explicar la rivalidad inter-imperialista entre las grandes potencias, misma había conducido a la primera guerra mundial, vinculando el imperialismo al capitalismo monopolista. Con lo cual analizó una serie de factores que iban más allá de los abordados por los teóricos liberales, como la mala distribución del ingreso o los objetivos de ganancia de corporaciones monopolistas particulares.⁷³

Los cinco rasgos fundamentales que diferenciaban al capitalismo monopolista del capitalismo premonopolista, (y aquí hay que señalar que Lenin utilizaba al primero para caracterizar el imperialismo) son: 1) la creciente concentración y centralización de la producción y los capitales, así como el consiguiente surgimiento de diversos monopolios (*trusts, cartels*) que, ya a comienzos del siglo XX, jugaban un papel decisivo en la vida

⁷¹ Ver *Ibíd.*, p. 449.

⁷² Ver *Ibíd.*, p. 451.

⁷³ Vladimir I. Lenin. *Imperialismo, fase superior del capitalismo*. Ediciones en lenguas extranjeras. Pekín, 1975.

de los diferentes países del mundo; 2) la fusión del capital bancario con el capital industrial para dar origen al capital y a la oligarquía financiera; 3) la importancia adquirida por la exportación de capitales con relación a la exportación de mercancías; 4) el carácter cada vez más especulativo y parasitario del capitalismo; y 5) la formación de agrupaciones monopolistas internacionales que, unidas a los Estados y gobiernos de las principales potencias capitalistas de la época, luchaban entre sí por repartirse el mundo.⁷⁴

Las aportaciones de Lenin se han convertido desde entonces en un referente imprescindible para el estudio del imperialismo, y no han podido ser superadas por desarrollos posteriores a su obra. Tal es el caso de la obra de Paul Barán y Paul Sweezy, *El capital monopolista*, donde los autores lejos de plantear nuevos desarrollos a la comprensión del tema, devuelven la discusión a los planteamientos subconsumistas de Hobson. Preocupados por explicar el problema de la generación y absorción de excedente en el modo de producción capitalista, concluyen que éste llega a crecer en valor absoluto y relativo a medida que el capitalismo se desarrolla, y la manera en que el sistema da salida a dicho excedente se ha encontrado en el incremento de los gastos de los capitalistas y del sector público, en los gastos en publicidad y en los gastos militares.⁷⁵ La ley de la tasa decreciente es sustituida por la ley del excedente creciente, con lo que la dialéctica materialista es despojada de todo poder explicativo, ya que ésta es llevada del ámbito de la producción al ámbito de la circulación de mercancías.

A pesar de la aportación de Lenin han quedado sin explicación importantes temas relacionados con el imperialismo. Atilio Borón señala que la teoría clásica del imperialismo no alcanza a explicar las importantes transformaciones que ha sufrido el modo de producción capitalista en el siglo XX, particularmente a raíz de la conclusión de la segunda guerra mundial, lo que representa tres desafíos principales⁷⁶:

1. Se cuestiona una premisa decisiva de las teorías clásicas: la estrecha asociación existente entre imperialismo y crisis del capitalismo metropolitano, en cuya formulación la expansión imperialista era la solución a los irresolubles

⁷⁴ Ídem.

⁷⁵ Paul A. Barán y Paul Sweezy. *El capital monopolista*. México, Siglo XXI Editores, 1968.

⁷⁶ Atilio A. Borón. "La cuestión del imperialismo", en _____, Javier Amadeo y Sabrina González (compiladores), *La teoría marxista hoy: problemas y perspectivas...* Op. Cit p. 478.

conflictos internos que originaba la crisis capitalista en las metrópolis. Esta afirmación fue puesta en entre dicho, de acuerdo al autor, por el auge del capitalismo en el periodo de posguerra, que duró treinta en el mundo capitalista.

2. Se constata que la rivalidad económica entre las grandes potencias metropolitanas ya no se traduce en conflictos armados como la Primera y Segunda Guerras Mundiales, sino que ha sido sustituida por una lucha económica de particular ferocidad con procesos de integración económica supranacional y enfrentamiento entre bloques comerciales, que ha desembocado en una hegemonía norteamericana en el esquema imperialista.
3. La expansión sin precedentes del capitalismo a lo largo y ancho del planeta se desarrolla de manera vertiginosa en la actualidad, particularmente tras la caída del bloque socialista. Han dejado de existir vastas regiones periféricas atrasadas que eran introducidas al torrente de acumulación capitalista a través del pillaje colonial, y que de hecho motivaron los enfrentamientos por el reparto del mundo entre las potencias hegemónicas. Agotados los espacios de expansión territorio, el capitalismo aquel se vuelve contra la sociedad y desata un salvaje proceso de mercantilización universal. En todo caso el reparto territorial ha sido monopolizado por Estados Unidos, conservando aún su importancia la lucha por apropiarse de los valiosos recursos naturales como el petróleo y el agua.

Estas atinadas observaciones a los problemas explicativos de la teoría del imperialismo en el capitalismo contemporáneo, están relacionadas con la forma en que la teoría ha enfocado la esencia del imperialismo, es decir, como un producto de la sobreproducción en el capitalismo, originada por la concentración y centralización de capitales.

Con ello la relación metrópoli-colonia queda restringida al ámbito de la circulación, lo que implica que el imperialismo es ante todo una cruzada comercial de los países metropolitanos, que pasó de la colocación de mercancías a la colocación de capitales en mercados cautivos a partir del poder adquirido por el capital financiero. En este sentido, la posición de los centros hegemónicos en el concierto de las naciones está determinada por el éxito que tengan en esta empresa y al poderío militar con que la respalden.

Sin embargo, si esto fuera así, los países colonizados estarían destinados a permanecer subordinados a los centros coloniales a medida que el capitalismo se desarrolla, profundizando además dichos nexos en la medida en que la relación imperial se desenvuelve. Lo que no deja otra alternativa a los países colonizados más que romper todo vínculo con los centros hegemónicos y esto no puede ocurrir más que buscando una ruta alternativa al capitalismo. Tal era en síntesis el razonamiento de la teoría de la dependencia para explicar el caso latinoamericano.

Pero este hecho ha sido negado una y otra vez por la historia, en la medida en que países atrasados en otras latitudes han logrado romper dichos lazos *dentro del capitalismo* y desarrollarse económicamente después del surgimiento del capitalismo monopolista. Tal es el caso de los llamados tigres asiáticos y más recientemente China, India e incluso Brasil, países que se encuentran en la misma ruta.

En realidad, los dos polos que caracterizan la relación imperialista se han internalizado mutuamente al nivel de las relaciones sociales de producción, y no únicamente al nivel de la circulación, como nos dice la teoría clásica del imperialismo. Es la diferente organización de la relación de capital lo que ha consagrado la existencia de países desarrollados por un lado y subdesarrollados por otro, así como la relación imperialista entre ellos. No es la exportación unilateral de capitales -como se puede desprender de la obra de Lenin- la esencia del imperialismo, sino la organización social que la consolida en su interior a partir de las relaciones asimétricas que se establecen entre ambos tipos de países, y que determina las formas concretas en que habrá de descansar la acumulación en ellos. Por lo tanto, es el monopolio en el desarrollo de las fuerzas productivas por unos países, lo que fundamenta al imperialismo. Como ya lo hemos mencionado, el desarrollo de la gran industria, el progreso tecnológico y la expansión económica van de la mano, y en ese sentido, los países subdesarrollados, con una incapacidad estructural para generar progreso, no están en condiciones de definir los rumbos de su expansión ni mucho menos de imponer sus condiciones para ello.

Desde esta perspectiva, estamos en condiciones de caracterizar el imperialismo como: “[...] un sistema de dominación económica, política y cultural del cual los países avanzados se valen en sus esfuerzos por conquistar y/o sostener la hegemonía sobre el resto del mundo. Surge como resultado del desarrollo en unos países de la relación de

capital que dio origen a la organización del trabajo general para procesar las aplicaciones productivas de la ciencia, al tanto que en otros países ese mismo desarrollo está obstruido.”⁷⁷

Así encontramos los límites que este tipo de relaciones imponen a la soberanía en el mundo subdesarrollado dentro del imperialismo. En nuestros países no se puede hablar de una base nacional del capital, ya que como hemos observado, la acumulación descansa en el trabajo general que se genera en los países desarrollados. Por tal razón, la burguesía nativa nunca ha estado interesada en impulsar la generación de ese trabajo general localmente, ya que la base técnica con que opera estructuralmente está condicionada por la importación del progreso técnico generado en los países desarrollados, y esto condiciona a su vez su proceso de crecimiento, el cual va estar orientado hacia la internacionalización.

En este sentido, la burguesía local de los países subdesarrollados fácilmente opta por una forma de acumulación que descansa en la generación de progreso en el polo desarrollado. Es ahí donde descansan las condiciones para su sobrevivencia y expansión. Esto genera una burguesía local altamente pro imperialista, ya que sus intereses en tanto clase dominante, coinciden ampliamente con los de las burguesías de los países desarrollados, quienes a su vez operan también como clase dominante, en razón de su posición privilegiada dentro de las relaciones imperialistas.⁷⁸

Esta situación imprime una característica particular al Estado en el subdesarrollo, aquí la clase dominante no la constituye una burguesía local solamente sino también la burguesía de los países desarrollados, cuyos intereses se encuentran a su vez vinculados a los de la burguesía del país subdesarrollado. De la forma concreta que adopte el patrón de crecimiento económico, dependerá la forma en que se articule el bloque dominante dentro del Estado, constituido por fracciones de clase de ambos polos pero dirigidos por aquellas del país desarrollado.

Apostar por una ruta alternativa de acumulación, necesariamente tendría que contemplar una ruptura política respecto al centro hegemónico. Los costos de esta

⁷⁷ Víctor M. Figueroa. “América Latina: La actualidad del imperialismo, la actualidad de la crítica”, en _____Coord. *América Latina en la crisis del patrón neoliberal de crecimiento*. México, Tribunal Superior de Justicia del Estado-Unidad Académica de Ciencia Política, 2003, p. 41.

⁷⁸ *Ibíd.*, ver p. 42.

apuesta para la clase empresarial local son estimados tan altos, que históricamente los intentos por buscar una ruta autónoma hacia el desarrollo en la región han sido una consecuencia de factores externos generados en los países desarrollados que alteran la dinámica de las relaciones imperialistas, y no como consecuencia del impulso a un proyecto cuyo objetivo sea la gestión originaria del desarrollo.

Esta dependencia generada por el subdesarrollo de la relación de capital, además de generar dominación económica, crea una base social, política e ideológica para la reproducción de las relaciones imperialistas, que se manifiesta a través de múltiples vínculos de dependencia del polo subdesarrollado hacia los países avanzados de diferentes tipos: financieros, educativos, militares, culturales, jurídicos y un gran etcétera.

Entre los países desarrollados, la lucha por la hegemonía económica en el mercado mundial descansa sobre la gestión del Estado en la generación de progreso. Éste es motivado ahí, porque los grandes grupos del capital internacional ahí concentran su inversión, con miras a mantener o mejorar su posición, a través de la inversión en el desarrollo de ciencia y tecnología aplicada a los procesos productivos, para la generación o mejoramiento de ciertos productos. Pero es el respaldo de los Estados nacionales en el polo desarrollado, tanto como capitalistas colectivos como garantes de los intereses de la clase dominante, lo que determinará su posición en el mercado internacional, a través del imperialismo como la forma por excelencia para controlar o hacerse de más mercados.

En este sentido, podemos encontrar tres periodos de las relaciones imperialistas en la región,⁷⁹ en los cuales se han alternado las formas históricas de acumulación en el subdesarrollo (crecimiento absoluto y crecimiento relativo):

a) El periodo liberal. El periodo que corre de la segunda mitad del siglo XIX a la década de 1930, caracterizado por la hegemonía política de las clases agromineras y del capital extranjero, la existencia precaria del Estado nacional, el predominio de la producción para la exportación sobre el mercado interno, el libre mercado y la penetración del capital financiero en la economía.

⁷⁹ Esta periodización para caracterizar la relación imperio-periferia ha sido tomada de: James Petras y Henry Veltmeyer. *Imperio con imperialismo. La dinámica globalizante del capitalismo neoliberal*. México, Siglo XXI Editores, 2006, p. 81.

- b) El periodo desarrollista. Antecedido en algunos países como México, Brasil y Argentina, por la consolidación de un periodo populista,⁸⁰ este espacio de tiempo corre de los años cuarenta a la década de los setenta, aquí el imperialismo se basó en el eclipsamiento, más que desplazamiento, de las clases agromineras colaboradoras y el surgimiento de una burguesía desarrollista, el fortalecimiento del estado nacional, el predominio de la producción para el mercado interno y el fortalecimiento de éste, el crecimiento de las industrias nacionales, los regímenes de control de cambios y los bancos nacionales.
- c) El periodo de la globalización neoliberal. Los años setenta fueron la transición de un periodo de reforma liberal y desarrollo nacional bajo el auspicio del “viejo modelo económico” de nacionalización, regulación y protección del estado (así como la sustitución de algunas importaciones mediante la industrialización), a un proceso de desarrollo capitalista neoliberal y la profundización de la integración de la economía latinoamericana a los Estados Unidos. Hacia la década de los ochenta y la primera mitad de los noventa, se consolida la vuelta al patrón de crecimiento económico orientado a las exportación, regresa el señorío del capital financiero, el libre mercado y la consolidación de los monopolios internacionales en las economías nacionales a través de la privatización masiva de empresas públicas y la desnacionalización de bancos, industrias, telecomunicaciones, servicios energéticos estratégicos, etc. Esto implica la profundización de las relaciones imperiales hacia la concreción de un área de libre comercio en toda la región, que no es otra cosa que la apropiación de los mercados nacionales norteamericanos por el imperio.

El imperialismo en estas tres fases ha determinado una nula gestión estatal del desarrollo, con repercusiones sociales muy importantes en el polo subdesarrollo, y el análisis del caso mexicano es particularmente ilustrativo de esta condición.

⁸⁰ Se trató de un periodo que inicia a mediados de la década de los treinta y culmina al finalizar la misma, caracterizado por la constitución de una alianza de clases entre la burguesía nacional abocada a la producción para el mercado externo, la burocracia estatal, amplios sectores obreros y campesinos, así como algunos sectores medios, con el objetivo de impulsar la transformación de la forma de crecimiento vigente hacia el mercado interno, incidiendo en un cambio de correlación de fuerzas en el bloque dominante, desfavorable a la oligarquía. Este ha sido el único periodo en la historia de la región donde la influencia del imperialismo se ha relajado lo suficiente como para permitir la existencia de proyectos nacionales independientes en la región.

2.2 La gestión estatal del subdesarrollo en México.

Hemos señalado que así como el funcionamiento de la estructura socioeconómica influye en el Estado, también éste actúa de manera recíproca en la economía en tanto organización del poder político de la burguesía, y desde que el desarrollo se convirtió en un proceso científicamente determinado con la función de resolver los problemas generados en el proceso productivo, el Estado se ha encargado de organizar, promover, incentivar y vincular la ciencia y la tecnología con arreglo a las necesidades del proceso de acumulación capitalista. Esto, aunado a la aportación de medios colectivos de producción y consumo provistos con arreglo al nivel de desarrollo que han alcanzado de conformidad con las exigencias de la acumulación capitalista, es lo que se ha denominado *gestión estatal del desarrollo*.

Esta vital función del Estado para el funcionamiento del sistema capitalista en los países latinoamericanos, históricamente ha sido nula, y todo indica que lo que en estos países se ha impulsado desde la organización estatal es una *eficaz gestión del subdesarrollo*, jugando en ello un papel trascendental la forma en que estos países fueron incorporados al sistema capitalista de producción. Diversos autores coinciden en señalar que hasta fines del siglo XIX y comienzos del XX ninguno de los países de la región latinoamericana había logrado constituir un sistema de ciencia y tecnología vinculado a los procesos productivos, con pleno apoyo del Estado y capacidad de hacer aportes al conocimiento mundial en la materia.⁸¹

Francisco R. Sagasti destaca como factores determinantes de esta condición, los siguientes:⁸²

- No existía una demanda social para la ciencia, ya que ésta estaba determinada por un desarrollo económico precario incapaz de generar una demanda sostenida de insumos científicos y tecnológicos para ser aplicados a los procesos productivos, y

⁸¹ Ver Francisco R. Sagasti. *Ciencia, tecnología y desarrollo latinoamericano*. México, FCE, 1981; Germán Sánchez Daza. *Retos Tecnológicos frente a la globalización*. Ponencia presentada en el Seminario de Economía Mexicana. Transnacionalización de la economía mexicana. Consecuencias, posibilidades y perspectivas. México, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, mayo de 1998. Consultado en Internet el 21 de julio de 2009 en la página web: <http://74.125.93.132/search?q=cache:http://www.redem.buap.mx/res1daza.htm>; Miguel S. Wionczek, Gerardo M. Bueno y Jorge Eduardo Navarrete. *La transferencia internacional de tecnología-El caso de México*. México, FCE, 1974; y Víctor M. Figueroa. "La Gestión Estatal del Desarrollo"... op. cit.

⁸² Tomado de Francisco R. Sagasti, op. cit., pp. 149-150.

en todo caso, dichos insumos ya se estaban generando en Europa Occidental, lo que se convirtió en un obstáculo adicional para su generación endógena.

- Lo que el autor denomina “un sentido de futilidad de los asuntos mundanos aunado a un profundo sentimiento religioso”, valores y actitudes que necesariamente dificultaron el desarrollo de las condiciones necesarias para el desarrollo de la ciencia.
- La inestabilidad política y económica de los países de la región ocasionada por continuas convulsiones sociales, que socavaron muchos esfuerzos encaminados al desarrollo de la ciencia y la tecnología.
- Una falta de identidad nacional y de reconocimiento a la legitimidad de la civilización de la cual se formaba parte, precedente al desarrollo de la ciencia.

Estas condicionantes son las que determinaron el subdesarrollo de la relación capital-trabajo en los países de la región, ya que aquí la acumulación ha descansado en el *trabajo general* de los países desarrollados, es decir, en el progreso científico y tecnológico generado en estos países.

La falta de preocupación del Estado por desarrollar la ciencia y la tecnología en nuestro país, desde la colonia hasta nuestros días, ha estado determinada por el surgimiento y florecimiento del sistema capitalista de producción. Primero como colonia y después como nación independiente, en México las formas y relaciones de producción capitalistas se han impuesto desplazando a otras, *pero en su forma subdesarrollada*.

El subdesarrollo en nuestro país tiene sus orígenes en la colonia, ya que las actividades productivas fueron orientadas hacia la extracción de recursos naturales que eran de utilidad para la acumulación en la metrópoli, lo que provocó que se configurara una estructura productiva diseñada para exportar dichos productos sin que la generación de progreso para ello fuera un problema, ya que los bienes e insumos para la producción eran suministrados por la propia metrópoli, gracias al monopolio comercial que ejercía sobre sus colonias. Como señala Germán Sánchez Daza:

En este largo trayecto de expansión capitalista [de los países más avanzados hacia el resto del mundo] se fue conformando una estructura económica que expresaba tanto las concepciones e ideas de la burguesía europea naciente como la importación de sus prácticas productivas, incluidas la ciencia y la tecnología; asimilando además, de manera subordinada y funcional, aquéllos elementos nativos que le permitían mantener y profundizar su hegemonía, que en el caso de

los procesos productivos incluyeron las técnicas prehispánicas, fundamentalmente agrícolas.⁸³

Una vez consumada la independencia, el país se incorpora a la división internacional del trabajo en la misma condición subordinada, ya que su estructura productiva estaba diseñada para ello. Esto no quiere decir que no existieran agentes sociales con proyectos que tuvieran entre sus prioridades la generación de progreso para el desarrollo, de hecho las convulsiones sociales que azotaron a nuestro país desde la independencia hasta el Porfiriato, en buena medida dan cuenta del choque de proyectos antagónicos en los que este tema estaba implícito.

Sin embargo, una vez producida la segunda revolución tecnológica en Europa en el siglo XIX, que generó la división entre *trabajo general* y *trabajo inmediato*, el progreso iba a estar determinado cada vez en mayor proporción por el desarrollo de la ciencia y la tecnología aplicada al perfeccionamiento de los procesos productivos, y la estructura socioeconómica del país pasó a depender desde entonces del *trabajo general* creado en los países que habían logrado dar este importante paso.

Ahora bien, no se puede hablar en este periodo de una ausencia en el país de ciencia y tecnología, ni mucho menos de la vinculación de investigadores locales a los desarrollos que de manera vertiginosa se estaban registrando entonces en los países desarrollados, Wionczech, Bueno y Navarrete señalan que:

[...] a lo largo del siglo XIX, la comunidad científico-intelectual mexicana participó activamente en el intercambio de las innovaciones científicas, tecnológicas e intelectuales con el resto de mundo. Constancia de todo esto se encuentra en las revistas científicas mexicanas de la época, las publicaciones oficiales y los numerosos libros sobre “mejoras materiales”, es decir sobre adelantos tecnológicos, que servían como vehículo de *difusión* de las innovaciones técnicas europeas y norteamericanas. [Subrayado nuestro].⁸⁴

El problema se encuentra precisamente en que estos conocimientos eran generados muy escasamente a nivel local y estaban totalmente desvinculados de su aplicación práctica en los procesos productivos endógenos, y ese intercambio intelectual del que nos hablan los autores citados servía principalmente para difundir las

⁸³ Germán Sánchez Daza, op. cit.

⁸⁴ Miguel S. Wionczech, Gerardo M. Bueno y Jorge Eduardo Navarrete, op. cit., p. 12.

innovaciones que se generaban en el polo desarrollado con la intención de ser aplicadas a la producción local, no para ser creados localmente.

Es además evidente desde entonces una nula participación del Estado en la gestión del desarrollo, en cuestiones tan básicas como la promoción y financiamiento de la investigación básica, la socialización del conocimiento científico y el impulso a la formación de investigadores. De ello da cuenta el hecho de que “[...] toda esta actividad científica e intelectual se producía en *élites*, contribuía a la formación y consolidación de pequeños grupos alejados de los problemas y necesidades de la generalidad de la población y provocó un desarrollo industrial incipiente productor de bienes de consumo para los grupos privilegiados urbanos y la aristocracia rural.”⁸⁵

La revolución de 1910 no sólo no resolvió los problemas estructurales del desarrollo en nuestro país, sino que los vino a intensificar una vez concluido el conflicto armado. En este sentido, se puede hablar como la hacen Wionczeck, Bueno y Navarrete de una “anti-intelectualidad de la Revolución Mexicana” y del Estado que se constituyó al final de ésta, resultado del desprestigio en que cayeron las élites científicas que comulgaban con el positivismo, y que en la última etapa del porfiriato tomaron las riendas del gobierno. La pobreza y la marginación generalizadas fueron atribuidas entonces a las estrategias desplegadas por los científicos, a quienes se les relacionó como parte integrante de la oligarquía que controlaba el país. De ahí que su participación en el conflicto armado fuera prácticamente nula, y que una vez concluido éste, con la formación del nuevo Estado, fueran igualmente excluidos del nuevo proyecto de nación.⁸⁶

A esto hay que agregar que el generalizado analfabetismo de la población se convirtió en una prioridad a resolver por los gobiernos postrevolucionarios, por lo que éstos centraron sus esfuerzos en la difusión de la instrucción básica en todo el país en las primeras tres o cuatro décadas posteriores a la conclusión del conflicto, lo que ocasionó que se soslayara la inversión en educación superior, la formación de personal científico y técnico y la investigación en ciencia y tecnología de alto nivel.⁸⁷

⁸⁵ *Ibíd.*, pp. 12-13.

⁸⁶ *Ídem.*

⁸⁷ *Ídem.*

Es así como se consolidó el subdesarrollo de la formación económica mexicana, bajo un esquema que estaría presente a lo largo de la historia de nuestro país hasta nuestros días:

La expansión geográfica de la ciencia y la tecnología fue considerada como el resultado de un proceso de difusión. La tecnología se trasladaba conjuntamente con la modernización económica impuesta por la Revolución Industrial, y la ciencia era transplantada desde los centros científicos europeos a las diversas regiones. Ambas, al cabo de un proceso gradual, terminaban por echar raíces en las periferias. Simultáneamente, siguiendo un punto de vista propio de la tradición ilustrada, se sostenía que la difusión de la ciencia y de la tecnología conducía eo ipso a la modernidad y a la occidentalización de las sociedades en las que se implantaba.⁸⁸

Este esquema que pondera la “difusión” de la ciencia y la tecnología, antes que su generación, organización y explotación locales, es el que ha determinado la *gestión estatal del subdesarrollo* en México a través de la instrumentación de políticas y estrategias que han mostrado su fracaso en los hechos, ya que sus objetivos se han reducido a insertar la economía local a la de los países desarrollados y acoger pasivamente su experiencia técnico-productiva y científico- tecnológica.

Por eso, teniendo siempre como referente el ideal del progreso generado en los países desarrollados, la burguesía local ha dirigido sus esfuerzos a adquirir la ciencia y la tecnología antes que apoyar su generación interna. Esta visión terminó de echar raíces a partir del primer tercio del siglo pasado, cuando desde los centros académicos y de toma de decisiones se impulsó la idea de que la industrialización era el motor de la asimilación y difusión de la ciencia y la tecnología, y que éste era un factor determinante en el desarrollo del país y, en consecuencia, en la mejora en las condiciones de vida de su población.

Es en este contexto donde queremos introducir el estudio de la *gestión estatal del subdesarrollo* bajo la caracterización de los dos patrones de crecimiento que han estado vigentes en el país desde la postguerra hasta nuestro días,⁸⁹ analizando de forma general

⁸⁸ Juan José Saldaña, citado en Germán Sánchez Daza, op. cit.

⁸⁹ La forma de crecimiento relativo se instaura en los países subdesarrollados cuando existe un mercado interno que no puede ser satisfecho mediante las importaciones, esto implica que la industrialización orientada a ese mercado va a tratar de cubrir necesidades no creadas por ella misma y que corresponden a un progreso de la acumulación que le es ajeno a la economía subdesarrollada. En el crecimiento absoluto la orientación económica general favorece la producción para la exportación, reforzándose aquí la

la política económica instrumentada por el Estado en este periodo, y la concepción sobre el desarrollo científico y tecnológico que le ha sido propia.

Para ello hemos decidido abordar el análisis en dos periodos: en el primero, caracterizamos el patrón de crecimiento relativo vigente desde el inicio del periodo analizado hasta finales de la década de los ochenta, donde predomina una actuación del Estado activa en las esfera económica como promotor y capitalista colectivo; en el segundo, el patrón de crecimiento absoluto, donde el Estado se repliega de muchas de sus funciones económicas y desiste de las responsabilidades sociales adquiridas en el periodo anterior. Encontraremos en ambos periodos, una política económica que tiene como objetivo la acumulación capitalista en su forma subdesarrollada, y en consecuencia, una estrategia muy pobre en el renglón de impulso a la ciencia y tecnología local y su aplicación a los procesos productivos endógenos.

2.3 La gestión estatal del subdesarrollo bajo el patrón de crecimiento relativo.

La característica principal de este patrón de crecimiento económico fue que la acumulación de capital tuvo en la industria su sector más dinámico, y ésta se basó, primero, en la disminución del salario real en los cuarenta, y después, en el incremento de la productividad en los cincuenta y de manera particular en los sesenta. La exportación primaria fue la principal fuente de divisas para la importación de bienes de capital para la industria, que encontró la realización de sus productos principalmente en el mercado interno. En este esquema, los asalariados desempeñaron un papel importante como consumidores de esos productos elaborados por la industria nacional.⁹⁰

El Estado jugó un papel fundamental a través del gasto y en la consolidación de un pacto social con los trabajadores (más adelante abundaremos en esto), que si bien implicó su control político, también permitió un incremento en sus niveles de bienestar,

tendencia de la industria en el subdesarrollo a cubrir necesidades no creadas por ella, y que en este caso corresponden directamente a las necesidades de acumulación en los países desarrollados. Ver Víctor M. Figueroa. *Reinterpretando el subdesarrollo. Trabajo General, clase y fuerza productiva en América Latina...* op. cit. pp. 160-166.

⁹⁰ Enrique de la Garza Toledo. *Modelos de industrialización en México*. STYPS, 1998. Consultado en Internet el 27 de julio de 2009: <http://docencia.izt.uam.mx/egt/publicaciones/libros/mdelosindus/cap2.pdf>.

a través de la instrumentación de políticas dirigidas a la seguridad social, así como al incremento del salario real y las prestaciones económicas.⁹¹

En materia de política económica, de acuerdo a Leopoldo Solís, el Estado se valió básicamente de tres instrumentos que respaldaron el proyecto conocido como industrialización con sustitución de importaciones:⁹²

- a) *La política de control selectivo de crédito*, cuyo objetivo fue aumentar la producción de cartera industrial y agrícola dentro del financiamiento concedido por instituciones privadas de crédito, particularmente a los bancos de depósito. Además Nacional Financiera estuvo a cargo de la canalización de recursos crediticios a empresas industriales y la creación de infraestructura industrial.
- b) *La política impositiva como promoción industrial*, que se propuso estimular la inversión en este sector y funcionó cambiando los precios relativos a favor de los bienes de capital importados. Consistió principalmente en exenciones de impuestos sobre la renta, importación, ingresos mercantiles y exportación, que se ofrecieron a empresas nuevas y necesarias, por periodos de cinco, siete y diez años según las características de los productos manufacturados.
- c) *La política comercial*, que utilizándose como instrumento de industrialización básicamente se concretó en modificaciones de los aranceles, precios oficiales de los artículos objeto de comercio exterior y permisos previos a licencias de importación. Su objetivo fue la protección de la industria local y el control de las importaciones, aplicando aranceles altos a las importaciones de bienes de consumo y modificando los precios relativos entre bienes de consumo importados y los de producción interna.

Existen dos grandes etapas que caracterizan el papel jugado por el Estado mexicano en la gestión del subdesarrollo dentro de este periodo histórico, que podemos caracterizar como de despegue y consolidación y de agotamiento de la industrialización con sustitución de importaciones (ISI). A su vez, dentro de estas etapas se pueden distinguir dos enfoques distintos en relación a la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo económico del país: en las etapas de despegue y

⁹¹ Ídem.

⁹² Cf. Solís, Leopoldo. *La realidad económica mexicana: retrovisión y perspectivas*. Siglo XXI. México. 1975. pp. 226-228.

consolidación de la ISI, éste es un problema de crecimiento industrial y de producción de nuevos productos y procesos, que requiere de la renovación de la planta productiva a partir de la importación de maquinaria; y en la etapa de agotamiento de la ISI se adopta un discurso nacionalista con una visión más crítica hacia el capital extranjero, donde se empieza a cuestionar el carácter dependiente del proceso de industrialización y a ubicar a la subordinación tecnológica como el elemento central de esa dependencia, sin que se tomen las medidas necesarias para impactar sobre ello.

2.3.1 Despegue y consolidación.

Las condiciones para emprender un proyecto industrializador en México se concretaron durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, no como resultado de un proyecto *a priori* de la burguesía nacional para resolver el rezago que registraba nuestra economía entonces, sino como una respuesta a los efectos que la gran crisis mundial estaba teniendo en el agotamiento del patrón de crecimiento orientado a las exportaciones. Ugo Pipitoni señala en relación a esta coyuntura que: “La crisis económica internacional estaba modificando el panorama. El lento crecimiento económico que el país comenzaba a experimentar desde comienzos de los años veinte se había interrumpido drásticamente. El PIB de 1932 estaba por debajo del nivel alcanzado en 1910. El país corría el riesgo de entrar en otro prolongado periodo de enfrentamientos sociales e inestabilidad política.”⁹³

La crisis terminó por cercar el espacio para las exportaciones locales hacia los países desarrollados y, al no disponerse de los bienes de consumo y de capital necesarios para la producción que abastecía el mercado internacional, se tuvo que sentar las bases para iniciar el proceso de su fabricación interna.

El gobierno de Cárdenas cumplirá la *función de dirigir la transición del patrón de crecimiento absoluto hacia el patrón de crecimiento relativo, y con ello sentar las bases para el posterior despegue industrial del país.*⁹⁴ Dentro de las transformaciones que encabezó se encuentran: nacionalización de empresas extranjeras y formulación de

⁹³ Pipitoni, Ugo. *La salida del atraso: un estudio histórico comparativo*. México, CIDE-FCE, 1994, p. 98.

⁹⁴ En este periodo se forma un Estado populista, con características similares al que se gesta en la Argentina peronista y el Brasil de Getulio Vargas. El Estado populista surge históricamente, sin la influencia directa del imperialismo y es por eso una creación propia de la realidad social latinoamericana, por lo tanto, es el protagonista de la única transición en la forma de crecimiento que no es motivada directamente por los intereses de los países desarrollados. En el último capítulo de este trabajo abordamos este tema.

las condiciones de entrada y salida del capital extranjero; reserva de algunos sectores infraestructurales de la economía a empresas estatales o mixtas; creación de empresas públicas u otorgamiento de incentivos para su creación en nuevos sectores o subsectores económicos; puesta en práctica de reglamentos relativos a los movimientos del capital nacional y extranjero en el país, y establecimiento de criterios generales y especiales, en cuanto a las condiciones de oferta y demanda de la fuerza de trabajo en el mercado urbano.⁹⁵

Todas estas transformaciones estuvieron dirigidas a crear las condiciones para generar el despegue industrial y emprender una nueva ruta para la acumulación capitalista en el país, en un contexto internacional de relajación de los vínculos comerciales de dependencia de la economía mexicana respecto a los países ubicados en el polo desarrollado, de manera particular con Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial marcó la pauta para que la activa participación del Estado en la economía continuara, con miras a avanzar en el proyecto industrializador. Como señala José Romero:

Al igual que Cárdenas, Ávila Camacho siguió invirtiendo considerables sumas de dinero en empresas y obras públicas, en la recientemente nacionalizada industria petrolera y aún más en la industria ferrocarrilera. Durante su gobierno se duplicó la red de caminos transitables todo el año y casi se triplicó la cantidad de tierra beneficiada por la red de irrigación. Además, realizó las primeras inversiones gubernamentales en empresas manufactureras en 1942, cuando Nacional Financiera se convirtió en socio minoritario de Altos Hornos de México. Las inversiones públicas llegaron a representar 6% del PIB, cifra equivalente a la inversión privada.⁹⁶

En esta etapa de “despegue” de la ISI el Estado se encargó de crear un mercado cautivo para la industria local que logró un crecimiento notable gracias al apoyo continuo que recibió, particularmente en materia de protección de los productos locales frente a la competencia extranjera. Sin embargo, esto trajo consigo una recurrencia crónica a la inflación que tuvo que ser combatida a través de la devaluación, golpeando

⁹⁵ Estas estrategias corresponden sólo a su intervención económica, sin embargo, hubo otras de igual o mayor importancia en el ámbito político y social, de las cuales nos ocuparemos más adelante. Con todo, no deja de ser una simple referencia muy apretada que omite un análisis profundo de sus alcances e implicaciones que es imposible desarrollar aquí. Véase para ello: Arnaldo Córdova. *La política de masas del cardenismo*. México, Era, 1976.

⁹⁶ José Romero. “Crecimiento y comercio”, en Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer (coords.), *Una historia contemporánea de México. Tomo I, Transformaciones y permanencias*. México, Océano, 2003, p. 171.

gravemente el nivel de vida de los trabajadores.⁹⁷ Esta situación llevó a una crisis a inicios de la década de los cincuenta, que obligó a poner sobre la mesa la discusión sobre el curso del desarrollo industrial y el tema de la inversión extranjera.

A partir de entonces se diagnostica que la economía mexicana carecía del capital necesario para seguir financiando el desarrollo sostenido que se venía registrando desde los años cuarenta, de esta forma con la falta de ahorro interno se abren las puertas a la posibilidad de la inversión extranjera. Esto en un contexto en que la inversión privada era ya una empresa totalmente rentable en el país, gracias a las medidas implementadas por Alemán:

Para proteger a la industria nacional de la competencia externa, el gobierno de Alemán estableció una complicada estructura arancelaria. Estas acciones, junto con la eliminación de las restricciones crediticias y la reaparición de bienes de capital en los mercados internacionales, crearon un ambiente muy favorable a la inversión privada. Como resultado, para 1952 el porcentaje del PIB correspondiente a la inversión privada había superado ya la inversión pública, a pesar de que ésta recibía un gran impulso.⁹⁸

Es particularmente notable que no se cuestionara entonces que esa crisis estaba indicando la necesidad de llevar la industrialización hacia una etapa más avanzada, que se requería incrementar las exportaciones de los bienes que estaban sustituidos, y que la ausencia de inversión en ciencia y tecnología podría ser la causa de que eso no fuera viable en ese momento. Los argumentos para incentivar la inversión extranjera fueron que contribuiría a elevar la producción nacional, mejorar la utilización de los recursos del país y aportaría nuevas técnicas de producción, organización y distribución.⁹⁹

Como consecuencia de este giro que toma la ISI en relación a la inversión extranjera surge en 1955 la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, cuyo objetivo era precisamente establecer los criterios que regularían la contribución de la inversión extranjera al desarrollo industrial del país, y con ello, se observa el primer intento del Estado de intervenir en los asuntos tecnológicos del país. De acuerdo a Wionczech, Bueno y Navarrete, dicha ley contemplaba que: “Para tener acceso a los

⁹⁷ Véase *Ibíd.*, p. 172.

⁹⁸ Véase *Ibíd.*, p. 176.

⁹⁹ José Luis Reyna. “El movimiento obrero en el ruizcortinismo: la redefinición del sistema económico y la consolidación política”, en José Luis Reyna y Raúl Trejo Delarbre, *La clase obrera en la historia de México. De Adolfo Ruíz Cortínez a Adolfo López Mateos (1952-1964)*. México, Siglo XXI, 1981, p. 65.

beneficios fiscales, las empresas debían proporcionar, entre otra, información sobre su personal extranjero, las tecnologías empleadas, el uso de maquinaria extranjera y nacional, y la naturaleza de los acuerdos sobre asistencia y servicios técnicos y de patentes, indicando si éstos se habían celebrado con extranjeros.”¹⁰⁰

De esta forma, se estableció el criterio de rechazar aquellas solicitudes de industrias, cuya información de apoyo evidenciara que los pagos estipulados en los contratos de uso de patentes y servicios técnicos del exterior excedían del 3% de las ventas netas de la empresa.¹⁰¹ Sin embargo, el cumplimiento de esta normatividad era muy limitado, por lo que de manera sostenida hasta entrada la década de los sesentas se hará una incorporación indiscriminada de nuevas tecnologías, gracias a la ausencia de restricciones para su importación, que provocaron que simplemente aumentara el volumen de éstas sin que surgiera preocupación alguna en los industriales mexicanos por las consecuencias económicas y sociales de no poner cotos a esta situación.

La ISI se consolidará al amparo de la inversión extranjera, para entonces la industria empieza a ceder sus sectores más dinámicos al predominio del capital extranjero, proceso en el cual se evidencia la forma en que la transferencia de ciencia y tecnología se convierten en elementos que generan una dependencia creciente para la producción en el país. Esta situación profundiza la condición de subdesarrollo de nuestra estructura socioeconómica, ya que la acumulación descansará cada vez en mayor medida en el trabajo general producido en los Estados Unidos. En medio de todo esto se impone una visión sobre la ciencia y la tecnología aplicada a los procesos productivos, que Germán Sánchez Daza resume de la siguiente forma:

- Se considera que la tecnología puede ser adquirida mediante la compra de maquinaria y equipo moderno, casi totalmente importado, por lo cual es necesario estimular su consumo vía exención de impuestos;
- Asimismo, dado que se inicia el consumo masivo de mercancías modernas (autos, refrigeradores, etc.) se acepta que la tecnología que implica su producción sólo puede ser desarrollada mediante el capital extranjero y, asociándose con él, el capital local podrá adquirir tanto la experiencia como las capacidades tecnológicas para su desarrollo.¹⁰²

¹⁰⁰ Miguel S. Wionczek, Gerardo M. Bueno y Jorge Eduardo Navarrete, op. cit., p. 43.

¹⁰¹ Ídem.

¹⁰² Germán Sánchez Daza, op. cit.

Con todo, la ISI implicó importantes avances en el terreno productivo, ya que en este periodo de consolidación que alcanza la década de los sesenta, se consigue cubrir la sustitución de importaciones de bienes de consumo y avanzar en algunos intermedios, con lo que se logró una baja de la participación de las importaciones en la oferta total.¹⁰³ Esto se hizo con niveles inflacionarios bajos en relación a los que se registraron durante la etapa de despegue de la industrialización, sin recurrir a la devaluación ante los desajustes de la balanza de pagos, estrategia que será sustituida por instrumentos como el permiso previo a las importaciones y la elevación del arancel para aligerar la carga de las importaciones. Además, las políticas fiscales y monetarias se reorientaron a promover el ahorro interno a través de subsidios, exenciones y tarifas congeladas de bienes y servicios públicos.

Sin embargo, el funcionamiento de este esquema entrañaba contradicciones muy serias que a la larga incidirían en el agotamiento de modelo que orientó la ISI hasta entonces. Al respecto José Romero señala:

[...] la inflación de México entre 1954 y 1970, aunque reducida, fue más alta que la de Estados Unidos, esta situación, aunada al tipo de cambio fijo, dio como resultado una considerable apreciación del tipo de cambio real de más de 30% respecto de 1954. La apreciación erosionó la competitividad de los productores mexicanos y provocó crecientes déficit comerciales [...] que tenían que financiarse mediante inversión extranjera directa, préstamos al sector privado obtenidos en el extranjero y, principalmente, préstamos al gobierno de bancos e instituciones internacionales. Esto dio como resultado que la deuda externa del gobierno pasara de prácticamente nada en 1954 a casi 12% del PIB en 1970 [...] El costo de la estabilidad de precios que se logró en este periodo puede medirse tanto por el incremento de la deuda pública externa como por el daño que hizo a la industria nacional mantener tanto tiempo un tipo de cambio real sobrevaluado. Esto último volvió menos competitiva a la industria nacional en el exterior e impidió que ésta se orientara hacia la exportación.¹⁰⁴

No obstante, si bien es cierto que la sobrevaluación del tipo de cambio real fue uno de los principales factores que incidieron en las dificultades de la industria nacional para exportar, en realidad ésta sólo fue una manifestación de un problema más estructural y que se relacionaba con el nivel de dependencia alcanzado por la industria hacia la inversión extranjera, así como hacia los insumos extranjeros para la producción.

¹⁰³ Véase René Villarreal. *México 2010. De la industrialización tardía a la reestructuración industrial*. México, Diana. 1988, pp. 216-217.

¹⁰⁴ José Romero., op. cit. p. 178.

Estos últimos factores fueron los que ocasionaron que la producción nacional no fuera competitiva a nivel internacional, ya que sus altos costos eran reales, y eran absorbidos en buena medida por el Estado a través del gasto público y otras medidas de fomento y financiamiento. Por eso era lógico que los costos de la producción tendieran a aumentar más en la medida que el proceso de sustitución de importaciones avanzaba, haciéndolo como hasta entonces con progreso técnico importado.

Era claro que hasta entonces la inversión en ciencia y tecnología no había sido una preocupación para la burguesía nacional, y en consecuencia, tampoco lo había sido para el Estado. Wionczek, Bueno y Navarrete identifican varios factores que explican esta falta de atención al problema de la escasa generación de progreso en el país:¹⁰⁵

- a) La disponibilidad casi automática de tecnología extranjera, misma que se incorporó al sistema productivo a través de las importaciones de bienes de capital o a través de arreglos contractuales de transferencia.
- b) El crecimiento del PIB a un ritmo sostenido a largo plazo a pesar de la ausencia de desarrollo científico y tecnológico, elemento que hizo a planificadores y ejecutores de las políticas para el desarrollo económico del país, omitir el tema de la importancia de la generación de progreso técnico local.
- c) La política económica, diseñada para favorecer indiscriminadamente la acumulación de capital como motor de desarrollo, antes que su inversión en ciencia y tecnología.
- d) Ausencia de condiciones para el desarrollo del trabajo científico y tecnológico en el país. Omisión en que incurrieron tanto el Estado como los empresarios, al no propiciar un clima de independencia intelectual, condiciones de vida dignas y de ausencia de presiones de corto plazo, para los investigadores nacionales.
- e) Limitaciones en la formación de personal técnico de nivel medio por la rápida estratificación de la fuerza de trabajo, dividida en élites de trabajadores relativamente pequeñas regularmente vinculadas a sindicatos económicamente privilegiados, y una gran masa de obreros no calificados con una educación precaria en constante proceso de crecimiento por la masiva migración del campo a la ciudad registrada entonces.

¹⁰⁵ Ver Miguel S. Wionczek, Gerardo M. Bueno y Jorge Eduardo Navarrete, op. cit., pp. 14-15.

Es por eso que a finales de la década de los sesenta la ISI entra un acelerado proceso de agotamiento.

2.3.2 Agotamiento.

A fines de la década de los setenta las limitaciones de la ISI llevaron a una crisis económica que hacía patentes por lo menos tres grandes problemas: a) la crisis fiscal, que evidenciaba la incapacidad del Estado de hacerse de recursos propios y, en consecuencia, el incremento de la deuda pública interna y externa; b) la profundización del desequilibrio en la balanza de pagos; y c) la pérdida de legitimidad del Estado para encabezar el desarrollo nacional.¹⁰⁶

El gobierno buscó en todo momento evitar el estancamiento económico y la inflación, con el objetivo de darle un nuevo aliento a la industrialización con sustitución de importaciones, por lo que para salir de la crisis:

[...] incrementó el gasto público y aumentó la cantidad de dinero, al mismo tiempo que mantuvo el tipo de cambio fijo. En 1972 los gastos se incrementaron 20% y la cantidad de dinero en circulación 19.2%. El resultado en términos macroeconómicos fue un aumento del déficit fiscal y de la balanza comercial [...] La inflación, orgullo de México en los dos decenios anteriores, alcanzó en forma crónica niveles de dos dígitos, pasando de 3.4% en 1969 a un promedio de 10% anual durante el periodo 1970-1975.¹⁰⁷

En este contexto, el tema de la dependencia científica y tecnológica de nuestro país ya estaba sobre la mesa, y con la influencia del pensamiento latinoamericano (léase teoría de la dependencia) se generaliza una postura crítica en el país en relación a las empresas multinacionales, se cuestiona el rumbo de la industrialización caracterizada por su dependencia tecnológica hacia los países desarrollados, y se proponen esquemas nacionalistas que recomiendan una ruptura con las metrópolis para salir del atraso tecnológico.

El papel de la tecnología extranjera en el desarrollo industrial de México en los setenta era caracterizado por Wionczack, Bueno y Navarrete de la siguiente forma:

¹⁰⁶ Ver Punto Crítico. "Economía y Política del gobierno de LEA" en Ismael Colmenares et. al. (recopiladores), *Cien años de lucha de clases en México (1876-1976). Lecturas de Historia de México*. Tomo II. Ediciones Quinto Sol. México. 1985.

¹⁰⁷ José Romero., op. cit., 183.

- a) La parte decisiva de los conocimientos técnicos y de los procesos tecnológicos que actualmente se usan en la planta industrial de México provienen directamente del exterior, especialmente de Estados Unidos. Esta situación es particularmente notoria en las actividades industriales dinámicas y modernas, tanto productoras de bienes de consumo duradero, como de bienes intermedios y bienes de capital. En cambio, en la industria tradicional productora de satisfactores primarios y de otros bienes de consumo sencillos, que también en general trabaja con una tecnología extranjera, su participación es mínima;
- b) Son escasas las instancias en las que la tecnología importada está sujeta a procesos de adaptación interna, como no sean los de la instalación de plantas de tamaño subóptimo, dada la capacidad de absorción del mercado;
- c) Del acervo general de tecnología extranjera que utiliza el país, no es posible definir qué parte corresponde a la tecnología libremente disponible en el ámbito mundial y que llega al país a través del personal adiestrado en el exterior, los libros y otra literatura técnica; qué parte viene incorporada en los equipos, maquinaria y otros bienes de capital importados, y qué parte se obtiene a través de la inversión extranjera directa;
- d) Sin embargo, parece que la forma más importante de transferencia de tecnología extranjera a México son los acuerdos contractuales al nivel de empresa.¹⁰⁸

De acuerdo con Germán Sánchez Daza el problema de la escasa generación de ciencia y tecnología aplicada a los procesos productivos, se relacionó entonces con los costos que la dependencia tecnológica generaba para el país en términos del pago de regalías y patentes, así como con la pertinencia de la adquisición de dichas tecnologías para la acumulación, por sus efectos en la subutilización de mano de obra y en la deformación de los patrones de consumo. Por ello, el discurso que dominará entonces tendrá como objetivos: a) generar tecnologías apropiadas al país y abundantes en mano de obra, ya que es inviable utilizar tecnologías ahorradoras de ella; b) disminuir la transferencia de recursos hacia los países desarrollados estableciendo diversos ordenamientos legales sobre tecnología, con la finalidad de controlar la transferencia vía patentes, regalías, etc.; y c) realizar políticas específicas de ciencia y tecnología para fortalecer la investigación y el desarrollo científico y tecnológico.¹⁰⁹

En el marco de estas ideas, en el sexenio de Luis Echeverría se desarrollan diferentes acciones con el objetivo de llevarlas a la práctica. Así se crea el CONACYT y la *Ley Sobre el Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de*

¹⁰⁸ Miguel S. Wionczek, Gerardo M. Bueno y Jorge Eduardo Navarrete, op. cit., p. 39.

¹⁰⁹ Ver Germán Sánchez Daza., op. cit.

Patentes y Marcas, que convergen en la elaboración del *Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología*. El objetivo general de este plan era construir un sistema científico y tecnológico con relaciones armónicas con los sistemas económico, educativo, político y cultural, integrado a la política general del desarrollo, para que a través del desenvolvimiento de la ciencia y tecnología nacionales se pudiera alcanzar la *autonomía y autodeterminación* científica y tecnológica.¹¹⁰

Estos importantes esfuerzos fueron en buena medida abortados en el sexenio de José López Portillo. Primero, como resultado de las dificultades por las que atravesaba la economía nacional al inicio del sexenio, que llevaron al gobierno mexicano a firmar un convenio de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional vigente entre 1977-1979;¹¹¹ después, como resultado del auge petrolero y del crédito externo que permitió al Estado impulsar una política de desarrollo a través de un abundante gasto público.¹¹² De acuerdo a José Romero:

En 1977 México produjo 534 trillones y tres años después 968.3 trillones [...] En tan sólo cuatro años la exportación pasó de 202 millones de barriles diarios en 1977 a 828 millones en 1980 (de 987 millones de dólares a 9,450 millones de dólares) y todo el crecimiento se financió con crédito externo. Se pensaba que el petróleo proporcionaría divisas suficientes para pagar los préstamos. El endeudamiento creció a la par que la producción de crudo. La mayor parte de los préstamos se destinaba a PEMEX, que en 1979 debía 20% de la deuda externa nacional. La economía se petrolizaba a pasos agigantados, pues las exportaciones de crudo que en 1979 representaban 45% llegaron en 1982 a 78%.¹¹³

Esta estrategia demostró en el corto plazo ser sumamente débil, porque depositaba en las manos del mercado petrolero, es decir, en factores externos, el funcionamiento de toda la política de desarrollo. Por lo que a principios de los ochenta

¹¹⁰ Ver Jorge Guillermo Cano. *Políticas del Estado en materia de ciencia y tecnología*. Consultado en Internet el 28 de julio de 2009: http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib11/140.htm

¹¹¹ El objetivo de la carta de intención era la aplicación de políticas de ajuste al desequilibrio externo, muestra del grado de dependencia que había alcanzado nuestra economía. Entre las medidas más importantes que se acordaron estaban: la limitación del déficit global del sector público al crecimiento de la deuda externa y a la emisión primaria de dinero; liberación del comercio internacional, disminuyendo aranceles a las importaciones y subsidios a las exportaciones, y la reducción de la participación del Estado como agente económico. Ver René Villarreal, op. cit., p. 220.

¹¹² Lo que hizo que las políticas derivadas del acuerdo inicial con el FMI, se “adecuaran” ante la nueva coyuntura económica: en lugar de liberalización comercial, racionalización gradual del proteccionismo; se incrementó la inversión del sector público principalmente; y el Estado aumentó su participación en la economía. Ver Ibíd., p. 221.

¹¹³ José Romero, op. cit., p. 185.

se presentó una severa crisis, que evidenció las contradicciones del último intento por sostener el modelo económico orientado al mercado interno: “El financiamiento complementario del exterior al proyecto petrolero e industrial que el gobierno había emprendido tropezó con la propia caída de los precios petroleros y del mercado internacional de hidrocarburos, con la elevación súbita de las tasas de interés y la escasez del crédito, que entramparon al proyecto en una crisis de deudas, sin haber conseguido los cambios necesarios en la planta industrial”.¹¹⁴

En medio de una crisis económica caracterizada por fuga masiva de capitales, especulación financiera y una espiral inflacionaria traducida en devaluación; la visión mucho más fragmentaria y empirista en materia de ciencia y tecnología impulsada en este sexenio, plasmada en un plan científico tecnológico que no era más que “un recuento de proyectos y demandas”¹¹⁵, había mostrado su rotundo fracaso.

Con esta coyuntura se cerraba un ciclo de la acumulación capitalista en el país, caracterizado por una nula gestión estatal del desarrollo, que si bien había impulsado un proceso importante de industrialización, no llevó la sustitución de importaciones a los bienes de capital, por lo que podemos caracterizarla como una industrialización truncada. Así mismo, la planta industrial mexicana, que había pasado a ser el motor de la economía al final del ciclo, se había vuelto totalmente dependiente del progreso generado en los Estados Unidos. Así llegaba a su fin el patrón de crecimiento económico orientado al mercado interno en nuestro país.

2.4 La gestión estatal del subdesarrollo bajo el patrón de crecimiento absoluto.

Todo cambio en el patrón de crecimiento económico en el subdesarrollo es resultado de una crisis ocasionada por la caída de la tasa de ganancia en los países desarrollados, que repercute en la caída de los bienes de capital y bienes intermedios necesarios para la producción. Esta crisis entonces se proyecta, no sobre el crecimiento en general, sino sobre su patrón vigente, sea éste relativo o absoluto. Tal es el caso de México al inicio de la década de los ochenta.

¹¹⁴ René Villarreal, op. cit., p. 222.

¹¹⁵ Germán Sánchez Daza., op. cit.

La crisis capitalista en el desarrollo en los setenta representó el fin de una época de bonanza que se había caracterizado por una correlación de fuerzas favorable al trabajo y una revalorización constante de los salarios reales, misma que originó una pérdida de dinamismo en la innovación tecnológica y la productividad.¹¹⁶ Como resultado, cayó la tasa de ganancia en esos países y con ella la producción, con lo que se inició un proceso inflacionario y el desempleo se disparó. En este contexto, el gobierno de Estados Unidos da por finalizado el acuerdo Bretton Woods, lo que le permitió liberarse de sus obligaciones externas en oro y traducirlas en dólares, instituir el patrón dólar, y devaluar su moneda tratando de asignarle mayor competitividad a sus exportaciones. Con lo que se inaugura el señorío del sector financiero mundial.

La reestructuración capitalista a nivel mundial surge entonces como una necesidad histórica objetiva, cuya meta central será la recuperación de la tasa de ganancia. Dicha reestructuración fue institucionalizada a partir de la Cumbre de Tokio en 1978, donde los gobiernos del G-7 se inclinaron por aplicar de manera conjunta medidas económicas recesivas inspiradas en una visión monetarista, combinadas con acciones tendientes a acotar el Estado benefactor.

Las ideas que respaldarán la reestructuración capitalista estarán sustentadas, entre otros, en los fundamentos teóricos contenidos en las obras de Friedrich A. Von Hayek¹¹⁷ y de Milton y Rose Friedman¹¹⁸, cuyo contenido dará origen a la ideología neoliberal. Estas ideas han tenido una amplia difusión en nuestro país, por lo que no es nuestra intención presentarlas en todo su despliegue en este trabajo, sino simplemente exponerlas en sus aspectos básicos aún a riesgo de simplificarlas en demasía.¹¹⁹

Los autores señalados, al igual que los padres del liberalismo económico clásico, definen al hombre como un maximizador de recursos, que por medio de su conducta

¹¹⁶ Cf. Arturo Huerta. *Economía mexicana. Más allá del milagro*. México. Ediciones de Cultura Popular. 1996. pp. 41-43.

¹¹⁷ Friedrich A. Von Hayek. *Precios y producción*. Madrid, España, Unión Editorial, 1996.

¹¹⁸ Milton y Rose Friedman. *Libertad de elegir. Hacia un nuevo liberalismo económico*. México, Grijalbo S.A., 1980.

¹¹⁹ Para un análisis sobre los sustentos de la teoría neoliberal y sus efectos en América Latina, véase Víctor Figueroa. "Globalización y lucha de clases", *Glocal*, Magazine Internacional, Año 2, No. 9, agosto de 2003. Consultado en Internet el 19 de agosto de 2003: <http://glocalrevista.com>. Así como el ensayo de Mariana Calvento, "Fundamentos teóricos del neoliberalismo: su vinculación con las temáticas sociales y sus efectos en América Latina", en *Convergencia*, mayor-agosto, año/vol. 13, núm. 41. México, UAEM, 2006, pp. 42-50.

egoísta aporta al bienestar colectivo, y advierten que todo intento por reprimir su egoísmo es un ataque a la libertad. En consecuencia, no formulan ningún juicio de valor sobre la desigualdad entre los seres humanos, ya que afirman que esta condición ha sido generada por situaciones del pasado que determinan la ubicación de los hombres en la sociedad y sus posibilidades en ella, aunque reivindican el derecho de las personas a tener la oportunidad de elegir sobre su condición y el destino de sus vidas.

Para ellos, el Estado carece de las motivaciones que movilizan al individuo. Por lo tanto debe limitarse a resguardar el orden, así como a diseñar y hacer cumplir las normas que garanticen una conducta adecuada entre los integrantes de la sociedad. De transgredir estos límites, la intervención del Estado atentaría contra la libertad e introduciría distorsiones en el desenvolvimiento de las sociedades. Por ello, no es de sorprender que identifiquen la libertad económica con las posibilidades de la democracia, ya que para ellos la fortaleza de la libre competencia es la única protección de la sociedad frente al Estado.¹²⁰

Estos ideólogos del neoliberalismo coinciden en afirmar que los monopolios no son un problema para el libre mercado en tanto no se elimine el sistema de competencia, y por ello el Estado no debe intervenir en su formación. Sin embargo, los monopolios más indeseables serán los sindicatos, en tanto que con pretexto de revindicar la solidaridad entre sus miembros socavan la libertad individual, por lo que recomiendan al Estado retirar la legislación que los favorece. Finalmente, en el terreno del comercio exterior, apuestan por el libre comercio como camino hacia el progreso de las naciones en sus relaciones entre sí, y en consecuencia, recomiendan eliminar los controles sobre el comercio que limitan la libertad de consumidores y productores.

Esta ideología, al igual que liberalismo clásico, pretende que los intereses de clase de la burguesía se identifiquen con los de la sociedad en su conjunto, desconociendo la existencia de la lucha de clases. Sin embargo, evidencian la total falta de objetividad en sus argumentaciones, cuando dirigen sus baterías contra el trabajo y los derechos alcanzados por éste a lo largo del siglo XX, a quien entienden como el principal obstáculo para alcanzar el progreso. El resultado de ello ha sido la gestación de

¹²⁰ Víctor Figueroa, "Globalización y lucha de clases"... op. cit., pp. 2-4.

un orden donde la correlación fuerzas entre clases sociales se ha inclinado hacia el capital.

En conclusión, como señala José Bell Lara: “El neoliberalismo se caracteriza por una visión individualista, utilitarista y ahistórica de la economía y la sociedad en su conjunto”.¹²¹ Ello por que su objetivo principal es crear las condiciones para la acumulación capitalista, no el progreso de las sociedades como reiteradamente se argumenta.

La reestructuración capitalista a nivel mundial estará vinculada irremediablemente desde su origen a los intereses del capital monopolístico transnacional, cuyo objetivo será transformar la correlación de fuerzas alcanzada entre capital y trabajo durante el periodo de postguerra, por la vía de la misma crisis y la acción estatal para desarticular el Estado Benefactor. Los blancos de la contraofensiva serán el pleno empleo, la organización sindical y, lo que es más importante, la base técnica sobre la que habían descansado hasta entonces los procesos productivos.

Los Estados nacionales pasan a ser controlados o influidos por la oligarquía financiera¹²², que aprovechando la relajación de los controles de cambio a que orilló la especulación con el dólar en los setenta, pasa a controlar el proceso de reestructuración capitalista conocido a partir de entonces con el nombre de globalización.

El programa impulsado desde entonces por los Estados en los países desarrollados y por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en los países subdesarrollados, se basó en la desregulación de la actividad económica; la privatización de las empresas públicas para abrir paso a su explotación por el capital

¹²¹ José Bell Lara y Delia Luisa López. *La cosecha del neoliberalismo en América Latina*. Cuba, Flasco, p. 1. Consultado en Internet el 1 de diciembre de 2009: http://www.flasco.uh.cu/sitio_revista/num1/articulos/art_JBell5.pdf

¹²² “Reducido grupo de grandes capitalistas financieros que poseen monopolios industriales y bancarios y ejercen, de hecho, el dominio económico y político sobre las ramas más importantes de la economía en los países imperialistas. En la época del imperialismo a la vez que se concentra la producción en empresas colosales y se forman monopolios industriales en íntima relación con dichos fenómenos se amplían los bancos y surgen los monopolios bancarios. En un pequeño número de bancos se concentra la parte principal de todos los depósitos capitalistas. Casi todas las operaciones monetarias del país se efectúan por mediación de los bancos. Éstos, adquiriendo títulos de valor de toda clase y acciones de compañías diferentes se convierten en copropietarios de las empresas industriales comerciales y de otro tipo. Por otra parte, los dueños de las empresas industriales actúan como copropietarios de los bancos. Los magnates del capital financiero ocupan simultáneamente los puestos dirigentes en las empresas bancarias y en las empresas industriales de carácter monopolista. El dominio de la oligarquía financiera se extiende a la vez a las esferas más diversas de la economía capitalista.” Ver Boríssov, Zhamin y Makárova. *Diccionario de economía política*. URSS, Ed. Moscú, 1965.

privado; la libre movilidad internacional de los capitales; el debilitamiento del movimiento obrero organizado para permitir, en el corto plazo, la recuperación de la tasa de ganancia, y en el largo plazo, la voracidad del gran capital; y el desmantelamiento del Estado de Bienestar, limitando sus funciones a las de un estado policía, encargado de custodiar el orden, los derechos ciudadanos y del curso normal de la vida económica.¹²³

Todas estas transformaciones tienen como piedra de toque la revolución tecnológica que incubó el largo periodo de crecimiento económico durante la postguerra, y que en el contexto de la crisis capitalista reclamaba su implementación en los procesos productivos para recuperar la tasa de ganancia.

De acuerdo a Miguel Ángel Rivera, el epicentro de esta revolución tecnológica se encuentra en la fusión de la microelectrónica y la informática, que da lugar a una transformación programable de la máquina-herramienta y ocasiona el surgimiento de la manufactura flexible automatizada. Este proceso impactará principalmente en las ramas automotriz, aeronáutica, de máquinas-herramientas, relojería, electrodomésticos y de equipo de oficina.¹²⁴

Así mismo, esta revolución tecnológica impactará el ámbito de las telecomunicaciones con efectos notables en los procesos de trabajo tanto en el sector industrial como en el sector de servicios, orillando a una transformación igualmente importante en las formas de gestión empresarial y organización del trabajo a favor del capital y en detrimento de los trabajadores.

2.4.1 El neoliberalismo en México.

Dentro de este escenario mundial, la crisis del capitalismo en México repercutirá en el agotamiento del patrón de crecimiento relativo y se manifestará en una serie de contradicciones de la economía a principios de la década de los ochenta. Entre las que destaca una creciente vinculación con la economía mundial como resultado del avance del proceso de industrialización sustentando en una nula gestión estatal del desarrollo, que obligó a depender cada vez de mayores importaciones para continuar con la producción local, ante la incapacidad de generar progreso endógeno; menor inversión

¹²³ Ver José Bell Lara y Delia Luisa López, op. cit.

¹²⁴ Miguel Ángel Rivera. *El nuevo capitalismo mexicano*. México, Era, 1992.

privada que impactó en gran medida la contracción de los créditos; mayor déficit fiscal ocasionado por la escasa recaudación tributaria del Estado, a partir de los subsidios otorgados a los empresarios para que invirtieran en la industrialización y los difíciles márgenes de maniobra de las empresas estatales para operar en números blancos; inflación originada por el incremento del gasto público destinado a estimular la demanda a través de aumentos salariales, aumento en la ocupación y gastos corrientes, descuidándose el gasto en inversión; mayor endeudamiento generado por la disminución de la productividad en las principales fuentes de ingresos del Estado, el turismo y la agricultura, así como por el incremento del gasto público y las importaciones de tecnología; la especulación de divisas y la fuga de capitales producidas por las devaluaciones a las que tuvo que recurrir el gobierno; y la restricción internacional de crédito a consecuencia de la fuga de capitales y la baja en las reservas internacionales del país.¹²⁵

Este escenario hará necesario el replanteamiento de la política económica que hasta entonces se venía implementando en el país, teniendo como objetivo central transformar el patrón de crecimiento económico vigente, bajo cuatro ejes fundamentales: a) la desregulación estatal de la economía y la privatización de empresas paraestatales; b) control estricto y reducción de los niveles salariales; c) apertura al comercio exterior y liberalización de los flujos de mercancías y capitales externos; y d) protección a los intereses del capital financiero fusionado con los monopolios locales.¹²⁶

La política económica quedará subordinada a partir de entonces a los dictados de los organismos financieros internacionales controlados por los Estados Unidos. En este sentido, aunque la primera experiencia de las relaciones del gobierno mexicano con el FMI se remonta a 1976 -cuando se tuvo que enfrentar la primera crisis financiera desde 1940 y la primera devaluación del peso respecto al dólar en 22 años-, es en noviembre de 1982, cuando el gobierno de José López Portillo redactó la primera Carta de Intención para exponerla a consideración y firma del FMI, con el objetivo de obtener otra línea de crédito y de ajustar la política económica a unos lineamientos previamente aprobados por dicha institución, que apostaban a instrumentar la política neoliberal.

¹²⁵ Para un análisis mucho más completo de este proceso, véase Arturo Huerta, op. cit. 50-59.

¹²⁶ Miguel Ángel Rivera, op. cit.

Unos años después, en medio de la llamada crisis de la deuda, el 22 de julio de 1986 el gobierno mexicano firmó otra Carta de Intención por un crédito de mil 700 millones de dólares, a cambio del cumplimiento de varios compromisos conducentes a un programa de reestructuración de la economía denominado Programa de Aliento y Crecimiento, que consolidaba la interiorización de la ideología neoliberal en la política económica nacional.¹²⁷

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se apuesta a la renegociación de la deuda, una vez que el recetario neoliberal había sido adoptado. Después de ese sexenio de espejismos en los que la entrada de México en la OCDE y la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá -con todos los compromisos de índole económica y política que ello implicaba para el país- hacía pensar en el éxito de la modernización económica, el cambio estructural y la reestructuración industrial; se presentó la crisis económica y política de 1994 que obligó al gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León a negociar en enero de 1995 otra Carta de Intención con el FMI, a cambio de un paquete de apoyo crediticio por 17 mil 750 millones de dólares, recursos que serían destinados esta vez a la reserva internacional de divisas después de la fuga de capitales provocada por la devaluación de diciembre de 1994. Incluso el gobierno norteamericano en aquella ocasión entró a financiar directamente a su similar mexicano, y todavía el 15 de junio de 1999 se firmó otro acuerdo con el FMI, con la firma de un contrato "stand by", cuya cantidad financiada esta vez fue por 4 mil 200 millones de dólares fue pactada a un plazo de 17 meses.¹²⁸ Todavía en este año, el Presidente Felipe Calderón ha solicitado un préstamo más al organismo financiero internacional por 47 mil millones de dólares, para hacer frente a la grave crisis económica que enfrenta de nueva cuenta el país como consecuencia del impacto recesivo de la crisis financiera internacional.

Sin embargo, esta influencia de los organismos financieros internacionales en la política económica nacional no se explica por sí sola, si no se advierte que su

¹²⁷ Para un análisis a profundidad del contenido y repercusiones de los acuerdos firmados por el gobierno mexicano con el Fondo Monetario Internacional en este periodo, véase Héctor Guillén Romo. *El sexenio de crecimiento cero. México, 1982-1988*. México, Era, 1990; y René Villarreal. *La contrarrevolución monetarista. Teoría, política económica e ideología del neoliberalismo*. México. Editorial Océano, 1984.

¹²⁸ Véase Irma Manrique Campos. "México: Modernización financiera integral en la condicionalidad de las políticas de ajuste estructural", en Emir Sader (comp.), *El ajuste Estructural en América Latina. Costos Sociales y Alternativas*. Buenos Aires, CLACSO, 2001, pp. 13-15.

instrumentación fue el resultado de las medidas que los gobiernos en turno tuvieron que tomar ante los problemas de acumulación que el patrón de crecimiento económico en el país registraba entonces. La estrategia dio origen a lo que se dio en llamar la modernización económica o cambio estructural y la reestructuración industrial. La modernización se entendía como la recuperación de la tasa de ganancia por medio del incremento de la productividad y la eficacia dentro de los procesos productivos, la racionalización de los gastos estatales, y la apertura de la economía mexicana a la economía mundial. Por otra parte, la reestructuración industrial buscaba la modernización de las empresas a través de la incorporación de las nuevas tecnologías, la transformación en la organización de los procesos de trabajo, apuntando hacia la flexibilización laboral, y la transformación en los sistemas de gestión empresarial.

Una simple revisión a los programas y pactos de estabilización y ajuste estructural implementados en México desde 1982, como resultado de los convenios signados por el gobierno del país con el FMI, nos permiten confirmar la gran influencia que el neoliberalismo ha tenido en la política económica mexicana en las últimas décadas. El Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE, 1982), el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC, 1986), el Pacto de Solidaridad Económica (PSE, 1987), el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico (PECE, 1988) y el Pacto para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento (PABEC, 1994); pueden ser definidos como auténticas cartas de navegación del gobierno mexicano para llevar a cabo la reestructuración económica y el cambio en el patrón de crecimiento en el país en apego estricto a los postulados neoliberales. Destacan las transformaciones en las políticas fiscal, monetaria, cambiaria, salarial y las estrategias implementadas para llevar a cabo la apertura comercial, la privatización y la desregulación de la actividad económica, impulsadas desde estos instrumentos.

El PECE fue un programa de emergencia ideado para crear las condiciones mínimas para el fortalecimiento de la economía, que buscaba corregir en lo inmediato las finanzas públicas y crear las condiciones para una recuperación a mediano plazo de la economía. En los hechos fue un programa recesivo que buscaba atacar las presiones inflacionarias “enfriando” la economía, a través de distintas acciones: a) austeridad en el gasto público para reducir el déficit presupuestario del gobierno; b) protección del

empleo y la planta productiva; c) protección de los productos básicos; d) incremento de los ingresos públicos; e) política de crédito destinada a estimular la actividad productiva en los sectores prioritarios de tipo social; f) apertura de la economía hacia el exterior; y g) aliento a la inversión extranjera y renegociación de la deuda externa.

El PAC fue un programa muy ambicioso, pero su éxito dependía de la obtención de recursos adicionales del extranjero obtenidos por la renegociación de la deuda, ya que con éstos se esperaba reiniciar el crecimiento económico y el desarrollo de la economía. Además se buscaba corregir las finanzas del gobierno a través del control y el recorte del gasto, así como el fortalecimiento de los ingresos.

En su interesante ensayo sobre la modernización financiera del país, Irma Manrique¹²⁹ evalúa los resultados del PIRE y del PAC y concluye que las medidas tomadas tuvieron un efecto positivo en el saneamiento de las finanzas públicas, el superávit comercial y de cuenta corriente de la balanza de pagos, pero en el combate a la inflación y en el crecimiento del PIB resultaron un total fracaso. Por otra parte, la apertura comercial se consolida y las privatizaciones se generalizan, mientras en contraste el salario cae un 26%.

Los pactos (PSE, PECE y PABEC) permitieron dar pasos más decididos para poner en manos del capital privado la iniciativa del crecimiento económico que durante décadas había estado en manos del Estado. Los objetivos de estos programas eran prácticamente los mismos que los programas PIRE y PAC, pero lo novedoso fue que su creación e implementación fue resultado de un proceso de concertación entre los factores de la producción: el gobierno, las organizaciones de trabajadores y el capital privado. En tal sentido, los pactos fueron un intento de los gobiernos neoliberales para consolidar la reestructuración capitalista en el país en condiciones de acuerdo social.

Los compromisos básicos de las partes adherentes a estos instrumentos se resumían a lo siguiente: el gobierno se obligaba a controlar el gasto público, a mantener la restricción monetaria y del crédito a través de la tasa de interés y la aceleración de las privatizaciones de las empresas públicas; los empresarios por su parte, asumían el compromiso de apoyar la apertura comercial regulada y controlar los incrementos en sus precios, aunque poco después contaron con la liberalización de los precios; y los

¹²⁹ Ibíd., p. 16.

trabajadores, a través de los sindicatos corporativos, se comprometían a no solicitar aumentos salariales que impactaran la inflación.¹³⁰

El balance general del impacto de estos instrumentos en la economía nacional no es nada alentador. De acuerdo a Irma Manrique:

- 1) El crecimiento económico fue modesto; su principal generador fue el aumento de las exportaciones no petroleras, especialmente las manufacturas (maquiladoras).
- 2) Se logró controlar la inflación gracias a una política cambiaria de sobrevaluación, cuyo objetivo era además igualar la tasa de inflación de México con los socios comerciales del TLCAN, lo cual sin embargo no se logró.
- 3) La política cambiaria como ancla de la inflación tuvo impacto negativo sobre la balanza de pagos, pues se incrementó el déficit comercial y se profundizó la dependencia del exterior. [...]
- 4) El crecimiento económico moderado entre 1989 y 1991 empezó a decrecer a partir de 1992, sin llegar a obtener el 6% de incremento en 1993 y 1994 como se había proyectado.
- 5) Las tasas de interés fueron muy altas, sobre todo a partir de 1988, para estimular y mantener los flujos de capital externo.
- 6) El nivel salarial mantuvo un bajo poder adquisitivo, y aunado a la baja tasa de empleo denotó una política de ajuste estructural de carácter excluyente.
- 7) Todo lo anterior llevó a más privatizaciones y a la profundización del proceso de desregulación de la economía, así como a una mayor apertura comercial y financiera del país.¹³¹

La entrada de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, hoy Organización Mundial de Comercio) y la posterior firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, terminaron por consumir la estrategia de apertura de la economía mexicana y la subordinación de la misma a los intereses del capital monopolístico norteamericano. La estrategia no creció en la nada, estuvo férreamente respaldada internamente por los sectores de la burguesía nacional que estaban enganchados al nuevo patrón de acumulación: la oligarquía agroexportadora vinculada a las producciones de estación (frutas, hortalizas, etc.), y otros productos agrarios destinados al mercado de EE.UU., los grandes importadores, los banqueros, los dueños de almacenes, supermercados y otros negocios comerciales que son abastecidos desde EE.UU., los empresarios de la maquila, etc.

¹³⁰ Ídem.

¹³¹ Ibíd., pp. 16-17.

Desde la vigencia del último pacto, la política económica ha mantenido su carácter neoliberal y las medidas económicas adoptadas por el gobierno han tenido una extraordinaria similitud con cualquier carta de intención con el FMI. La reestructuración capitalista, una vez que cumplió con su función de cambiar el patrón de crecimiento económico, quedó interiorizada como una práctica cotidiana en la política económica del país. En este sentido, se puede hablar de una interiorización del neoliberalismo en la estructura socioeconómica de nuestra sociedad.

Desde entonces la política económica se ha empeñado en lograr los equilibrios macroeconómicos, hacer funcionar libremente al mercado, abrir la economía a los flujos de capital y mercancías sin restricción alguna y elevar las exportaciones no petroleras. Sin embargo, los resultados en los últimos años han sido desastrosos.

Jaime Ornelas en un estudio reciente sobre la economía mexicana en el sexenio de Vicente Fox, llega a las siguientes conclusiones: a) la apertura elevó las importaciones y las exportaciones, sin embargo la expansión del comercio exterior no impactó positivamente en el crecimiento de la economía por la falta de cadenas productivas integradas a los polos exportadores, a lo que hay que agregar la falta de programas estratégicos para alentar el crecimiento económico, fortalecer el mercado interno, mejorar la distribución del ingreso, incrementar el empleo y mejorar las condiciones de vida de la población; b) nuestra economía no ha logrado reducir su dependencia de los recursos externos provenientes del petróleo, el turismo y las remesas, provocando una mayor vulnerabilidad de ésta a la inestabilidad de los flujos de recursos externos; c) la política de combate a la pobreza implementada por los gobiernos neoliberales ha terminado por focalizar los recursos destinados para ello en los sectores más pobres del país, segregando a otros sectores igualmente pobres del acceso a estos apoyos, constituyéndose además en un caldo de cultivo para la formación de esquemas de clientelismo electoral entre los beneficiarios y el gobierno; y d) el gasto público y los programas destinados al bienestar social se encuentran supeditados a la disciplina fiscal y a criterios que destinan demasiados recursos al pago de rescates financieros para el

sector privado (IPAB, carreteras, ingenios azucareros, etc.), ahogando las posibilidades de destinar mayores recursos a la inversión productiva.¹³²

Si el diagnóstico después de casi tres décadas de impulsar el neoliberalismo en nuestro país y de consolidar un patrón de crecimiento que ha privilegiado la liberalización comercial y de capitales, la reformulación de la participación del Estado en la economía y la reformulación de los derechos del capital sobre el trabajo, resulta tan negativo, cabe preguntarse ¿qué ha dejado de hacer el Estado mexicano en los últimos años para impulsar el desarrollo? Más aún, ¿qué tanto ha influido el impulso al patrón de crecimiento vigente en los problemas de desarrollo que registra nuestro país?

2.4.2 La gestión estatal del subdesarrollo en la globalización neoliberal.

Con base en lo expuesto hasta ahora, no resulta extraño advertir que existe una estrecha relación entre la política económica vigente -así como la ideología que la promueve- y la visión que sobre el desarrollo se ha impuesto en nuestro país a partir de sus postulados, particularmente en el tema de la ciencia y la tecnología aplicada a los procesos productivos endógenos, y el papel de Estado en ello.

El auge del comercio mundial y de la circulación de capitales, así como la firma del TLCAN entre los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México, forman parte de lo que en la actualidad se ha denominado *globalización*, término que sigue siendo debatido desde diferentes perspectivas teóricas y escuelas de pensamiento en las ciencias sociales.¹³³ No es el objeto de este trabajo retomar dicho debate, sin embargo es importante señalar que desde entonces la globalización fue definida desde los circuitos del poder económico y político mundiales, a partir de una serie de premisas que ponían el acento en los aspectos positivos de las importantes transformaciones que se estaban desarrollando en la sociedad capitalista contemporánea.

¹³² Véase, Jaime Ornelas. “La economía mexicana en el gobierno de Vicente Fox (2000-2006)”, en *Aportes*, enero-abril, vol. XII, núm. 34. México, BUAP, 2007, pp. 155-157.

¹³³ Para una lectura de este debate, véase John Saxe-Fernández (coord.). *Globalización: crítica de un paradigma*. Plaza & Janes Editores, UNAM, México, 1999; Jaime Estay, Alicia Girón y Osvaldo Martínez (coords.). *La globalización de la economía global. Principales dimensiones en el umbral del siglo XXI*. México, Colección Jesús Silva Herzog, 1999; José Bell Lara. *Cambios mundiales y perspectivas*. La Habana, Cuba. Revolución cubana, Editorial de Ciencias Sociales, 1999; así como Víctor Figueroa. “Globalización y lucha de clases”... op. cit.

Entre otras cosas, se ha venido sosteniendo que es un fenómeno nuevo que comenzó a cobrar forma a mediados de la década de los setenta; que es un proceso homogéneo en términos de la intensidad y penetración de su desarrollo, en sus niveles históricos, en sus dimensiones comercial, productiva y financiera, y para los sujetos y actores involucrados en ella; que conduce a la homogenización de la economía mundial, superando a la larga las diferencias entre desarrollo y subdesarrollo, y entre países y regiones ricos y pobres; que es una llave del progreso y del bienestar, ya que del mismo modo que conduciría a cerrar brechas internacionales, promovería el ascenso de los grupos menos favorecidos a crecientes niveles de bienestar y calidad de vida; que favorecería la globalización de la democracia, en relación directa con la de la economía; y que llevaría a la desaparición progresiva del Estado, o al menos a una pérdida de importancia del mismo.¹³⁴

Desde el pensamiento crítico hubo una respuesta a estos pronunciamientos y se pusieron en evidencia muchos aspectos que esta concepción del desarrollo y la democracia desde el concepto de globalización ocultaba. Ya en el capítulo anterior de este trabajo reseñamos la crítica de Carlos Vilas a este concepto, donde se establece que estas premisas falsas de la globalización no son más que una ideología que busca ocultar la verdad de la realidad social.

En realidad, la globalización no es otra cosa que un proceso consustancial al neoliberalismo, que en la actual fase del desarrollo capitalista, busca romper las últimas fronteras al libre juego de las fuerzas del mercado. Aunque este rompimiento, en todo caso, esté ocurriendo sólo en las fronteras de los países subdesarrollados y fortaleciéndose en las de los países más desarrollados del mundo.

Por tal motivo, lo que nos interesa destacar es que el desarrollo desde la versión dominante sobre la globalización fue relacionado desde un inicio con la *integración económica*, que en el caso de nuestro país no pudo ser otra que con los Estados Unidos, al menos como proyecto inmediato. Es decir, la idea dominante en los círculos de decisión política en materia económica en nuestro país, es que en la medida que los países logren involucrarse en los circuitos comerciales mundiales y logren romper los

¹³⁴ Destacamos aquí los aspectos más relevantes del paradigma dominante, que aunque no necesariamente son los únicos, consideramos que son los más relevantes.

obstáculos que en el interior de sus territorios se pudieran generar para ello, estarán en condiciones de incrementar su riqueza y el bienestar social de sus poblaciones. Y en todo ello juega un papel central el tema de la ciencia y la tecnología.

Germán Sánchez Daza destaca en un trabajo reciente, que en esta perspectiva que pone en el centro del debate sobre el funcionamiento de la economía capitalista contemporánea el vínculo e integración de los países que la conforman con el mercado internacional, han surgido diversas teorías para explicar dichos vínculos. Tal es el caso de las teorías de la competitividad de M. Porter, P. Kraugman, D. Messner; las de la especialización flexible de M. Piore y Sabel; los encadenamientos productivos globales de G. Gereffi; y las teorías evolutivas del cambio técnico de Ch. Freeman y G. Dosi; entre otras.¹³⁵

Este autor señala que desde mediados de la década de los noventa, todas estas teorías habían abordado el tema de la tecnología como elemento central del funcionamiento económico y de las relaciones comerciales internacionales, convirtiéndolo en el aspecto toral de las explicaciones sobre el funcionamiento de la economía mundial contemporánea. Al respecto, destaca los aportes de la teoría de la competitividad para introducir en la explicación del funcionamiento de la economía global, la existencia de una intensa división del trabajo con segmentos productivos globalizados, de los cuales se pueden generar estrategias de inserción de un país en el mercado mundial a partir de la explotación de sus ventajas competitivas, introduciendo los factores del mercado, institucionales y de contexto, entre los que destacan los sistemas de innovación nacionales. De igual forma destaca las formulaciones de las teorías del desarrollo regional, de la geografía económica, del comercio internacional y las del cambio científico, en la comprensión de la existencia de diferencias en la productividad de la mano de obra en función de su nivel de calificación, incorporando a la tecnología como otro de los determinantes del crecimiento. Por otra parte, retoma la aportación de las teorías evolutivas para una explicación del comercio internacional que reconoce asimetrías entre los países en términos de la tecnología, de los resultados económicos y de las instituciones que regulan la producción y la distribución, mostrando

¹³⁵ Germán Sánchez Daza. *Ciencia y tecnología en América Latina. El ALCA como proyecto hegemónico*. México, CLACSO-BUAP, 2009, p. 5.

que todas las innovaciones, sean productos o procesos, representan mecanismos de creación de asimetrías que incrementan la brecha tecnológica entre firmas y países, y en contraparte, los procesos de difusión pueden ser entendidos como mecanismos de convergencia.¹³⁶

Estas perspectivas teóricas tuvieron un impacto importante en el pensamiento latinoamericano y en la instrumentación de las políticas encaminadas al desarrollo regional desde la década de los ochenta. Enrique de la Garza Toledo señala que en la implementación de la reestructuración productiva influyeron de manera diferenciada, en cuanto a su nivel de interiorización y aplicación en México, algunas de las teorías dominantes que hemos referido.

Al respecto, el autor identifica cinco momentos en este proceso: 1) En los ochenta, la explicación de la crisis como crisis de la base tecnológica dura en que se basaron los procesos productivos en el periodo de postguerra, y que da origen a la tercera revolución tecnológica en el campo de la computación y la informática, y la aplicación de sus desarrollos al proceso de acumulación capitalista. Esta perspectiva inicial tuvo poco impacto en los países de la región latinoamericana, quedando su influencia reservada a las grandes empresas con capacidades tecnológicas especiales; 2) Las interpretaciones que ponían énfasis en el agotamiento del taylorismo-fordismo como forma de organización del trabajo, que abrió paso a la introducción del toyotismo como doctrina gerencial en los países latinoamericanos; 3) Al principio de los noventa, los cambios en el mercado de trabajo y en las formas de organización del trabajo llevaron al planteamiento de la flexibilidad laboral en el proceso de trabajo; en las relaciones laborales (en el propio proceso de trabajo, en las relaciones industriales, en las leyes laborales y sociales) y en el mercado de trabajo (se apuesta al libre encuentro de la oferta y la demanda de trabajo en el mercado); 4) En la misma década de los noventa se extiende una estrategia reestructuradora que propone la generación de distritos industriales a través de la introducción de encadenamientos productivos entre los diversos actores que los integraban (proveedores, clientes, productores, prestadores de servicios productivos, y clusters subordinados a grandes corporaciones); 5) Por último, la más reciente propuesta teórica para la reestructuración productiva es la de la sociedad

¹³⁶ *Ibid.*, pp. 5-7.

y la economía del conocimiento y el aprendizaje tecnológico, cuya oferta principal es llevar a cabo una transformación hacia empresas intensivas en conocimiento.¹³⁷

En este sentido, una evaluación del nivel de impacto de estas teorías en las políticas de desarrollo del país puede hacerse teniendo como referente al sector más dinámico de la economía dentro de la reestructuración productiva, cuyo principal exponente –aunque cada vez con menos importancia– son las manufacturas, primordialmente la maquila:

[...] la manufactura mexicana durante la década de los noventa, excepto el gran bache de la crisis de 1995, fue el sector estrella de la Economía, y el objeto principal de la reestructuración productiva hasta el año 2000, con tasas de crecimiento elevadas, a diferencia del 2001 a la fecha en que fueron negativas o bajas. Asimismo, el personal ocupado en la manufactura tuvo su máximo en porcentaje del total ocupado en el 2000, para luego disminuir. Pero, sobre todo la manufactura ha sido importante en la exportación total, llegando a su máximo en el 2001 con 88.6% del total exportado, para luego disminuir en este siglo, más del 50% de esta exportación manufacturera se puede atribuir a la maquila.¹³⁸

Este sector de la economía, por tanto, resulta clave para comprender la magnitud e importancia de los cambios impulsados al nivel de la política económica y el papel de la gestión estatal en este proceso. Al respecto, de la Garza afirma que al margen de las tendencias teóricas prevalecientes en distintos momentos en la academia y su influencia en las políticas de desarrollo, el eje que ha conducido hasta nuestros días la reestructuración productiva es el toyotismo y la flexibilidad:

Podemos concluir que la reestructuración productiva avanzó en México, especialmente durante la década pasada, pero el camino principal seguido no fue el cambio tecnológico en su nivel más alto, sino el cambio en la organización del trabajo, sin flexibilidad numérica ni salarial importantes, no obstante la implantación de bonos de productividad estos no representaron mucho en el total de remuneraciones, la flexibilidad avanzó más al nivel de los contratos colectivos de trabajo en lo funcional permitiendo la movilidad interna, la polivalencia, el ascenso por capacidad [...] En cuanto a la forma principal que en casi todos ha adquirido la reestructuración productiva esta ha seguido la vía del

¹³⁷ Véase Enrique de la Garza. *Los límites de la reestructuración productiva en México*. Ponencia presentada en el V Congreso de Sociología del Trabajo. Montevideo, Uruguay, 2007, pp. 1-4. Consultado en Internet el 20 de noviembre de 2009: <http://docencia.izt.uam.mx/egt/publicaciones/articulos/los%20limites%20de%20la%20reestructuracion%20productiva.pdf>.

¹³⁸ *Ibíd.*, pp. 7-8.

toyotismo, pero un toyotismo a la mexicana: con bajos salarios en general, baja calificación, flexibilidad funcional, alta rotación externa de personal.¹³⁹

La adopción de esta estrategia de desarrollo ha tenido consecuencias muy negativas para la economía, como son la desarticulación de cadenas productivas existentes y la falta de sustitución por otras nuevas; déficit en la balanza de pagos; falta de investigación y desarrollo tanto en el sector privado como en el público, que ha impactado en el incremento de la importación creciente de maquinaria y equipo; fracaso de las empresas productivas por el encarecimiento y la escasez de crédito; y la falta de una política de fomento industrial, para mejorar las condiciones de inserción en el mercado internacional de aquellas empresas sujetas a la competencia exterior.

El toyotismo, hay que subrayarlo, es un régimen laboral basado en la intensificación del trabajo, no en la automatización de los procesos productivos, y es ahí donde de la Garza encuentra los indicios de su agotamiento en México, que se manifiestan en los límites físicos, sociales e incluso identitarios de los trabajadores en relación a la productividad y la eficacia pretendidas por las empresas que lo implementan.¹⁴⁰ Pero además esta condición de la reestructuración productiva evidencia la ausencia de un proyecto serio para crear las condiciones endógenas de desarrollo.

Como hemos venido afirmando la organización del trabajo general es la tarea fundamental para el desarrollo de la relación capital-trabajo, y en esta tarea el Estado tiene una función central en la subvención de la ciencia básica y el fomento a la ciencia aplicada, en la socialización del conocimiento para ponerlo a disposición del capital, en la formación de investigadores, en la coordinación y colaboración de distintas áreas de la ciencia, etc. Pero de igual relevancia resulta la acción estatal en la vinculación de estos desarrollos a los procesos productivos, a través de una política económica que impulse, incentive y proteja el empleo de las capacidades tecnológicas locales, que a su vez estimule la generación de nuevos desarrollos científicos y tecnológicos aplicados a la producción. Pero como hemos visto, ni una cosa ni otra han ocurrido en nuestro país, porque el capitalista nacional no ha necesitado de una intervención estatal en tal sentido para seguir obteniendo ganancias extraordinarias.

¹³⁹ *Ibíd.*, pp. 21-22.

¹⁴⁰ *Ibíd.*, p. 26.

Por eso resulta bastante significativo que lejos de impulsarse un proceso orientado a generar y explotar localmente el trabajo general en este periodo, se hayan limitado los esfuerzos más importantes a la aplicación de innovaciones dentro de la organización del trabajo, proceso que en sí mismo dista mucho de ser un detonante para la generación de progreso.

Un aspecto a destacar es que la transformación de las funciones del Estado bajo el nuevo patrón de crecimiento, de regulador y propietario en la economía a instrumento para el desarrollo eficiente del mercado –y con ello del sector privado sin mediación alguna–, no ha hecho otra cosa que consolidar una visión sobre la ciencia y la tecnología funcional a las necesidades del patrón de crecimiento económico vigente, de tal forma que la apertura al comercio exterior y el privilegio del sector exportador de la economía como eje vector del crecimiento han fomentado la importación de más tecnología y consolidado el subdesarrollo en nuestro país.

En este periodo se desarrolla una nueva concepción sobre la ciencia y la tecnología, que de acuerdo a Germán Sánchez Daza, implica:

- la competencia hará que las empresas mejoren sus niveles tecnológicos;
- será a través de la generación de capacidades de aprendizaje endógenas como dichas empresas podrán fortalecer su competitividad;
- el Estado deberá desregular (simplificar) el mercado de tecnología y dedicarse a las actividades de fomento;
- la generación de tecnología en el país deberá de ser financiada por las empresas y se tratará de fomentar la vinculación con las universidades;
- la investigación en los centros públicos deberá de buscar mayor financiamiento a través de la venta de sus resultados;
- el Estado procurará elevar su gasto, al mismo tiempo que se implementarán políticas de descentralización y eficiencia.¹⁴¹

Rosalba Casas Guerrero señala que a diferencia de los años setenta y ochenta en donde los esfuerzos se centraron en la creación y conservación de la infraestructura y la formación de recursos humanos; a partir de los años noventa los objetivos en la materia se encaminarán a alcanzar la modernización industrial, la apertura comercial y la inserción en el proceso de globalización. En este sentido, las políticas en la materia tuvieron como características principales:

¹⁴¹ Germán Sánchez Daza. *Transnacionalización de la economía mexicana. Consecuencias, posibilidades, perspectivas...* op. cit., p. 10.

1) Una clara distinción y separación entre las políticas orientadas a la ciencia y aquellas relacionadas con la tecnología, estableciéndose una ruptura entre estas actividades; 2) el predominio de criterios de calidad, con base en normas internacionales que fueron impuestos como modelo para la evaluación de estas actividades; 3) la búsqueda de la excelencia en la formación recursos humanos de alto nivel; 4) la asignación de fondos mediante mecanismos de concurso y competencia; 5) una vinculación más estrecha de la investigación básica y el desarrollo tecnológico con el sector productivo y, 6) la reorientación de la demanda de educación superior hacia disciplinas que requiere el desarrollo del país, particularmente, las ciencias exactas y las ingenierías.¹⁴²

Pero esta política en ciencia y tecnología más allá de sus objetivos formales distó mucho de tener el éxito y los alcances que se planteaba, porque para ello dependía a su vez de una política sólida de fomento y vinculación con el aparato productivo, que el modelo de crecimiento económico vigente simplemente no contemplaba.

Por eso, actualmente hay una tendencia a la aplicación de políticas científico tecnológicas en América Latina, que tienen como prioridad la integración y la consolidación de la innovación como un proceso desprovisto de cualquier iniciativa nacional, y en consecuencia, de toda conducción estatal que no sirva a los intereses de las grandes transnacionales. Esto ha generando una tensión en los sistemas de ciencia y tecnología y en sus agentes participantes. De acuerdo a Germán Sánchez Daza, ello se debe a que la innovación es “resultado de un proceso de inversión en capacidades tecnológicas y de aprendizaje, y está sujeta a las presiones del mercado y sus leyes de competencia”.¹⁴³

La innovación en esta versión tiene por objeto entonces poner masivamente a disposición de las grandes transnacionales los desarrollos en ciencia y tecnología, porque quien controla el mercado controla los desarrollos de punta. Algo que no es nuevo, sólo que ahora la globalización neoliberal ha derrumbado las barreras de las soberanías nacionales para que el gran capital invierta estratégicamente sus recursos donde existan las condiciones necesarias para obtener ganancias extraordinarias. Esto es así porque el capitalismo contemporáneo se caracteriza por la promoción del consumo

¹⁴² Rosalba Casas Guerrero. “Ciencia, tecnología y poder. Elites y campos de lucha por el control de las políticas”, en *Convergencia*, mayo-agosto, año/vol. 11, núm. 35. México, Universidad Autónoma del Estado de México, 2004, pp. 98-99.

¹⁴³ Germán Sánchez Daza. “Los sistemas de ciencia y tecnología en tensión: su integración al patrón de reproducción global”, en *Convergencia*, No. 35 mayo-agosto. México, UAEM, 2004.

intensivo, con una demanda diferenciada y segmentada, con una distribución del ingreso muy concentrada y polarizada.

Esto lleva al gran capital a “diversificar” sus fuentes de inversión en ciencia y tecnología en diversos estados nacionales, pero ello no puede llevarnos a concluir, como se ha generalizado desde algunos círculos académicos, que el capital se ha “desterritorializado”.¹⁴⁴ El hecho de que las inversiones se diversifiquen, no implica que las ganancias resultantes de ello se queden en el país de origen. Más aún, esos desarrollos científicos y tecnológicos en nada contribuyen al desarrollo nacional si no son vinculados a los procesos productivos endógenos.

En realidad el objetivo es que las fuerzas del mercado (mercado controlado por el gran capital) orienten y determinen la eficiente utilización de los recursos. La ciencia y la tecnología como mercancías tienen que ser adquiridas y producidas con criterios de calidad y competitividad, por lo que el desarrollo industrial del país quedará restringido a las ramas de la economía vinculadas de manera más estrecha con el mercado de exportación y las grandes transnacionales (vía adquisición de nuevos desarrollos o producción de los mismos). El resultado lógico de ello sería que estas ramas contagien su desempeño al resto de la economía nacional a través de encadenamientos productivos.

Pero ello no ha ocurrido así en nuestro país porque el mercado no ha sido la tabla raza que determina la eficiente utilización de los recursos. El estado mexicano ha jugado un papel muy importante como impulsor del patrón de crecimiento económico, generando las condiciones para que las facciones de capital locales y extranjeras vinculadas al mercado externo se beneficien de éste. Pero no se ha preocupado por generar las condiciones generales para la explotación endógena de la ciencia y la tecnología, porque ello implicaría un proyecto nacional que tuviera como objeto fortalecer el mercado interno e impulsar el desarrollo de las relaciones sociales de

¹⁴⁴ Un trabajo emblemático por su difusión en el que se maneja esta tesis, y que desde su publicación causó una gran polémica fue *Empire. Without Imperialism* de Michael Hardt y Toni Negri. Los autores afirman que el capitalismo global gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología, ahora funciona como un “imperio” autónomo que está gobernado únicamente por el mercado y las multinacionales. Son muchas las críticas que ha recibido este trabajo. Pero tal vez la más completa, que mereció la publicación de un libro a manera de réplica es *Imperio con imperialismo. La dinámica globalizante del capitalismo neoliberal* de James Petras y Henry Veltmeyer... op. cit., donde los autores encauzan sus esfuerzos a demostrar que la función e importancia del activismo del Estado en el capitalismo contemporáneo es infravalorada en el trabajo de Hardt y Negri, ya que cumple funciones económicas, políticas, militares y culturales torales para el desenvolvimiento de la globalización en el capitalismo neoliberal.

producción en el país, y en consecuencia, una burguesía local preocupada por hacerlo. Pero esto, no ocurre así.

Este ha sido el principal escollo para que en nuestro país no se genere una *gestión originaria del desarrollo*. Históricamente el capitalista nacional no ha tenido la preocupación de impulsar proyectos que tengan por objeto la generación de progreso endógeno, porque la satisfacción de las demandas inherentes a la acumulación capitalista que están condicionadas por la obtención de ganancias extraordinarias y el incremento de la productividad, han sido satisfechas con el progreso generado en el polo de los países subdesarrollados. No ha existido un desenvolvimiento propio de la burguesía nacional, por ello concuerda con la inserción subordinada de nuestras economías, y el Estado, en tanto organización del poder político de esta clase social, no ha hecho sino crear la condiciones para la reproducción de la acumulación capitalista en su forma subdesarrolla.

Sólo basta echar un vistazo a algunas de las percepciones que los empresarios tienen sobre la tecnología, para confirmar este punto. Enzo Faletto reflexiona al respecto, retomando los resultados de un estudio de la CEPAL sobre las imágenes sociales de la modernización y la transformación tecnológica, en el que se recogen las opiniones sobre esto tópicos de empresarios, gerentes, técnicos y dirigentes estatales de empresas privadas y públicas de seis países latinoamericanos dedicadas a una variedad importante de actividades económicas. En este sentido, nos interesa retomar de este análisis las opiniones y actitudes empresariales:¹⁴⁵

- Del proceso de innovación tecnológica del cual se sienten agentes importantes, destacan su capacidad de ruptura con el presente y una capacidad de adaptación a lo que se está produciendo en el mundo externo, por lo que perciben que el modelo de desarrollo ya ha sido generado en los países considerados modernos.
- Perciben la tecnología de punta como un ingrediente esencial para poder ingresar en condiciones de competitividad al mercado externo, lo cual resulta su máxima aspiración.

¹⁴⁵ Enzo Faletto. *Dimensiones sociales, políticas y culturales del desarrollo*, compilado por Manuel Antonio Garretón. Bogotá, Siglo del Hombre Editores/CLACSO, 2009, pp. 287-293.

- Señalan que en el mercado externo las pautas de producción e innovación tecnológicas ya está impuestas por un sistema de producción internacional que ha homogenizado procesos, por ello ven muy limitadas las posibilidades de desarrollos tecnológicos propios.
- Su mayor preocupación es lograr una buena transferencia tecnológica del exterior y hacer un buen uso de la existente, por ello dan una gran importancia a la asociación con firmas o empresas extranjeras al considerar que el aporte de éstas es precisamente la capacidad tecnológica
- Consideran que las investigaciones que se desarrollan en las universidades nacionales tienen un carácter altamente abstracto, están alejadas de sus necesidades productivas inmediatas y por lo tanto son de escasa utilidad.
- Asignan al Estado tareas relativas a la asignación de incentivos al desarrollo, definición de estrategias de desarrollo y definición de prioridades.
- Consideran que la política tecnológica debe estar a cargo del Estado y su papel no pasa de ser simples coadyuvantes, ya que su verdadera función social es el éxito de la empresa.

Se puede concluir entonces, que el empresario latinoamericano -y el mexicano no es la excepción- no tiene un interés inmediato en generar las condiciones para un desarrollo científico y tecnológico propio, porque no le representa un problema inmediato para la acumulación de capital ya que este proceso se desarrolla importando progreso generado en el exterior. Si bien le asigna un papel central al Estado en la generación y explotación local de la ciencia y la tecnología, no considera ésta una función vital de la organización política para alcanzar el desarrollo económico propio. Más aún, no consideran relevante su intervención en la formulación y aplicación de una política global de desarrollo científico y tecnológico.

En el actual patrón de crecimiento económico, ante la ausencia de un proyecto nacional con la suficiente fuerza como para cambiar el actual estado de cosas, las políticas en ciencia y tecnología no han hecho otra cosa que evidenciar la ausencia de una gestión estatal del desarrollo en nuestro país. De hecho demuestran una activa participación del Estado en un sentido inverso, es decir, en la creación de condiciones

generales para subsumir la generación de progreso endógeno a los intereses de las grandes trasnacionales.

Los resultados de las políticas en ciencia y tecnología del país en los últimos años, nos confirman la idea anterior. En el Plan Especial de Ciencia y Tecnología (PECyT) se partió de una estrategia de largo plazo denominada “México: visión 2025”, conformada por cuatro etapas en la que la primera comprendía los años de vigencia del gobierno de Vicente Fox (2001-2006). La meta que se contemplaba alcanzar una vez concluido este plazo era la estructuración institucional del sistema de ciencia y tecnología, con el incremento de la inversión del país en investigación y desarrollo a 1.5 % del PIB; así como la consolidación de la plataforma inicial del Sistema Nacional de Centros de Investigación para cubrir las áreas estratégicas del conocimiento de mayor dinamismo mundial, y contar con el número suficiente de investigadores y de personal de posgrado con capacidad para generar y asimilar los avances del conocimiento y las tecnologías provenientes del exterior, con un impacto positivo en la producción científica. Con ello se esperaba que México abandonara el grupo de países con baja competitividad en ciencia y tecnología y se incorporara al grupo de países competitivos, de acuerdo a las clasificaciones del International Institute for Management Development.¹⁴⁶

En un estudio publicado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en el 2006 se evaluaron, entre otras cosas, los objetivos y metas planteados en el PECyT a partir de tres dimensiones con sus respectivos indicadores: a) el financiamiento a las actividades de ciencia y tecnología (inversión nacional en ciencia y tecnología (C y T) y gasto en investigación y desarrollo (I y D) como % del PIB, el porcentaje del gasto total del gobierno federal destinado a C y T, así como la participación del sector productivo en el gasto en I y D); y b) la formación de recursos humanos (número de personas dedicadas a I y D, número de personal dedicado a I y D por cada 1000 de la PEA, % de investigadores en el sector productivo, y formación de doctores por año); y c)

¹⁴⁶ Poder Ejecutivo Federal. *Programa Especial de Ciencia y Tecnología*. México, CONACYT, 2001, p. 61.

competitividad (posición mundial en infraestructura científica y posición mundial en infraestructura tecnológica).¹⁴⁷ A continuación sintetizamos algunos de sus resultados.

- El gasto nacional en ciencia y tecnología entre 2000 y 2005 se incrementó de 0.59% a 0.79% como porcentaje del PIB, cifra muy inferior a la contemplada en el PECyT que se esperaba fuera del 1.5% del PIB, 1% para investigación y desarrollo, 0.20% para posgrado y 0.30% para servicios científicos y tecnológicos. En ninguno de los tres renglones se alcanzó la meta trazada originalmente, ya para 2005 la inversión fue de 0.49% en I y D, 0.12 en posgrado y 0.18% en servicios.
- El gasto federal en ciencia y tecnología representó apenas el 0.37% del PIB en 2005, cuando en el PECyT se esperaba que fuera de 1% del PIB para entonces. Además, para 2005 el gasto total del Gobierno Federal destinado a C y T era de apenas 2.12%, cuando en el PECyT se esperaba que fuera de 4% para entonces. El CONACYT que es el máximo órgano público regulador de las actividades de C y T en México ejerció menos de 15% del gasto gubernamental destinado para ello.
- México es uno de los países integrantes de la OCDE con el porcentaje de gasto en I y D respecto al PIB más bajos, apenas del 0.41% cuando el promedio es de 2.26%.
- El número de recursos humanos dedicados a las actividades de investigación y desarrollo ascendía en 2005 a 61,921 personas, de los cuales sólo 55.7 % eran investigadores, cifra inferior a la proyectada en el PECyT calculada en 80,000.
- En 2002 había sólo .6 investigadores por cada mil integrantes de la fuerza de trabajo, cuando en países como Japón, Francia o España este indicador alcanzó en ese orden 10, 7 y 4.7 investigadores por cada 10 mil integrantes de la fuerza de trabajo.
- El porcentaje de personal dedicado a la I y D ocupado en el sector productivo ascendía al final del periodo a 31.7%.

¹⁴⁷ Santos López Leyva y Lidyeth Azucena Sandoval. “Un Análisis de la política de ciencia y tecnología en México (2001-2006)”, en *Estudios Sociales*, julio-diciembre, año/vol. XV, No. 30. México, Universidad de Sonora, 2006, p. 13.

- La formación de doctores por año en 2006 fue de 1,874 graduados, cifra inferior a los 2,300 proyectados en el PECyT para ese año.
- La producción científica nacional se ha incrementado en los últimos años, así lo demuestran las cifras de la participación de la producción científica mexicana en el total mundial que en el 2000 era de 0.64% y en el 2005 de 0.77%. Sin embargo, este crecimiento no es comparable al que registra Brasil, que se coloca por encima de nuestro país contribuyendo con 1.42% de la producción científica mundial, y si se compara con la participación mundial del conjunto de los países de la OCDE en producción de artículos, México pasa a ocupar los últimos lugares por debajo de países como Turquía, Polonia, Finlandia y Grecia.
- La capacidad tecnológica decreció, pues la balanza de pagos tecnológica ha incrementado su balance negativo y pasó de -238.2 millones de dólares en 1996 a -511.7 millones en el 2004, el incremento entonces en este déficit se calcula en 115%.
- Las patentes solicitadas en el país ascendían a 14,436 en 2005, de las cuales sólo 584 fueron tramitadas por nacionales y el resto por extranjeros. Además, el 90.1% de las patentes fueron solicitadas por empresas grandes, 7.6% por inventores independientes, 1.7% por algún Instituto de Investigación y 0.4% por pequeñas empresas.

Se concluye entonces que las políticas en ciencia y tecnología en nuestro país distan mucho de contar con el apoyo del Estado para alcanzar una explotación del trabajo general y vincularlo a los procesos productivos locales. Con el simple ejercicio de evaluar los rasgos más generales de la política estatal en este rubro, podemos encontrar un desfase total entre los objetivos anunciados y los resultados palpables, lo que demuestra la falta de compromiso por parte del Estado y la burguesía nacionales para emprender un desarrollo desde dentro de nuestra formación social.

Una vez agotado este punto, debemos pasar ahora a analizar los rasgos más generales de la fisonomía de la estructura socioeconómica que ha resultado del desenvolvimiento de la acumulación capitalista en su forma subdesarrollada en nuestro país, bajo las dos modalidades de crecimiento tratadas hasta aquí. Esto con el objetivo de

encontrar rasgos comunes que nos expliquen el tipo de relaciones de dominación establecidas entre el Estado y la sociedad y entre ésta y aquél, así como sus especificidades bajo patrones de crecimiento distintos.

Reflexiones finales.

A diferencia de otras teorías entendemos el desarrollo, como desarrollo de la relación de capital que dio origen a la división entre trabajo general y trabajo inmediato, y a la ausencia de esta división como subdesarrollo. De este modo, desde que la producción en el capitalismo llevó a la incursión de la gran industria, que se manifiesta en la división entre *trabajo general* (todo trabajo científico aplicado al desarrollo tecnológico y los procesos productivos) y *trabajo inmediato* (todo trabajo inmerso en la dinámica inmediata del proceso productivo), el desarrollo estuvo determinado por la explotación del *trabajo general* por el capital. En contraste, el subdesarrollo no puede ser más que lo inverso, una situación en la que el capital no ha logrado explotar el *trabajo general*, lo que no implica que lleve a acabo la explotación del trabajo sin recurrir a sus propios fundamentos.

Es aquí donde identificamos la función económica más importante que cumple el Estado como parte de sus tareas en tanto organización política de la clase burguesa: la *gestión estatal del desarrollo*, que no es otra cosa que el impulso al desarrollo científico y tecnológico aplicado a los procesos productivos, así como al abastecimiento de bienes de consumo colectivo y capital constante social.

El imperialismo es el principal obstáculo para que los países subdesarrollados emprendan una gestión estatal originaria del desarrollo, ya que dicha condición está inscrita en las relaciones que este tipo de naciones establecen con los países desarrollados, quienes basarán su dominio precisamente en el monopolio del desarrollo científico y tecnológico, complementándolo con su hegemonía militar, ideológica y cultural.

En la mayoría de los países latinoamericanos se registra un fuerte activismo estatal en la creación de las condiciones generales para que la acumulación capitalista transcurra en su forma subdesarrollada, esto es lo que denominamos gestión estatal del subdesarrollo.

Al analizar el caso mexicano se demuestra que la gestión estatal del subdesarrollo en el país es un rasgo particularmente revelador de la forma en que en nuestra formación social, se ha impulsado la acumulación capitalista. Dentro del patrón de crecimiento orientado al mercado externo, dos grandes etapas caracterizan el papel jugado por el Estado mexicano dentro de este periodo histórico, que podemos caracterizar como de despegue y consolidación y de agotamiento de la industrialización con sustitución de importaciones. De igual forma, dentro de estas etapas se pueden distinguir dos enfoques distintos en relación a la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo económico del país. En las etapas de despegue y consolidación, éste es un problema de crecimiento industrial y de producción de nuevos productos y procesos, que requiere de la renovación de la planta productiva a partir de la importación de maquinaria; y en la etapa de agotamiento de la ISI se adopta un discurso nacionalista con una visión más crítica hacia el capital extranjero, donde se empieza a cuestionar el carácter dependiente del proceso de industrialización y a ubicar a la subordinación tecnológica como el elemento central de esa dependencia, sin que se tomen las medidas necesarias para impactar sobre ello.

Este rasgo que caracteriza la intervención del Estado en la economía y la forma en que ésta influye en aquél, durante el patrón de crecimiento relativo llevó a una crisis de la planta industrial mexicana, que había pasado a ser el motor de la economía al final del ciclo, y para entonces se había vuelto totalmente dependiente del progreso generado en los Estados Unidos.

La salida de esta crisis tuvo que hacerse impulsando la introducción de la ideología neoliberal en la política económica, destacándose la apertura comercial, la retirada del Estado de la economía y la retirada de la organización estatal de sus responsabilidades sociales. Se impulsó la reestructuración productiva como eje de las transformaciones en desarrollo, incorporándose nuestro país de manera subordinada a los ciclos de la acumulación mundial de manera subordinada, bajo los esquemas del toyotismo y la flexibilidad laboral en los centros productivos.

Este proyecto ha llevado a la desarticulación de cadenas productivas existentes y la falta de sustitución por otras nuevas; déficit en la balanza de pagos; falta de investigación y desarrollo tanto en el sector privado como en el público, que ha

impactado en el incremento de la importación creciente de maquinaria y equipo; fracaso de las empresas productivas por el encarecimiento y la escasez de crédito; y la falta de una política de fomento industrial, para mejorar las condiciones de inserción en el mercado internacional de aquéllas empresas sujetas a la competencia exterior.

Con ello además se ha consolidado actualmente una visión sobre la ciencia y la tecnología funcional a las necesidades del patrón de crecimiento económico vigente, de tal forma que la apertura al comercio exterior y el privilegio del sector exportador de la economía como eje vector del crecimiento han fomentado la importación de más tecnología y consolidado el subdesarrollo en nuestro país.

En la gestión estatal del subdesarrollo en los dos periodos históricos abordados en este trabajo, existe un rasgo persistente y es la ausencia de proyectos de la burguesía nacional que tengan por objeto la generación de progreso endógeno, porque la satisfacción de las demandas inherentes a la acumulación capitalista -condicionadas por la obtención de ganancias extraordinarias y el incremento de la productividad- han sido satisfechas con el progreso generado en el polo de los países subdesarrollados. En consecuencia no ha existido un desenvolvimiento propio de la burguesía nacional, por ello concuerda con la inserción subordinada de nuestras economías, y el Estado, en tanto organización del poder político de esta clase social, no ha hecho sino crear la condiciones para la reproducción de la acumulación capitalista en su forma subdesarrolla.

Actualmente la *innovación* científica y tecnológica es el discurso que desde la academia se está impulsando para generar propuestas para la generación de progreso en el país, pero en realidad tiene por objeto poner masivamente a disposición de las grandes transnacionales la infraestructura y los desarrollos en ciencia y tecnología, gracias a un eficaz control de los mercados internacionales. Algo que no es nuevo, sólo que ahora la globalización neoliberal ha derrumbado las barreras de las soberanías nacionales para que el gran capital invierta estratégicamente sus recursos donde existan las condiciones necesarias para obtener ganancias extraordinarias. Sin embargo, esta estrategia no resuelve el problema de subdesarrollo de la relación capital-trabajo en nuestro país, ya que los beneficios de la explotación local del trabajo general no repercuten en los procesos productivos locales, y al contrario, estos beneficios son apropiados y utilizados

en su beneficio por las grandes trasnacionales en los estados desarrollados. Esta condición nos da cuenta de la activa participación del Estado en la creación de condiciones generales para subsumir la generación de progreso endógeno a los intereses de las grandes trasnacionales.

CAPÍTULO III

Los Excedentes de Población: Rasgo Estructural del Subdesarrollo en Nuestro País

En este capítulo nos abocaremos a analizar las causas profundas de la problemática social resultante de una estructura social caracterizada por la ausencia de una gestión estatal del desarrollo. Será el propio análisis de relación de capital, el que nos permita entender por qué bajo el subdesarrollo se crea de manera estructural una población excedente, y cómo ésta se convierte en un obstáculo para la democracia liberal.

El caso mexicano representa un caso paradigmático al confirmarse a lo largo de todo el siglo XX y el primer lustro del presente siglo, la existencia de una población excedente dentro de la acumulación capitalista. Su presencia bajo la vigencia del patrón de crecimiento relativo se desborda bajo la modalidad de crecimiento absoluto, convirtiéndose en un potencial foco de descontento social.

Su persistencia es un obstáculo para vigencia de la democracia liberal, por lo que las formas autoritarias en el ejercicio del poder político, así como la persistencia del corporativismo y el clientelismo político como formas de relación entre el Estado y la sociedad y entre ésta y el Estado, son los rasgos más trascendentes que explicarían las características que ha adoptado la dominación en México.

Por ello, a continuación nos abocaremos a definir el concepto excedentes de población y a dimensionar las formas y tendencias en las que éstos se han desdoblado en nuestro país, relacionando su presencia con las modalidades de crecimiento económico vigentes en el periodo estudiado y las características que han definido la gestión estatal del subdesarrollo, analizadas en el capítulo anterior.

Al no contar con estudios empíricos sobre esta categoría, ni mediciones dirigidas a cuantificar desde esta perspectiva teórica sus dimensiones, se busca encontrar indicadores generales que nos ayuden a capturar los rasgos más evidentes de su magnitud, así como las características de los procesos sociales que nos permitan dar cuenta de su presencia y desdoblamiento en la estructura socioeconómica.

Esta aproximación al tema nos permitirá orientar la discusión en torno a la problemática social que encierra el subdesarrollo y las tendencias que genera su impacto en el ámbito político.

3.1 Subdesarrollo y excedentes de población.

El desarrollo de la relación capital-trabajo, al descansar en el desarrollo de la ciencia aplicada a la tecnología para el desarrollo de los procesos productivos, estructuralmente (es decir, necesariamente) tenderían a expulsar fuerza de trabajo a partir de la elevación de la composición orgánica de capital, si es que las empresas (particularmente los monopolios) no quieren ver una reducción en su tasa de ganancia.

Pero esto ocurre de manera muy diferente entre las distintas categorías de países. Los países desarrollados, al producir no sólo para su mercado sino para abastecer a todos aquellos pertenecientes a la periferia, no generan lo que Marx denominara un Ejército Industrial de Reserva, al menos no un número de desempleados suficiente para considerarlo como tal y con las características que él le atribuyera.

[...] si una sobrepoblación obrera es el producto necesario de la acumulación o del desarrollo de la riqueza sobre una base capitalista, esta sobrepoblación se convierte, a su vez, en palanca de la acumulación capitalista, e incluso en *condición de existencia del modo capitalista de producción*. Constituye un *ejército industrial de reserva a disposición del capital*, que le pertenece a éste tan absolutamente como si lo hubiera criado a sus expensas. Esa sobrepoblación crea, para las variables necesidades de valorización del capital, el material humano explotable y siempre disponible, independientemente de los límites del aumento real experimentado por la población. [Subrayado en el original].¹⁴⁸

De esta forma, en los países subdesarrollados no sólo existe un numeroso *ejército industrial de reserva*, sino una población absolutamente redundante para la producción. Esto genera una exclusión social estructural en los países subdesarrollados hacia la gran masa de desposeídos, que en la medida en que los vínculos de subordinación hacia el imperio se estrechan, tiende a aumentar. Esto se manifiesta en elevados niveles de migración, pobreza, violencia, inseguridad pública, actividades informales, etcétera, que son las repercusiones sociales más visibles de los estragos que genera la rapiña imperial.

Así, la exclusión social que se gesta en el proceso productivo, deviene en límites estructurales para la inclusión política. La democracia en este contexto, está permanentemente acechada por el fantasma de la ausencia de legitimación social, y se circunscribe a un conjunto de derechos y libertades consagrados en el ámbito jurídico

¹⁴⁸ Karl Marx. *El capital*. Tomo I. México, Siglo XXI Editores, 1975, pp. 786-787.

pero que en la práctica son irrealizables, por los límites que el subdesarrollo y el imperialismo, dos caras de la misma moneda, representan.

Víctor Figueroa ha desarrollado el concepto *población excedente* para dar cuenta de esta realidad histórica, diferenciándolo del concepto *población necesaria*, en los siguientes términos:

[...] llamaremos *población necesaria* al sector constituido tanto por los trabajadores ocupados directamente en la valorización del capital como por el ejército de reserva. Limitaremos el concepto de este último a sus formas fluctuante y latente. Llamaremos *población excedente* al resto, esto es a la sobrepoblación en sentido estricto, y distinguiremos, por un lado, un excedente relativo, para referirnos a los trabajadores que desde fuera de la relación capital-trabajo asalariado realizan actividades que guardan algún vínculo con la acumulación, y, por otro, un excedente absoluto, donde se incluyen los trabajadores cuya actividad carece de vínculo con la valorización.¹⁴⁹

Este autor señala que el origen de la *población excedente* en América Latina resulta de su condición subdesarrollada, es decir, de la ausencia en la relación de capital de la división que separa al trabajo general del inmediato, lo que se traduce en una transferencia hacia los países desarrollados de la capacidad de la acumulación para generar empleo. Por tal razón, en el subdesarrollo se genera no sólo un ejército de reserva sino una *población excedente*, que se reproduce fuera del proceso de valorización del capital.

Esta situación repercute directamente en el proceso de acumulación, ya que bajo el subdesarrollo ésta consume más de lo que produce, y en el polo desarrollado produce más de lo que consume. La falta de producción en un polo tiende a satisfacerse con el exceso de producción en el otro. A su vez, esto impacta en la ocupación, ya que en el subdesarrollo se genera una población excedente, mientras en el polo desarrollado existe una insuficiencia del ejército de reserva. De esta forma, la población que no puede ocuparse en los países subdesarrollados tenderá a cubrir el déficit que se genera en el ejército de reserva de los países desarrollados, manifestándose en forma de flujos migratorios.

Se pueden adelantar algunos efectos sociales más generales a partir de la existencia de una *población excedente* en la región latinoamericana sobre la población

¹⁴⁹ Víctor M. Figueroa. *Excedentes de población...* op. cit., p. 20.

necesaria: precarización del trabajo, flexibilidad laboral, salarios bajos, bajos niveles de bienestar, etc. Pero para toda la población que resulta excluida estructuralmente de los procesos productivos, la situación del desempleo tiende a desarrollar la disposición a hacerse para sí de algún oficio o de habilidades que le permitan sobrevivir. Dicha ocupación podrá guardar algún vínculo con la acumulación, o simplemente quedar fuera de la misma.

De acuerdo a lo anterior, estos trabajadores son “productores subsidiarios de bienes y servicios”. No producen plusvalor y no acumulan capital, y por lo tanto no son obreros ni capitalistas, pero se han logrado incrustar en la sociedad: aportan a los procesos generales de la acumulación; compiten con la organización capitalista de alguna actividad mientras hace posible la valorización de otros bienes; y llenan espacios que la acumulación no ha copado. Sin embargo, no son una condición para la existencia del modo de producción capitalista. El autor concluye haciendo una clasificación de la *población excedente* según el tipo actividad que realizan, la cual a continuación resumimos¹⁵⁰:

- a) *Excedentes relativos en el plano de la producción y reparación de bienes*: el capital pirata; la economía campesina; pequeñas empresas que operan aportando materias primas para su posterior procesamiento capitalista; contingentes laborales al servicio de trabajadores asalariados, como albañiles, electricistas, herreros, carpinteros, entre otros; la producción artesanal no capitalista; y los distintos talleres para la reparación de toda clase de bienes en los que el dueño no obtiene ingresos suficientes para acumular.
- b) *Excedentes relativos en la esfera de la realización de mercancías*: el pequeño comercio establecido; los vendedores callejeros, tanto los que venden bienes obtenidos directamente del fabricante capitalista o del capital comercial, como los que venden bienes creados por medio de la producción pirata.
- c) *Excedentes más allá de la valorización del capital*: quienes venden bienes robados; quienes recolectan y ofrecen bienes usados (ropa, refacciones, instrumentos, muebles); los que mercadean productos que se encuentran más o menos disponibles en la naturaleza, como frutos, plantas medicinales, animales (conejos, víboras, ratas de

¹⁵⁰ Ver *Ibíd.* p.p. 33-47.

campo); los que arriban al mercado con productos de la parcela; los que ofrecen servicios eventuales no indispensables a los hogares; y quienes viven de la caridad de la población.

d) *El caso del trabajo doméstico*. El autor señala que si éste “contribuye a la producción de la fuerza de trabajo necesaria, la población dedicada a esas tareas también forma parte de la población necesaria. Será una actividad relativamente excedente, si la población que se beneficia con ello también lo es. Por lo mismo, si el capital decreta la redundancia absoluta para un sector de trabajadores, de igual modo ocurrirá con el trabajo doméstico invertido en su reproducción.”¹⁵¹

De esta forma, el concepto *población excedente* nos permite comprender la magnitud de un fenómeno que ha estado ausente, al menos en esta perspectiva, de los estudios sobre el desarrollo y la democracia. Esto nos permite comprender la dimensión social de nuestro tema de estudio, que enriquecerá sin duda su nivel explicativo. Porque es un hecho que la democracia aún en su mínima definición como participación electoral es un régimen de inclusión; lo cual históricamente -pero de manera mucho más profunda en el neoliberalismo- ha chocado con la pobreza estructural que de manera sistemática reproduce la región, ya que esta es una tendencia hacia a la exclusión de amplias capas de la población.

Por otra parte, la idea de ciudadanía en la democracia, hace referencia a por lo menos cuatro dimensiones en el individuo: autonomía, igualdad, sentimiento de eficacia y responsabilidad. En consecuencia, la exclusión social provoca un sentimiento de ineficacia personal para sobrevivir, de inseguridad ante la falta o precariedad del trabajo, a la represión, a los peligros de las ciudades azotadas por la violencia generalizada; la responsabilidad se identifica menos con la pertenencia a la nación que con la familia y el vecindario; la igualdad es negada en todos los órdenes de la vida.

Esto ha llevado a que dada la precariedad en las condiciones de vida, se privilegie el valor de la seguridad a la espera de la intervención de un agente externo, que dé solución a los propios problemas. Es por eso que el clientelismo político erosiona la ciudadanía en los países subdesarrollados, aunque esta afirmación no debiera

¹⁵¹ Ibíd. 46.

circunscribirse exclusivamente a los más pobres. El clientelismo se registra también y en una escala mucho mayor en los niveles más altos las clases sociales y el poder.

Los derechos civiles y políticos pueden tener vigencia, pero sin un ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, la democracia permanentemente se verá imposibilitada para la creación de consensos, y en ello una gestión estatal precaria del desarrollo es determinante, ya que tiende a excluir desde el seno de la producción material de forma estructural a amplios sectores de la población.

¿Cómo legitimar así la dominación política de la burguesía local? Esta disyuntiva es la que explicaría la recurrencia en los países subdesarrollados de regímenes autoritarios o totalitarios. Aquí la democracia liberal no ha logrado echar raíces precisamente porque el ejercicio de la ciudadanía se desenvuelve de manera precaria obstaculizando la creación de consensos, de ahí la recurrencia al ejercicio autoritario del poder.

La burguesía en el subdesarrollo no puede desplegar a largo plazo métodos pacíficos de dominación, precisamente porque los antagonismos de clase son más evidentes para los dominados, lo que no quiere decir que aquí la dominación “penda de un hilo”, sino que la forma democrática liberal del Estado no siempre es viable para ejercer dicha dominación.

3.2 Patrones de crecimiento y excedentes de población en México.

Ya hemos expuesto los principales problemas de tipo económico que traído consigo el escaso interés del Estado por promover la generación y explotación local de la ciencia y la tecnología aplicada a los procesos productivos, resultado de una visión estatal que no ha contemplado dicho elemento como fundamental en la gestión del desarrollo. Esta tendencia representa un hilo conductor dentro de nuestra historia ya que, por un lado, bajo el patrón de crecimiento económico relativo se impuso la visión que sostenía que la importación de bienes intermedios y bienes de capital necesarios para la industrialización en automático difundirían el conocimiento objetivado en ellos en beneficio del progreso local; y por otro, bajo el patrón de crecimiento absoluto se ha impuesto la idea desde los círculos académicos, que la ciencia y la tecnología en tanto mercancías deben ser compradas en el mercado global y producidas para éste, para lo

cual el Estado sólo debe ser un facilitador permitiendo la libre concurrencia de los agentes involucrados en estos procesos. Sin embargo, ambas visiones han producido y reproducido una estructura socioeconómica subdesarrollada, caracterizada por la ausencia de gestión de progreso interno que se ha traducido en una atrofia histórica para absorber importantes contingentes de fuerza de trabajo en los procesos productivos. De la caracterización de esta estructura, nos ocuparemos ahora.

A partir del gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas el patrón de crecimiento económico se había basado en una economía de mercado con una importante intervención del Estado como rector y promotor activo del crecimiento económico, a través de la regulación del comercio exterior y de los mercados de bienes y servicios básicos; la inversión en áreas estratégicas de la economía; y la promoción del bienestar social con legislaciones agrarias y labores e instituciones sociales en salud, educación vivienda y servicios básicos. José Luis Calva señala al respecto:

La fundación del banco central en los años veinte y de la banca nacional de desarrollo en los treinta; el fuerte activismo estatal en la construcción de la infraestructura básica (hidroagrícola, carretera); las políticas sectoriales orientadas al fomento de la agricultura (con múltiples instrumentos específicos: política de precios de garantía, CEIMSA-CONASUPO) y al fomento de la industria manufacturera (con sus instrumentos impulsores de sustitución de importaciones); la intervención directa del Estado en el desarrollo de la industria energética, que arranca de la fundación de la Comisión Federal de Electricidad en los años treinta y de la nacionalización de la industria petrolera, fueron acciones plenas de audacia e iniciativa histórica de un proyecto económico nacional que emergió con la revolución mexicana.¹⁵²

Por una parte, podemos estar de acuerdo con el autor en que estas acciones y estrategias implementadas entonces por el Estado formaban parte de un “proyecto económico nacional”, si en esto va implícita la acotación que dicho proyecto estaba subordinado a las demandas de la acumulación capitalista en el subdesarrollo. Pero, por otra, consideramos que es una afirmación excesiva señalar que dicho proyecto “emergió con la revolución mexicana”, porque en realidad éste surge a casi dos décadas del término de la revolución como respuesta a los estragos que la recesión del capitalismo mundial estaba generando en la economía mexicana a mediados de la década de los

¹⁵² José Luis Calva. “México: la estrategia económica 2001-2006. Promesas, resultados y perspectivas”, en *Problemas del Desarrollo*, Vol. 36, núm. 143, octubre-diciembre, 2005, p. 62. Consultado en Internet el 30 de julio de 2009: <http://www.ejournal.unam.mx/pde/pde143/PDE14303.pdf>.

treinta. Hasta entonces el modelo exportador primario heredado del porfiriato siguió vigente en el país sin alteración alguna.

En este sentido, si la realización de muchos de los postulados sociales de la revolución fueron coincidentes con el funcionamiento del nuevo proyecto económico, éstos no fueron los que determinaron en última instancia sus objetivos, sino que *fueron las prioridades de la acumulación capitalista en el país las que marcaron en realidad su rumbo*.

Esta acotación es de la mayor importancia para nuestra explicación, ya que nos interesa tomar distancia de toda aquella tradición de estudios sobre el funcionamiento de la estructura socioeconómica en el periodo, que encuentran los orígenes del patrón de acumulación impulsado entonces, ya sea en los postulados de la revolución mexicana, o de manera más concreta en la Constitución de 1917, que vendría a ser la máxima expresión de aquéllos. Esto ha llevado a hacer una apología de un discurso que en los hechos nunca guió las decisiones que en materia económica tomó entonces el Estado, y sobre todo lleva a confundir la explicación de la problemática social que el propio modelo generó y las salidas que se dieron entonces, porque todo se resume a encontrar en una supuesta contradicción entre la acumulación capitalista y los postulados sociales de la revolución el eje de la explicación, cuando tal contradicción –al menos desde la óptica del Estado en el terreno económico- nunca existió.¹⁵³

Lo cierto es que el activismo del Estado en el funcionamiento de la economía fue prudente hasta la década de los setenta, cuando el patrón de crecimiento comenzó a

¹⁵³ De este punto hay varios ejemplos históricos, tal es el caso del freno que el propio Lázaro Cárdenas puso a su política de masas al finalizar su sexenio ante el fuerte activismo que la derecha empezó a registrar entonces, pues la posibilidad de que el país se pudiera enfrentar a una nueva guerra civil de continuar dicha tendencia habría puesto en peligro la vigencia del proyecto de acumulación capitalista gestado entonces. De hecho, la renuncia a la posibilidad de reformar la Constitución para reelegirse en el cargo y la nominación *de facto* que hizo en la persona de Manuel Ávila Camacho (vinculado a sectores conservadores de la sociedad) para sucederlo en el mismo, fueron señales claras de que el proyecto nacionalista-populista estaba llegando a su fin. Aquí la prioridad fue el proyecto económico, antes que la realización de los postulados de la revolución.

Otro ejemplo histórico es el gobierno de Miguel Alemán, donde se da por terminada la unidad nacional impulsada en el sexenio de Manuel Ávila Camacho, y se emprende una auténtica contrarreforma dirigida a echar para atrás muchas de las reformas iniciadas desde el sexenio de Cárdenas, como el freno a la reforma agraria, la restricción a los recursos que se destinaban al ejido para canalizarlos al sector empresarial, la elevación de los límites de la pequeña propiedad agrícola, así como la introducción del derecho de amparo para los dueños de la tierra. Limitó también las reivindicaciones obreras sobre la distribución del ingreso, y para ello intervino en la vida interna de las organizaciones de trabajadores más autónomas para imponer a incondicionales suyos. Al igual que en el ejemplo anterior, el criterio que se impuso fue ante todo el económico.

agotarse. Hasta entonces había estado vigente lo que varios autores han denominado un *pacto social* entre el Estado postrevolucionario y la sociedad organizada corporativamente,¹⁵⁴ cuyo objetivo era el desarrollo nacional y la integración del pueblo en el sector moderno que se pretendía construir. El acuerdo partía del compromiso estatal de redistribuir los beneficios del progreso económico (siempre y cuando se produjeran), mientras los sectores corporativos se comprometían a subordinar sus intereses inmediatos a los intereses “superiores” de la nación.

Este pacto social sólo puede ser explicado a la luz de las particularidades que adoptó la acumulación capitalista bajo este patrón de crecimiento y sus efectos sobre la precaria situación de los sectores populares en la estructura socioeconómica. Elementos que establecieron una determinada correlación de fuerzas entre las clases sociales y sus agentes más representativos, la cual dio origen a un aparato corporativo que se convertiría en un mecanismo eficaz de control político y social para contener y negociar las demandas sociales, así como en un instrumento de exclusión para los sectores no organizados corporativamente en el Estado.

La vigencia de un proyecto de desarrollo que terminó por fracasar al no contemplar la generación y explotación del trabajo general producido localmente, subordinando los intereses nacionales a los del capital extranjero (agente que se constituyó en el principal proveedor de los bienes intermedios y de capital necesarios para la producción), sólo pudo ser viable con un importante margen de paz social a costa de un control eficaz del Estado sobre los sectores populares.

En el marco de este pacto social, los logros del Estado en materia social dentro de este patrón de acumulación tienden a sobreestimarse cuando son comparados con la situación vigente en nuestros días, y es natural que así suceda en un contexto en el que priva la descomposición en todos los órdenes de la vida social, misma que por su magnitud ha hecho resplandecer cualquier logro ulterior. Lo cierto es que la ausencia de una gestión estatal del desarrollo en este periodo repercutió en la consolidación de una

¹⁵⁴ Ver Arnaldo Córdova. *La formación del poder político en México*. México, Ediciones Era., 17ª Edición, 1991; Ilán Bizberg. “Auge y decadencia del corporativismo”, en Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer, *Una historia contemporánea de México, Tomo I, Transformaciones y permanencias*. México, Océano, 2003; René Villarreal, *La contrarrevolución monetarista. Teoría, política económica e ideología del neoliberalismo...* op. cit.; Rigoberto Ocampo Alcántar. *El sistema político mexicano. El agotamiento de un modelo corporativo*. México, UAS-Publicaciones Cruz O., 2001.

masa de población que fue estructuralmente excluida de la valorización de capital, y tendió a incrementarse en la medida que la industrialización con sustitución de importaciones se agotó.

Con las transformaciones impulsadas por los gobiernos neoliberales a partir de los años ochenta, mismas que repercutieron en la consolidación de una reorientación del patrón de crecimiento económico hacia el sector exportador, la problemática del aumento y consolidación de una población excedente ha tocado fondo en los últimos años.

Como ya lo señalamos, esta es una problemática recurrente en los países subdesarrollados, condicionada por el funcionamiento de una economía que tiende a expulsar fuerza de trabajo en cantidades muy superiores a las registradas en las economías modernas. Este fenómeno por su impacto en la estructura socioeconómica revela la fuerte tendencia de la economía mexicana para transferir inversión productiva hacia los países desarrollados –Estados Unidos principalmente-, misma que se genera a través de la compra de bienes y servicios necesarios para la producción, que no formamos localmente, y que son producto del trabajo general creado en aquellos países.

La presencia y reproducción de esta población excedente en la estructura socioeconómica mexicana impactará de manera negativa en la organización de las relaciones de producción, constituyéndose en una carga en la determinación de los salarios de la cual los trabajadores en activo no podrán liberarse, salvo por la injerencia del Estado, lo cual dará sustento a los vínculos corporativos de la clase obrera con éste. De igual forma, en la medida que la población excedente se constituyó en un potencial elemento de conflictividad social, y ante la incapacidad de la economía para absorberla, el Estado estableció estrategias para desactivar su organización y movilización, ya sea incluyendo a algunos sectores de manera subordinada en el aparato corporativo como ocurrió con el sector campesino, o excluyendo, subsidiando o reprimiendo a otros, dependiendo de la importancia de su presencia y su capacidad de movilización.

Una vez que se agota el patrón de crecimiento orientado hacia el mercado interno y se impulsa el proyecto modernizador, se hace a costa de los salarios, las prestaciones y las condiciones de protección del empleo de los trabajadores, lo que provoca una ruptura del pacto social vigente hasta entonces.

Es indispensable entonces capturar las dimensiones y principales características de estos excedentes de población en relación al trabajo asalariado, para estar en condiciones de comprender la vigencia y funcionamiento del pacto social y el aparato corporativo al que dio origen éste, elementos que determinaron los amplios márgenes de paz social con que el país fue gobernado durante el periodo de vigencia del modelo de industrialización con sustitución de importaciones, a pesar de reproducir en el seno de su estructura socioeconómica las contradicciones inherentes al subdesarrollo. De igual forma, la caracterización de esta parte de la población bajo el patrón de crecimiento exportador, nos permitirá encontrar las tendencias que generaron la ruptura del pacto social entre el régimen y las masas, así como las transformaciones que llevaron a la transición política en el país.

Sin embargo, el dimensionamiento de la población excedente en México topa con dos problemas fundamentales: las dificultades que presenta capturar un fenómeno que se desarrolla a la saga de los procesos productivos -incluso en muchos casos fuera de la legalidad-, y derivado de lo anterior, la falta de cifras que nos permitan cuantificarlo de manera directa. Para sortear estos problemas se propone una aproximación indirecta al fenómeno, proyectándolo a través de: a) la cuantificación de la diferencia entre los empleos formales y la PEA, a través del registro de los trabajadores asegurados al IMSS o al ISSSTE, como una primera aproximación a la magnitud del fenómeno; así como el peso del sector *informal* en relación a la PEA urbana para aproximarnos a una cuantificación del fenómeno en el espacio urbano; b) la difusión de actividades no capitalistas en el campo como alternativas de sobrevivencia de la población excluida del proceso de valorización, para conocer la situación de esta problemática en este espacio, señalando los aspectos más relevantes del papel desempeñado por la Reforma Agraria en el reparto de tierras hasta los años ochenta, y por otro lado, el impacto que tuvo en los noventa la contrarreforma agraria y la firma del TLCAN en la reproducción de estas actividades; y c) los flujos migratorios, para dimensionar la diáspora de fuerza de trabajo que resultó redundante para la acumulación capitalista localmente, para lo cual tomaremos como referente el análisis del Programa Bracero vigente en el periodo 1942-1964 y el incremento de los flujos migratorios a

partir de la década de los ochenta, que abrieron paso a la consolidación de la migración ilegal.

3.3 Población en activo y sector informal de la economía.

La economía mexicana en el periodo 1935-1982 tuvo un crecimiento promedio a una tasa del 6 % del *producto interno bruto* y un crecimiento del PIB *per cápita* a una tasa media del 3.2% anual. Además la inversión fija bruta por habitante (en maquinaria, equipo y construcciones) tuvo una tasa de crecimiento anual del 6% en el periodo 1941-1982. Todo esto tuvo un impacto positivo sobre el nivel de los salarios mínimos que se incrementaron en un 96.9% durante el periodo 1935-1982.¹⁵⁵ (Ver el Cuadro 1).

Cuadro 1

Indicadores por periodos presidenciales: 1935-2004

Periodos presidenciales	Producto Interno Bruto		Producto Interno Bruto por habitante		Inversión Fija Bruta por habitante		Salarios Mínimos Reales (Promed. Nacionales)	
	Crecim. sexenal (%)	Tasas crecim. anual	Crecim. sexenal (%)	Tasas crecim. anual	Crecim. sexenal (%)	Tasas crecim. anual	Crecim. sexenal (%)	Tasas crecim. anual
Patrón de crecimiento económico relativo								
1935-1940	30.10	4.48	14.28	2.25	n.d.	n.d.	22.94	3.50
1941-1946	42.90	6.13	25.74	3.89	124.29	14.41	(39.40)	(8.01)
1947-1952	39.86	5.75	19.91	3.07	26.05	3.93	14.53	2.29
1953-1958	44.85	6.37	20.54	3.16	11.17	1.78	28.17	4.22
1959-1964	47.51	6.69	20.88	3.21	36.12	5.27	56.32	7.73
1965-1970	48.75	6.84	22.68	3.47	39.65	5.72	31.71	4.70
1971-1976	43.12	6.16	19.39	3.00	25.05	3.80	22.86	3.49
1977-1982	43.11	6.16	21.84	3.35	22.26	3.41	(28.32)	(5.51)
Variación acumulada	1592.71		347.99		1067.53		96.91	
Crecimiento medio		6.07		3.17		6.03		1.42
Patrón de crecimiento económico absoluto								
1983-1988	1.09	0.18	(11.82)	(2.08)	(33.09)	(6.48)	(46.63)	(9.94)
1989-1994	25.81	4.70	12.08	2.31	38.52	6.73	(20.00)	(4.36)
1995-2000	23.45	3.38	11.76	1.87	21.09	3.24	(29.89)	(5.75)
Var. Acum.. 1983-2000	56.98		11.66		12.24		(70.06)	

Continúa en la siguiente página...

¹⁵⁵ José Luis Calva, op. cit. pp. 62-63.

Periodos presidenciales	Producto Interno Bruto		Producto Interno Bruto por habitante		Inversión Fija Bruta por habitante		Salarios Mínimos Reales (Promed. Nacionales)	
	Crecim. sexenal (%)	Tasas crecim. anual	Crecim. sexenal (%)	Tasas crecim. anual	Crecim. sexenal (%)	Tasas crecim. anual	Crecim. sexenal (%)	Tasas crecim. anual
<i>Crecimiento medio 2001- 2004</i>	6.65	1.62	1.81	0.45	(3.41)	(0.86)	0.99	0.25
<i>Var. Acum. 1983-2004</i>	67.45		13.70		8.41		(69.77)	
<i>Crecimiento medio</i>		2.37		0.59		0.37		(5.29)

Notas: las cifras entre paréntesis son negativas.

Fuente: Datos tomados de José Luis Calva, op. cit. p. 63.

Sin embargo, si tomamos como referencia el número de asegurados al IMSS y el ISSSTE para aproximarnos a cuantificar el número de trabajadores empleados y desempleados en el país en relación a la Población Económicamente Activa (PEA) durante el periodo 1965-1980;¹⁵⁶ observaremos en el Cuadro 2 que los niveles de desempleo no reflejan la dinámica mostrada por la economía bajo este modelo de crecimiento.

Cuadro 2

PEA, trabajadores asegurados e informales: 1965-1980 (miles)

Año	PEA	Asegurados IMSS	Asegurados ISSSTE	No Asegurados	No Asegurados/PEA
1965	12,074	2,210	261	9,603	79.5%
1970	12,955	3,121	430	9,404	72.6%
1975	16,908	4,306	1,013	11,589	68.5%
1980	22,066	6,369	1,435	14,262	64.6%

Fuente: Datos tomados de José Luis Romero, op. cit. p. 208.

Si bien es cierto que el peso de las personas no aseguradas en la PEA tiene una tendencia hacia la baja en el periodo, ya que pasa de representar el 79.5% respecto al total en 1965 al 65.6% en 1980, en realidad durante la vigencia del patrón de

¹⁵⁶ El *desempleo abierto* es un mal indicador manejado por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) para medir la situación del mercado laboral, ya que al no existir seguro contra el desempleo los cesados se refugian en alguna actividad, aunque sea precaria, que les reporte ingresos. Hasta no hace muchos años la definición oficial de *población ocupada* era aquella mayor de 12 años que en la semana anterior participó al menos una hora a la semana en actividades que le dieron un ingreso o que lo hizo sin pago, o bien que no trabajó pero contaban con un empleo o iniciará una ocupación en un mes. Esta definición, como se puede observar, es bastante laxa al momento de cuantificar el desempleo, de ahí que utilicemos el porcentaje de trabajadores asegurados en el IMSS o el ISSSTE con respecto a la PEA para medir la desocupación.

crecimiento relativo su presencia en la población activa fue importante, y su más notable reducción se da en el último sexenio presidencial donde se impulsó este patrón de crecimiento.

Por otra parte, este fenómeno se presenta con menor impacto sobre la PEA en el espacio urbano aunque proporcionalmente sigue siendo significativa en el periodo 1950-1980. En un estudio de la PREALC-OIT que registra cifras sobre el *sector informal*¹⁵⁷ en varios países latinoamericanos,¹⁵⁸ se observaba que México reporta en promedio cerca del 30% de su PEA empleada en este sector, colocándose entre los países de la región que con mayor intensidad reportan esta problemática, sólo por debajo de Bolivia, Perú y Guatemala (ver Cuadro 3).

Cuadro 3
Evolución del empleo urbano por segmentos del mercado del trabajo
en 14 países latinoamericanos, 1950-1980

País	PEA Urbana Total			Sector Formal			Sector Informal			Sector Doméstico		
	1950	1970	1980	1950	1970	1980	1950	1970	1980	1950	1970	1980
<i>Argentina</i>	100	100	100	79	81	77	13	12	14	8	7	9
<i>Bolivia</i>	100	100	100	38	44	44	44	41	44	18	15	12
<i>Brasil</i>	100	100	100	72	72	73	18	17	17	10	11	10
<i>Colombia</i>	100	100	100	61	69	66	22	20	25	17	11	9
<i>Costa Rica</i>	100	100	100	71	77	81	15	13	11	14	10	8

Continúa en la siguiente página...

¹⁵⁷ El concepto fue acuñado en la década de los setenta con la publicación de dos investigaciones en el seno del Programa Mundial de Empleo de la OIT, que se realizaron en Ghana y Kenia sobre los trabajadores pobres de estos países. K. Hart, primero en formular dicho concepto, distinguió al trabajador formal del informal relacionando al primero con el empleo asalariado y al segundo con empleo por cuenta propia. Los estudios relacionados con el tema supeditaron su cuantificación a las empresas pequeñas y localizadas en áreas urbanas. El PREALC relacionó el fenómeno con las perspectivas duales del mercado de trabajo, particularmente con las migraciones rural-urbanas y su motivación económica, así como sus efectos en el avance de los países subdesarrollados. Con ello, la informalidad se entendió como parte del sector productivo, privilegiándose el análisis de las relaciones de producción para identificar a las empresas y a los trabajadores que se encontraban en el sector informal. A finales de los años ochenta el PREALC adoptó una metodología que definía al sector informal a partir de las siguientes características: trabajadores y/o empresas en actividades no organizadas, que utilizan tecnología elemental, y trabajan en mercados competitivos o en el seno de estructuras económicas con una tendencia a la concentración oligopólica. El concepto así como su medición siguen siendo tema de debate hasta la fecha y han seguido actualizándose institucionalmente, aunque la principal crítica que se le puede hacer es que suele hacer tabla rasa de la informalidad, sin distinguir que dentro de ésta también existen sectores no necesariamente vinculados a los procesos productivos, pero que entran dentro del ámbito de la subsistencia. Ver José Juan Cervantes Niño, Esthela Gutiérrez Garza y Lylia Palacios. "El concepto de economía informal y su aplicación en México: factibilidad, inconvenientes y propuestas", en *Revista Estudios Demográficos y Urbanos*, enero-abril, año/vol.. 23, núm. 001. México, El Colegio de México, 2008, pp. 24-26.

¹⁵⁸ PREALC, *Mercado de trabajo en cifras*. Santiago, Chile, PREALC. 1982.

País	PEA Urbana Total			Sector Formal			Sector Informal			Sector Doméstico		
	1950	1970	1980	1950	1970	1980	1950	1970	1980	1950	1970	1980
<i>Chile</i>	100	100	100	65	76	73	22	16	19	13	8	8
<i>Ecuador</i>	100	100	100	65	42	48	23	34	32	12	24	21
<i>El Salvador</i>	100	100	100	58	60	60	23	22	23	19	18	17
<i>Guatemala</i>	100	100	100	48	57	60	35	32	31	17	11	9
<i>México</i>	100	100	100	63	65	64	28	28	30	9	7	6
<i>Panamá</i>	100	100	100	70	71	66	16	19	20	14	10	14
<i>Perú</i>	100	100	100	53	59	60	27	34	35	20	7	5
<i>Uruguay</i>	100	100	100	81	79	77	12	14	16	7	7	7
<i>Venezuela</i>	100	100	100	68	68	79	22	23	16	10	9	5

Notas: Sector Informal se definió incluyendo a los trabajadores por cuenta propia urbanos, mas familiares no remunerados y menos los profesionales y técnicos incluidos en las dos categorías anteriores.

Fuente: Datos tomados de PREALC, *Mercado de trabajo en cifras*. Santiago, Chile, PREALC. 1982.

Es un elemento a destacar que a pesar de que el estudio contempla únicamente zonas urbanas, donde se supone se encuentran los sectores más dinámicos de la economía bajo la industrialización con sustitución de importaciones, un tercio de la población se incorpore laboralmente a actividades fuera de la estructura del empleo formal. Además, como se puede observar en el Cuadro 3, países con mercados de proporciones similares y niveles de desarrollo económico equivalentes al nuestro como Brasil y Argentina, no llegan a registrar cifras semejantes. Argentina registra 13, 12 y 14 por ciento de población integrada al sector informal respecto a la PEA para los años 1950, 1970 y 1980 respectivamente; mientras Brasil observa correspondientemente 18, 17 y 17 por ciento de trabajadores informales para los mismos años.

Podemos entonces afirmar que esta notable presencia de trabajadores informales nos informa de las dificultades estructurales de una economía subdesarrollada como la nuestra para absorber fuerza de trabajo, a pesar de los importantes niveles de crecimiento que registró la economía entonces.

Por otra parte, en el patrón de acumulación neoliberal basado en la apertura comercial y la reducción de la participación del Estado en el desarrollo económico, el PIB creció a una tasa media anual de 2.5% en el periodo comprendido entre los años 1983 y 2000, lo que se tradujo en una tasa media de incremento del PIB *per capita* de apenas 0.6% anual. La inversión fija bruta por habitante (en maquinaria, equipo y construcciones) creció a una tasa media anual de 0.6%, cuando en el periodo 1941-1982

lo había hecho a una tasa de 6%. En cuanto a las remuneraciones de los trabajadores, en el periodo 1935-1942 el poder adquisitivo de los salarios se había incrementado en un 96.9%, mientras que durante la vigencia del patrón de crecimiento neoliberal perdieron 70.6% de su poder de compra.¹⁵⁹

Encontramos que en el funcionamiento de patrón neoliberal el crecimiento económico ha sido escaso y lento, combinado con una mayor inequidad en la distribución del ingreso. Lo que no ha hecho otra cosa que exacerbar las contradicciones inherentes a la acumulación bajo el subdesarrollo, con un fuerte impacto en la consolidación de los excedentes de población.

Con la firma del TLCAN se trató de impulsar en el país una política de crecimiento orientada a las exportaciones de mercancías manufacturadas con un fuerte componente nacional, sin embargo los resultados han sido exactamente contrarios a los planeamientos iniciales. Como ya hemos visto, la maquila y amplios sectores de la manufactura que operan con criterios productivos muy similares a ésta han sido la principal punta de lanza de la economía bajo el neoliberalismo, y como entre el 80% y el 90% del valor de las exportaciones representa el componente importado, el valor restante es el que se constriñe a salarios y es el que finalmente reporta algún efecto positivo para la economía. Esta situación ha impactado negativamente en el sector productivo nacional y en las condiciones de vida tanto de la fuerza de trabajo activa como de los excedentes de población.

La inestable y coyuntural capacidad de generar crecimiento económico bajo el patrón neoliberal ha repercutido en una incapacidad estructural para generar empleos formales. Su comportamiento corresponde a tres ciclos del crecimiento económico que caracterizan la evolución del patrón neoliberal, que de acuerdo a Germán Sánchez Daza es la siguiente:

[...] en el primero, 1987-1995, se inicia la modernización de la planta productiva y la integración de la manufactura global, que será interrumpido por la crisis financiera y una desaceleración de la producción manufacturera, en el segundo, 1996-2001, se consolida y cobra auge la integración a los encadenamientos productivos globales –en especial en las ramas electrónica, vestido y automotriz–, que concluye con la caída de la demanda estadounidense [...] y el tercero,

¹⁵⁹ José Luis Calva, op. cit. pp. 64-65.

2002-2008, el actual ciclo económico que entró rápidamente en su fase crítica y forma parte de la crisis general del patrón neoliberal.¹⁶⁰

En este sentido, el periodo ha estado marcado por una enorme volatilidad ocupacional, que corresponde a los ciclos de crecimiento del PIB antes señalados. De esta forma, Norma Samaniego señala:

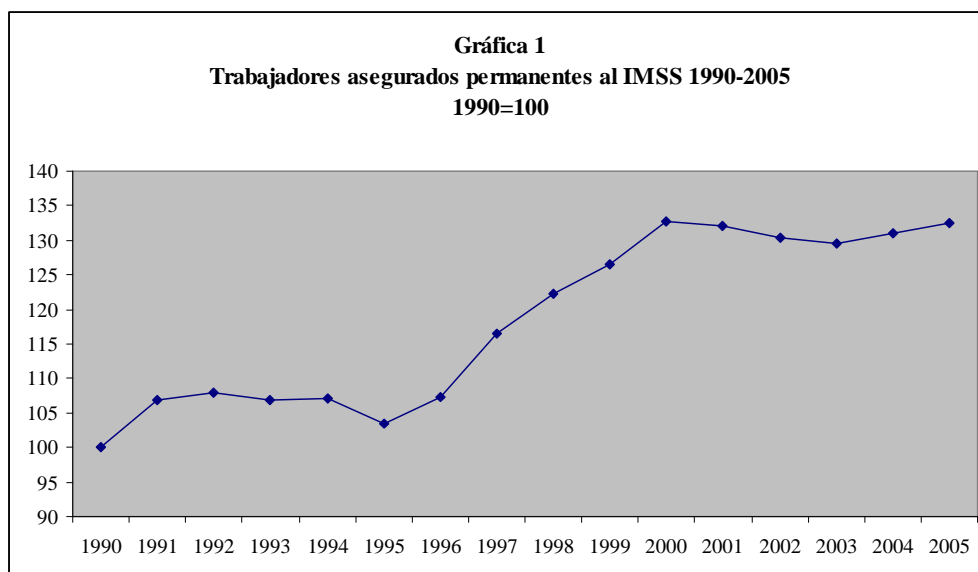
- El periodo 1990-1995 se caracterizó por un modesto crecimiento del empleo asalariado formal, producto de reestructuraciones, cierres y ajustes a las plantillas que empezaron a realizar muchas empresas al entrar de lleno el país en el proceso de competencia externa. Esta etapa, que se preveía sería transitoria, en preparación al arranque del TLC, culminó sorpresivamente con el brusco desplome del empleo formal producto de la crisis de 1994-1995.
- Inmediatamente después de la caída, se inició en 1995 una acelerada recuperación que se extendió hasta el año 2000, orientada particularmente hacia la zona Norte del país, en las ramas dedicadas a la industria maquiladora y seguidas por otras industrias exportadoras que aprovecharon el ajuste del tipo de cambio y el ingreso reciente al TLC. En los cinco años comprendidos en el período citado, el empleo asalariado formal registrado en el IMSS creció 48% e incorporó a 4 millones de personas, lo cual llegó a provocar presiones en el mercado laboral de algunas regiones.
- No obstante, parte del incremento ocupacional logrado habría de borrarse en el periodo 2000-2003 cuando la industria canceló de tajo poco más de 850 000 puestos de trabajo y el empleo en el sector privado con registro en el IMSS se redujo en casi 3%, lo que significa que en la economía en su conjunto no se creó un solo empleo formal privado en términos netos. En especial, la maquila experimentó cierres masivos y la reducción de la tercera parte de su personal.¹⁶¹

Esta última tendencia en el empleo permanente se mantiene en la segunda parte del sexenio de Vicente Fox (ver Gráfica 1), de tal forma que la tasa de crecimiento para los seis años de gobierno apenas fue de 1.8%, en tanto que el desempleo fue aumentando de tal forma que su tasa promedio fue del 3.3%.¹⁶²

¹⁶⁰ Germán Sánchez Daza y Nayeli Pérez Juárez. *Empleo y crisis del patrón neoliberal en las entidades del país*. Conferencia impartida en la Unidad Académica de Ciencia Política de la UAZ, en mayo de 2009, p. 3.

¹⁶¹ Norma Samaniego. "El mundo del trabajo. Una estructura en terrenos movedizos", en *Economía UNAM*, Vol. 2, Núm. 4. México, UNAM, 2005, p. 76.

¹⁶² Germán Sánchez Daza. *Empleo y crisis del patrón neoliberal en las entidades del país...* p. 4.



Fuente: Elaboración propia con base a datos de la página electrónica de la Secretaría del Trabajo y Previsión social del Gobierno Federal: <www.stps.gob.mx>.

Acompañando este proceso se encuentra una fuerte precarización del empleo que da cuenta de su inestabilidad, así como del deterioro de las condiciones de trabajo y de su remuneración. Se observa a partir de 1990 un estancamiento en el número de personas integrantes de la PEA que se encuentran dentro de la protección en la seguridad social, cuyo promedio es de 35.4% entre ese año y el 2000 (ver Cuadro 4). En el 2006 la PEA representaba 42 millones de personas, de las cuales apenas el 36% tenía acceso a la seguridad social, es decir, el promedio histórico se mantiene durante el sexenio de Vicente Fox.¹⁶³

Cuadro 4

PEA, trabajadores asegurados e informales: 1990-2000 (miles)

Año	PEA	Asegurados IMSS	Asegurados ISSSTE	No Asegurados	Asegurados/PEA
1990	30,258	9,361	2,012	18,855	37.87
1991	31,229	10,022	2,18	19,189	38.53
1992	32,231	10,175	2,046	20,010	37.83
1993	33,652	10,076	2,107	21,469	36.02
1994	34,731	10,071	2,150	22,510	35.06
1995	35,559	9,460	2,180	23,919	32.65
1996	36,581	9,700	2,188	24,693	32.48
1997	38,345	10,444	2,221	25,680	32.94

Continúa en la siguiente página...

¹⁶³ Jaime Ornelas. "La economía mexicana en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006)"... op. cit., p. 151.

Año	PEA	Asegurados IMSS	Asegurados ISSSTE	No Asegurados	Asegurados/PEA
1998	39,507	11,261	2,275	25,971	34.13
1999	38,751	11,906	2,304	25,541	35.75
2000	39,997	12,409	2,356	25,232	36.91

Fuente: Datos tomados de Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer. *Una historia contemporánea de México, Tomo 1, Transformaciones y permanencias*. Apéndices. México, Océano, 2003, p. 583.

Estos datos además reflejan el crecimiento generalizado del empleo informal, que si bien es un concepto resbaladizo que se presta a interpretaciones muy distintas en cuanto a cobertura, causas e instrumentos de política para abordarlo, como ya lo hemos mencionado, nos permite acercarnos a una dimensión de los excedentes de población.¹⁶⁴ En este sentido, se han perfeccionado los instrumentos para dimensionar este problema, y en consecuencia, se tiene una mayor facilidad para acceder a datos y cifras con los que antes era impensable contar.

Norma Samaniego, investigadora que ha seguido de cerca el fenómeno en los últimos años y ha colaborado con la OIT para su estudio en el país, define el trabajo informal como:

[...] una gran bolsa de individuos que en el sector no agropecuario conforman dos grandes grupos: uno al que me referiré como ‘empleo precario’ y otro integrado por ‘asalariados sin ninguna prestación’. El primero es un conjunto altamente heterogéneo, integrado por individuos cuya actividad se identifica con estrategias ocupacionales de supervivencia y la carencia o precariedad de local, y el segundo es el de los trabajadores asalariados, subordinados a un empleador, sin prestaciones ni protección social de ninguna especie, aun cuando la empresa cuente con local, generalmente en alguna microempresa, aunque en algunos casos puede tratarse de una unidad formal [...].¹⁶⁵

Tomando como referencia esta definición concluye que: “Del total de la población ocupada en 1991 (30.5 millones de personas), aproximadamente un tercio (10.2 millones) eran ocupaciones informales no agropecuarias. Para 2003 la proporción se había elevado casi a 44% y sumaba ya 17.8 millones (de un total de 40.6 millones) superando a los ocupados en el sector formal [...]”.¹⁶⁶

¹⁶⁴ Para tener un acercamiento al largo debate contemporáneo sobre la utilización de este termino, véase José Juan Cervantes Niño, Esthela Gutiérrez Garza y Lylia Palacios. “El concepto de economía informal y su aplicación en México: factibilidad, inconvenientes y propuestas”... op. cit.

¹⁶⁵ Norma Samaniego, op. cit., p. 77.

¹⁶⁶ *Ibíd.*, p. 78.

Este crecimiento constante del empleo informal que contrasta con la volatilidad del empleo formal, tiene como factor común la precarización. De esta forma, existe un importante crecimiento de los trabajadores por cuenta propia, ya que el autoempleado sustituye el trabajo asalariado mediante la intensificación de su propio esfuerzo laboral y la incorporación de trabajadores provenientes de su propia familia. De acuerdo a la ECUP 2006, los autoempleados representaron 23.1% de la población ocupada y los ocupados en micronegocios sin local representan el 21.8%.¹⁶⁷

Además existe una disminución del poder de compra de los trabajadores, ya que para 2006 la población ocupada que no percibe ingresos asciende a 8.6%; un salario mínimo o menos, 13.7%; de uno a dos salarios mínimos, 21.5%; de dos a tres salarios mínimos, 22.3%; de tres a cinco salarios mínimos, 17.4% y más de cinco salarios mínimos, 11.1%. Se concluye de lo anterior que alrededor del 66% de la población ocupada no cuenta con los ingresos mínimos necesarios para garantizarse un nivel de vida óptimo.¹⁶⁸

Se ha registrado además un crecimiento generalizado de la pobreza. Durante la crisis de 1994-1995 la pobreza alimentaria pasó de 19 a 34 millones de personas. A partir de entonces se registra un descenso continuo de esta cifra, pero apenas hasta 2005 se registraron los mismos niveles absolutos de pobreza que se tenían en 1994.¹⁶⁹

Todos estos datos nos permiten confirmar que existe una tendencia a la consolidación del empleo informal y a una precarización del empleo bajo el patrón de crecimiento neoliberal, pero también que esta condición es parte estructural de la acumulación bajo el subdesarrollo, ya que bajo el patrón de crecimiento orientado al mercado interno esta tendencia se presenta aunque con menor fuerza, amén a las distintas formas de medición que encontramos en ambos periodos.

Ahora bien, hasta aquí nos hemos aproximado a cuantificar la dimensión del problema en uno de los sectores más dinámicos de la economía, refiriéndonos a la población trabajadora, asalariada o informal, que consiguió encontrar alguna ocupación remunerada o no en el entorno urbano, ¿pero qué ha ocurrido en el campo?

¹⁶⁷ INEGI. *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo*. México, INEGI, 2006.

¹⁶⁸ *Ibíd.*

¹⁶⁹ Leonardo Lomelí Venegas y Ciro Murayama. "México frente a la crisis: hacia un nuevo curso de desarrollo", en *Economía UNAM*, No. 018, septiembre 2009, p. 40.

3.4 Efectos de la reforma agraria y su contrarreforma en la producción campesina.

Aquí fue necesario reorganizar en forma no capitalista a grandes masas de población excedente como ocurrió a través de la reforma agraria. Esta política implementada en nuestro país por los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana -de manera más decidida a partir del gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas- tuvo una importante funcionalidad para el Estado: lo liberó de la responsabilidad de proveer medios de subsistencia a un sector importante de la población; abrió una vía alterna a la que ofrecía el trabajo asalariado para conseguir el sustento familiar (aunque precariamente); y se constituyó por tanto en un instrumento eficaz para el control político y la paz social.

De acuerdo a Arturo Warman, la reforma agraria adoptó un “modelo comunitario” donde el beneficiario es un sujeto colectivo, entendiéndose por éste un asentamiento humano con existencia previa, ya sea una villa, un pueblo o una congregación. De esta forma, los individuos aislados nunca fueron sujetos de ser beneficiados por esta política, salvo como integrantes de un núcleo de población denominado ejido, y debían reunir como requisitos para ello, ser jefes de familia o estar en condiciones de serlo y no contar con ningún capital u oficio salvo el trabajo de la tierra.¹⁷⁰

La reforma agraria si bien en un inicio se formuló como restitutoria (reponer superficie de tierra a poblados despojados por el régimen anterior), pasó a ser permanente con un carácter redistributivo, prueba de ello es que más del 90% de los núcleos de población beneficiados fueron producto de un acto de dotación.¹⁷¹ Este dato demuestra el especial interés del Estado bajo el patrón de crecimiento relativo por dar una salida a la problemática de los excedentes de población en el campo y la incapacidad del aparato industrial para absorberlos.

La parcela para el aprovechamiento individual dentro del ejido siempre y sin excepción fue pequeña, así lo demuestran los criterios tomados por la legislación agraria para determinar el tamaño de la unidad de dotación y su utilidad: “El Código Agrario de 1934 optó salomónicamente por 4 ha de riego o su equivalente de temporal: lo doble. La reforma del código en 1942 amplió la superficie a 6 ha de riego o 12 de temporal. Desde

¹⁷⁰ Arturo Warman. *El campo mexicano en el siglo XX*. México, FCE, 2001, p. 55.

¹⁷¹ Ídem.

1946 hasta 1992 se estableció constitucionalmente que la unidad de dotación debía ser de 10 ha de riego o 20 de temporal.”¹⁷² Otro elemento, relacionado con el anterior, era la localización de las tierras, ya que aquellas ubicadas en las regiones menos accesibles para la agricultura fueron las que se utilizaron para el reparto agrario.

Si comparamos las tierras de riego repartidas en relación a otros tipos, se concluye que la aplastante mayoría de éstas no contaba con suficiente potencial productivo, ya sea por su tamaño, porque no eran aptas para la agricultura y se les dio ese aprovechamiento, por estar sujetas a las condiciones ambientales, o porque su calidad no era la óptima. En general, proporcionalmente la tendencia a entregar este tipo de tierras durante los sexenios presidenciales muestra una propensión ascendente, que se interrumpe en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando se emprende un importante proceso de escrituración con miras a modificar la constitución para terminar con el reparto agrario y darles a los ejidatarios la propiedad sobre sus parcelas (ver Cuadro 5). La reforma agraria siempre tuvo un sesgo agrícola en sus objetivos y la ejecución de los mismos, y de acuerdo a Warman, esto se refleja en el Censo Ejidal de 1991, donde 83.5% del total de ejidos y comunidades del país practicaban la agricultura como actividad principal. Sin embargo, si se toman en cuenta las resoluciones presidenciales para empleo de las tierras se observa una contradicción con tales pretensiones: sólo 14% son agrícolas, 53.9% pastos, 10.6% montes y bosques, y 21.5% desérticas e indefinidas pero ciertamente no agrícolas.¹⁷³

Cuadro 5

Reparto de tierra por periodos presidenciales, 1935-1992

Periodo	Total de Ha repartidas	Porcentaje de tipo de tierra				
		Riego	Temporal	Agostadero	Otros*	Beneficiados
1935-1940	18,786,131	5.02	18.0	50.2	26.8	728,847
1941-1946	7,287,697	1.3	13.8	53.9	31.0	157,816
1947-1952	4,633,321	1.3	15.9	57.5	25.2	80,161
1953-1958	6,056,773	1.3	14.9	49.1	34.7	68,317
1959-1964	8,870,430	1.8	15.3	62.3	20.6	148,238
1965-1970	24,738,199	0.3	8.2	65.2	26.3	278,214
1971-1976	12,773,888	0.9	5.1	59.0	35.0	205,999
1977-1982	6,397,595	1.2	13.6	62.7	22.4	243,350

Continúa en la siguiente página...

¹⁷² *Ibíd.*, p. 61.

¹⁷³ *Ibíd.*, pp. 63-64.

Periodo	Total de Ha repartidas	Porcentaje de tipo de tierra				
		Riego	Temporal	Agostadero	Otros*	Beneficiados
1983-1988	5,626,227	1.5	9.6	61.4	27.5	248,486
1989-1992	551,869	7.4	23.5	35.4	33.7	80,692

*Incluye monte, desértica e indefinida.

Fuente: INEGI, Estadísticas históricas de México, México, 1994.

Además, tomando en cuenta que la mayoría de las tierras dotadas fueron agostaderos o pastizales, y que otros porcentajes no menos importantes fueron montes o pastizales, no deja de sorprender tanto el escaso fomento a las actividades pecuarias y forestales con potenciales productivos por parte del Estado, como el excesivo apoyo aportado para la agricultura que operó en general con elevados costos y escasa productividad. Aquí se observa el peso que tuvo la política sobre los criterios económicos en las determinaciones que dieron rumbo a la reforma agraria. Sus objetivos fueron dar salida a un potencial foco de movilización popular integrado por población carente de medios para producir en el campo, así como el control político de ésta, y en ello los criterios productivos pasaban a ser secundarios, tanto por las limitaciones que imponía la cantidad y calidad de la tierra susceptible de ser repartida, como por la vocación agrícola de sus beneficiarios, que en primer lugar buscaban producir alimentos para subsistir.

Todo esto dio origen a la generalización de pequeños productores parcelarios, cuya existencia estuvo sujeta desde entonces a desplazamientos dentro de la población excedente, de un polo vinculado parcialmente a la acumulación capitalista o subsidiario (una minoría) a un polo de infrasubsistencia (la gran mayoría de la población dedicada a estas actividades), y que ha tendido a concentrarse mayoritariamente en este último siempre con una fuerte tendencia a su desarticulación.

Esta transmutación social encuentra su explicación en el marco de las relaciones sociales que la economía campesina establece con el mercado capitalista y que la condiciona, así como en las limitaciones que su propio funcionamiento le impone. En cuanto a la funcionalidad económica de la pequeña producción campesina, destaca lo siguiente: a) rinde servicios al capital como productor de alimentos básicos, ya que la parte de su producción que no destina al autoconsumo, la vende en el mercado de acuerdo a las reglas y normas que rigen a éste, y ello es posible gracias a que produce sin

requerir de una ganancia o incluso puede hacerlo con pérdidas; b) evita el desvío de divisas por la demanda interna de granos básicos, contribuyendo a satisfacerla; y c) trabaja tierras marginales a la producción capitalista, que de otra manera generarían un alza interna en los precios de alimentos.¹⁷⁴

Sin embargo, esta contribución de la economía campesina se desenvuelve en el seno de una relación desigual con el mercado capitalista, ya que aquella no puede competir en términos de productividad con éste, y sin embargo necesita hacerlo, a reserva de ser compelida al autoconsumo, y a la larga, a la desaparición. No se trata aquí, hay que subrayarlo, de la tendencia natural que Marx encontrara en la descomposición de la estructura campesina a medida que el capitalismo en el campo se desarrolla, con la consecuente proletarización de sus agentes, sino de la especificidad que en el subdesarrollo adquiere este proceso. Víctor Figueroa aporta en este sentido una explicación a esta última tendencia:

El entorno capitalista agobia la economía campesina y la empuja a su desarticulación como recurso para garantizar la reproducción de la familia. Junto con ello, el campesino es desplazado de su condición en la escala social. La razón última de esta tendencia a la descomposición no se encuentra en una supuesta explotación del campesino por el entorno capitalista, ni siquiera en la expropiación del cual es objeto por el capital comercial, sino *en su impotencia para seguir el ritmo de los cambios en la productividad*. Sin embargo, el capitalismo subdesarrollado destruye la economía campesina y la reconstruye mediante la desarticulación de la empresa capitalista más débil y la expansión de una sobrepoblación cuyas demandas busca satisfacer a través de la distribución de tierras en pequeñas parcelas.¹⁷⁵ (Énfasis nuestro).

Dicho lo anterior, queda por explicar la persistencia del campesinado bajo el patrón de crecimiento relativo, a pesar de las inercias a la desaparición que le son propias en el contexto de una economía capitalista subdesarrollada. Aquí encontramos dos factores mutuamente condicionados: a) la política económica del periodo que promovió un mercado interno protegido e instrumentó medidas proteccionistas a la

¹⁷⁴ Raúl Delgado, Víctor Figueroa y Margarita Hoffner. *Zacatecas: sociedad, economía, política y cultura*. Colección: Biblioteca de las entidades federativas. México, CIIH-UNAM, 1994, pp. 24-30.

¹⁷⁵ Víctor Figueroa. "América Latina: descomposición y persistencia de lo campesino", en Problemas del Desarrollo, *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, UNAM, Vol. 36, No 142, julio-septiembre/2005, p. 49.

producción campesina, como los precios de garantía; y b) la importancia política que adquirió este sector dentro del régimen, para el ejercicio de la dominación.

En este sentido, el ejido echó raíces como una forma de tenencia de la tierra, de organización social y de representación gremial del campesinado. Pero también nació caracterizado por una relación patronal entre el Estado y los campesinos, mediada por la dotación de tierras a través de trámites y procedimientos burocráticos excesivos, que le permitieron a éste ganar obediencia y apoyo de aquéllos, así como el control sobre la iniciativa popular. Este control político no se destensaba con el reparto de tierra sino que se reforzaba una vez procedido éste, ya que constitucionalmente el campesino no tenía la posesión sobre la tierra, sólo era su usufructuario.¹⁷⁶

El campesinado o pequeño productor parcelario se destacó con la reforma agraria como una de las formas más persistentes de la población excedente en el sector agrario de la economía, se incrustó sólo parcialmente en la lógica de la acumulación capitalista y como consecuencia de sus vínculos estructurales con el Estado, supeditó su futuro a las decisiones políticas de los gobiernos desarrollistas postrevolucionarios.

Por otra parte, la funcionalidad económica y política del campesinado en México llega a su fin con el agotamiento del patrón de crecimiento orientado al mercado interno. A partir de entonces se impondrá una nueva racionalidad en las políticas dirigidas hacia este sector económico desde el Estado, que tendrán en la reforma a la legislación agraria de 1992 y en la firma del TLC en 1994 su articulación más completa. A partir de entonces, comienza un nuevo periodo para el pequeño productor parcelario mexicano caracterizado por una exacerbación de las contradicciones propias de la dialéctica que guarda con el mercado. El fin de la reforma agraria y la liberalización del mercado de los productos agrícolas con Estados Unidos marcarían el principio del fin.

Desde mediados de los años sesenta la economía campesina entra en crisis, cuando los pequeños agricultores se ven imposibilitados para producir en cantidades suficientes los granos básicos que requiere el país y el gobierno mexicano comienza a importarlos de Estados Unidos.

Son ya ampliamente conocidas las causas que orillaron al campo a entrar en esta situación, a pesar de haber jugado un papel de primer orden en la producción de los

¹⁷⁶ Ibíd. pp. 57-60.

alimentos y materias primas que la industrialización demandó durante el patrón de crecimiento relativo. Sólo señalaremos dos de las más importantes. En primer lugar, el desarrollo rural resultó altamente polarizado, ya que los recursos para el campo fueron dirigidos y concentrados en los grandes productores con sistemas de riego. Estos productores, la élite del campo, fueron los que se beneficiaron de la revolución verde, que estuvo orientada, muy a pesar del discurso social que supuestamente la respaldaba, al perfeccionamiento e incremento de la producción de productos comerciales de exportación altamente demandados en Estados Unidos (caña de azúcar, café, algodón, etc.). En segundo lugar, las tecnologías utilizadas en las distintas formas de apropiación de la tierra no permitieron la recuperación de la capacidad productiva de los ecosistemas en el campo.¹⁷⁷ Todo ello nos da una idea de las condiciones precarias en las que el pequeño campesino produjo, teniendo que competir en un mercado adverso y en condiciones de competencia cada vez más precarias, que únicamente eran paliadas por los apoyos a la producción recibidos del Estado.

Sin embargo, con el impulso al patrón de crecimiento neoliberal se observa un Estado que desde los años ochenta privilegia el mercado y se retrae de sus responsabilidades económicas y sociales para el desarrollo rural. Desde los años ochenta cambian las condiciones de explotación en el campo, con la imposición de políticas que orientaron la economía hacia el libre mercado y hacia nuevas técnicas de producción economizadoras de mano obra. Varias materias primas son sustituidas por nuevos materiales que son introducidos al mercado gracias al control que las grandes agroindustrias nacionales y extranjeras ejercen en el mercado.

La nueva política económica se orienta a revertir las estrategias proteccionistas hacia el campo, particularmente las dirigidas a los pequeños productores, que habían estado vigentes en el periodo anterior. Se busca la apertura comercial, el fin de los precios de garantía, la reestructuración del sistema crediticio, el desmantelamiento de las instituciones de aseguramiento, la privatización de empresas estatales, la introducción de programas de atención a la pobreza extrema, la instauración de subsidios directos sin un claro objetivo productivo, así como la introducción de nuevas formas organizativas.

¹⁷⁷ Véase Enrique Provencio y Julia Carabias. "La dimensión ambiental y la nueva Ley Agraria", en *El Cotidiano*, año 8, núm. 48, junio de 1992. México, UAM-A.

Este nuevo periodo tiene su corolario en la reforma al artículo 27 constitucional y la nueva Ley Agraria que pone fin al reparto agrario e introduce reformas a su marco jurídico, con lo que se abre el tránsito hacia la privatización del ejido.¹⁷⁸ En dicha reforma se culpa al minifundio y al intervencionismo del Estado en la economía rural como los causantes del atraso que para entonces registraba el agro, por lo que la estrategia iba a estar encaminada a incentivar la inversión privada en el campo y a la retirada del Estado en sus funciones tradicionales. Sin embargo, estas modificaciones legales no produjeron la pérdida masiva de tierras en el sector rural, ni la inversión masiva de capitales en el agro. A lo más que llegaron fue a un proceso de renta y venta selectiva de parcelas ejidales, orientado a las tierras de riego altamente productivas, en los terrenos turísticos y en las propiedades ejidales que rodean las ciudades.¹⁷⁹ Es decir, el incremento en la inversión y en la producción en el campo que se esperaba fuera una consecuencia necesaria de las medidas adoptadas, no ocurrió, y lo que ha persistido en el campo, particularmente el pequeño productor parcelario, es un deterioro constante de sus condiciones de vida.

De esta forma, la política económica en el campo tendrá las siguientes características:

[...] apertura económica indiscriminada; reducción unilateral de los aranceles de la mayoría de los productos agropecuarios; eliminación de los permisos previos a la importación de granos; suspensión de subsidios a los productores; el incremento en el precio de los insumos y las tarifas de productos y servicios proporcionados por las diversas agencias de desarrollo estatal; escasez y el gran costo del crédito intensificado a raíz del retiro de Banrural de las zonas de agricultura temporalera; desaparición de ANAGSA y la consecuente privatización del seguro y transferencia a los productores del costo de su servicio; disminución de la inversión pública para el sector rural [...]¹⁸⁰

A la contrarreforma agraria siguió la entrada en vigor del Tratado de libre Comercio de América del Norte, que en su capítulo agropecuario contemplaba la liberalización gradual de los aranceles a las importaciones de productos agropecuarios en razón del nivel de protección de que gozaban antes de la reforma (destaca aquí el

¹⁷⁸ Véase Luis Hernández. “¿Reforma y contrarreforma campesina? Notas sobre el impacto de las reformas al 27 constitucional”, en *El Cotidiano*, año 10, núm. 61, marzo-abril de 1994. México, UAM-A.

¹⁷⁹ *Ibíd.* p. 55.

¹⁸⁰ Armando Sánchez Albarrán. “Movimientos campesinos en El Cotidiano”, en *El Cotidiano*, año 24, núm. 156, julio-agosto de 2009. México, UAM-A, p. 239.

apartado referente a los granos básicos, productos liberalizados hasta el año 2008). Dar sanción jurídica a la liberalización comercial tuvo un fuerte impacto negativo en el sector rural.

De acuerdo con el *Adendo al Acuerdo Nacional para el Campo por el Desarrollo de la sociedad Rural y la Soberanía y Seguridad Alimentaria* (2007), el TLCAN ha tenido un fuerte impacto negativo en las condiciones de vida de la población campesina, que se caracteriza por el aumento de la desnutrición infantil (1.2 millones) sobre todo en zonas rurales y pueblos indios; en la pérdida de la población como consecuencia de migración y crecimiento de las remesas como fuente de manutención temporal y supletoria; en la disminución de salarios de los trabajadores ante la tendencia internacional del alza de los precios de los granos; en la amenaza a la soberanía y la seguridad agroalimentaria; en la falta de infraestructura tecnológica y científica nacional; en la falta de herramientas jurídicas en defensa de los productores nacionales con base en instrumentos de Derecho Internacional y, asimismo en la tendencia de deterioro de la sustentabilidad ambiental, en general, en la subordinación de los principios constitucionales y el proyecto de desarrollo nacional a los tratados comerciales internacionales como el TLCAN.¹⁸¹

La retirada del Estado en sus funciones dentro del agro y la indiscriminada apertura comercial, han tenido como efecto la pérdida de importancia de los campesinos en el nuevo patrón de crecimiento económico, así como la ausencia de un proyecto agropecuario consistente para este sector en los últimos años.

Se calcula que el aporte del sector agropecuario al PIB nacional fue de apenas el 5.4% en el 2004; el ritmo de crecimiento del producto agropecuario pasó de una tasa promedio anual de 3.2% en el periodo 1960-1980 a 1.6% entre 1990 y 2000; y la producción alimentaria a tenido una sensible baja al pasar de una tasa de crecimiento anual promedio de 5.4% entre 1960 y 1980 a un 3% en el periodo 1982-2000.¹⁸²

En lo que se refiere al empleo, de 1980 al año 2004, en el sector se observa una tendencia decreciente en la generación de empleos formales, los cuales se redujeron de

¹⁸¹ Cámara de Diputados. *Propuesta de Adendo al Acuerdo Nacional para el Campo por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y la Seguridad Alimentaria*. México, Cámara de Diputados, 2007. Consultado en Internet el 25 de mayo de 2008, en la página web: www.diputados.gob.mx.

¹⁸² David Ibarra. *Ensayos sobre economía mexicana*. México, Fondo de Cultura Económica, 2006, 357-358.

7.7 de cada 100 registrados en 1983 a sólo el 2.5 por cada 100 para el año 2004 (Ruiz Funes, 2005. 96-97). A decir de David Ibarra: “En 1960 la población rural era casi del 50% de la nacional y el sector agropecuario tenía más de 70% de la población ocupada. En 1990 el peso de la población rural se había reducido a 34% y la ocupación agropecuaria a 28% del total. Al comenzar el siglo XXI la población rural representa un cuarto del total nacional, absorbe alrededor del 16% de la ocupación conforme a las estadísticas históricas y 18% siguen las encuestas de empleo [...]”.¹⁸³

Otro elemento a tomar en cuenta es el de los ingresos, en este sentido Montoya, citando al Consejo Nacional Agropecuario, señala que “en los últimos 10 años, el ingreso de los productores agropecuarios ha disminuido en un 24.5% en términos reales; la rentabilidad de las actividades del campo en 16%”.¹⁸⁴ Situación que ha impactado principalmente a los pequeños productores que surten el mercado interno.

Este impacto ha sido diferenciado dependiendo del tipo de superficie de la tierra y su calidad productiva, el uso o no intensificado de tecnología, la ubicación geográfica y el acceso a canales de financiamiento, etc. De esta forma se ha conformado un polo integrado por agricultura comercial con cuantiosas inversiones, capital altamente tecnificado y una producción intensiva y dinámica, articulada principalmente a la exportación. Del otro lado esta un polo caracterizado por un sector de la agricultura destinada básicamente al autoconsumo en proceso acelerado de deterioro y precarización de sus condiciones de vida, que utiliza tecnología tradicional para la producción de alimentos básicos y en consecuencia tiene una baja rentabilidad comercial. La producción de este último polo se orienta principalmente al mercado local y cuenta con muy poco apoyo por parte del gobierno.¹⁸⁵

Esta situación históricamente ha tenido un impacto muy importante en la articulación del campesinado como parte integrante de los excedentes de población, orientando sus formas de sobrevivencia hacia la migración, principalmente hacia Estados Unidos. Este tema se trata a continuación.

¹⁸³ *Ibíd.*, p. 359.

¹⁸⁴ A. Montoya. *Maíz y petróleo: una propuesta estratégica nacional*. México, UIA, 2007, p. 5.

¹⁸⁵ Véase David Ibarra, *op. cit.* p. 359.

3.5 El fenómeno migratorio.

Otro de los fenómenos sociales que revela la magnitud y la problemática que encierra la acumulación bajo el subdesarrollo, es la migración. Dentro de la población excedente, el éxodo de fuerza de trabajo hacia las economías desarrolladas se presenta generalmente como una estrategia de las personas en edad de trabajar tendiente a vender su fuerza de trabajo en mercados que les permitan obtener un empleo u ocupación, ante la incapacidad de encontrarlos en su país de origen. En este sentido, los países subdesarrollados están destinados a mantener constantes los flujos migratorios, en tanto la organización de sus procesos productivos transfiera estructuralmente inversión al polo desarrollado, generando una tendencia crónica a la expulsión de fuerza de trabajo. De acuerdo a Víctor Figueroa:

[...] Mientras bajo el subdesarrollo la acumulación consume más de lo que produce, en los países desarrollados la acumulación produce más de lo que consume. La insuficiencia de producción en un polo se satisface con el exceso de producción en el otro. Por consiguiente, mientras en el subdesarrollo la acumulación genera una sobrepoblación desbordante, en el desarrollo despliega una *insuficiencia en la creación* de su ejército de reserva. La organización imperialista de la producción, que condena a unos países al trabajo inmediato, de operación, distribuye también de manera desigual la energía con la cual cada polo del sistema genera fuerza de trabajo disponible. Concentra en el polo subdesarrollado los fondos de fuerza laboral que requieren los países desarrollados para su expansión.¹⁸⁶

México durante el patrón de crecimiento relativo aportó una importante cantidad de fuerza de trabajo a Estados Unidos, cuya función principal fue generar ingresos de subsistencia para la población del país. Este sector de la población excedente logró perder su carácter absolutamente redundante para el capital, y logró integrarse a la población asalariada o al ejército industrial de reserva de Estados Unidos, sin perder por ello su condición de origen en relación a la economía local.

Durante los años treinta, los flujos migratorios de México hacia Estados Unidos registraron niveles sumamente bajos, ya que la recesión en Estados Unidos y el reparto agrario en nuestro país produjeron una disminución sensible en el flujo de emigrantes, y la deportación masiva de nacionales instrumentada por el gobierno norteamericano

¹⁸⁶ Víctor Figueroa, *Excedentes de población...* op.cit, p. 32.

ocasionaron que el vuelco migratorio cesara temporalmente. De acuerdo a Gustavo Verduzco:

Entre 1921 y 1930 habían migrado a ese país [Estados Unidos] 4.1 millones de personas de todas las nacionalidades, mientras que para la década siguiente el contingente bajó a sólo 0.52 millones, de los cuales 65 por ciento fueron europeos. Los inmigrantes mexicanos bajaron de 459 mil en la década de 1921-30, a sólo 22 mil entre 1931-40, o sea, tan sólo inmigró cuatro por ciento con respecto al contingente anterior. Sin embargo, más que la baja en la inmigración, la Gran Depresión empujó al gobierno estadounidense a la repatriación de 345 000 mexicanos entre 1929 y 1932 [...].¹⁸⁷

Para la década de los cuarenta, a consecuencia del déficit de mano de obra registrado en Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de fuerza de trabajo mexicana se incrementa de manera notoria en aquel país. Esta situación posibilitó que por primera vez los gobiernos de México y Estados Unidos negociaran acuerdos sobre el proceso migratorio, con lo que éste se institucionalizará durante cerca de 22 años favoreciendo el fortalecimiento de las redes sociales migratorias, cuya principal característica fue la no residencia permanente. Sin embargo, a partir del primer tercio de la década de los sesenta se reducen las visas para braceros y se incrementa la migración indocumentada.

De acuerdo Francisco Alba: “Los Programas de Braceros se renovaron en más de una ocasión entre su inicio en 1942 y su terminación en 1964. Durante este largo periodo la migración fue, de manera importante, ordenada y documentada. Hubo 4.5 millones de registros de movimientos en el marco de los convenios bilaterales, aunque también las aprehensiones alcanzaron una cifra similar.”¹⁸⁸ Sin embargo, las cifras sobre el número de personas que se beneficiaron de este programa varía entre autores; por ejemplo, Richard B. Craig calcula en 4,336,785 el número de braceros admitidos y Julian Samora contabiliza 4.8 millones,¹⁸⁹ mientras Verduzco suma un total de 4.6 millones.¹⁹⁰ Por otra

¹⁸⁷ Gustavo Verduzco. *La migración mexicana a Estados Unidos. Estructuración de una selectividad histórica*. p. 23. Consultado en Internet el 11 de septiembre de 2009, en la página web: <http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/migracion/MigracionContCamb/01.pdf>

¹⁸⁸ Francisco Alba. “Continuidad y cambios de la migración mexicana a Estados Unidos”, en Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer (coords.), *Una historia contemporánea de México, Tomo 1, Transformaciones y permanencias*. México, Océano, 2003, p. 583.

¹⁸⁹ Citados en Carlos Alejandro Hernández Ruíz y Miguel Ángel Salado Hernández. *El programa de trabajadores agrícolas mexicanos como modelos para la creación de un tratado migratorio*. Tesis de Licenciatura. Puebla, México, UDLAP, 2004.

parte, Jorge Durand calcula que durante los 22 años que duró el Programa Bracero el número de indocumentados ingresados a Estados Unidos ascendió a 5 millones.¹⁹¹

Cualquiera que sea la cifra tomada como referente, lo cierto es que podemos hablar de un fenómeno estructural que masificó la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, y lo más destacable es que haya sido el propio Estado mexicano quien organizara esta contratación de fuerza de trabajo nacional fuera de sus fronteras. Particularmente si tomamos en cuenta que en este mismo periodo inicia una fase de crecimiento económico bajo la modalidad de industrialización por sustitución de importaciones en nuestro país, que llevaría a nuestra economía a crecer a elevados ritmos. Sin embargo, a pesar de un contexto económico favorable lo que subsiste a lo largo de estos años es un excedente de fuerza laboral -particularmente de origen rural- que no encuentra acomodo en las ciudades y centros industriales, y que engrosará las filas de los migrantes documentados e indocumentados a partir de entonces. El hecho de que sea el Estado el protagonista en este proceso nos da una idea de la problemática que encierra la acumulación bajo el subdesarrollo, donde amplios contingentes de la población en edad productiva se convierten en absolutamente redundantes para la acumulación y son absorbidos por el polo desarrollado.

Esta explicación sin embargo no está presente en otros estudios. Verduzco destaca que la migración laboral al vecino país del norte tuvo un carácter complementario, no sólo en términos de ingresos sino también en relación al empleo. Sin embargo, esto lo lleva a concluir que los flujos migratorios durante ese periodo estuvieron determinados más por el lado de la demanda, que el de la oferta de fuerza de trabajo. Como si el hecho de querer ganar un ingreso extraordinario por lo trabajadores fuera razón suficiente para explicar la magnitud que adoptó el fenómeno. Más aún, las cifras aportadas por algunos autores demuestran que a la par de la migración legal hubo una similar ilegal o indocumentada. Si la demanda era tal, ¿por qué el gobierno norteamericano limitaría la absorción de esta fuerza de trabajo pactando con su homólogo mexicano un acuerdo como el Programa Bracero, que tenía como objetivo

¹⁹⁰ Gustavo Verduzco, op. cit.

¹⁹¹ Jorge Durand. "El Programa Bracero (1942-1964). Un balance crítico", en *Migración y desarrollo*, segundo semestre, número 009. Zacatecas, México, Red Internacional de Migración y Desarrollo, 2007.

central la *contratación temporal* de los migrantes mexicanos y su inserción a procesos productivos -principalmente agrícolas- muy específicos?

En realidad, tanto la demanda como la oferta de mano de obra estuvieron mutuamente condicionadas por la estrecha y dispar vinculación que desde entonces sostienen las economías de ambos países, marcada por la transferencia unilateral de inversión productiva de México hacia Estados Unidos, que generaba sobre oferta laboral en un lado de la frontera y escasez de la misma en el otro.

Verduzco remite a algunos estudios empíricos sobre el tema, donde resalta datos sobre la focalización de la migración en algunos estados del norte y occidente del país, el perfil socioeconómico medio y la procedencia campesina de los migrantes, así como el hecho de que para la mayoría de estas personas representó un evento único en sus vidas, y los ingresos que obtuvieron por emplearse en el país vecino generalmente representaron sólo gastos complementarios para el hogar.¹⁹²

Este argumento es atractivo, pero difícilmente nos alcanza para explicar en su totalidad la diáspora migratoria durante este periodo en nuestro país. El perfil migratorio que construye Verduzco, aun haciendo abstracción del posible sesgo espacio-temporal que contienen los estudios empíricos que cita para respaldar su argumento, difícilmente coincide con la realidad, ¿si eran en general “campesinos de los estratos medios” -y aquí habría que cuestionarse si una parcela con escaso potencial productivo es suficiente para incluir a los amplios contingentes migratorios que caracterizaron la migración entonces- cómo se explica que soportaran condiciones de trabajo tan precarias y se expusieran a todas las vicisitudes que encierra el migrar del lugar de origen, sólo para “complementar el gasto del hogar”? ¿no nos está dando cuenta todo esto de una incapacidad estructural del aparato productivo nacional para absorber fuerza de trabajo, que se manifiesta en el fenómeno migratorio?

Si simplemente nos conformamos con hacer un balance de los “positivos indicadores económicos” durante el modelo orientado hacia el mercado interno en nuestro país y lo contrastamos con los datos negativos que ofrecen las altas tasas de migración, es obvio que una respuesta como la que ofrece Verduzco nos parezca plausible. Pero cuando estos mismos datos los analizamos como resultado de la ausencia

¹⁹² Gustavo Verduzco, op. cit. pp. 23-24.

de una gestión estatal del desarrollo entonces el fenómeno adquiere una dimensión estructural.

Como quiera que sea, el Programa Bracero perdió su viabilidad, particularmente para el gobierno norteamericano, por una serie de problemáticas que encerraba la vigencia de un acuerdo de esta magnitud. Jorge Durand, encuentra un conjunto de factores que precipitaron su suspensión, que a continuación reseñamos:¹⁹³

1. Se generó un movimiento ascendente de trabajadores indocumentados, que empezó a crear desencuentros entre los gobiernos de Estados Unidos y México, y que sin embargo era motivado por la demanda norteamericana y el solapamiento de su gobierno.
2. Los desencuentros entre ambos gobiernos también tuvieron que ver con las distintas ópticas con la que trataban el problema de las condiciones laborales de los trabajadores braceros, ya que mientras México amenazaba con suspender el suministro de fuerza de trabajo, el gobierno norteamericano contrataba unilateralmente a trabajadores o legalizaba otros tantos.
3. Otro problema que se argumentaba en contra de la continuación del programa es que se requería de una burocracia excesiva en ambos lados de la frontera para su funcionamiento.
4. Las diferencias y problemas derivadas de los desencuentros en la definición del lugar donde debería realizarse el reclutamiento de braceros, del lado mexicano se argumentaba que éste debía de hacerse en las zonas de concentración de la población migrante dentro del territorio del país y no en la frontera como proponían los norteamericanos.
5. La contratación masiva de trabajadores temporales afectó el mercado de trabajo de ambos países.
6. La incorporación al Programa dejaba al trabajador a merced del empleador y sin prácticamente ninguna protección de las autoridades de ambos países.
7. El incumplimiento de las normas del contrato por parte de los empleadores incrementó los problemas en las negociaciones anuales entre ambos gobiernos.

¹⁹³ Jorge Durand. *Programas de Trabajadores Temporales. Evaluación y análisis del caso mexicano*. México, Conapo, 2007.

8. En el fondo, el problema fue que el acuerdo logrado en tiempos de guerra resultaba demasiado oneroso en tiempos de paz, sobre todo si la opción de contratar indocumentados estaba a la mano.

Pero nuestro país siguió reportando un constante incremento del flujo migratorio a medida que el patrón de crecimiento relativo se consolidaba, lo que nos aporta un elemento más para caracterizar el carácter estructural de esta problemática. Desde mediados de la década de los sesenta hasta inicios de la década de los ochenta continuó creciendo la migración de nacionales hacia Estados Unidos.

En estos años la demanda de fuerza de trabajo en el vecino país del norte será asegurada por el incremento de la migración indocumentada, que en los hechos le permitiría a los empleadores norteamericanos abaratar los salarios y flexibilizar la contratación y ocupación de los trabajadores, además de consolidar una reserva importante de fuerza de trabajo.

En la década de los setenta la industrialización sustitutiva de importaciones en México entra en una fase de franco declive y agotamiento, mientras en Estados Unidos se genera una demanda creciente de fuerza de trabajo migrante barata. Sin embargo, los canales de ingreso al vecino país del norte se redujeron en este periodo a consecuencia de la instrumentación de medidas que buscaron establecer controles a la migración, como fue la enmienda en 1965 al Acta de Inmigración de Nacionalidad de 1952, que entre otras cosas dio prioridad a la reunificación familiar como base para permitir la inmigración legal.¹⁹⁴

Sin embargo, continuó el incremento significativo de la migración indocumentada que no tardó en ser estigmatizada bajo la forma de la criminalización del migrante. Sin embargo, la postura del gobierno mexicano durante estos años consistió en dar la vuelta al problema y no comprometerse con una política activa que buscara solucionar la problemática que envuelve este fenómeno para ambos países. Con lo que se instituye en esos años lo que García y Griego caracteriza como “la política de la no política”.¹⁹⁵

¹⁹⁴ Francisco Alba, op. cit., p. 434.

¹⁹⁵ Citado en *Ibíd.* p. 434.

A partir de la década de los ochenta y hasta nuestros días, como resultado de los efectos negativos del patrón neoliberal sobre el crecimiento económico, el empleo y los salarios, la migración se desborda. El proceso de apertura económica indiscriminada que se consolida con el TLCAN, así como el ataque a las condiciones laborales y el bienestar de los trabajadores que representó la reestructuración productiva, se constituyeron en factores detonantes del fenómeno migratorio.

A mediados de la década de los ochenta el ascenso de la migración comenzó a repercutir ampliamente dentro de la opinión pública norteamericana, así como en las esferas del gobierno, por lo que en 1986 se impulsa la *Immigration Reform and Control Act* o IRCA por sus siglas en inglés. Esta reforma contemplaba la implementación de un programa de trabajadores invitados para solventar la demanda de fuerza de trabajo de los granjeros estadounidenses, sanciones a los empleadores ilegales, amnistía a los indocumentados ingresados antes de 1982 que no hubieran salido del país, un aumento en las visas para mexicanos y un incremento en el presupuesto para la Patrulla Fronteriza con el objetivo de alcanzar un mayor control sobre la frontera.¹⁹⁶

Esta medida tuvo como objetivo frenar la llegada creciente de migrantes mexicanos indocumentados, desarraigados por los efectos negativos de la crisis de la deuda externa en México, la crisis productiva en el campo y atraídos por la creciente integración económica entre ambos países.

A pesar de la legalizaron de 2.3 millones de mexicanos indocumentados que se beneficiaron de la nueva Ley, del buen desempeño del programa temporal de empleo a migrantes, y del reforzamiento de la frontera, no se logra contener la diáspora mexicana ni su elevado componente indocumentado.¹⁹⁷ De hecho la migración registró de manera constante volúmenes muy superiores a los de décadas pasadas:

[...] durante los años setenta se calculaba que la población mexicana (nacida en México), residente en Estados Unidos, era de cerca de dos millones de personas, mientras que según datos del censo estadounidense [de] 1990, esta misma población aumentó a 4.3 millones, es decir a más del doble. Además, es necesario consierar a la población mexicana no residente que trabaja temporalmente en Estados Unidos. Por otro lado, al menos en teoría, aquellos trabajadores legalizados bajo el Special Agricultural Worker Program, no son

¹⁹⁶ Francis Mestries. “El tema de las migraciones en El cotidiano”, en *El Cotidiano*, año 24, núm. 156, julio-agosto de 2009. México, UAM-A, p. 221.

¹⁹⁷ Véase Gustavo Verduzco, op. cit., p. 19.

residentes, y en ese caso elevarían el número de mexicanos a 5.2 millones, aunque no tenemos forma de saber si se declararon residentes o no.¹⁹⁸

Este incremento migratorio transcurrió no como resultado de la IRCA pero si a pesar de ella, y de otras medidas legislativas implementadas mucho más radicales, como la Iniciativa de Ley núm. 187 en California que contemplaba la suspensión de servicios públicos a indocumentados y la obligación de los servidores públicos de denunciarlos;¹⁹⁹ o la Ley de Reforma de Inmigración y responsabilidad del Inmigrante de 1996, una reforma altamente discriminatoria para los migrantes legales e ilegales, que también cancela el beneficio de algunos programas de asistencia social, prohíbe la educación postsecundaria a los indocumentados y a sus hijos, y cierra el ingreso a extranjeros susceptibles de convertirse en una carga al erario público por la demanda de ciertos servicios públicos.²⁰⁰ Incluso se han implementado desde entonces políticas radicales como la Operación Guardián, el reforzamiento de la seguridad en la frontera con el incremento de más oficiales a la Patrulla Fronteriza, e incluso el levantamiento del muro fronterizo y la militarización de amplios tramos del paso de fronterizo.

Como sea, las estrategias implementadas por el gobierno norteamericano no frenaron el flujo migratorio, profundamente determinado por la incapacidad estructural de la economía mexicana para generar empleo suficiente y bien remunerado para sus habitantes en edad de trabajar, y por otra parte parte, por la sobre demanda de fuerza de trabajo de la economía norteamericana, en condiciones de producir mucho más que lo que le demanda su mercado interno. De esta forma:

En la primera década del nuevo siglo, la migración mexicana se disparó alcanzando de 400 000 a 500 000 emigrantes al año, y sumando casi tres millones de personas durante el sexenio de Fox, y las remesas llegaron a 24 000 millones de dólares en 2007, situándose como la segunda fuente de divisas del país después del petróleo. Tal magnitud del flujo de la comunidad mexicana en Estados Unidos –en su mayor parte indocumentada: 6 a 7 millones de una colonia total de 12, 7- obligaba a los gobierno de México y de Estados Unidos a buscar una solución política concertada y de amplio espectro al problema.²⁰¹

¹⁹⁸ *Ibíd.*, p. 20.

¹⁹⁹ Véase Silvia Vélez Quero. “El perfil de la necesidad en México: emigración y seguridad nacional”, en *El Cotidiano*, núm. 67, enero-febrero de 1995, México, UAM-A.

²⁰⁰ Véase Remedios Gómez Arnau. “La integración económica con México y su impacto en la política interna y externa de Estados Unidos: análisis del ámbito migratorio”, en *El Cotidiano*, núm. 97, septiembre-octubre de 1999. México, UAM-A.

²⁰¹ Francis Mestries, op. cit., p. 223.

Al iniciar el sexenio de Vicente Fox existen importantes esfuerzos por conciliar una agenda migratoria con el vecino país del norte, que es abortada como resultado de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y lleva desde entonces a un endurecimiento de la política migratoria estadounidense. Por su parte, el gobierno mexicano ante la visibilidad y creciente importancia estratégica del fenómeno, implementó una política orientada a un cierto acercamiento con la población migrante. De ello resultó la reforma política orientada a darle el voto a los mexicanos en el extranjero.

Esta nueva posición del gobierno mexicano en relación al tema de la migración hacia Estados Unidos, en los hechos demuestra la total falta de expectativas para dar una solución al problema desde nuestro país. De hecho existe un reconocimiento implícito a los efectos detonadores que el modelo de crecimiento implementado en las últimas tres décadas ha tenido en la constitución de este enorme éxodo de connacionales, ante la falta empleos en el campo y la ciudad y la enorme precarización de los mismos, que no son sino una consecuencia de la exacerbación de las contradicciones inherentes a la acumulación bajo el subdesarrollo en su forma histórica exportadora.

La información contenida en el Cuadro 6 nos muestra la evolución del papel cada vez más preponderante de la población mexicana residente en Estados Unidos desde el año 1990. De representar el 1.8% de la población total en Estados Unidos en 1990, en 2005 pasó a representar el 3.9%, lo que ha convertido a México como el país con más población en aquél país.

Cuadro 6

Población de origen extranjero residente en Estados Unidos, 1940-2007 (Miles de personas)

País o región de nacimiento	Año					
	1990		2000		2005	
	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
Total	248 107 628	100.0	281 421 906	100.0	288 398 819	100.0
Estados Unidos	226 569 332	91.3	248 366 444	88.3	250 561 169	86.9
Unión Europea	3 547 730	1.4	3 762 713	1.3	4 218 862	1.5
Resto de Europa	1 576 826	0.6	2 099 197	0.7	1 626 664	0.6
Asia Oriental	2 041 676	0.8	2 960 210	1.1	3 349 266	1.2
Resto de Asia	3 370 557	1.4	5 714 237	2.0	6 656 918	2.3

Continúa en la siguiente página...

País o región de nacimiento	Año					
	1990		2000		2005	
	Absoluto	%	Absoluto	%	Absoluto	%
Resto de Norte América	897 910	0.4	961 426	0.3	967 056	0.3
México	4 409 033	1.8	9 325 452	3.3	11 164 770	3.9
Centroamérica	1 192 929	0.5	2 093 242	0.7	2 561 803	0.9
Caribe	1 974 717	0.8	3 015 971	1.1	3 230 354	1.1
Suramérica	1 103 644	0.4	1 997 210	0.7	2 531 934	0.9
África y Oceanía	1 423 274	0.6	1 125 804	0.4	1 530 023	0.5

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la página electrónica del Consejo Nacional de Población (CONAPO): <www.conapo.gob.mx>.

La conformación de esta población mexicana residente en los Estados Unidos ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. De estar compuesta en 1940 por alrededor de un 80% por mexicanos de segunda y tercera generación -esto es, de población no nacida en México con alguno de sus padres residiendo en nuestro país o cuyos padres tampoco nacieron en México pero se declaran México-Americanos (chicanos)-; en el 2007 las personas nacidas en nuestro país residentes en el vecino país del norte representaban ya el 39% del total de población nacional residente en aquél país, lo que nos habla de la intensidad del flujo migratorio en los últimos años (ver Cuadro 7). De acuerdo a esta cifras, el cálculo de mexicanos radicando en Estados Unidos representa el 11.4% de la población total de nuestro país, misma que de acuerdo al II Censo de Población y Vivienda 2005 ascendió a 103 263 388 habitantes.

Cuadro 7

Población de origen mexicano residente en Estados Unidos, 1940-2007 (Miles de personas)

Año	Total	Origen Mexicano ¹			
		Emigrantes mexicanos ²		De segunda y tercera generación ^{3 y 4}	
		Absoluto	%	Absoluto	%
1940	1 904	377	19.8	1 527	80.2
1950	2 573	451	17.5	2 122	82.5
1960	3 671	576	15.7	3 095	84.3
1970	5 422	788	14.5	4 634	85.5
1980	9 071	2 199	24.2	6 872	75.8
1990	14 094	4 447	31.6	9 647	68.4
2000	23 208	8 072	37.8	14 428	62.2
2001	23 997	8 494	38.1	14 855	61.9
2002	25 487	9 900	37.3	15 983	62.7

Continúa en la siguiente página...

Año	Total	Origen Mexicano ¹			
		Emigrantes mexicanos ²		De segunda y tercera generación ^{3 y 4}	
		Absoluto	%	Absoluto	%
2003	26 663	10 237	37.0	16 797	63.0
2004	26 871	10 740	38.1	16 641	61.9
2005	28 059	11 027	37.8	17 465	62.2
2006	29 307	11 132	38.0	18 175	62.0
2007	30 266	11 812	39.0	18 454	61.0

Notas: 1/ La población de origen mexicano considera: 1) la población nacida en México; 2) la segunda generación en Estados Unidos y; 3) la tercera generación o más en Estados Unidos.

2/ Población nacida en México.

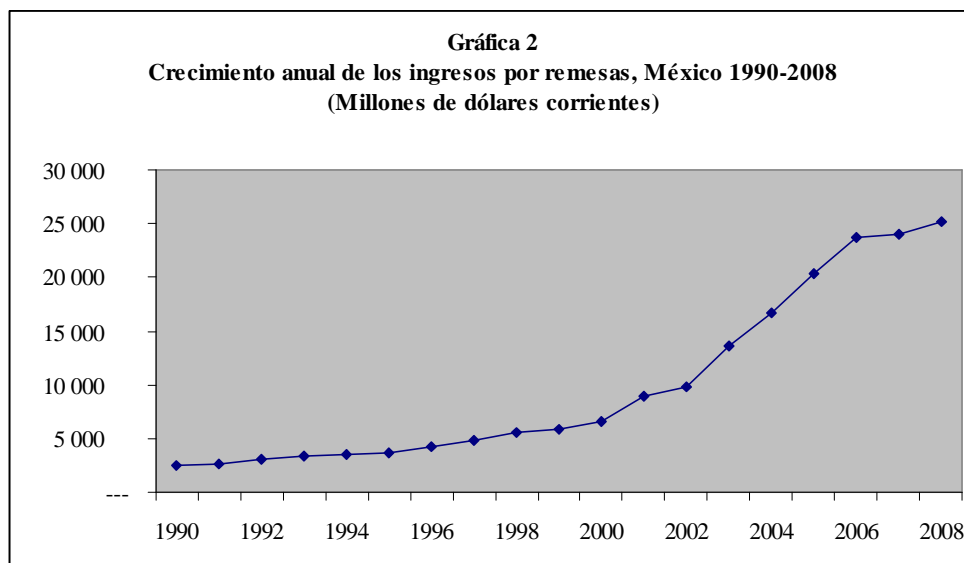
3/ Segunda generación en Estados Unidos: Población residente en la Unión Americana, no nacida en México con alguno de los padres nativo de nuestro país.

4/ Tercera generación o más, en Estados Unidos: Población residente en Estados Unidos, no nacida en México y cuyos padres tampoco nacieron en nuestro país, pero se declaran de origen mexicano (México-americanos, chicanos o mexicanos).

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la página electrónica del Consejo Nacional de Población (CONAPO): <www.conapo.gob.mx>.

La importancia económica de la migración se refleja en el peso que han adquirido por las remesas (en tanto contribuciones enviadas por los mexicanos que trabajan en los Estados Unidos a sus familias en nuestro país) como una fuente de divisas de primer orden en los últimos años. El incremento de estos recursos ha sido exponencial en las últimas décadas, en 1990 se calculaban en alrededor de 2.5 mil millones de dólares y para el año 2008 superaron los 25 mil millones de dólares (ver Gráfica 2), lo que ha convertido a nuestro país en el tercer país que más remesas percibe en el mundo, tan solo superado por India y China.²⁰²

²⁰² Banco Mundial. *Las remesas de migrantes a sus familias alivian la pobreza en sus países*. Documento consultado 15 de mayo de 2009 en la dirección electrónica: <http://youthink.worldbank.org/es/issues/employment/migration/>



Elaboración propia con base a datos de la página electrónica del Consejo Nacional de Población (CONAPO): <www.conapo.gob.mx>.

Desde mediados de los noventa las remesas ya se habían convertido en la segunda fuente de ingresos al país por exportaciones después del petróleo; desde finales de esa década superó a los ingresos derivados del turismo; y desde 2004 su monto ha casi igualado el saldo de la balanza comercial de maquiladoras (ver Cuadro 8). Además, estos recursos representaron en 2006 el 2,7% del Producto Interno Bruto nacional.²⁰³

Cuadro 8
Diversos ingresos por divisas, 1990-2008 (millones de dólares corrientes)

Año	Remesas familiares	Exportaciones		Saldo de la balanza comercial de maquiladoras	Turismo
		Petroleras	Agropecuarias		
1990	2 494	10 104	2 162	3 552	5 467
1991	2 660	8 166	2 373	4 051	5 959
1992	3 070	8 307	2 112	4 743	6 085
1993	3 333	7 418	2 504	5 410	6 167
1994	3 475	7 445	2 678	5 803	6 364
1995	3 673	8 423	4 016	4 925	4 688
1996	4 224	11 654	3 592	6 416	5 288

Continúa en la siguiente página...

²⁰³ Véase Ramiro Morales. Las remesas internacionales, ¿factor de sobrevivencia o de desarrollo de la población del Pacífico Sur de México?, en *Estudios Demográficos y Urbanos*, vol. 21, núm. 3. México, Colmex, 2006.

Año	Remesas familiares	Exportaciones		Saldo de la balanza comercial de maquiladoras	Turismo
		Petroleras	Agropecuarias		
1997	4 865	11 323	3 828	8 834	5 748
1998	5 627	7 147	3 954	10 526	6 038
1999	5 910	9 928	3 926	13 340	5 506
2000	6 573	16 383	4 217	17 759	6 435
2001	8 895	12 799	3 903	19 282	6 538
2002	9 815	14 477	3 866	18 802	6 725
2003	13 650	18 654	4 664	18 410	7 252
2004	16 730	23 706	5 421	19 207	8 382
2005	20 284	31 895	6 127	21 627	9 186
2006	23 742	39 022	6 853	24 321	9 559
2007	23 979	43 018	7 435	Nd	10 389
2008	25 145	50 639	8 389	Nd	10 817

Fuente: Fuente: Banco de México, *Indicadores económicos*, varios años; Banco de información, *Sistema de Información Económica (SIE)*, marzo 2001; y página WEB: www.banxico.org.mx.

Estos datos no deben de llevarnos a la conclusión de que las remesas podrían llegar a convertirse en una potencial fuente recursos para detonar el desarrollo del país. Al contrario, la condición de fuerza de trabajo migrante de las personas que aportan estos recursos las ubican en los excedentes de población nacional, no sólo por su origen sino por que las remesas que envían a sus familias sirve no para acumular capital, sino como recursos de subsistencia normalmente complementarios al ingreso familiar. Esto es así muy a pesar de que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales donde priva en mayor medida el fenómeno migratorio, han emprendido programas para canalizar los recursos de las remesas para programas de desarrollo comunitario (tal es el caso del Programa 3x1 en Zacatecas).

Sin embargo, varios estudios tanto a nivel nacional como internacional han concluido que la mayoría de las familias que reciben remesas usan éstas en orden de prioridad, para consumo corriente, mejoras de inmuebles y educación. El Banco de México con la finalidad de saber ciertas características de los emisores y receptores de remesas en el país, aplicó tres encuestas en los años 2003, 2004 y 2005, y entre sus resultados destacaba el uso que las familias hacen de las remesas: 84 % de las mismas se

destinan para gastos de manutención, el 6% a educación y el 3% y mejoras a inmuebles.²⁰⁴

La consolidación de nuestro país como exportador de fuerza de trabajo migrante durante el patrón de crecimiento orientado al mercado externo, es una muestra muy clara de los efectos negativos que puede tener la acumulación en el subdesarrollo, en amplios contingentes poblacionales de la estructura socioeconómica. La diáspora masiva de mexicanos no tendrá fin en tanto no se resuelvan los problemas estructurales de absorción de fuerza de trabajo que tiene nuestro aparato productivo, y ello no ocurrirá en tanto no se emprenda un proyecto que tenga por objeto emprender el desarrollo del país sobre bases sólidas. Es posible también que Estados Unidos empiece a tener problemas para seguir absorbiendo en tal magnitud la mano de obra excedente que expulsa nuestra país, desde hace ya varios años la política migratoria estadounidense pare estar confirmando esta tendencia, a lo que se ha sumado la recesión económica que está cancelando empleos y precarizando los ya existentes. Como quiera que sea, las perspectivas no son nada prometedoras para nuestros migrantes en ambos lados de la frontera.

Reflexiones finales.

Con lo dicho hasta ahora se ha demostrado la existencia de una *población excedente* en el polo subdesarrollado, que como *población relativa* guarda una relación subsidiaria para efectos de la valorización de capital, mientras que como población absoluta es absolutamente redundante para ello. Su existencia está determinada por la transferencia que hace el polo subdesarrollado de su capacidad de acumulación hacia los países desarrollados. Esta población se erige en todo un desafío para el funcionamiento de la democracia liberal, ya que es una población que está marginada estructuralmente del proceso productivo y que no cuenta con las condiciones materiales necesarias para el pleno ejercicio de su ciudadanía.

De igual forma, se ha demostrado suficientemente la tendencia estructural de nuestro país a generar excedentes de población. Esto lo hemos comprobado al analizar el

²⁰⁴ Véase Humberto Márquez. “Controversias en el desarrollo económico local basado en las remesas de los migrantes”, en *Análisis Económico* Núm. 47, vol. XXI. México, UAM-A, 2006.

crecimiento del empleo informal, la crisis productiva y de empleo en el campo, así como el incremento del fenómeno migratorio. Todos ellos son indicadores contundentes de la incapacidad de nuestro país para absorber fuerza de trabajo, lo que ha generado históricamente una masa de población que no es útil para la acumulación capitalista en su forma subdesarrollada, y que funciona además como un elemento fundamental en el control de los salarios a la baja y en la precarización del trabajo. Esta característica intrínseca a la formación social mexicana se presenta de manera importante durante el periodo de vigencia del patrón de crecimiento relativo, para desbordarse en los años que siguieron a su agotamiento y que se caracterizaron por orientar el patrón de crecimiento hacia el mercado externo.

Así lo demuestra el hecho que el peso de las personas no aseguradas respecto a la PEA durante el impulso a la industrialización con sustitución importaciones fuese abrumadora, y en relación al sector informal de la economía se observa que México reporta en promedio cerca del 30% de su PEA empleada en este sector, colocándose entre los países de la región que con mayor intensidad reportan esta problemática, sólo por debajo de Perú y Guatemala. Este mismo fenómeno subsiste en el patrón de crecimiento absoluto y se consolida, junto con un proceso caracterizado por la precarización del empleo, la caída generalizada de los salarios y el crecimiento de la informalidad en la economía.

Por otra parte, la vigencia de la reforma agraria da cuenta de importantes contingentes de sobrepoblación en el campo, que exigieron del Estado su intervención para frenarlos como un potencial foco de descontento e integrarlos al proyecto nacional. Por ello el ejido echó raíces como una forma de tenencia de la tierra, de organización social y de representación gremial del campesinado. Pero también nació caracterizado por una relación patronal entre el Estado y los campesinos, mediada por la dotación de tierras a través de trámites y procedimientos burocráticos excesivos, que le permitieron a éste ganar obediencia y apoyo de aquéllos, así como el control sobre la iniciativa popular. Este control político no se destensaba con el reparto de tierra sino que se reforzaba una vez procedido éste, ya que constitucionalmente el campesino no tenía la posesión sobre la tierra, sólo era su usufructuario. El campesinado o pequeño productor parcelario se destacó con la reforma agraria como una de las formas más persistentes de

la población excedente en el sector agrario de la economía, se incrustó sólo parcialmente en la lógica de la acumulación capitalista y como consecuencia de sus vínculos estructurales con el Estado, supeditó su futuro a las decisiones políticas de los gobiernos desarrollistas postrevolucionarios.

Con las transformaciones que trajo consigo el cambio en el patrón de crecimiento económico, la estrategia de la nueva política económica para el campo fue la contrarreforma agraria y el TLCAN, orientándose a revertir las estrategias proteccionistas hacia el agro, particularmente las dirigidas a los pequeños productores que habían estado vigentes en el periodo anterior, poner fin al reparto agrario, restituir las tierras a los campesinos para convertirlos en dueños de las mismas e incrementar con ello la inversión privada. Se busca además la apertura comercial, el fin de los precios de garantía, la reestructuración del sistema crediticio, el desmantelamiento de las instituciones de aseguramiento, la privatización de empresas estatales, la introducción de programas de atención a la pobreza extrema, la instauración de subsidios directos sin un claro objetivo productivo, así como la introducción de nuevas formas organizativas. Con ello se conforma un reducido polo integrado por la agricultura comercial con cuantiosas inversiones, capital altamente tecnificado y una producción intensiva y dinámica, articulada principalmente a la exportación; y por otro lado, se generaliza un polo caracterizado por un sector de la agricultura destinada básicamente al autoconsumo, en proceso acelerado de deterioro y precarización de sus condiciones de vida, que utiliza tecnología tradicional para la producción de alimentos básicos y en consecuencia tiene una baja rentabilidad comercial. Con ello, se desarticula el ejido y se deja en la total indefensión al pequeño productor parcelario, por lo que la sobrepoblación en el campo se consolidó en este periodo en condiciones de alta precariedad.

La migración es otra característica determinante de la sobrepoblación en nuestra formación social, que informa de su incapacidad para absorber fuerza de trabajo. Su presencia y magnitud bajo el patrón de crecimiento relativo se demuestra con el Programa Bracero, que posibilitó por primera vez a los gobiernos de México y Estados Unidos la negociación de acuerdos sobre el proceso migratorio, con lo que éste se institucionalizará durante cerca de 22 años favoreciendo el fortalecimiento de las redes sociales migratorias, cuya principal característica fue la no residencia permanente. Se

calcula que en promedio 4.5 millones de personas se beneficiaron de este acuerdo y que a la par de este proceso la migración ilegal tuvo una afluencia similar de personas.

En la medida en que el patrón de crecimiento relativo se acerca a su agotamiento, la migración se incrementa y se caracteriza por su condición estructural e ilegal. Con la reorientación del patrón de crecimiento económico, este fenómeno adquiere magnitudes nunca antes vistas, calculándose que más del 10% de la población de origen nacional se encuentra residiendo en el vecino país del norte y todo parece indicar que estas cifras se van a seguir incrementando. De igual forma, su importancia económica a través de las remesas ha incrementado en importancia, convirtiéndose en la segunda fuente de divisas del país, aunque dichos recursos son utilizados en su gran mayoría para la subsistencia de las familias y no para proyectos productivos.

Una vez que nos hemos aproximado a dimensionar la presencia y desenvolvimiento de la población excedente bajo el subdesarrollo en nuestro país, a continuación nos abocaremos a explicar los efectos que una estructura socioeconómica de este tipo ha tenido en la organización política del país, así como sus transformaciones recientes.

CAPÍTULO IV

La Dominación en México: Las Causas Estructurales de sus Tendencias Autoritarias

En este capítulo analizamos cuáles son los rasgos generales del Estado capitalista y la forma en que la democracia liberal se constituye históricamente como una eficaz forma de dominación en los países desarrollados. Contrastamos las tendencias y la dinámica del conflicto social que determina la generación de consensos sociales en aquellas naciones, y la vigencia que aquí adquiere el ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales por parte de la ciudadanía.

Contrastamos estos rasgos generales de la democracia en el subdesarrollo y encontramos que los excedentes de población se constituyen en un obstáculo de primer orden en la construcción de consensos sociales, ya que generan una dinámica en el conflicto social que deriva en una lucha permanente por el salario, el empleo y mejores condiciones de vida tanto de la población en activo, como de la población excluida. En estas condiciones el ejercicio de la ciudadanía se vuelve precario y es amenazado permanentemente por las tendencias hacia el autoritarismo en el ejercicio del poder político.

En el caso mexicano, la enorme capacidad de nuestra estructura socioeconómica para producir excedentes de población representa en los hechos una atrofia estructural en su mercado laboral, y como hemos visto, ésta se caracteriza principalmente por una incapacidad endógena de la acumulación para absorber fuerza de trabajo y una creciente disposición de fuerza laboral “sobrante”, que ha repercutido en un desarrollo muy bajo del capitalismo en la agricultura y una explotación intensificada de la fuerza laboral.

Lo que intentamos aquí es comprender las características que adopta la dominación, precisamente como resultado de la existencia de este tipo de relaciones sociales. En esta dimensión, buscamos capturar los rasgos generales de las relaciones de poder que se han generado en una sociedad como la nuestra, dividida en clases sociales bajo el subdesarrollo.

Es indispensable entonces capturar las tendencias más importantes en las que se desenvuelve el conflicto entre clases para caracterizar el tipo de Estado y de régimen a que ha dado lugar el subdesarrollo en nuestro país, así como sus tendencias históricas generales en las que se ha desenvuelto.

Finalmente, son analizadas las particularidades del proceso mediante el cual en nuestro país estas tendencias constituyen desde 1934 un régimen político caracterizado por la centralización del poder político en la institución presidencial, ejercido de manera autoritaria, gracias al control corporativo del Estado sobre las organizaciones de trabajadores, que coincide con una particular gestión estatal del subdesarrollo y la vigencia del patrón de crecimiento económico orientado al mercado interno. Con el agotamiento de este patrón de crecimiento, el régimen entra en un proceso de transformaciones que apuntan hacia su democratización, misma que pocos años después es abortada, de tal forma que actualmente conviven formas autoritarias en el ejercicio del poder político con una democracia que se circunscribe al ámbito procedimental.

4.1 Estado y dominación en la sociedad capitalista.

La principal aportación del marxismo a la comprensión del Estado ha sido revelar su carácter de clase, misma que logró echar por la borda aquellas interpretaciones desde la teoría política liberal que lo pretendían hacer ver como un ente que actuaba por encima de los conflictos sociales. Marx encontró en la explotación el secreto oculto que explicaba la dominación, y precisamente por ello se abocó a construir una teoría sobre la explotación tan compleja y precisa que incluso hizo palidecer sus aportaciones a la comprensión de la política, pero al contrario de lo que opinan algunos de sus detractores, logró construir cimientos sólidos para la elaboración de una teoría del Estado que a su muerte ha tenido un considerable desarrollo por varios de sus seguidores.

Comenzaremos por afirmar que el Estado es la organización del poder político, entendiendo por éste una relación de dominio entre clases sociales, cuyo objetivo es mantener la explotación de una de ellas sobre la otra a partir del control de los medios de explotación, y que busca legitimarse para penetrar en el tejido social por la vía del consenso, aunque no sólo por esta vía. En cualquier caso el poder siempre se asentará en la fuerza y las instituciones destinadas a ejercerla.²⁰⁵

De tal forma que podemos sostener que la función principal del Estado capitalista es la dominación de la burguesía por el proletariado, pero no es la única,

²⁰⁵ Esta definición está basada en Adolfo Sánchez Vázquez. *Entre la realidad y la utopía*. México, FCE, 1999, pp. 13-15.

varias funciones confluyen en ella complementándola y son de diferente tipo: económicas, políticas, ideológicas, culturales y jurídicas. A partir del cumplimiento de estas funciones el Estado produce la dominación renovándola constantemente, y el objetivo es hacer aceptable la sociedad capitalista para la mayoría, siempre y cuando los intereses de la clase dominante en su conjunto no sean afectados.

En realidad el Estado reestructura las desigualdades que se generan en la explotación dentro del proceso productivo sin proponerse solucionarlas, lo que contribuye a que el conflicto social siempre esté presente aunque sea en forma latente. Por eso el Estado permanentemente renueva las condiciones generales de dominación adecuándolas a las necesidades de explotación, a través de políticas públicas o reformas legislativas, cuyo único objetivo es desactivar posibles polos de resistencia, sin descartar como último recurso la violencia física monopolizada aunque sea como mera amenaza.

En este sentido, Nicos Poulantzas señala que *“La violencia física monopolizada por el Estado sustenta permanentemente las técnicas de poder y los mecanismos del consentimiento, está inscrita en la trama de los dispositivos disciplinarios e ideológicos, y modela la materialidad del cuerpo social sobre el cual actúa la dominación, incluso cuando esa violencia no se ejerce directamente.”*²⁰⁶ (Subrayado por el autor en el original).

Pero la dominación no aparece de manera explícita ante los dominados, se oculta. En el nivel político se puede dar esto porque ya antes se ha ocultado la dominación en el propio proceso productivo, en la explotación que se da a través de la relación salarial, que la hace aparecer como justa²⁰⁷ tanto al trabajador como al capitalista. Porque el contrato salarial presupone la libertad y la igualdad jurídicas de las partes involucradas, lo que implica la ausencia de cualquier tipo de subordinación social que obstruya la compra de la fuerza de trabajo como mercancía en el mercado. Por eso Stanley Moore afirma: “[...] la libertad y la igualdad formales de la democracia burguesa reflejan, en el

²⁰⁶ Nicos Poulantzas. *Estado, poder y socialismo* México, Editorial Siglo XXI, 1979, p. 93.

²⁰⁷ Nos referimos concretamente al método de explotación en el capitalismo. Aquí el trabajador entra al mercado de mercancías, pero el capitalista no paga por la *fuerza de trabajo* empleada en el proceso productivo, sino por el *trabajo* invertido en un determinado número de horas, por el que al trabajador se le paga un salario. Esto impide ver la división entre trabajo pagado (tiempo necesario para la reproducción del trabajador dentro de la jornada laboral) y trabajo no retribuido (plusvalía), ya que todo trabajo aparece como trabajo retribuido.

nivel de las instituciones políticas, la libertad y la igualdad formales del intercambio de mercancías.”²⁰⁸.

En este sentido, la legitimidad se hace posible en la sociedad capitalista porque la dominación ha sido ocultada, por lo tanto, la clase dominante, al no usar la violencia directa en el proceso productivo puede ocultar el ejercicio del poder ante el conjunto social, por medio del sortilegio de la Ley, y es a partir de ahí que se construyó todo el edificio de las teorías burguesas de la democracia liberal en relación a la legitimidad, como su justificación.

Los mecanismos por los cuales los gobiernos burgueses son legítimos deben ser reconocidos por la sociedad. La dominación del orden burgués debe ocultarse, para que sea colectivamente aceptada. En la legitimidad no se da un consenso absoluto, pero sí suficiente para que la mayoría acepte la dominación de un gobierno. La legitimidad es un proceso de lucha de clases, de juego de fuerzas. Existe consenso mientras no haya oposición que lo cambie a través de acciones concretas.²⁰⁹ En tal sentido, la legitimidad es la expresión de la obediencia de los gobernados, es el complemento de la trinidad poder-dominio-fuerza.

Esta situación es la que ha llevado a que la legitimidad se desplace a la legalidad, y ello ha sido posible gracias a que es precisamente la desigualdad la que hace del Estado de Derecho una fuente de legitimidad dentro de la sociedad burguesa, ya que es una construcción ideológica que hace ver al Estado y su orden jurídico como la proyección de la igualdad y la libertad formales de todos los miembros de la sociedad capitalista, cuando en realidad lo que legaliza es la explotación.

La dominación se desarrolla a través de un conjunto de procesos económicos, políticos e ideológicos que Göran Therborn ha denominado *mecanismos de*

²⁰⁸ Stanley Moore. *Crítica de la democracia capitalista*. México, Editorial Siglo XXI, 1997, p. 70.

²⁰⁹ Esta definición contrasta con la clásica -y tan recurrentemente utilizada en nuestros días- definición de legitimidad de Max Weber, quien la caracteriza como el consenso de los gobernados en relación a las decisiones de la autoridad investida con poderes de mando. Concepto del cual deriva su también recurrentemente empleada tipología de la legitimidad: racional-legal, tradicional y carismática. La diferencia estriba en que para Weber la legitimidad no es un recurso ideológico para justificar la dominación en la sociedad capitalista, resultado de la prescindencia de la ejecución directa de represión en este modo de producción, sino una propiedad que enviste a quien ostenta el poder reconocida por los dominados. Con lo cual Weber no abona mayor cosa a la comprensión del fenómeno, toda vez que nos remite a la forma en que se presenta en la realidad no a su esencia. Cfr. Max Weber. *Economía y Sociedad*. México, FCE, 1996, pp. 704-716.

*reproducción*²¹⁰. Estos funcionan a partir de sanciones puestas en práctica una vez que cualquiera de dichos procesos se desvía del curso previsto. El autor señala que “En las sociedades de clases funcionan dentro y a través de la lucha de clases. Recíprocamente, dentro y a través de estos mecanismos de reproducción se decide la lucha de clases y se ejerce y mantiene la dominación de la clase dominante. Estos mecanismos reciben los nombres de *coacción económica*, *violencia* y *excomuni3n ideol3gica*.”²¹¹ (Subrayado en el original).

La *coacci3n econ3mica* actúa a muchos niveles, “mediante la posibilidad o la realidad de la ruina, la bancarrota, los desajustes, el paro, la pobreza o la pura hambre”²¹², en la medida que el desarrollo de las fuerzas productivas vuelven inviables ciertas relaciones sociales de producci3n.

De igual forma, el uso o amenaza de *violencia* puede darse en niveles diferentes, que van desde “el apaleamiento de los piquetes de huelga y de los organizadores sindicales hasta la invasi3n militar extranjera, y desde el encarcelamiento de los agitadores hasta los campos de exterminio y el terrorismo de las bombas”²¹³.

Con la *excomuni3n ideol3gica* se veda todo modo normal, sensato e inteligible de comunicaci3n a las personas relegándoseles a la locura o la “depravaci3n satánica”. Este mecanismo se torna eficaz en la medida que permite que ciertas ideas afines al sistema prevalezcan sobre otras no favorables, y ello obliga a las personas a aceptar “lo que existe, lo que es posible y lo que es justo, tal y como lo define el modo dominante de discurso.”²¹⁴

Dentro del modo de producci3n capitalista, estos mecanismos operan para crear las condiciones para la explotaci3n y dominaci3n burguesas, y funcionan como una verdadera espada de Damocles sobre los dominados.

²¹⁰ Consideramos que el término “reproducci3n” utilizado por el autor es impreciso, ya que hace referencia a la repetici3n cíclica de ciertos procesos para la preservaci3n de un modo de producci3n, cuando en realidad lo que hacen éstos es *producir* sus condiciones de subsistencia, no a partir de tales reproducciones sino de desarrollos y transformaciones constantes de las mismas, adaptándose a las cambiantes necesidades del desarrollo de las fuerzas productivas. Por lo tanto, el término correcto es *mecanismos de producci3n*. Ver Göran Therborn. *¿C3mo domina la clase dominante? Aparatos de Estado y poder estatal en el feudalismo, el capitalismo y el socialismo*. España, Siglo XXI, Segunda Edici3n, 1982.

²¹¹ *Ibíd.* p. 209.

²¹² *Ídem.*

²¹³ *Ibíd.* p. 210.

²¹⁴ *Ibíd.* p. 211.

No obstante lo anterior, las presiones generadas por la explotación capitalista impactan con fuerza sobre los intereses de los dominados y esos sectores no tardan ni dudan en organizarse motivados por su descontento. Es en este punto que los mecanismos de producción del sistema capitalista se activan, pero para ello lo hacen en distintos niveles de intensidad en una escala marcada en su mínimo por el consenso y en su máximo por la represión. En todo caso en condiciones de normalidad el Estado optará por el consenso, a través de la instrumentación de políticas sociales y reformas legislativas en beneficio de los dominados, con las únicas limitantes que se derivan de las necesidades de la acumulación capitalista.

Es por eso que la mejor forma que adopta el Estado capitalista para la dominación burguesa es la república democrática, ya que aquí la dominación corre de la mano de la legitimidad popular a través del sufragio por la vía del consenso.²¹⁵ De ahí la necesidad de abordar sus características y las condiciones sociales mínimas para su funcionamiento, objeto del próximo apartado.

4.2 La democracia liberal y el ejercicio de la ciudadanía.

El Estado capitalista es la organización política de los intereses de la clase burguesa y está constituido por un conjunto de relaciones que adoptan la forma de instituciones. La relación fundamental es la relación capital-trabajo, misma que es una relación de explotación y determina el resto de las relaciones que se desarrollan en el seno de la sociedad capitalista.

En la medida que la relación fundamental aparece oculta por el salario y el uso de la violencia en el proceso productivo es externa, el Estado en la sociedad capitalista adoptará históricamente la forma democrática para cumplir con sus funciones de dominación. Esto no sería posible si la relación de explotación de la que parte todo esto, no apareciera oculta para las partes involucradas. Es en esto donde el liberalismo

²¹⁵ El hecho de que la democracia liberal sea la mejor forma de dominación en el capitalismo porque procura la legitimidad del ejercicio del poder público y la construcción de consensos para ello, no quiere decir que por este hecho pueda servir a los intereses del proletario como clase, ya que nunca deja de ser una *forma que adopta el Estado capitalista para la dominación burguesa*. Lenin ya había advertido esto cuando señalaba en *El Estado y la revolución*: “Nosotros somos partidarios de la república democrática, como la mejor forma de Estado para el proletariado bajo el capitalismo, pero no tenemos ningún derecho a olvidar que la esclavitud asalariada es el destino reservado al pueblo, incluso bajo la república burguesa más democrática. Más aún. Todo Estado es una ‘fuerza especial para la represión’ de la clase oprimida.” Vladimir I. Lenin. *El Estado y la revolución*. China, Ediciones en lenguas extranjeras Pekín, 1966, p. 23.

burgués jugó un papel muy importante al difundir la idea de la existencia individual de ciudadanos, separados unos de otros, pero que son iguales ante la ley, más allá de su posición económica. Por eso la democracia debe ser denominada con el adjetivo liberal, porque sin los principios y valores liberales que la fundamentan simplemente nunca hubiera existido.

De ahí que el Estado capitalista adquiera y requiera una autonomía relativa en relación a la base económica, particularmente bajo su forma democrática liberal. Esto no sólo le permite actuar con legitimidad frente a los gobernados, sino sobre todo tener un margen de maniobra para conciliar los intereses a veces contrapuestos de las fracciones de la clase burguesa, y éstos con los de la clase explotada, con el objetivo de crear las condiciones para el desarrollo capitalista.

La existencia de una autonomía del Estado llevó a algunos autores marxistas, como Nicos Poulantzas, a plantear que la política del Estado no es monolítica y totalmente coherente con los intereses de una fracción de la clase dominante, sino que “debe ser considerada como el resultado de contradicciones de clase inscritas en la estructura misma del Estado.”²¹⁶ Este señalamiento lo llevó además a afirmar que, “El Estado condensa no sólo la relación de fuerzas entre fracciones del bloque en el poder, sino igualmente la relación de fuerzas entre éste y las clases dominadas.”²¹⁷ Aunque, acotaba, la presencia de los dominados en el Estado, a diferencia de lo que ocurre con la clase dominante, que se materializa a través de aparatos que concentran un poder propio, se concreta a través de focos de oposición respecto a su clase antagónica.

Sin embargo, esta definición del Estado como condensación de la relación de fuerzas entre el bloque en el poder, y entre éste y las clases dominadas, nos remite a una situación en la que el Estado ha perdido su carácter de organización política de la burguesía en el capitalismo, y resulta ser un armazón que puede ser utilizado por cualquier grupo organizado en una determinada correlación de fuerzas. Esta fue la principal crítica que Ralph Miliband en su momento hizo a la obra de Poulantzas, y permitió avanzar en la comprensión del Estado desde la teoría marxista.²¹⁸

²¹⁶ Nicos Poulantzas, op. cit., p. 159.

²¹⁷ *Ibid.*, p. 169.

²¹⁸ Véase Ralph Miliband. *El Estado en la sociedad capitalista*. 17ª Edición. México, Siglo XXI, 1997.

Por eso en la democracia liberal la inclusión formal-legal de los dominados en el Estado imprime a sus gobiernos el sello de representantes de los miembros de todas las clases, aunque en realidad esta inclusión sólo sea formal y la aparente autonomía del Estado sea relativa, porque ante lo que no puede ser autónomo el Estado es frente al funcionamiento del capitalismo.

Esto lo demuestra el hecho de que el pueblo ni hace las leyes, ni las interpreta, ni las hace cumplir directamente. Su participación se limita a votar y se supone que a través de su voto elige funcionarios públicos que cumplirán con dichas tareas, ejerciendo con esto un supuesto control de origen sobre ellos. Giovanni Sartori, uno de los principales ideólogos contemporáneos de la democracia liberal, formula el asunto en los siguientes términos: “Cuando votamos para elegir no decidimos cuestiones específicas de gobierno. El verdadero poder del electorado es el poder de elegir quién lo gobernará. Por lo tanto, las elecciones no deciden las cuestiones, sino quién será el que las decida.”²¹⁹

Pero este principio siempre criticado desde el marxismo, ha encontrado en los teóricos liberales de todas las épocas a sus más valientes defensores. Por eso desde que en el siglo XIX las preocupaciones de la burguesía, ya constituida como clase dominante, pasan al tema de dotar de racionalidad su dominio, la función principal del sufragio fue justificada como medio para proteger a la población del gobierno. Sin embargo, su función real fue proteger la propiedad privada, bajo el principio de que nadie debe valerse de su poder para ejercerlo sobre otros.

A partir de entonces la forma concreta que adquiere el Estado estará determinada por la morfología de la clase dominante y dará lugar a la democracia liberal. El sufragio entonces fue pensado por los ideólogos liberales como un mecanismo idóneo para resolver la problemática que le representaba a la burguesía el no ser una clase homogénea, ya que el hecho de estar compuesta por distintas fracciones que compiten entre sí por la ganancia, era un peligro real para su dominación. El sufragio resolvía esta dificultad, ya que abría la posibilidad a los integrantes de la clase dominante de competir por el poder a través del sufragio, pero con esta alternativa se abría a su vez la posibilidad de que la clase dominada accediera al sufragio y pusiera en peligro la dominación. Por eso es que el sufragio tardó tanto tiempo en volverse realmente

²¹⁹ Giovanni Sartori. *¿Qué es la democracia?* México, Taurus, 2008, p. 90.

universal, y sólo se alcanzó cuando la clase dominante tuvo la certeza que la clase dominada no accedería al poder mediante el sufragio.

De ahí que pensadores como Jeremy Bentham o James Mill se preocuparan a lo largo de su obra a tratar de dotar de racionalidad a la democracia liberal, tal es el caso del utilitarismo. Macpherson sostiene que ellos suponen como el objetivo principal del hombre en la sociedad la felicidad y que ésta se identifica con la riqueza como medio para alcanzarla, es decir, el hombre como consumidor y apropiador infinito. Pero ambos pensadores elevaron el principio del respeto a la propiedad privada como principio supremo al cual estaban subordinados todos los valores humanos, por lo que en realidad sólo buscaban dotar de racionalidad a la dominación política de la burguesía, no cuestionar el sistema económico en cual sustentaba su poder.²²⁰

De igual forma, Macpherson señala que a mediados del siglo XIX John Stuart Mill se abocaría a resolver dos nuevas problemáticas que se planteaban a la democracia liberal: la amenaza que representaba la organización de la clase obrera para la propiedad privada y el problema moral que planteaba las condiciones cada vez más inhumanas en que existía ésta. Por ello sustentaría que el objetivo del hombre en la sociedad no se limita a acumular riqueza, sino que debe ser su desarrollo en todos los órdenes. Sin embargo, sus preocupaciones por la igualdad chocaban con los privilegios que protegía la democracia liberal, por ello su propuesta de hacer del sufragio universal el medio para que el hombre a través de su participación en el gobierno se desarrolle, siempre estuvo sesgada por el principio de la proporcionalidad de la participación política en relación a la propiedad. En realidad en este punto la preocupación era desactivar la organización de los obreros como clase social.²²¹

En realidad el sufragio universal pasó a ser un prerrequisito de la democracia liberal, una vez que se le lograron conjurar los peligros que éste representaba para la dominación burguesa, y esto se logró según Macpherson, gracias a la eficacia con que el sistema de partidos aportó un determinado tipo de equilibrio a la democracia. En este sentido, el autor afirma: “No creo exagerado decir que la principal función que ha desempeñado de hecho el sistema de partidos en las democracias occidentales desde el

²²⁰ Ver C. B. Macpherson. *La democracia liberal y su época*. España, Madrid, Alianza Editorial, 1982, pp. 35-57.

²²¹ *Ibíd.*, ver pp. 58-59.

comienzo del sufragio democrático ha sido suavizar las aristas de los conflictos de clase temidos o probables, o, si se prefiere, moderar y aquietar un conflicto de intereses de clase con objeto de proteger las instituciones de la propiedad existentes y el sistema de mercado contra todo ataque eficaz.”²²²

Con la ampliación del sufragio, el sistema de partidos pierde, por fuerza, responsabilidad ante el electorado; previamente a que llegara a ser democrático, su función consistía en atender las necesidades de combinaciones variables de diversos elementos de la clase propietaria. Sin embargo, con la llegada del sufragio democrático, el sistema político ha tenido que atender las exigencias de dos clases, la que tiene propiedades considerables y la que no. Ello implica que la realización de transacciones, necesita de un margen de maniobra suficiente para el gobierno. Dicho margen sería imposible con un gobierno responsable ante sus electores.²²³

Pero los partidos políticos cumplen esa función porque su organización guarda muy poca relación con la organización cotidiana de la sociedad, son un tipo de representación indirecta, y es indirecta por que las clases sociales que los integran tienen intereses contradictorios. Los partidos políticos en la democracia liberal son resultado de la estructura morfológica de la clase dominante; es decir, si en el terreno económico la única racionalidad que guía a la burguesía es la ganancia, y es en torno a ello que organiza sus intereses como clase; en el terreno político la única lógica que guía a los partidos políticos es la conquista de espacios de representación a través del sufragio, y es principalmente alrededor de esta lógica que estructuran sus intereses y estrategias, no a partir de posiciones que recuperen los intereses de una de las dos clases fundamentales, porque ello iría contra su propia racionalidad.

Macpherson advierte sobre dos prerequisites para que los sistemas de partidos hubieran podido funcionar como la han hecho hasta ahora: que los miembros de la clase dominada no tengan un objetivo común y que tengan tendencias en direcciones distintas por otras corrientes entrecruzadas (etnia, religión, etc.); y que el capitalismo haya entrado en una fase de expansión imperial en los centros desarrollados, lo que le permite a la clase dominante hacer ciertas concesiones a los trabajadores en esas latitudes.²²⁴

²²² *Ibíd.*, p. 81.

²²³ *Ibíd.*, ver p. 82.

²²⁴ *Ibíd.*, ver p. 83.

Pero además este autor advierte que con la ampliación del sufragio el sistema de partidos pierde responsabilidad frente a sus electores, ya que dicha ampliación trae como consecuencia el tránsito hacia partidos nacionales de masas que hacen necesaria la construcción de una maquinaria electoral controlada por un centro al interior de los partidos, que normalmente es la que ocupa los puestos del gobierno, y desde éstos ejercen un control vertical sobre la militancia. De esta forma el elector pierde control sobre el partido y sobre sus gobernantes.²²⁵

Por otra parte, las funciones de gobierno son ejercidas por burocracias cuya selección y actividades son en gran medida independientes del control popular. Stanley Moore señala al respecto: “A veces, la policía y el poder judicial se distinguen de la burocracia. Pero sigue en pie el hecho de que, normalmente, en los estados capitalistas, todos los componentes del poder estatal –militares, policía y poder judicial, así como la burocracia, en su sentido restringido- son jerarquías de funcionarios rentados en las que cada miembro del grupo es controlado únicamente por sus funcionarios superiores y en las que el trabajo del grupo está dividido y centralizado como en una fábrica.”²²⁶

De lo anterior se concluye que la relación entre la administración burocrática y el sufragio universal dista mucho de ser directa, y que en todo caso a quien se elige pasa a comandar a ciertas capas burocráticas que obedecerán al representante de los intereses de la burguesía en turno. Pero además, el aparato administrativo está diseñado para funcionar así y no de otra manera, el aparato institucional y jurídico al que se ciñe la burocracia sirve como ya hemos visto a los intereses de la clase dominante. De ahí que el resultado natural sea una burocracia que sirve al pueblo con palabras y a la clase dominante con hechos.

Es por todo lo anterior que la democracia liberal es la forma más eficaz que adquiere el Estado burgués para ejercer su dominación. Por un lado, está diseñada para crear consensos al interior de una sociedad desgarrada por conflictos de clase entre dominadores y dominados; por otro, está diseñada para organizar de la mejor forma posible a las distintas fracciones que integran la clase burguesa, que de otra forma llevarían la competencia por la tasa de ganancia entre ellas a una lucha irresoluble. La

²²⁵ *Ibíd.*, ver pp. 83-85.

²²⁶ Stanley Moore, *op. cit.* p. 74

democracia liberal es además una forma eficaz de legitimar a la clase dominante ante los dominados, sin poner en peligro la explotación que a nivel económico ejerce sobre estos, es decir, contribuye a fomentar el consenso frente al orden existente.

Pero el logro de dichos consensos no resuelve los conflictos de clase, las contradicciones en el seno de la sociedad capitalista siguen su curso en la medida que la explotación incrementa, como resultado del desarrollo de las fuerzas productivas y de la acumulación privada de la riqueza generada por la sociedad. Es por eso válido afirmar que para que la democracia liberal cumpla su función de generar consensos entre las clases explotadas, requiere que las clases dominadas en una proporción mayoritaria gocen, además de los derechos civiles y políticos que le son consustanciales a la democracia, de ciertos derechos económicos, sociales y culturales, así como de garantías para su goce por parte de los individuos para el ejercicio de la ciudadanía.

En la actualidad, ambos tipos de derechos están ampliamente reconocidos en las legislaciones de las naciones del mundo y forman parte de dos pactos internacionales signados por la mayoría de los Estados adscritos a las Organización de las Naciones Unidas.

Los derechos civiles y políticos integran el Pacto Internacional del mismo nombre, que fue aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1966 y su entrada en vigor se dio en 1976.²²⁷ Son conocidos como derechos de primera generación por haber sido los primeros en consagrarse en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales, y son herencias de las revoluciones políticas burguesas que se desarrollaron en Europa y América desde finales del siglo XVIII y el siglo XIX.

Como ya vimos, estos derechos supuestamente están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público, y obligan al Estado a abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos. De manera enunciativa éstos son²²⁸:

- Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica.

²²⁷ Organización de las Naciones Unidas. *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*. Nueva York, 1966. Consultado en Internet el 10 de julio de 2009: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm.

²²⁸ Ver, ídem.

- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica.
- Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.
- Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral.
- Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación.
- Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia.
- Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
- En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país.
- Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean.
- Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión.
- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de ideas.
- Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica.

Los derechos económicos, sociales y culturales integran el Pacto Internacional del mismo nombre aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1966 y que entró en vigor diez años después.²²⁹ También conocidos como derechos de segunda generación, tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, a la educación y a la cultura, para así asegurar el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos.²³⁰

El principio fundamental que da origen a la difusión y adopción por los Estados de este tipo de derechos es el pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia, mismos que sólo son posibles si existen las condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen su vigencia.

El pacto reconoce que la vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a “las posibilidades reales de cada país”²³¹. Con lo que se están reconociendo diferencias importantes en las formaciones sociales, que obstaculizan su universalización. Por lo

²²⁹ Organización de las Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Nueva York, 1966. Consultado en Internet el 10 de julio de 2009: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ceschr_sp.htm

²³⁰ Ver, ídem.

²³¹ Ídem.

tanto, este tipo de derechos sólo son exigibles al Estado en la medida que éste tiene recursos para garantizarlos. Estos derechos son los siguientes²³²:

- Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.
- Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias.
- Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses
- Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
- Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.
- Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.
- Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades.
- La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita.

La existencia de ambos tipos de derechos depende en última instancia de las condiciones materiales concretas en que se desarrolle la acumulación en los Estados, y del nivel de eficacia con que funcione la democracia liberal. En todo caso, éstos son prerequisites fundamentales para su plena vigencia.

Ahora bien, habrá que señalar que estos derechos son resultado de incontables luchas políticas y sociales de los trabajadores de todo el mundo en diferentes épocas, que no hay lugar para revisar aquí, y no una simple obra de buena voluntad del Estado capitalista. Pero es importante dejar constancia de que el simple reconocimiento internacional de estos derechos a lo largo del siglo XX da cuenta de la penetración de la democracia liberal en todo el orbe, así como de la expansión y profundización de la explotación de la humanidad por el capital, situación que por sí misma ha sido consustancial a la generalización de la democracia liberal como forma de dominación burguesa.

Ya vimos que los derechos políticos y civiles, complementados hace ya varias décadas por los derechos económicos, políticos y sociales, en realidad lo que protegen es la propiedad privada, porque si en verdad promovieran la igualdad y la libertad de los

²³² Ídem.

seres humanos, entonces las legislaciones del mundo no preverían la suspensión o limitación de dichos derechos en “circunstancias de emergencia”. Además promueven el individualismo, ya que su goce y exigibilidad sólo se puede dar de manera individual, y con ello se conjura la organización de los dominados y se legitima la dominación burguesa.

Sin embargo, la vigencia de estos derechos para el ejercicio de la ciudadanía nunca ha existido de manera plena, aunque sólo en los países más desarrollados ha tenido sus aproximaciones más cercanas. Para ejemplificar esto se encuentra el estudio *El Mundo en 2007* elaborado por el grupo Economist Intelligence Unit (EIU) del diario inglés *The Economist*.²³³ Este estudio está aplicado a un universo de 167 países y se basa en el análisis de 60 indicadores agrupados en cinco categorías, consideradas factores esenciales en una democracia: proceso electoral y pluralismo; libertades civiles; funcionamiento del gobierno; participación política, y cultura política. El índice de democracia es el promedio de los valores de cada categoría, en una escala del 0 al 10. De acuerdo al ranking, se propone la agrupación de los países que forman parte del estudio en cuatro categorías: *democracias plenas*, *democracias imperfectas*, *regímenes híbridos* y *regímenes autoritarios*.

Pues bien, destaca el dato de que el grupo de los países que integran las 28 *democracias plenas* por el estudio referido, es decir países donde los derechos políticos y ciudadanos se ejercen de manera más plena, está integrado en su gran mayoría por los países con los más altos ingresos del planeta y que son miembros integrantes de la OCDE. Conforman el grupo países escandinavos o del norte de Europa como Suecia, Islandia, Noruega, Holanda, Dinamarca y Finlandia; todo el Grupo de los ocho países más industrializados del mundo, a excepción de Italia y Rusia; y otros países con importantes niveles de desarrollo como Luxemburgo, Australia, Suiza, Irlanda, Nueva Zelanda, República Checa, Portugal y Bélgica. Además se encuentran Malta, Grecia y Eslovenia, países con niveles altos de ingreso pero que no son miembros de la OCDE.²³⁴

Este dato es de la mayor relevancia y lleva interrogarnos sobre cuál es la dinámica del conflicto social que facilita la vigencia de la democracia liberal en el

²³³ Economist Intelligence Unit, op. cit.

²³⁴ Ídem.

desarrollo, y cuál es por otra parte, aquélla dinámica que la dificulta en el subdesarrollo. Este es el tema del próximo apartado.

4.3 La dinámica que dificulta la generación de consensos sociales en el subdesarrollo.

Tratando de explicar las condiciones que han hecho posible la existencia de un Estado democrático y social en los países desarrollados en el mundo y los problemas para la plena vigencia de éste en los países subdesarrollados, y en polémica con las teorías “funcionalistas” del Estado en el marxismo; Adam Przeworski²³⁵ afirma que los resultados de los conflictos entre clases sociales determinan las políticas llevadas a cabo por el estado, y con ello ubica el peso de la explicación sobre la dominación en el capitalismo, en el conflicto mismo. La interrogante que mueve el análisis de Przeworski es conocer las circunstancias en las que puede existir un compromiso entre clases antagónicas y las características del Estado que resultarían de tales compromisos si es que éstos se generaran.

De acuerdo a este autor, las posibilidades de que un compromiso de tal tipo se genere dependen esencialmente de dos factores: a) que ese compromiso se base sobre la expectativa de un aumento salarial futuro para los trabajadores como consecuencia de ganancias presentes; y b) que se base en la expectativa de que los capitalistas ahorrarán e invertirán una parte de las ganancias suficiente para posibilitar la mejoraría de las condiciones obreras.²³⁶ De igual forma, las condiciones que deben existir para que esos factores se conjuguen, se relacionan con el grado de certidumbre de cada clase en relación a las garantías de que un compromiso se respete una vez pactado, y en el estado de la economía, particularmente en la eficiencia media de la inversión.²³⁷

Przeworski advierte que la magnitud del riesgo que enfrenta cada clase depende de:

- 1) La medida en que los miembros de cada clase estén organizados como clase (“monopolio bilateral”), esto es, la medida en que alguna organización tenga el

²³⁵ Adam Przeworski. “Compromiso de clase y Estado”, en Norbert Lechner (editor), *Estado y política en América Latina*. México, Siglo XXI Editores, 1986.

²³⁶ *Ibíd.*, pp. 246-247.

²³⁷ *Ibíd.*, p. 250.

monopolio de la representación de intereses de clase y una capacidad efectiva de forzar a la masa de la clase a adherir a los términos del compromiso. [...]

2) La institucionalización de las relaciones entre capital y trabajo y su imposición por parte del estado. Nuevamente, el problema reside en si el estado será capaz y tendrá la voluntad suficiente para coaccionar a ambas partes, previniendo desviaciones de los términos del compromiso. [...]

3) El riesgo inherente a la inversión. Depende de la incertidumbre como consecuencia de las fluctuaciones del mercado, a la competencia doméstica e internacional, al cambio tecnológico y a otros factores económicos. [...]²³⁸

En este sentido, el autor concluye que el compromiso entre clases sociales antagónicas es posible siempre y cuando esté provisto de una relativa certidumbre, cuando la eficiencia de la inversión es alta, y cuando ambas clases tienen razones para temer un conflicto abierto. Una situación contraria llevaría a la inexistencia del compromiso entre clases.

El papel del Estado en una condición de compromiso de clase es la de interventor en la economía, cuyo objeto será generar las condiciones para que los capitalistas individuales tomen las decisiones “correctas” requeridas por el compromiso de clases en relación a la inversión de la ganancia. Pero también implica una forma democrática de relaciones políticas, una relación específica entre el Estado y la sociedad, y un tipo particular de instituciones y relaciones entre ellas. En este sentido, se afirma:

El estado debe garantizar coactivamente la obediencia de ambas clases a los términos del compromiso y proteger a aquellos segmentos de cada clase que entran en un compromiso de comportamiento no cooperativo de sus propios compañeros de clase. El estado debe inducir a los capitalistas individuales a tomar las decisiones que el compromiso de clase requiere. Finalmente, puesto que el estado del compromiso de clase es democrático debe proveer a que la coalición de clases que integra el compromiso pueda ganar el apoyo popular en las elecciones, lo que implica tomar en cuenta los intereses de los que han sido excluidos de esa colación específica.²³⁹

El gran mérito de este análisis es que invita a buscar en las relaciones sociales de producción y el conflicto entre clases sociales que genera, la conformación de los Estados nacionales modernos. Sin embargo, sus reflexiones terminan llevando a entender al Estado como un árbitro en los conflictos entre clases sociales, y más aún, a

²³⁸ *Ibíd.*, pp. 250-251

²³⁹ *Ibíd.*, p. 261.

explicar dicho conflicto como una suerte de estadio donde las contradicciones entre clases sociales, gracias a la existencia de condiciones para la generación de compromisos entre ellas, podría llevar a una especie de “paz perpetua”. Esta definición no se aleja en nada de las teorías contractualistas del Estado, que desde el pensamiento crítico hace mucho han sido superadas.

El problema reside en que Przeworski entiende al Estado como una simple proyección de la correlación de fuerzas entre las clases sociales, que termina además sustrayéndose de ésta para convertirse en el gran juez y ejecutor de los acuerdos y desacuerdos, con lo que lo despoja de su esencia clasista. Como ya hemos visto en otra parte de este trabajo, el Estado en última instancia es la organización política de la burguesía, y lo es porque ésta lo necesita para ejercer su dominación sobre las demás clases sociales. Esta condición de la organización estatal resulta de la explotación capitalista en el proceso productivo, que deviene precisamente en un conflicto irresoluble entre clases sociales antagónicas, colocadas en distinta posición con respecto a los medios de producción. La función principal del Estado entonces es garantizar la reproducción de determinadas relaciones sociales que hacen posible la explotación y con ello el funcionamiento del sistema capitalista. En este sentido, la sola existencia del Estado nos habla precisamente de la imposibilidad de que el capitalismo pueda sobrevivir sobre la base de un compromiso *entre* clases sociales, porque el conflicto entre éstas sólo puede ser resuelto superando el modo de producción vigente; y este aspecto irresoluble del conflicto entre clases es el que Przeworski se empeña en omitir. Por ello elude cualquier mención al tema del desarrollo de las fuerzas productivas como determinante en la configuración de las relaciones sociales de producción, y como pulso de la lucha de clases.

Ahora bien, no son las clases sociales las que acuerdan y pactan entre ellas, es el Estado quien puede generar compromisos entre determinadas facciones capitalistas, y entre éstas y los trabajadores, y tener la facultad de sancionarlos, pero en su calidad de organización política de la clase dominante. No como “árbitro y garante” de un acuerdo entre “iguales”, sino como ejecutor de políticas que atienden a los intereses de esa clase social en determinadas condiciones históricas, que además son resultado de estrategias dentro una lucha desigual que puede favorecer a determinados agentes sociales. Al

respecto, se debe señalar que: a) estas luchas son asimétricas; b) como enfrentan fuerzas desniveladas el factor decisivo es la preparación estratégica; c) la confrontación de recursos entre clases sociales es lo que define la correlación de fuerzas entre ellas; y d) esta correlación de fuerzas se desarrolla en momentos específicos de una formación social y se muestra en la forma de conflicto entre protagonistas dotados de un determinado potencial.

Por otra parte, Przeworski destaca que las experiencias de los Estados de Bienestar que se generaron en los países desarrollados en el periodo de posguerra se han asemejado en gran medida a su modelo, pero en los países subdesarrollados las posibilidades de su vigencia han estado menguadas por las características de su estructura económica.

Advierte que esta estructura se caracteriza por un sector exportador y un sector de mercado interno cuya acumulación exige un crecimiento de la producción para el mercado, y existe un sistema autosuficiente de producción de alimentos que impone un límite a la expansión de las actividades de sustitución de importaciones. Como los productos que se sustituyen son bienes durables, y existe una persistencia de la agricultura no comercial, la demanda de esos bienes entre la población es muy baja, lo que explicaría la estrechez del mercado interno y la falta de inversión extraordinaria para llevar a cabo la sustitución de bienes de capital, misma que no puede financiarse a partir de las ganancias del proceso de sustitución. A ello añade el hecho de que las industrias de sustitución se hayan internacionalizado (bien podría decir extranjerizado) debilitando la integración de la economía; y también el que las actividades de exportación se desarrollen de manera independiente de otros sectores, particularmente cuando son intensivas de capital.²⁴⁰

Esta estructura económica provoca serias limitantes en la constitución de compromisos de clase. Entre ellos destaca en primer término la tendencia de los salarios a ser más bajos en los sectores exportadores integrados al mercado internacional, lo que genera serias dificultades para establecer consensos entre la clase trabajadora y negociar una tasa salarial homogénea con el capital organizándose como clase. La única forma posible de llegar a un compromiso en estas condiciones es que los sectores exportadores

²⁴⁰ *Ibíd.*, pp. 263-264.

altamente productivos carguen los costos que implicaría la organización de los trabajadores, pero el capital exportador, al ser internacional, puede amenazar con no reinvertir su ganancia. Por lo tanto, el capital local es el que se queda con la responsabilidad de lidiar con el consenso de los trabajadores, por lo que se ven en la disyuntiva de aliarse con los trabajadores o con el capital internacional y los sectores ligados es éste.²⁴¹

De acuerdo a Przeworski, los compromisos de clase no son posibles cuando los trabajadores son económicamente más militantes en relación a la tasa de inversión, los flujos internacionales de ganancias y a la eficiencia de la inversión. Pero apunta que tal compromiso es posible cuando no son económicamente militantes y en esta circunstancia una “alianza nacionalista” puede unirlos contra el capital foráneo y con los obreros empleados en el sector de alta productividad. Tal sería el caso de las experiencias de los estados populistas en la región.

En relación a la burguesía, este autor señala que su “[...] organización como clase y la organización de un estado autónomo con respecto a los intereses particulares de los capitales sectoriales se ven así obstaculizadas por las inserciones independientes en un sistema económico internacional”.²⁴²

El autor atribuye con todo esto una debilidad estructural de los Estados en América Latina, y no puede ocurrir de otra forma si la expresión de éstos es resultado de una “falta de compromiso” de las clases sociales en pugna. Al respecto debemos señalar que es cuestionable la idea de un Estado débil en América Latina, la experiencia histórica nos demuestra lo contrario, y en todo caso éste no es más que el resultado de la morfología de la clase dominante en la región.

A pesar de ello Przeworski tiene el mérito de encontrar en los vínculos entre el capital local y el internacional un elemento de primer orden en la conformación del Estado nación en el subcontinente, además de ubicar en el seno de la estructura económica las razones de dicha conformación. Sin embargo, su análisis se centra más en la esfera de la circulación que en el de la producción, que es la que define a final de

²⁴¹ Ibid., p. 265.

²⁴² Ibid., p. 268.

cuentas el tipo de relaciones sociales a que ha dado lugar el capitalismo subdesarrollado en la región.

El principal elemento diferenciador de nuestra estructura económica es la ausencia de generación de trabajo general que es importado para la producción en nuestros países, y como la acumulación descansa en este progreso, esto genera las distorsiones económicas que ya hemos venido comentando y que de alguna forma reseña Przeworski. Pero es esta dependencia del progreso ajeno lo que configura el entramado de intereses entre la burguesía local y el capital extranjero, y es por eso que las estrategias estatales se abocan a garantizar la acumulación en el subdesarrollo. No es que las formaciones estatales sean “débiles” en nuestra región, ni mucho menos que sean producto de compromisos de clase débiles o inexistentes, sino que son resultado de una organización política de clase orientada a garantizar la existencia de determinadas condiciones ahí donde la relación capital-trabajo no se ha desarrollado.

Por otra parte, la tendencia endógena de nuestras formaciones sociales a la presencia por periodos históricos prologados del conflicto social, es un resultado natural de la existencia de una sobrepoblación ampliada que mantiene los salarios y los empleos por debajo del mínimo óptimo para la reproducción de los trabajadores, y esta condición de la lucha de clases en el subdesarrollo es la que dificulta la viabilidad de lo que Przeworski entiende como compromisos de clase.

En realidad la tendencia al descontento social que parece privar en las formaciones sociales latinoamericanas, es lo que ha determinado la presencia durante periodos prolongados de salidas autoritarias a los movimientos de ascenso de las luchas sociales. De entre las formas como la burguesía ejerce su dominación, la concesión está acotada por las posibilidades de su Estado para responder a las demandas sociales, y por ello, la represión resulta ser tan consistente como el descontento.

El Estado, no sólo está en posibilidades de obstruir sino de revertir logros sociales ulteriores de las luchas populares, pero también de generar los consensos necesarios como resultado de una determinada correlación de fuerzas entre clases sociales. La intermitencia entre autoritarismo y democracia es una consecuencia necesaria de la persistencia del descontento, así como del ascenso y reflujo de las luchas sociales por la mejora en las condiciones de vida de los trabajadores.

A continuación nos abocaremos a caracterizar cómo ha transcurrido históricamente esa correlación de fuerzas dentro del subdesarrollo para el caso mexicano, así como el tipo de Estado y de régimen a que ha dado lugar después de la Revolución Mexicana. Encontramos tres momentos en este proceso: a) La formación del Estado populista y la constitución del régimen presidencialista mexicano; b) La reformulación de la alianza populista, la vigencia del Estado desarrollista y la consolidación del presidencialismo; y c) la ruptura del pacto social, la constitución del Estado Neoliberal y la trunca transición a la democracia.

4.4 El Estado populista y la constitución del presidencialismo mexicano.

Desde ahora apuntamos que las organizaciones estatales en el subdesarrollo tienen características originales que les son propias, precisamente como resultado de la especificidad del tipo de relaciones sociales de las que son producto. Por ello, dentro de las dos formas básicas de las formaciones estatales bajo el capitalismo desarrollado –la democracia liberal o el totalitarismo–, podemos encontrar en el subdesarrollo un sin fin de experiencias históricas nacionales que pueden resultar puntos intermedios entre éstos; u otros, con características tan específicas que desafían la rigidez de tales caracterizaciones. Este último parece ser el caso del Estado populista vigente en algunos países de América Latina durante determinados contextos históricos en la primera mitad del siglo XX. Punto de referencia necesario para iniciar nuestra caracterización del Estado en nuestro país.²⁴³

Tal vez ha sido Octavio Ianni quien con mayor rigor y claridad ha estudiado este tipo de formación estatal en el subcontinente.²⁴⁴ De acuerdo a este autor, el Estado populista es la respuesta de los dueños de los medios de producción en América Latina a la situación de postración en la que se encontraban las economías nacionales como resultado de la recesión en el mundo desarrollado durante la década de los treinta.²⁴⁵ El

²⁴³ En este trabajo no profundizaremos sobre los antecedentes históricos de este proceso porque su tratamiento escapa a los objetivos de nuestra investigación, que se acota al periodo de consolidación del Estado mexicano postrevolucionario en el contexto de la crisis capitalista de los treinta, al tipo de régimen presidencialista al que dio lugar éste y sus transformaciones actuales. Aunque se harán las referencias necesarias cuando se considere oportuno para la explicación.

²⁴⁴ Octavio Ianni. *La formación del Estado populista en América Latina*. México, Era, 1984.

²⁴⁵ Existen diferentes experiencias nacionales en este sentido, con diferentes intencionalidades en los procesos que se describen. En ello tuvieron mucho que ver el crecimiento y la consolidación de las

papel de la crisis capitalista en el desarrollo se proyectó en el subdesarrollo latinoamericano como una crisis del patrón de crecimiento vigente, en el sentido de que el sector exportador tipo enclave que había tenido un importante desarrollo en décadas anteriores, se vio imposibilitado de seguir siendo el motor de la economía ante la caída en la demanda y los precios internacionales de las materias primas que producía. La oligarquía ligada a este mercado de exportación se ve entonces postrada.

El crecimiento de un mercado externo en el subdesarrollo crea un mercado interno sin proponérselo, y para entonces los agentes sociales ligados a este otro polo de la economía toman en sus manos el desafío que representaba emprender un nuevo proyecto nacional, y para ello buscan el control del Estado. Dichos agentes serán las nacientes burguesías industriales, amplios sectores de la clase media (burocracia civil y militar), el proletariado naciente, campesinos y grupos que componen las profesiones liberales, que se enfrentarán a algunos sectores de la burguesía agroexportadora, comercial y financiera, tradicionalmente ligados a la economía exportadora primaria.

En este sentido, *el objetivo principal del Estado populista es dirigir la transición del patrón de acumulación orientado al mercado externo hacia el mercado interno*, y esto lo hará sin la influencia directa del imperialismo, por lo que es una creación propia de la realidad social latinoamericana. Por lo tanto, es el protagonista de la única transición en la forma de crecimiento que no es penetrada directamente por los intereses de los países desarrollados.

Este tipo de formación estatal desempeña entonces varias tareas en relación directa con su función histórica: a) es interventor y director en el desarrollo de la política económica;²⁴⁶ b) El Estado aparece como centro de poder de un sistema de fuerzas heterogéneas y de una alianza de clases contra las instituciones del Estado oligárquico;

economías exportadoras y su vinculación con el mercado internacional, porque este nivel de desarrollo estuvo vinculado con el nivel de intensidad con que se vivieron internamente los efectos de la crisis capitalista en el desarrollo. No es casualidad entonces que los países con las economías exportadoras más importantes de la época en la región, hayan sido los que consolidaran formaciones estatales populistas más sólidas: Brasil con Getulio Vargas, México con el Gral. Lázaro Cárdenas, y Argentina con el Gral. Juan Domingo Perón.

²⁴⁶ Se nacionalizaron empresas extranjeras y se reformularon las condiciones de entrada y salida del capital extranjero; se reservaron algunos sectores infraestructurales de la economía a empresas estatales o mixtas; el poder público creó empresas o dio incentivos para su creación en nuevos sectores o subsectores económicos; se ponen en práctica otros reglamentos, relativos a los movimientos del capital nacional y extranjero en el país, y se establecen criterios generales y especiales, en cuanto a las condiciones de oferta y demanda de la fuerza de trabajo en el mercado urbano.

c) existe una combinación *sui generis* de los sistemas de movilización y control de las masas, a través de una singular articulación entre el Estado, el partido gubernamental y el sistema sindical: el corporativismo; d) se pone en práctica o se establece por parte del Estado las condiciones institucionales mínimas al ejercicio de la ciudadanía (el derecho a la organización, las fiestas remuneradas, la asistencia médica, la protección a la mujer embarazada y a la maternidad, la educación, la protección de los códigos en las disputas con los patrones, los locatarios y los particulares, la libertad de tránsito, etc.), aunque éste se hará de manera desigual e incompleta; e) el Estado es presentado por las fuerzas que se hallan en el poder como si representase, al mismo tiempo, a todas las clases y grupos sociales, pero vistos como pueblo, como una colectividad para la cual el nacionalismo desarrollista pacifica y armoniza los intereses y los ideales; y f) se crean las condiciones institucionales para que las fuerzas “no populistas” sean sistemáticamente marginadas de la “protección del Estado”.²⁴⁷

El Estado populista en México es el resultado de un proceso que combinó varios factores para una transformación radical de la estructura del Estado oligárquico vigente en nuestro país hasta los años veinte. Dentro de estos factores destaca la crisis capitalista mundial en el polo desarrollado, que en nuestro país impactó como crisis del patrón de crecimiento económico basado a las exportaciones primarias; la consolidación de un mercado interno a la sombra del modelo exportador primario y de agentes sociales locales interesados en fomentarlo; y la existencia de un proletariado escasamente organizado en torno a sus intereses de clase pero en franca expansión.

La caída de la economía en la primera mitad de la década de los treinta, el repliegue del intervencionismo norteamericano en el contexto de la recesión de su economía, así como el peligro en la segunda mitad de los treinta en Europa de una nueva conflagración armada mundial, distendieron los tradicionales lazos de control económico, político y cultural Estados Unidos sobre nuestro país, y obligaron a la burguesía local a emprender proyectos propios.

Estos proyectos no se hubieran podido consolidar sin la existencia de agentes sociales interesados en dismantelar la estructura económica heredada del porfiriato, y su presencia entonces no puede ser explicada más que como resultado de la expansión

²⁴⁷ Octavio Ianni, op. cit., pp. 134-162.

económica vivida en el país en las décadas previas a la revolución. Los sectores de la economía protagonistas de tal expansión ligados al mercado externo como la minería, el petróleo, la industria textil, la siderurgia y la industria manufacturera, generaron un proletariado incipiente aunque en proceso de organización, en los enclaves mineros o agro-industriales. Además, la economía de enclave generó el crecimiento del sector ferroviario conectado a las fronteras de abasto en los centros de Consumo en Estados Unidos y Europa.

Estos enclaves mineros fueron generando asentamientos de obreros y campesinos y un mercado interno en crecimiento, al cobijo del cual se generó una burguesía local vinculada al mismo. A la par de este proceso, en el campo, la concentración de la tierra y el desarrollo de los grandes enclaves agroindustriales fue despojando a comuneros y pequeños propietarios de sus tierras, y proletarizando a amplios contingentes campesinos en los cultivos.²⁴⁸

De esta forma, obreros y campesinos en condiciones laborales deplorables y formas extremas de control como las tiendas de raya y remuneraciones en especie, fueron un importante caldo de cultivo para el conflicto armado de 1910. Sin embargo, una vez concluida la revolución y pacificado el país, durante toda la década de los veinte e inicios de la década de los treinta, el país mantuvo el mismo patrón de creamiento primario exportador heredado del porfirismo, aunque ya para entonces, existía un mercado interno con una burguesía y un proletariado locales incipientes interesados en modificar la situación prevaleciente.

La coyuntura de la crisis capitalista mundial permitió a Cárdenas sentar las bases de un nuevo modelo económico que se preocuparía de implementar, entre otras cosas: una agresiva política económica tendiente a impulsar la industrialización acelerada del país a través de una importante política de fomento; implementar esquemas proteccionistas en el comercio internacional, promover la participación abierta del Estado en la economía a través del gasto social, la inversión productiva y la propiedad estatal sobre empresas ubicadas en los sectores estratégicos; ejecutar la reforma agraria en el país consolidando la figura del ejido, e incrementando la producción para surtir de

²⁴⁸ Para un análisis de los antecedentes de la revolución mexicana véase Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer. *A la sombra de la revolución mexicana*. México, Editorial Cal y Arena, 1992.

insumos a la industria y dotar de bienes salarios a la creciente población urbana; y consolidar las instituciones para el ejercicio de los derechos sociales de los trabajadores.²⁴⁹

Una estrategia de este tipo no hubiera sido factible si no se hubiera instrumentado una alianza de clases lo suficientemente sólida como para enfrentar las resistencias de la oligarquía agroexportadora, el capital monopólico internacional y la burguesía comercial, principales beneficiarios del patrón primario exportador. Dicha estrategia tuvo un carácter nacional-popular, y adoptó un proyecto de desarrollo económico y social basado en una alianza entre el Estado impulsor de este proyecto integrador y los sectores populares organizados que tenía por objeto fundamental integrar a la población que había sido excluida bajo el modelo de desarrollo anterior.

La conformación de esta alianza populista sólo pudo ser posible con la consolidación de un proceso que implicó la organización de obreros y campesinos, sumándolas al nuevo proyecto nacional; acrecentar y echar mano de las facultades que la Constitución de 1917 otorgaba al presidente para emprender las transformaciones requeridas; y emprender una estrategia para que el PNR, entonces una confederación de cacicazgos regionales de líderes revolucionarios, quedara en manos de la presidencia, y fuera un instrumento para controlar los espacios de poder dentro de la nueva estructura de poder. Este proceso instituyó una nueva configuración del régimen político mexicano, que desde entonces se caracterizaría por un ejecutivo lo suficientemente poderoso como para ser el eje vertebrador de la vida política nacional.

La organización del movimiento obrero por el Estado tiene sus antecedentes en los “batallones rojos” formados a partir del acuerdo entre los generales constitucionalistas y la Casa del Obrero Mundial en el contexto de la guerra contra la dictadura huertista (1913-1914), donde los trabajadores se comprometieron a pelear en la lucha armada a cambio de beneficios económicos y sociales.

Desde entonces se establecería un vínculo entre el Estado e importantes sectores sindicales que no sería disuelto. Como resultado de este vínculo se incluyó en la Constitución de 1917 el artículo 123 y se creó la primera gran central obrera que

²⁴⁹ Un trabajo que sintetiza de manera muy clara este proceso de transformación del modelo de desarrollo en el país se encuentra en Ugo Pipitone, op. cit.

subsumió el interés de clase del proletariado al “interés superior” del Estado, la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).

Entre otras cosas, el artículo 123 institucionalizó las relaciones entre el Estado y los sindicatos, con la inclusión del derecho de organización y de huelga, la regulación del trabajo de niños y mujeres, los horarios de trabajo, la seguridad en el centro laboral, remuneraciones mínimas, entre otras cosas.²⁵⁰ Por otra parte, la creación de la CROM representó un importante apoyo social a los gobiernos de Álvaro Obregón y Calles, y ello a su vez permitió la vigencia efectiva de un conjunto de derechos laborales con la promulgación de la Ley Federal del Trabajo en 1931.

Es en estos antecedentes donde podemos rastrear el impulso que tomó la Confederación de Trabajadores de México (CTM) a partir de 1936 bajo la dirección de Vicente Lombardo Toledo, y la explicación al importante apoyo que recibió del gobierno cardenista en su conformación. Para entonces, la CROM había sido la central privilegiada en la interlocución con el Estado y sus líderes habían ocupado puestos de primer orden en el aparato estatal, pero sus vínculos con el maxismo llevaron a Cárdenas a impulsar un nuevo polo obrero organizado que respaldara el nuevo proyecto nacional y sirviera además de dique de contención contra los opositores al mismo, entre ellos Calles y sus seguidores. El control del Estado sobre las bases sindicales llegó a penetrar incluso en aquellas organizaciones que mantenían entonces cierta independencia, como los sindicatos minero, petrolero y ferrocarrilero, una vez que estos sectores fueron nacionalizados.²⁵¹

Pero la estrategia de organización y control estatal sobre los trabajadores trascendió la esfera de la industria urbana y echó raíces igualmente sólidas en el campo, particularmente en las organizaciones de pequeños propietarios agrícolas que a partir de ese periodo se beneficiaron de manera importante de la reforma agraria. El artículo 27 constitucional dejó de ser letra muerta y fue utilizado para impulsar un reparto agrario, que por sus dimensiones no tuvo punto de comparación con ningún gobierno posrevolucionario ni antes ni después. Además se constituyó el ejido como una nueva

²⁵⁰ Sobre la importancia de los artículos 123 y 27 de la Constitución Mexicana como instrumentos eficaces en manos del ejecutivo, véase: Arnaldo Córdova. *La formación del poder político en México...* op. cit., p. 16-22.

²⁵¹ Sobre el proceso por el cual el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas auspicia la organización estatal de obreros y campesino, véase: Arnaldo Córdova. *La política de masas del cardenismo...* op. cit.

figura productiva que hacía de los campesinos los usufructuarios de la tierra de la cual el Estado era propietario, y con una función dirigida a la producción de alimentos baratos para la fuerza de trabajo en los centros urbanos y la producción de insumos para la industrialización. En este contexto, con los auspicios del gobierno cardenista se funda en 1938 la Confederación Nacional Campesina, organismo cúpula de los campesinos beneficiados del reparto agrario, cuyo objetivo fue avanzar en la política de masas emprendida hasta entonces por el gobierno.

Por otra parte, en la estrategia implementada por el gobierno cardenista para conformar una alianza de clases populista se requirió que éste tomara el control del Partido Nacional Revolucionario (PNR), creado originalmente para dirimir por la vía institucional los conflictos entre las facciones revolucionarias después de la muerte de Obregón. Este partido nació para administrar el poder y no para competir por él, y una vez creado, entre 1929 y 1935 Plutarco Elías Calles lo utilizó para expropiar el poder a los presidentes que desfilaron durante ese periodo (Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y el primer año del gobierno de Lázaro Cárdenas), constituyéndose en un poder *de facto* por encima de la institución presidencial.

El reto de transformar la estructura económica del país y encauzar los esfuerzos del Estado para ello, llevaron al Gral. Cárdenas a una disputa abierta con Calles por el control del partido, de la que éste salió airoso gracias al importante apoyo que tuvo de las bases trabajadoras y a la problemática enfrentada por el país a causa de la crisis económica. En esta coyuntura, Calles fue expulsado del país y los cuadros no comprometidos con el proyecto cardenista en el PNR, el gobierno, el ejército, en el Congreso, en los gobiernos estatales y en todo el aparato estatal, también siguieron el mismo destino.²⁵²

El presidente se convirtió entonces en el líder indiscutible del partido e incorporó al mismo a las organizaciones obreras y campesinas organizadas en torno suyo, dando origen al Partido de la Revolución Mexicana (PRM), conformado por una amplia base social aglutinada en torno a tres sectores: obrero, campesino y militar.

²⁵² Una de las obras clásicas que recupera la historia del partido de Estado en México durante el siglo XX, sin duda es Luis Javier Garrido. *El partido de la revolución institucionalizada*. México, Siglo XXI, 1986.

Cárdenas designó e impuso a su sucesor pero como líder indiscutible del partido de Estado, no como caudillo. A partir de entonces la sucesión presidencial se convertiría en el punto máximo del poder del presidente saliente y el inicio del recién ungido, instituyendo además a la no reelección como norma de oro no escrita del régimen político recién gestado.²⁵³

La alianza populista tuvo vigencia en tanto la política de masas del cardenismo no puso en peligro la viabilidad del sistema económico, cuando hubo síntomas de que un proceso socialista podría poner en peligro la acumulación capitalista se puso un freno a la participación de las masas en el proceso transformador del país. Pero la alianza se mantuvo en tanto la participación de México en la segunda guerra mundial propició el refrendo del pacto entre clases, ahora en nombre de la unidad nacional contra el fascismo.²⁵⁴

De todo este proceso nos interesa destacar que es en la alianza populista conformada entonces, donde se encuentra la génesis del régimen presidencialista mexicano y el carácter eminentemente corporativo que adquiriría una vez concluida dicha alianza. Por otra parte, el partido de Estado institucionalizaría el control de la presidencia sobre las organizaciones de trabajadores y el apoyo de éstas a aquélla, haciendo del jefe del Poder Ejecutivo el jefe del partido, y en consecuencia, el gran elector y pieza clave del régimen político. Todo ello sumado a las amplias facultades que la constitución de 1917 le otorgaba al presidente, concretaron los rasgos esenciales que adquiriría la fisonomía de la organización del poder político en el país a partir de entonces.

4.5 La reformulación de la alianza populista, la vigencia del Estado desarrollista y la consolidación del presidencialismo.

Hasta el gobierno de Manuel Ávila Camacho la alianza populista había sido constituida para propiciar el desarrollo del país. El Estado había tenido un marcado acento popular,

²⁵³ Para un estudio pormenorizado de la sucesión presidencial en México, ver: Jorge G. Castañeda. *La herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en México*. México, Extra Alfaguara, 1999.

²⁵⁴ Un análisis de este periodo se encuentra en: Sergio de la Peña. "En los umbrales del capitalismo industrial" en Américo Saldívar et. al. (compiladores) *Historia de México en el contexto mundial*. Ediciones Quinto Sol. México. 1986.

cuyo principal objetivo era integrar a toda la población que había sido excluida durante la etapa anterior al conflicto armado, y ello había dado como resultado un régimen político altamente centralizado que se apartaba de las disposiciones contenidas para tal efecto en la Constitución de la República.

Pero dos factores determinaron la culminación de esta alianza populista: el restablecimiento de los vínculos económicos del país con los Estados Unidos, una vez concluida la guerra mundial; y el giro en la orientación social del Estado con el objetivo de poner freno a la política de masas implementada hasta entonces, desde las propias organizaciones de trabajadores.

El triunfo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial derivó en su hegemonía económica, política y militar mundial, situación que impactó de forma importante su relación con México. Desde entonces el proceso de industrialización con sustitución de importaciones del país se llevaría a cabo con una creciente participación del capital privado norteamericano, y ello estrecharía los vínculos políticos y militares con el vecino país del norte, teniendo como un tema recurrente dentro de la agenda bilateral el combate al comunismo. El control del mercado capitalista mundial como resultado de los tratados de Bretón Woods que le dieron el control de las diferentes agencias multilaterales como el FMI, el BM, el BID, así como el GATT y después de la OMC, se desplegó en su hegemonía militar desafiada únicamente por la URSS y una enorme influencia en la política internacional a través del control de la ONU y los diferentes organismos que la componen.²⁵⁵

En este contexto, en el gobierno de Miguel Alemán se echaron atrás varias de las reformas implementadas por el gobierno cardenista. Entre otras, puso límites al avance de la reforma agraria, restringió recursos destinados a los ejidos y orientó las políticas para beneficiar en mayor medida al sector empresarial en el campo, elevó los límites a la pequeña propiedad agrícola, e impulsó el derecho de amparo para los dueños de la tierra. Además promovió la inversión extranjera como eje del modelo económico y aplazó la distribución de sus beneficios, poniendo freno a la reivindicación de las organizaciones

²⁵⁵ Los pormenores de la hegemonía norteamericana en el sistema capitalista en la posguerra se pueden encontrar en: Martha Arias, y José María Vera. *Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional ¿Una ayuda para los países pobres?* Consultado en Internet el 23 de julio de 2005 en la página web: www.fespinal.com/espinal%5castellano%5visua%5ces112.ht#c4.

de trabajadores de aumentos al salario.²⁵⁶ El Estado deja de ser populista para volverse desarrollista, ya que se pasa de un proyecto de desarrollo integrador de la nación, a un proyecto de desarrollo excluyente que promete distribuir sus beneficios entre la nación en el futuro y como condición de su éxito.

Tales cambios fueron instrumentados desde el Estado y tuvieron como blanco las organizaciones de trabajadores, con la imposición de líderes afines al nuevo proyecto modernizador en la CTM (destitución de Vicente Lombardo Toledano y nombramiento de Fidel Velázquez como Secretario General) y el denominado “charrazo” en 1948 en los sindicatos de minería, petróleo y ferrocarriles que derivó igualmente en la imposición de dirigentes leales al gobierno.²⁵⁷

El corporativismo de Estado con ello se institucionaliza y adquiere un carácter autoritario. Los líderes como interlocutores de las corporaciones con el Estado, al ser impuestos por éste dejan de representar los intereses de las bases y se transforman en un eficaz mecanismo de control social. El pacto social heredado del periodo populista se mantiene, pero pasa de ser un acuerdo nacional-popular, a uno limitado a los sectores obreros y populares mejor organizados por el Estado y situados en los sectores estratégicos de la economía, sin cerrar la posibilidad de extenderlo o limitarlo de acuerdo a las circunstancias.

El pacto corporativo se desgasta durante los sesenta y setenta, dado que el régimen empieza recibir demandas que no puede responder y que lo llevan a apoyarse cada vez más en sus mecanismos de control. Por otra parte, surgen nuevos sectores sociales no corporativos, como las clases medias que dan lugar a los movimientos sociales más importantes de finales de la década de los cincuenta y sesentas, así como los empresarios que escenificaron los conflictos con el gobierno de Luis Echeverría y la insurgencia electoral de los ochenta.

²⁵⁶ Para un análisis del periodo, véase: Jacqueline Peschard, Cristina Puga y Ricardo Tirado. “De Ávila Camacho a Miguel Alemán”, en Cristina Puga et. al., *Evolución del Estado Mexicano*, Vol. III “Consolidación”. México, Ediciones El Caballito 4ta. Edición, 1993, pp. 19-58.

²⁵⁷ Según Edelmiro Maldonado “En términos generales el charrismo se define: a) por el empleo de las fuerzas armadas del Poder Público para apoyar una dirección sindical postiza; b) por el uso sistemático de la violencia; c) por la violación permanente de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores; d) por el total abandono de los métodos democráticos; e) por la malversación y el robo de los fondos sindicales; f) por el tráfico deshonesto de los intereses de los obreros; g) por la invariable convivencia de los líderes espurios, del gobierno y de los capitalistas; y h) por la corrupción en todas sus formas”. Edelmiro Maldonado. *Breve Historia del movimiento obrero*. No. 2. Monterrey, N.L. 1977. S/D.

El gobierno echeverrista busca readecuar el régimen a las nuevas circunstancias sociales que se presentan, lo que origina un ascenso en los movimientos sociales independientes:

En algunas de las industrias de punta surgió la vanguardia del sindicalismo independiente, además del sindicalismo de “cuello blanco”, los maestros, médicos y universitarios que continuaron con sus movilizaciones iniciadas en los años sesenta. En el campo, a principios de la década siguiente se agotaron los efectos políticos de la gran distribución cardenista, tanto como su efecto productivo. Con ello surgió una nueva generación de campesinos demandantes de tierra y se produjo la crisis del sector ejidal [...] No sólo se exigían tierras y mejoras económicas, sino que se cuestionaba la conducción de las organizaciones populares. Se reafirmaron, además, las demandas de un verdadero estado de derecho, de libertad de prensa y de la democracia, que habían planteado los movimientos de los años ochenta.²⁵⁸

A partir de los años ochenta, estas presiones derivaron de las consecuencias sociales de la implementación del modelo de crecimiento neoliberal, lo que significó la ruptura del pacto social.

Por otra parte, el debate en torno a la caracterización de corporativismo mexicano ha dado mucho de sí durante muchos años, pero tal vez una de las definiciones que más consenso ha tenido en los estudios sobre el tema en los últimos años ha sido aquella creada por Philippe Shmitter:

El corporativismo puede ser definido como un sistema de representación de intereses en el cual las unidades constitutivas se organizan en un limitado número de categorías singulares, compulsorias, no concurrentes, ordenadas jerárquicamente y diferenciadas funcionalmente, reconocidas y autorizadas (si no es que creadas) por el Estado, y a las que se le concede un exclusivo monopolio de la representación dentro de sus respectivas categorías, a cambio de observar ciertos controles en la selección de sus líderes y en la articulación de sus demandas y apoyos.²⁵⁹

En este sentido, se argumenta que tal estructura para la representación política y la mediación de intereses de grupos estratégicos estuvo integrada en el Partido Revolucionario Institucional²⁶⁰ a través de los sectores: campesino, que agrupaba a los

²⁵⁸ Ilán Bizberg, op. cit. p. 315.

²⁵⁹ Philippe Shmitter. *Teoría del corporativismo. Ensayos de Philippe C. Shmitter*, compilado por Rigoberto Alcántara Ocampo. México, Ed. de la Universidad de Guadalajara, 1992, p. 46.

²⁶⁰ Dentro de las transformaciones emprendidas durante este periodo, se transforma el PRM en el Partido Revolucionario Institucional, lo que implicó la supresión de la doctrina socialista del partido y el acercamiento del mismo a las clases medias y otros sectores más conservadores de la sociedad. Para un

ejidatarios y comuneros; obrero, que agrupaba a trabajadores organizados en sindicatos únicos de afiliación obligatoria, que regularmente tenían dirigencias vitalicias y escasa organización interna; popular (el sector militar había desaparecido en 1940), creada en 1943 e integrada por burócratas, maestros, gremios profesionales y terratenientes privados. Se destaca que además que estas corporaciones tenían una representación monopólica de sus organizaciones, misma que se ejercía por dominios diferenciados de acuerdo al sector social de que se tratase. La coordinación jerárquica de las organizaciones se daba a través de los líderes de las grandes centrales de cada sector, dentro de la cuales las más importantes fueron: CNC, sector campesino; CTM, sector obrero; y CNOP, sector popular.

Esta estructura funcionaba con la contribución de las corporaciones al sostenimiento del régimen principalmente a través del voto pero también a través de otras estrategias de respaldo a las políticas implementadas como movilizaciones, mítines de apoyo, etc. El apoyo por tanto no era individual sino corporativo y en eso redundaba la eficacia de este entramado. A cambio y siempre a través de la intermediación de sus líderes las bases de las organizaciones corporativas tenían acceso a ciertos beneficios sociales reflejados en mejoras salariales, mantenimiento del empleo, prestaciones sociales, o en el caso de los campesinos el acceso a la tierra para trabajarla o algunas prebendas para otros grupos profesionistas o gremiales.

Estas características del corporativismo en México encontradas en varios trabajos escritos en esta década sobre el tema,²⁶¹ exaltan las relaciones establecidas entre el Estado y la sociedad estrictamente en los ámbitos societal y político, pero pierden de vista un elemento constituyente del fenómeno y que es su funcionalidad económica. En este sentido, Enrique de la Garza coincide en que: “El corporativismo implica que la

análisis de este proceso de transformación del partido, véase: Alejandra Lajous. *Los orígenes del partido único en México*. México. UNAM. 3ª Edición, 1985.

²⁶¹ Véase Ignacio Rendón Corona. “El corporativismo sindical mexicano en su encrucijada”, en *El Cotidiano*, mayo-junio, vol. 22, núm. 143. México, UAM-A, 2007, pp.71-79; Nicolás Pineda Pablos. “Entre el neocorporativismo y el neoliberalismo. Alternativas para el avance de la transición democrática mexicana”, en *Espiral*, septiembre-diciembre, vol. XI, núm. 31. México, Universidad de Guadalajara, 2004, pp. 183-218. Armando Rendón Corona. “El corporativismo sindical y sus transformaciones”, en *Revista Nueva Antropología*, abril, vol. XVIII, núm. 59. México, Nueva Antropología A.C., 2001, pp. 11-30; Francisco Zapata Schaffeld. “¿Democratización o rearticulación del corporativismo? El caso de México”, en *Política*, otoño, núm. 42. Chile, Universidad de Chile, 2004, pp. 13-40. El hecho de que estos análisis no contemplen la funcionalidad económica del corporativismo, los lleva a conclusiones erróneas sobre los cambios y continuidades que éste ha sufrido en las últimas décadas, como veremos más adelante.

arena estatal es privilegiada para dirimir las disputas entre el capital y el trabajo, y que las relaciones laborales al nivel de empresa son subordinadas a las grandes políticas estatales desde el momento en que los sindicatos adoptan el papel de corresponsables de la marcha del Estado”.²⁶² Pero advierte que esta afirmación no debe llevarnos a omitir que el corporativismo es una *relación asimétrica y vertical de poder y que encuentra su racionalidad en el campo de la economía y la producción*.

Para de la Garza, el entramado de relaciones entre los sindicatos y el Estado, que tienen su contraparte en el entramado de relaciones entre trabajadores y sindicato-Estado-Empresa, se desarrollaba en varios niveles: a) la participación de las organizaciones corporativas en el sistema político, particularmente en el Partido de Estado y los órganos de gobierno; b) la participación de las corporaciones en las instituciones responsables de la reproducción de la fuerza de trabajo, a través de los Consejos de Administración (como el IMSS, ISSSTE, etc.), aunque con muy bajo nivel de incidencia; c) la participación de los sindicatos en la gestión económica, que aunque tampoco fue decisiva sí representó para el Estado un importante control sobre las variables salarial y conflictual; y d) como gestores del sistema de conciliación y arbitraje comandado por el Estado. Existe además una dimensión cultural del corporativismo, que se refleja en la delegación de las decisiones en las cúpulas, patrimonialismo en las relaciones base-dirigencia, estatalismo o esperanza en las soluciones que vienen del Estado, y “garantismo” del puesto de trabajo, del salario y las prestaciones.²⁶³

De igual forma, habría que precisar que el corporativismo en el campo mexicano en términos generales funcionaba de manera similar que el corporativismo en la industria y los servicios, pero contenía rasgos particulares. En relación al primer punto, funcionaba como sistema de intermediación de intereses donde las cúpulas de las organizaciones gestionaban la repartición de tierras y la producción agrícola con el Estado, a cambio de la fidelidad política de las bases campesinas. La influencia de las organizaciones campesinas se presentaba en la gestión del régimen político a través de su participación en el PRI y otras instancias gubernamentales; en la gestión de la

²⁶² Enrique de la Garza. “La reestructuración del corporativismo en México”, en María Lorena Cook et. al. (editores), *Las dimensiones políticas de la reestructuración económica*. México, Cal y Arena, p. 405.

²⁶³ *Ibíd.*, 406-408.

producción a través de su presencia en distintos órganos de las instituciones de gobierno encargados de la política en el agro; en la gestión de recursos y políticas dirigidos a la producción; y en la definición del reparto agrario. En cuanto a las especificidades, a diferencia del corporativismo sindical obrero donde los trabajadores en su totalidad forman parte de la población necesaria para la producción, en el caso de las organizaciones campesinas los contingentes de población que las integran, en un porcentaje importante, forman parte de la población excedente; y que la participación de las organizaciones de productores agrícolas en la gestión de la producción y el reparto agrario estaba en función no tanto de la regulación del salario y el empleo (aunque el tema de los jornaleros con el paso de los años fue ganando terreno), sino en la obtención de recursos y tierras para las bases.

Por otra parte, el carácter fundante del corporativismo en el régimen político mexicano ha llevado a algunos trabajos como el de Ilán Bizberg²⁶⁴ y de Rigoberto Ocampo Alcántar²⁶⁵, a caracterizarlo a partir de este elemento únicamente, subordinando u omitiendo otros elementos igualmente importantes, sin los cuales su análisis resultaría incompleto, como son las facultades legales y extraordinarias del presidente, el control del partido de Estado y el control presidencial sobre el proceso electoral. Pero también ha existido una gran tradición de trabajos que destacan ya sea los aspectos estrictamente institucionales del régimen, el nivel de control del sistema electoral o el carácter no competitivo del sistema de partidos, para determinar su carácter autoritario.

En la tradición liberal, los criterios para distinguir un régimen democrático presidencial y uno parlamentario o semipresidencial son: a) el presidente o jefe del ejecutivo es electo popularmente; b) no puede ser destituido por el Parlamento o el Congreso durante el periodo para el que fue electo, y c) encabeza o dirige el gobierno que designa.²⁶⁶ Por lo que no sería problema definir al régimen político mexicano como presidencial.

Lo cierto es que legalmente la constitución de 1917 contempla tales criterios en la organización del régimen político, pero además dotó al titular del Poder Ejecutivo de

²⁶⁴ Ilán Bizberg, op. cit. pp. 313-366.

²⁶⁵ Rigoberto Ocampo Alcántar, op. cit.

²⁶⁶ Giovanni Sartori. *Ingeniería Institucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados*. México, FCE, 1994, pp. 99.

facultades extraordinarias, y de acuerdo a Lorenzo Meyer ello ocurrió así porque el constituyente intentó encauzar por márgenes legales el poder que *de facto* ejerció el presidente durante la dictadura de Porfirio Díaz.²⁶⁷ Se pensó que una presidencia fuerte actuando por causas legales sin la necesidad de actuar fuera de ellos, permitiría a ésta encabezar el proyecto transformador de la revolución.

Dentro de las facultades del presidente destacaban: a) las facultades que le otorga la Constitución de 1917; b) otras facultades que provienen de errores de las propias leyes de la Constitución de 1917; c) el asiento de los poderes federales en la Cd. de México, que le da un carácter radial al poder presidencial; d) la dirección del desarrollo económico; e) el nulo federalismo practicado en la República, que permite al presidente centralizar la toma de decisiones; f) la poco nítida división de poderes, o de manera más precisa, la subordinación del legislativo y en menor medida el judicial al ejecutivo; y g) los efectos psicológicos que en los gobernados tiene un derroche de poder de esa magnitud, “pues basta que la gente crea que un hombre es poderoso para que su poder aumente por sólo ese hecho”.²⁶⁸

Dichas facultades por sí mismas no cuestionan el carácter democrático del régimen, pero es en el ejercicio del poder en donde podemos rastrear su veta autoritaria. Por ello en la obra de Jorge Carpizo sobre el presidencialismo mexicano, que ya es un clásico de la literatura sobre el tema, se advertía que las particularidades del régimen político debían encontrarse en las facultades metaconstitucionales del presidente.²⁶⁹ Entre las que el autor destaca: a) la jefatura real del PRI; b) la designación de su sucesor; y c) la designación y remoción de los gobernadores.

Daniel Cosío Villegas señaló que otra de las piezas fundamentales del régimen político era el PRI en tanto mecanismo de control en manos del presidente sobre el aparato corporativo y sobre los poderes regionales y locales.²⁷⁰

Por otra parte, estudios posteriores sobre el régimen han encontrado en el control presidencial sobre el sistema electoral otro elemento para explicar su enorme poder

²⁶⁷ Lorenzo Meyer. “Las presidencias fuertes. El caso de la mexicana”, en *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, núm. 13, setiembre-diciembre de 1992, México, El Colegio de México, 1992, pp. 58-59.

²⁶⁸ Daniel Cosío Villegas. *El sistema político mexicano. Las posibilidades de cambio*. México, Editorial Joaquín Mortiz, segunda edición, decimocuarta reimpresión, 1986, p. 30.

²⁶⁹ Jorge Carpizo. *El presidencialismo mexicano*. México, Siglo XXI, 1983, pp. 25-26.

²⁷⁰ Daniel Cosío Villegas, op. cit. p. 35.

autoritario y sus transformaciones recientes.²⁷¹ Destaca aquí el control que desde la promulgación de ley electoral de 1946 tuvo el Ejecutivo en la conducción de los procesos electorales a través de la Secretaría de Gobernación, prácticamente hasta 1997. Mecanismo sumamente eficaz para desarticular los polos de disidencia electoral, pero también como válvula de escape al conflicto social.²⁷²

De esta forma, con lo dicho hasta aquí se puede caracterizar al régimen presidencialista mexicano como *autoritario*, ya que cumplió con por lo menos cuatro aspectos que lo distinguieron de los regímenes totalitarios o democráticos: a) pluralismo político limitado y no responsable; b) Carece de una ideología acabada, pero cuenta con comportamientos políticos específicos (*distinctive mentalities*); c) Movilización política inexistente, salvo promovida por el propio régimen; y d) El poder reside en un líder o pequeño grupo.²⁷³

Así que consideramos que en la caracterización del presidencialismo mexicano, la subordinación de los intereses de las organizaciones de los trabajadores a la estrategia de desarrollo impulsada por el Estado en este periodo, es lo que va a definir el carácter autoritario del régimen político constituido entonces, y en consecuencia, hará inviable el funcionamiento de la democracia liberal en nuestro país. El fenómeno del presidencialismo parte de esta condición que subordina el ejercicio de la ciudadanía de los individuos a un proyecto aparentemente colectivo e incluyente, en pos del cual la representación política se hace incompatible con el *ejercicio individual* de los derechos políticos y libertades de la población, a pesar de estar expresamente sancionados de esa forma en el aparato legal. Esta condición es la que hizo del presidencialismo un régimen *sui géneris* que concentrará en el Ejecutivo un poder que trastocaba la división de

²⁷¹ Véase Alonso Lujambio. “Adiós a la excepcionalidad: régimen presidencial y gobierno dividido en México” en Jorge Lanzaro (comp.) Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina. Buenos Aires, Argentina. CLACSO, 2001; Jacqueline, Peschard. “Después de la transición: trayectos institucionales en materia electoral” en *Sociológica*, No. 52, mayo-agosto de 2003. UAM-A. México; Susana Berruecos García Travesí. “Los nuevos contrapesos en la política mexicana: el TEPJF y la justicia electoral en el contexto de la consolidación democrática” en *Sociológica* números 45-46, enero-agosto de 2001. UAM-A. México; Mauricio Merino. *La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México*. México, FCR, 2003; Federico Reyes Heróles. *La democracia difícil*. México, Grijalbo, 1991; y Jesús Silva-Herzog Márquez. *El antiguo régimen y la transición en México*. México, Planeta/Joaquín Mortiz, 1999. Entre muchos otros.

²⁷² Esta tesis se encuentra en Paulina Fernández. “Reforma política: viejos ensayos de un nuevo fracaso” en *Elecciones y partidos en México*. México. Ediciones El Caballito. 1986. pp. 39.

²⁷³ Juan Linz. “Totalitarian and authoritarian regimes”, en Fred I. Greenstein (ed.), *Handbook of Political Science*, vol. 3, Berkeley, University of California, 1975, p. 24.

poderes republicana plasmada en el cuerpo legal, apoyándose en cuatro mecanismos fundamentales: el aparato corporativo como mecanismo de control social, las facultades constitucionales y metaconstitucionales del Presidente, la jefatura del Partido de Estado, y el control sobre el sistema electoral.

4.6 La ruptura del pacto social, la constitución del Estado Neoliberal y la truncada transición a la democracia.

El presidencialismo mexicano autoritario que hemos definido surgió como una forma particular del Estado populista, y se consolidó dentro del Estado desarrollista. Por lo que la crisis de la deuda, el ajuste estructural y la reestructuración productiva fueron la evidencia de que el desarrollismo había llegado a su fin, y en este proceso el Estado entró en un proceso acelerado de transformación, particularmente en lo referente a sus funciones económicas y sociales. Pero el régimen político distó mucho de transformarse con semejante celeridad, y de hecho fue el instrumento para llevar a cabo dichas transformaciones con ciertos márgenes de paz social.

Los orígenes de este proceso se encuentran en el agotamiento del patrón de crecimiento orientado al mercado interno, que significó un reacomodo de fuerzas dentro del bloque dominante en la estructura estatal. El capital nacional y extranjero ligado al mercado externo serán las facciones dentro del bloque dominante que comenzarán a tomar el control económico de la nación y a disputar a la burocracia estatal la conducción del desarrollo nacional. El diagnóstico que en este sentido hacía Punto Crítico al referirse al fin del desarrollismo, clarifica bastante la nueva situación:

[...] ha surgido un nuevo bloque dominante formado por: el capital financiero, la gran burguesía agro-exportadora y los monopolios transnacionales asociados con grupos nativos. Ellos son los verdaderos amos de la economía nacional. Esto ha llevado, lógicamente, a que en nuestro país no se manifieste una verdadera burguesía nacional, interesada en luchar en contra del imperialismo sino que, por el contrario, los intereses de la gran burguesía nativos están ligados a los del imperialismo que podría decirse que son casi idénticos [...].²⁷⁴

²⁷⁴ Ver Punto Crítico. “Economía y Política del gobierno de LEA” en Ismael Colmenares et. al. (recopiladores), *Cien años de lucha de clases en México (1876-1976). Lecturas de Historia de México*. Tomo II. México, Ediciones Quinto Sol, 1985, p. 184.

Con esto se inicia en los ochentas un proceso de pertenencia obligada a la economía mundial globalizada, teniendo como sustento la plena vigencia de libre mercado. El ideario neoliberal impulsa una reorganización del aparato estatal orientada a acotar su papel como agente del desarrollo y garante de la redistribución de su producto entre la sociedad, para abrir paso a la sociedad de mercado. La respuesta a la crisis de la deuda fue el llamado “cambio estructural” iniciado por Miguel de la Madrid.

En este contexto, existe una respuesta social a las transformaciones implementadas por el Estado, al recorte del presupuesto, a la reconversión industrial, al desempleo generalizado, a la inflación y la caída de los salarios, en fin, a los problemas que las transformaciones implementadas trajeron consigo. Pero estas luchas estaban destinadas al fracaso por que no supieron capturar la magnitud del cambio en proceso, puesto que la estrategia estatal fue dirigida a transformar radicalmente las relaciones entre el Estado y la sociedad desde el centro mismo del aparato productivo.²⁷⁵

En realidad lo que se inició desde entonces fue un ataque a las organizaciones de trabajadores, derivado de las consecuencias sociales de la implementación del modelo de crecimiento neoliberal, *lo que significó la ruptura del pacto social gestado en los años treinta*.

Por otra parte, la posición privilegiada que tenían las organizaciones corporativas frente al Estado y las atribuciones de éste sobre el mundo del trabajo, se constituyeron en poderosos componentes disuasivos para las organizaciones independientes y autónomas, aunado esto a la situación de desventaja de los trabajadores frente a las transformaciones que estaban sucediendo en la arena económica.

Estos cambios se ejecutaron en el sexenio de Miguel de la Madrid, gracias a las amplias facultades con que la presidencia de la República contaba entonces,²⁷⁶ bajo los

²⁷⁵ Luis H. Méndez y José Othón Quiróz describen este periodo en el caso del sindicalismo mexicano, como la historia de una derrota. Donde el sindicalismo independiente, a pesar de haber encabezado notables luchas por los derechos de los trabajadores, siguió apostando a viejas tácticas como los paros locos, o las huelgas no autorizadas, que lo único que hicieron fue facilitar o justificar la reconversión industrial y las privatizaciones. Véase de los autores *Modernización estatal y respuesta obrera: historia de una derrota*. México, UAM-A, 1994. Para un análisis más amplio de los movimientos sociales que se fueron desarrollando en los setenta y que fueron enfrentados y derrotados en los ochenta, véase Jorge Zermeno. *La sociedad derrotada. El desorden mexicano del fin de siglo*. México, Siglo XXI-IIS UNAM, 1996.

²⁷⁶ Una muestra del poder presidencial sería la utilización que hizo del control que ejercía sobre el Congreso, para emprender las reformas constitucionales necesarias para llevar a cabo el cambio en el patrón de crecimiento. De acuerdo a información de la Cámara de Diputados, ningún gobierno había

esquemas tradicionales de control corporativo de los trabajadores y la falta de una oposición que hiciera frente al Partido de Estado, debido al control que el poder ejecutivo tenía sobre el proceso electoral.²⁷⁷

En este contexto, no es casualidad que la oposición más organizada haya surgido dentro del propio partido de Estado, en el Movimiento de Renovación Democrática encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, que reivindicaba el carácter nacionalista revolucionario de este partido y criticaba la política económica implementada por el gobierno de Miguel de la Madrid. Dicha corriente fue expulsada del partido por sus posiciones críticas y se convirtió en oposición partidista para la contienda electoral de 1988, constituyendo una alianza amplia con partidos y organizaciones de izquierda, así como con partidos otrora afines al régimen como el PARM, el PPS, y el PFCRN antes PST.²⁷⁸

Las elecciones presidenciales resultaron ser el receptáculo del descontento social por la impopular política económica implementada entonces y los estragos sociales causados por ésta. La copiosa votación recibida por la oposición, particularmente por el Frente Democrático Nacional, no fue reconocida por la autoridad electoral controlada por la Secretaría de Gobernación.²⁷⁹ El candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, fue ungido como Presidente una vez concluido el cómputo de la votación. Sin embargo, la sospecha del fraude electoral ha trascendido el tiempo y ahora hay un enorme consenso

realizado tantas reformas a la Constitución como el de Miguel de la Madrid, y se advierte que el 60% de todas las reformas implementadas desde 1917 se efectuaron en los últimos 26 años. Véase Reformas a la Constitución en el portal de la Cámara de Diputados: <www.diputados.gob.mx>.

²⁷⁷ Esto a pesar de que en 1977 por iniciativa del gobierno de José López Portillo, comenzó un proceso que algunos autores denominan de liberalización política, que entre otras novedades tenía: a) el reconocimiento de los partidos como entidades de interés público y la apertura del sistema electoral a organizaciones que habían estado proscritas como el PCM y el PDM; reformas constitucionales y la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales; y c) una amnistía a presos políticos comprometidos con movimientos guerrilleros. A pesar de que estas modificaciones aumentaron la representación de la oposición en la Cámara de Diputados, gracias a las modificaciones introducidas, lo cierto es que la hegemonía priísta no fue puesta en peligro, ya que las reformas seguían asegurando el triunfo oficial en los distritos de mayoría absoluta, y de hecho esto garantizaba la mayoría absoluta del partido oficial en la Cámara de Diputados.

²⁷⁸ Para un análisis sobre la escisión al interior del PRI del Movimiento de Renovación Democrática, véase Luis Javier Garrido. *La ruptura, la corriente democrática del PRI*. México, Grijalbo, 1993.

²⁷⁹ Ello a pesar de que en 1987 se había realizado una reforma al marco legal electoral, que entre otras cosas contempló la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral y el Código Federal Electoral. Con ello se daba autonomía a la Comisión Federal Electoral y al Registro Federal de Electores, y se fijaron requisitos para que los partidos obtuvieran su registro. Sin embargo, el tribunal no contó con facultades jurisdiccionales y los requisitos para la obtención del registro pusieron contra la pared a los partidos pequeños.

al respecto, no sólo por lo que se dio en llamar la “caída del sistema” la noche del día de la votación, sino porque durante toda la elección fueron públicas las evidencias de manipulación, cooptación, represión, control político y corrupción implementadas desde el corazón del régimen para hacer ganar al candidato oficial. Para ello, las organizaciones corporativas aglutinadas en el PRI utilizaron sus mercados electorales cautivos y la presidencia los mecanismos legales y extralegales a su alcance para ganar la elección. Con todo, las evidencias sobre la manipulación de las preferencias electorales y el cómputo de la votación fueron suficientes para que el nuevo titular del ejecutivo llegara al poder ilegítimo.²⁸⁰

Las posibilidades de defensa del voto por parte de la oposición estuvieron limitadas en gran medida: a) en el caso del FDN, por la desmovilización de los trabajadores, dentro de un contexto en el que las organizaciones independientes estaban más preocupadas por mantener el empleo y el salario que por la lucha política en el ámbito electoral; b) por que las organizaciones corporativas, siendo por mucho las más numerosas apoyaron incondicionalmente la decisión de las autoridades electorales; c) porque el PAN inició un proceso de concertación con el nuevo gobierno, para que se “legitimara desde el poder”; y d) el FDN una vez concluido el proceso electoral entró en un proceso de rupturas y reacomodos, que culminarían con la fundación del Partido de la Revolución Democrática en 1989. A final de cuentas la Cámara de Diputados con una mayoría priísta y erigida en Colegio Electoral, dio sanción legal al triunfo de Carlos Salinas.

Para entonces el proyecto neoliberal avanzaba, los pactos tripartitas entre gobierno, empresarios y los sectores corporativos de las organizaciones de trabajadores se convertirían en un instrumento eficaz para mantener bajo control las variables importantes de la macroeconomía a costa de los salarios de los trabajadores. El desempleo, el incremento de la informalidad y el aumento del empleo precario provocaron una enorme desmovilización social ante los estragos que había generado el llamado camino a la modernidad.

²⁸⁰ Véase *El Cotidiano*, No. 25 septiembre-octubre. México. 1988 pp. 3-56. Para un análisis retrospectivo sobre las elecciones del 6 de julio ver el “Apéndice: 6 de julio de 1988” en Jorge G. Castañeda, op. cit., pp. 525-538.

Pero el nuevo gobierno asumió como un cometido profundizar las transformaciones iniciadas en sexenio anterior, pero legitimando su gestión en condiciones de paz social. A partir de entonces el cambio económico trataría de hacerse *refuncionalizado los componentes estructurales del régimen político*. Para ello, todos aquellos apoyos que no fueron encontrados al interior del sistema fueron buscados fuera de éste, como fue el caso concreto del estrechamiento de las relaciones entre Iglesia y Estado y las conocidas concertaciones con el Partido Acción Nacional, al que se le reconocieron distintos triunfos electorales locales a cambio de su apoyo a la reformas constitucionales a los artículos 3, 5, 24, 27, 28, 123 y 130 necesarias para impulsar la reforma del Estado en concordancia con la modernización económica. Además, esos apoyos se buscaron en las relaciones con los organismos financieros internacionales y el gobierno de Estados Unidos con el que se concretó en 1993 la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).²⁸¹

Por otra parte, a la par de este proceso de alianzas el gobierno de Carlos Salinas trataría de “cambiar el sistema desde adentro”, y para ello establecería una nueva estrategia que tenía por objeto reformular el pacto social roto por la vía de los hechos a partir de la instrumentación del proyecto neoliberal, y encontrar también así los apoyos necesarios para profundizar las transformaciones que requería el nuevo modelo económico. ¿Cómo operaría el régimen para alcanzar tales objetivos?

Esta modalidad del tránsito hacia la economía de mercado fue bautizada con el nombre de “liberalismo social”.²⁸² El aspecto liberal hacía referencia al rasgo esencial que desde entonces había adquirido el Estado en relación a sus funciones económicas y a su apego a las disposiciones dictadas por los organismos financieros internacionales en este rubro, mientras el aspecto social en los hechos representaba la permanencia bajo nuevos esquemas de las tradicionales relaciones establecidas entre el régimen y la sociedad, que seguían siendo subyacentes al proceso de transformación.

Se apostaba a mantener la intensidad de los cambios con un equilibrio social inducido por una política social focalizada a los grupos más marginados, pero

²⁸¹ Esta tesis la tratamos en Héctor de la Fuente. “El presidencialismo mexicano y el preludio neoliberal”, en Leonel Álvarez y Eligio Meza Padilla (coords.), *Democracia, cultura y conflicto social*. México, UAZ, 2006, p. 56.

²⁸² Carlos Salinas de Gortari. “Reformando al estado” en *Nexos*. No. 148. México, 1990, 61-69.

refuncionalizando los viejos esquemas corporativos sin dejar de apoyarse en el corporativismo más arcaico. De esta forma se crea y consolida el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) que sirvió para tres conjuntos de objetivos:

1) Para adaptar los roles sociales del Estado a las nuevas necesidades y redefinir los límites de su intervención en el contexto de reforma neoliberal; 2) Para disolver el potencial de descontento social a través de subsidios selectivos, mediatizando la movilización social, a través de la “co-participación”, y minar la fuerza de la izquierda de las fuerzas opositoras, estableciendo y afianzando amarres con los movimientos populares; 3) Para reestructurar local y regionalmente a las élites priístas bajo un creciente grado de control centralizado.²⁸³

En el mundo del trabajo esta transformación implicaba la transición en el entramado de relaciones entre los sindicatos corporativos y el Estado, así como entre los trabajadores comunes y los sindicatos-Estado-empresa, con una estrategia que buscaba en un proyecto híbrido un mínimo de legitimidad para emprender las transformaciones que la acumulación demandaba entonces, y que el neoliberalismo “dogmático” no hubiera permitido en condiciones de relativa paz social. Enrique de la Garza señalaba:

El “liberalismo social” mexicano no es, ni puede ser, un neoliberalismo puro. A través del Programa de Solidaridad compensa limitadamente las “imperfecciones” o “rezagos” del mercado para los grupos de extrema pobreza; es un Estado menos propietario pero que no renuncia a regular económicamente a través de pactos; limita el poder de corporaciones pero no las anula ni las excluye totalmente de las decisiones. Es decir, se trata de un neoliberalismo con un Estado fuerte en lo político y lo laboral. Un Estado que libera la economía pero sujeta más que antes las relaciones laborales a su concepción de desarrollo económico.²⁸⁴

Es por eso que se buscó una renovación de los cuadros corporativos, estableciendo alianzas con organizaciones de trabajadores como la Federación de Empresas de Bienes y Servicios (Fesebes) que apostaban a la productividad y a la aceptación de esquemas de flexibilidad laboral, a cambio del respeto al trabajo y a un trato preferente con la empresa y con el gobierno. Estas organizaciones fueron el

²⁸³ Dresser, Denise. *Neopopulist solution to neoliberal problems: Mexico's National Solitarity Program*. San Diego, Center for U.S.-Mexican Studies. University of California. 1991. p. 1-2. Citado en Zermeño Fabiola y Moisés Domínguez. “El Estado y las políticas de combate a la pobreza en México: algunas reflexiones para la comprensión del Progreso”, en *El Cotidiano* núm. 99 enero-febrero, México, UAM-A, 2000. p. 14.

²⁸⁴ Enrique de la Garza, “La reestructuración del corporativismo en México”... op. cit., p. 411.

prototipo perfecto para renovar el aparato corporativo, aunque dicho proyecto no prosperó porque antes se precipitaron acontecimientos que hicieron abortar los proyectos refundacionales del régimen y se requirieron los apoyos “seguros” del corporativismo tradicional.

El PRI en este periodo trata de ser modernizado y adecuado a los impulsos “transformadores” del gobierno salinista, e incluso había la intención de renovar sus estatutos y adecuarlos al funcionamiento del Pronasol. Sin embargo, las resistencias de los sectores tradicionales del partido no resultaron favorables para que una estrategia de tal tipo fructificara. Tanto en las elecciones de 1991 como en las de 1994 los triunfos electorales del partido fueron adjudicados al presidente, ya que la estrategia seguida entonces descansó principalmente en la labor del ejecutivo y su capacidad para encontrar nuevos apoyos y rescatar los ya existentes, alcanzar acuerdos y sobre todo asignar premios y recompensas de manera selectiva a los actores políticos involucrados en el proyecto salinista. El partido en buena medida se convirtió en un espectador más en las elecciones y su acción política estuvo supeditada, como nunca antes en su historia, a la acción política del presidente de la República.²⁸⁵

Por otra parte, el sistema electoral en este periodo tuvo tres reformas: a) en 1990, entre otras cosas, se crea el IFE pero se mantiene el control de la Secretaría de Gobernación sobre su máximo órgano de dirección, se crea el Tribunal Federal Electoral reforzado con jueces y salas regionales pero con poderes jurisdiccionales limitados, se introduce el registro condicionado a los partidos pero se les prohíbe coligarse o fusionarse con otros a quienes los obtuvieran, se prohibieron las candidaturas comunes, se crea un nuevo padrón de electores, se refuerza el candado de gobernabilidad y se amplía el tiempo en radio y televisión para los partidos; b) 1993, se introducen modificaciones importantes al Cofipe como la regulación del financiamiento de los partidos tanto por parte del Estado como de otras fuentes de ingresos de los partidos, se reglamenta la forma de la distribución de los tiempos adjudicados por el gobierno a los

²⁸⁵ Para un estudio del PRI y sus transformaciones en el salinato, véase: Juan Reyes del Campillo. “Orden y construcción de un nuevo sistema de partido” en Luis H. Méndez (coord.) *Poder, Ideología y Respuesta social en México (1982-1996)*. México, UAM-A-Grupo Editorial León, 1997. Para un análisis puntual del proyecto de homologar la estructura del partido al Pronasol, véase: Miguel González Campeán. “La legitimidad de la revolución y la sociedad civil: la presidencia de Luis Donaldo Colosio”, en ____ y Leonardo Lomelí (coords.) *El partido de la Revolución. Institución y conflicto (1928-1999)*. México, FCE, 2000.

partidos en radio y televisión, se establecieron lineamientos generales para la cobertura de las campañas en materia de información, se tipificaron en el Código Penal los delitos electorales, y se le reconoció un papel prioritario a la participación ciudadana en el proceso electoral en la observación de casillas, levantamiento de encuestas de salida y conteos rápidos; y c) 1994, se introducen cambios para la auditoría del padrón electoral realizada bajo la supervisión de un Consejo Técnico, se introduce la invitación a visitantes extranjeros a la observación de los comicios, y se ciudadaniza el Consejo General del IFE integrándose por seis ciudadanos no partidistas, en quienes recaerían las decisiones fundamentales, ya que serían la mayoría de votos en dicho órgano.²⁸⁶

En este proceso de reformas se observa la estratégica utilización del ejecutivo del control que ejercía sobre el sistema electoral. En un primer momento las reformas son un recurso reactivo para frenar el avance de la oposición, prohibiendo las candidaturas comunes y limitando las alianzas electorales. En un segundo momento, como respuesta a los señalamientos que recibió el gobierno sobre la inequidad en el proceso electoral de 1991, se introducen mecanismos compensatorios entre los partidos para lograr una mayor equidad. Hasta aquí el ejecutivo sigue manteniendo el control en última instancia del proceso electoral, y no va a ser hasta que se presenta la crisis política de 1994 que decide dejar en un órgano ciudadano la conducción de los procesos electorales. Este fue el principio de la institucionalización de un sistema electoral más competitivo en el país.

De esta forma, el último año de este sexenio estuvo marcado por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), integrado por grupos indígenas de la selva lacandona que declaran la guerra al gobierno y exigen que se le deponga por ilegítimo, y se nombre un gobierno de transición. Las causas de su surgimiento son muchas y complejas, pero en mucho tuvo que ver la formulación en 1992 de la nueva Ley Agraria, reglamentaria del artículo 27 constitucional, y de las reformas a la leyes de aguas y bosques que estaban orientadas a fortalecer la inversión privada en el campo. Esta medida en los hechos representó un agravio para miles de comunidades indígenas y campesinos que vieron perder la esperanza de poseer la tierra que trabajaban. Si una respuesta de este tipo no fue generalizada fue porque el corporativismo en el campo

²⁸⁶ Véase Peschard, J. "El fin del sistema de partido hegemónico" en *Revista Mexicana de Sociología*, no. 2/93. México, IIS-UNAM, p. 109.

actuó como un eficaz mecanismo de control sobre la población rural. De ahí que haya sido en el polo más atrasado de la agricultura de donde viniera la respuesta a estas medidas impulsadas años atrás.²⁸⁷ Su lucha desde entonces se ha centrado en impulsar una democracia que abarque todos los espacios de la vida social; una justicia social no corporativa; un federalismo real y una autonomía municipal reales; así como un sistema de impartición de justicia que acabe con la impunidad y los privilegios.²⁸⁸

Otro factor que cimbró en sus estructuras al régimen político en ese año fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República en las elecciones de 1994, que evidenciaba serias rupturas al interior del propio partido y entre los agentes impulsores del llamado cambio estructural.

Tales coyunturas eran indicadores de un desafío al régimen político por un grupo armado, el cuestionamiento de uno de los sectores mas oprimidos del país al proyecto neoliberal y a su modalidad como “liberalismo social”, y una crítica a las estructuras y procedimientos a las estructuras y procedimientos que determinaban la representación política en el país.

Sin embargo, tales cuestionamientos no se tradujeron en un triunfo de la oposición en el proceso electoral de 1994, ya que el PRI ganó la presidencia y mantuvo el control sobre el Congreso. Dichas elecciones fueron calificadas de inequitativas por la oposición aunque nunca se habló de fraude. Lo cierto es que en medio de ese clima de incertidumbre, se impuso el temor al cambio.

La debacle financiera de fin de año terminó por exacerbar las contradicciones que se habían venido gestando a lo largo de todo ese tiempo. Pero el saldo mayor de esta crisis lo fue el caso Fobaproa, donde se convirtió un fidecomiso privado en una nueva empresa paraestatal y el pasivo contingente del sistema bancario en deuda pública.²⁸⁹ El resultado fue que una deuda privada terminó siendo una enorme deuda pública interna cargada a los contribuyentes, que desde entonces afecta al erario público.

²⁸⁷ Véase Luis H. Méndez y Miguel Ángel Romero. “Chiapas: semblanza de un conflicto (enero de 1991-febrero de 1996), *Separata de El Cotidiano* núm. 76, mayo-junio, UAM-A, 1996.

²⁸⁸ EZLN. *Declaración de la selva lacandona*. México, EZLN, 1993. Consultado en Internet el 18 de marzo de 2009 en la dirección electrónica: <http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1993.htm>.

²⁸⁹ Para un estudio pormenorizado de este gran hurto a la nación, véase: Andrés Manuel López Obrador. *Fobaproa: expediente abierto*. México, Grijabo, 1999.

En estas condiciones, con conflictos sociales de tal magnitud atravesando la vida nacional, en el sexenio de Ernesto Zedillo el proyecto neoliberal ya no podrá seguir siendo impulsado bajo los esquemas tradicionales del régimen político, y de aquí en adelante éste entrará en un proceso de transformación hacia su democratización, proceso que tiempo después sería abortado.

El primer paso en este sentido se observa en la concreción de la reforma electoral aprobada en 1996. Nunca como antes se dieron tantas garantías a la oposición para que la preparación, organización y calificación de los procesos electorales se dieran en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.

En este sentido, la reforma: a) inicia la plena judicialización de las controversias electorales, lo cual suprime la intervención del legislativo en la calificación de las elecciones, otorgándosele al Poder Judicial el control de la constitucionalidad de las leyes, con lo que el Tribunal Federal Electoral se convirtió en un órgano especializado del Poder Judicial;²⁹⁰ b) asegura la autonomía e imparcialidad plena de la autoridad electoral, al profundizar el proceso de ciudadanización del Instituto Federal Electoral, que a partir de entonces quedaría integrado por ocho consejeros electorales y un consejero presidente quienes serán los únicos integrantes del Consejo General con derecho a voto; c) establece el predominio del financiamiento público para los partidos políticos y su distribución mediante una fórmula que fija condiciones equitativas de competencia política, al combinar criterios de proporcionalidad e igualdad; d) permite el acceso de los partidos políticos a los medios masivos de comunicación, de manera permanente y un poco más equilibrada; e) refuerza la fiscalización sobre los orígenes y destino de todos los recursos de los partidos como entidades de interés público; f) establece los derechos políticos de los ciudadanos del Distrito Federal, permitiendo por primera vez la elección del Jefe del Distrito Federal a través del voto universal y directo, y a la Asamblea de Representantes se le dan facultades legislativas, constituyéndose así la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; g) el tope de curules por partido en la Cámara de Diputados se fija en 300 y la sobre representación en un 8%, y a la integración tradicional del Senado se agregaron 32 senadores elegidos por el principio

²⁹⁰ Para un análisis de las transformaciones de la justicia electoral en México, ver Susana Berruecos García Travesí, op. cit.

de de representación proporcional; y h) el umbral para el registro de los partidos pasa de 1.5% a 2% de la votación total.²⁹¹

Con estos cambios, se establecieron las condiciones para que durante los tres procesos electorales federales que cubren el periodo 1997-2003 los resultados electorales no fueran cuestionados por ninguna de las fuerzas políticas, y que los conflictos resultantes se dirimieran por los causes institucionales contemplados en la propia legislación. Se había llegado a un consenso en relación a que los resultados de los comicios desde entonces reflejarían las verdaderas intenciones de la ciudadanía.

Otro cambio que se había venido gestando desde el inicio del cambio en el patrón de crecimiento económico era el papel del corporativismo dentro del régimen político, menguado por su incapacidad para seguir manteniendo los mismos mercados electorales cautivos y como mecanismo de control político sobre los trabajadores. De acuerdo a Enrique de la Garza, dos han sido los factores que fueron determinantes en esta crisis del corporativismo. Por un lado, la transformación del Estado hacia el neoliberalismo, que a diferencia del Estado desarrollista deja de inducir la demanda agregada a través de los incrementos salariales y el gasto social, sino que su determinación la deja al mercado. Esto impactó desfavorablemente las formas de intercambios que favorecían el corporativismo:

[...] El Estado deja de ser el medio para conseguir, como parte de la gran negociación política, los aumentos salariales y las prestaciones a la alza y se maneja el salario como variable de ajuste para controlar la inflación; la decadencia de la seguridad social y su privatización subterránea de los servicios de salud, de pensiones, así como la focalización del gasto social hacia la extrema pobreza que poco toca a los trabajadores asalariados, especialmente de los gremios importantes políticamente; las privatizaciones directas que, excepto en el caso de Telmex se ha traducido en recortes de personal disminución de prestaciones y prerrogativas para los sindicatos y flexibilizaciones unilaterales de los contratos colectivos de trabajo.²⁹²

La gran pregunta sería por qué el corporativismo siguió operando bajo los mismos esquemas de antaño, y por qué ello no representó una ruptura radical con sus bases y un auge de los movimientos sindicales autónomos por la defensa del salario, el

²⁹¹ Ver *Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales*. IFE. México. 1996; y *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. Editorial Porrúa. México. 1996.

²⁹² Enrique de la Garza. *Los límites de la reestructuración productiva...* op. cit., p.52.

empleo y el bienestar de los trabajadores. La respuesta se encuentra en que los cambios que se habían gestado desde el Estado, la economía y en los procesos productivos atentaban precisamente contra esas variables. En las nuevas condiciones el trabajador no era un elemento trascendente en el funcionamiento del modelo económico – particularmente en el tema de la demanda agregada- como ocurría antaño, ahora era una variable prescindible subordinada totalmente a los dictados del mercado prácticamente sin márgenes de maniobra para hacer frente a las nuevas condiciones en las que se ubicaba dentro del proceso productivo. El creciente desempleo, el empleo precario y la caída de los salarios han consolidado una población excedente que permite la reproducción de este esquema en beneficio de la ganancia capitalista.

El corporativismo se sostiene desde entonces más como un mecanismo de control de la clase trabajadora, gracias a las prerrogativas de las cuales siguió gozando en relación al monopolio de la representación frente a la autoridad laboral, que como un mecanismo para la intermediación de intereses. Con ello, la separación entre bases y dirigencia se trastoca pero no se rompe.

Por otra parte, la dirección del gasto social hacia los sectores marginados ha menguado los alcances de las políticas universalistas en educación, salud, vivienda y servicios (entre otros), y los programas asistenciales se han convertido en una auténtica estructura clientelar que mueve votantes en los comicios electorales. El clientelismo político como un intercambio de favores, bienes y servicios entre un patrón y un cliente a través de un intermediario a cambio de apoyo político y electoral, refleja un particular modo de relación entre los agentes que encumbran el aparato de gobierno y las masas, en el que el intercambio se basa precisamente en la mediación que fija los términos del acuerdo respaldado por alguna instancia del poder público.²⁹³

A diferencia del corporativismo el clientelismo no es una relación institucionalizada entre el aparato del Estado y las organizaciones de la sociedad, sino que es producto de acuerdos coyunturales de mayor o menor plazo, pero que tienen como eje los comicios electorales. Los programas sociales en este sentido han jugado un papel de primer orden en la construcción de tales acuerdos desde que se impulsó el

²⁹³ Para un análisis del clientelismo político desde esta perspectiva, véase: Javier Auyero. “Clientelismo político en Argentina: doble vida y negociación colectiva”, en *Perfiles Latinoamericanos*, No. 20. México, FLACSO, pp. 33-52.

Pronasol y el Procampo.²⁹⁴ Sin embargo, la relativa clandestinidad con se desarrolla este fenómeno al ser considerado un delito por la legislación penal en nuestro país, ha hecho que los esfuerzos por capturar sus dimensiones hayan fracasado.²⁹⁵ Por lo que en este trabajo no abordaremos este tema, aunque no por ello demeritamos el peso de su existencia.

Ahora bien, en relación al control que el Presidente había tenido dentro del régimen político sobre el PRI, también hubo cambios significativos durante este periodo. Dejó de ser un partido de Estado y en consecuencia dejó de ser el partido hegemónico que ganaba todas las elecciones. Desde entonces, unido con el Partido Acción Nacional en torno al proyecto común de seguir impulsando el proyecto neoliberal, el sistema de partidos se caracterizará por la hegemonía de estos dos institutos políticos. Por ello el PRI seguirá siendo funcional a la legitimidad del régimen dentro de la transición política.

Son varios los elementos que influyeron en el curso que siguió la transformación del PRI: a) la propia reforma democratizadora impulsada por Ernesto Zedillo, que en sí misma fue un parteaguas en relación a la forma como había funcionado la histórica subordinación del PRI a la institución presidencial; b) los costos sociales de la crisis económica de 1995, de la cual se culpaba al gobierno y su partido; c) la descomposición de las facciones al interior del partido, que derivaron en una crisis política; d) la reforma electoral de 1996, que impulsó como nunca antes la competencia electoral entre los partidos políticos en condiciones más equitativas y que obligó al PRI a entrar a la arena electoral sin el tradicional apoyo de la presidencia; y e) consecuencia de lo anterior, el avance de la oposición en un ambiente de descrédito del partido oficial y condiciones óptimas en materia electoral para capitalizarlo en la apropiación de espacios de gobierno.

Con la llegada a la presidencia de un candidato de la oposición el régimen dio pasos más decisivos hacia su transformación. El 2 de julio de 2000, Vicente Fox logró

²⁹⁴ Para un estudio sobre los cambios en la política social en el país, véase: Pedro Moreno, et. al. “Veinticinco años de políticas de desarrollo social en México”, en *Sociológica* No. 45, enero-abril 2005. UAM-A. México. pp. 63-65.

²⁹⁵ En un trabajo publicado en 2006, Edgar Hernández Muñoz reflexiona, entre otras cosas, sobre los problemas conceptuales que atraviesa el concepto para ser funcionalmente medido y cuantificado. Véase del autor: “El clientelismo político: los usos políticos de la pobreza”, en *Espacios Públicos*, vol. 9, núm. 17. México, UAEM, 2006, pp. 118-140.

vencer al PRI y en el ánimo de la gente y de muchos investigadores se llegó a la conclusión de que con la alternancia la transición había concluido. En el Cuadro 9 se observa que la Alianza por el Cambio recibió un total de 42.52% de la votación total, seguido por el PRI con el 36.10 de lo votos, y el PRD en tercer lugar con apenas el 16.64% de los sufragios.

Cuadro 9
Resultados de la Elección Presidencial de 2000

Partidos	Votos	Porcentaje
Alianza Por el Cambio	15'988,740	42.52
PRI	13'576,385	36.10
Alianza por México	6'259,048	16.64
PCD	208,261	0.55
PARM	157,119	0.42
DSPPN	592,075	1.57
Candidato no registrado	789,838	2.10
Nulos	789,838	2.10
Total	37'603,293	100.00

Fuente: IFE. Atlas Electoral Federal de México 1991-2006, IFE-Fundación Banamex, 2007.

En este contexto, se hablaba de que la principal misión de Vicente Fox era consolidar la democracia electoral para alcanzar una democracia liberal, que hiciera plenamente vigente el Estado de Derecho y pusiera fin al corporativismo y al clientelismo político como vínculo de relación entre la sociedad y el Estado. Para algunos investigadores se requería de una reforma integral del Estado y ello pasaba por la promulgación de una nueva constitución que plasmara las nuevas condiciones en las que se impulsaría el desarrollo nacional.²⁹⁶ Para otros, se trataba de consolidar la democracia, en el sentido de introducir cambios importantes en las organizaciones de la sociedad civil y en los diferentes espacios de la vida comunitaria, perfeccionar el marco electoral pero apuntando hacia su plena coincidencia con las libertades y garantías

²⁹⁶ En esta perspectiva se encuentra: César Cansino. *El desafío democrático. La transformación del Estado en el México posautoritario*. México, CEPACOM, 2004, 53-71.

individuales consagradas en el Estado de Derecho.²⁹⁷ Lo cierto es que el régimen político no era lo mismo de antes, pero tampoco terminaba de ser una democracia liberal plena.

Desde 1992 las facultades legales del presidente se fueron acotando sistemáticamente. Alonso Lujambio reseña tales cambios y su sustento constitucional, de la siguiente forma:

De manera progresiva –a través de las reformas de 1990, 1993, 1994 y 1996 el ejecutivo ha ido abandonando el control sobre la organización de las elecciones federales [...] (varios artículos constitucionales, pero en particular el 41).

A partir de 1992, el presidente deja de ser “suprema autoridad” en asuntos agrarios a favor de los tribunales agrarios autónomos (artículo 27).

En 1993 se ampliaron las atribuciones del órgano legislativo del Distrito Federal, y en 1996 se estableció que el presidente dejaría de nombrar directamente al regente de la ciudad de México para dar paso a la elección popular de un jefe de gobierno [...]

Desde 1993 adquirió autonomía el Banco Central, el Banco de México, cambio que impide al presidente conducir la política monetaria del país (artículo 28).

A partir de 1993 los períodos de sesiones ordinarias del Congreso aumentaron de cuatro a cinco meses (artículo 65 y 66), con lo que el poder legislativo amplía sus márgenes de estudio y deliberación [...]

A partir de 1996 el Procurador General de la República deja de ser nombrado libremente por el presidente de la República, y la candidatura presidencial para el cargo pasa a ser ratificada por dos tercios del Senado.

Desde 1995, las candidaturas presidenciales de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser ratificados por dos tercios del Senado, en lugar del 50% + 1 que antes se requería.²⁹⁸

Por otra parte, la presidencia ya no gozaba de las facultades “metaconstitucionales” que antaño le permitieron gobernar con amplios márgenes de estabilidad y paz social. El presidente de la República ya no era el presidente del partido de Estado, y éste ya no contaba con la figura presidencial de la cual dependían en última instancia las decisiones. El sistema electoral ya no estaba en manos del Poder Ejecutivo y contaba con amplios márgenes de credibilidad entre la población y los agentes sociales aglutinados en torno a los partidos políticos de oposición. Ésta última había mostrado además un importante avance electoral y la conformación del sistema de partidos era plenamente plural, lo que a su vez se reflejaba en la conformación de ambas Cámaras en

²⁹⁷ En esta perspectiva encontramos a Jacqueline, Peschard. “Después de la transición: trayectos institucionales en materia electoral”...op. cit.

²⁹⁸ Alonso Lujambio, op. cit., p. 257.

el Congreso de la Unión. El presidente de la República desde la elección de 1997 había dejado de tener el control absoluto sobre la Cámara de Diputados, mientras el presidente panista sólo pudo tener una mínima mayoría relativa al inicio de su sexenio, misma que perdió a mitad del mismo (véase Cuadro 10). En el caso de la Cámara de Senadores, el PRI nunca perdió la mayoría absoluta hasta el 2000, sin embargo como oposición mantuvo la mayoría relativa (véase Cuadro 11).

Cuadro 10

Composición de la Cámara de Diputados en las últimas cuatro Legislaturas (1997-2006)

Partidos	1997	2000	2003	2006
PAN	122	206	151	206
PRI	239	211	224	104
PRD	125	50	97	126
PT	6	7	6	16
PVEM	8	17	17	19
Convergencia	-	4	5	16
PSN	-	3		
PAS	-	2		
PNA	-			9
PASC	-			4
Total	500	500	500	500

Fuente: <www.ife.org.mx>, micrositios de resultados electorales y procesos electoral federal 2005-2006.

Cuadro 11

Composición de la Cámara de Senadores en las últimas tres Legislaturas (1997-2006)

Partidos	1997	2000	2006
PAN	25	46	52
PRI	95	60	33
PRD	8	15	29
PT	-	1	2
PVEM	-	5	6
Convergencia	-	1	5
PNA	-	-	1
Total	128	128	128

Fuente: <www.ife.org.mx>, micrositios de resultados electorales y procesos electoral federal 2005-2006.

Estos datos nos hablan del fin del control absoluto del Presidente en turno sobre ambas cámaras legislativas, y con ello de una importante prerrogativa que en el

presidencialismo “tradicional”, era fundamental como instrumento de control sobre los cuadros al interior del partido y como poderosa palanca para reformar el marco jurídico del país de acuerdo a las circunstancias. El hecho de que la presidencia tuviera que pactar con la oposición cualquier proceso legislativo, habla precisamente de la magnitud de los cambios registrados entonces.

De igual forma, el corporativismo había sido un pilar inquebrantable del régimen político hasta entonces. Sin embargo, al perder la presidencia las organizaciones corporativas se enfrentaron al reto de tener que subsistir fuera del poder o pactar con éste. La primera hubiera implicado un suicidio, ya que el actuar fuera de la protección estatal para mantener el monopolio de la representación sindical, le hubiera mermado el control político que mantenía sobre sus bases de trabajadores y posiblemente le hubiera enfrentado a un auge de movimientos disidentes de democratización. La segunda opción resultaba más conveniente.

Pero la tradición anticorporativa del nuevo partido en el gobierno hacía suponer que las relaciones entre el Estado y el corporativismo de cualquier forma estaban destinadas a transformarse hacia esquemas más liberales y democráticos. Además, la campaña de Vicente Fox había prometido acabar con el corporativismo, apostar por la democracia sindical, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, mejorar la capacitación para el trabajo, etc.

Sin embargo, las relaciones sindicales, la mayoría en manos de sindicatos corporativos, en los hechos habían resultado en la restauración de las relaciones corporativas con el Estado. De acuerdo a Enrique de la Garza el corporativismo demostró que eran posibles alianzas entre sindicatos priístas y gobiernos panistas, y que el nuevo régimen en construcción no era un obstáculo para ello. Las redes de complicidad en todos los niveles del corporativismo mantuvieron como eje de la intermediación de intereses el orden y la paz laborales a cambio del monopolio de la representación. Esta red corporativa ha demostrado una gran vitalidad y vigencia, en gran medida porque le sigue siendo útil al capital dentro de los actuales esquemas de acumulación capitalista en el país.²⁹⁹

²⁹⁹ Enrique de la Garza. *Los límites de la reestructuración productiva...* op. cit. p. 54.

Dicho acuerdo no estuvo exento de desencuentros, como el originado con el Sindicato Minero a raíz del incidente en la mina “Pasta de Conchos” que costó la vida a varios trabajadores, y que terminó con la destitución de su líder y el inicio de una persecución por el delito de enriquecimiento ilícito. Sin embargo el corporativismo mantiene su vigencia en un contexto de adversidad para el mundo laboral.

Encontramos en este elemento el hilo de continuidad del autoritarismo mexicano y las inercias que no permitieron la consolidación del régimen democrático. Sin embargo, es difícil pensar que el Estado dejara de echar mano de éste en condiciones económicas tan adversas en el mundo laboral. Una “liberalización” del sindicalismo corporativo entrañaría la posibilidad de rupturas y reacomodos que podrían consolidar organizaciones más comprometidas con el bienestar de los trabajadores, más comprometidas con el empleo y el salario, e incluso con proyectos políticos menos excluyentes, y ese es precisamente el punto de inflexión por el que el Estado y el corporativismo han mantenido su mutua interdependencia, en beneficio del capital.

El fin del gobierno foxista entregaba un país con graves problemas que reflejaban altas tasas de desempleo, pobreza, desigualdad, migración, informalidad, incremento de la inseguridad pública, además de un enrarecimiento de la vida pública en el país a raíz de la confrontación que entabló con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para entonces principal crítico de la administración federal, y que llegó al borde de la violencia social. En este contexto se desarrollaron los comicios presidenciales del año 2006, que descarrilaron el proceso de democratización en el país.

Dos años antes de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador era el candidato mejor posicionado en las preferencias ciudadanas y con las mayores posibilidades de ocupar la presidencia de la República. Había logrado posicionarse gracias a una eficaz estrategia de medios, que tuvo en los yerros de la administración federal su principal punto de apoyo.

El proceso sucesorio distó mucho de ser terso y prueba de ello fueron los constantes desencuentros del PRD con el partido en el gobierno y el PRI mucho antes de que el proceso electoral iniciara formalmente. En 2003 se presentó la primera discordancia entre estos partidos, a raíz de la elección de los integrantes del Consejo General del IFE por la Cámara de Diputados, ya que gracias a un acuerdo entre los

grupos parlamentarios del PRI y del PAN, la fracción perredista no tuvo oportunidad de incidir en la designación de los nuevos consejeros. El PRD denunció entonces que su presidente, Luis Carlos Ugalde, era un instrumento de la líder de los profesores Elba Esther Gordillo, y que había sido impuesto en ese cargo a partir de un acuerdo con el presidente Vicente Fox.

Desde entonces, las estrategias del partido en el gobierno y del PRI tuvieron como objetivo obstaculizar la posible candidatura de López Obrador. La primera acción de este tipo la representó el fallido intento de desafuero en su contra, con motivo de un supuesto desacato a una orden judicial sobre el predio “El Encino”. Un proceso legal de escasa importancia en otro contexto, se transformó en una consigna que pretendía llevar ante los tribunales al entonces Jefe de Gobierno. Esta estrategia impulsada desde las oficinas de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, resultó en un revés para el gobierno panista, ya que a pesar de haber logrado el desafuero de AMLO, una impresionante movilización social en su defensa obligó al gobierno federal a abortar el proceso judicial en su contra. El presidente ordenó retirar los cargos y destituyó al entonces Procurador de Justicia, lo que consolidó la candidatura a la Presidencia de López Obrador.

Para entonces ya había madurado una propuesta desde la socialdemocracia mexicana aglutinada en torno a la figura de López Obrador, que planteaba llevar a cabo transformaciones que permitieran al país superar los largos años de bajo crecimiento, desempleo y bajos salarios. En el discurso se apostaba a la construcción de un nuevo pacto social y a la superación de los grandes problemas nacionales. Destacaba la denuncia a los excesos del gobierno y de los empresarios, que habían llevado al país a una situación insostenible, y se pretendía hacer para ello un compromiso con la austeridad republicana.³⁰⁰ Se trataba de un proyecto que si bien no planteaba un cambio radical, sí ponía en peligro algunos de los privilegios acuñados durante varios años por un selecto grupo de personas, que a la sombra del gobierno se habían enriquecido concentrando el ingreso y polarizando la desigualdad social en el país, y por ello se

³⁰⁰ Este proyecto mereció la publicación de un libro en el que se concretaban las propuestas del futuro nuevo gobierno, véase: Andrés Manuel López Obrador. *Un proyecto alternativo de nación. Hacia un cambio verdadero*. México, Grijalbo, 2004.

empezaron a aglutinar en un frente común en contra de lo que empezaron a considerar una amenaza a sus intereses.

En febrero-marzo de 2006 los medios de comunicación registraron una estrategia de los partidos que encabezaban la disidencia al proyecto de López Obrador, caracterizada por un tono fuertemente crítico que rayó en muchos casos en la diatriba y la calumnia. Se habló sobre los malos manejos de las finanzas durante su gobierno en la capital, se le comparó con su principal enemigo, Carlos Salinas de Gortari, e incluso con el presidente de Venezuela Hugo Chávez. En términos generales se difundió la idea de que era un peligro para México y se llegó a decir que si ganaba la elección la clase media vería mermado su nivel de vida. Esta estrategia en medios se llevó al terreno de las encuestas, que de un mes a otro registraron una caída abrupta en las preferencias electorales hacia López Obrador a mitad de la contienda.

La Coalición de partidos que postulaba la candidatura de AMLO en todo momento denunció la intervención de la Presidencia y de todo el aparato gubernamental a favor de Felipe Calderón, entre las que destacaba las persistentes declaraciones del Presidente sobre los peligros que representaba la candidatura de López Obrador, los apoyos en especie y monetarios para la compra cautiva del voto ciudadano, e incluso las “concertaciones” con los gobernadores de los estados el día de la jornada electoral para que apoyaran a su candidato.

El día de la jornada electoral, los resultados arrojados por el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) tuvieron un comportamiento totalmente atípico dentro de una elección tan cerrada, ya que desde un principio se empezaron a contabilizar las actas de las casillas electorales que favorecían a Felipe Calderón -quien registraba al arranque del PREP una ventaja de hasta diez puntos porcentuales, situación que también fue denunciada por la Coalición por el Bien de Todos como un intento de generar en la opinión pública la percepción del triunfo panista.

Para ello argumentaron, que en ningún momento durante la captura de las actas, López Obrador registró una delantera, aunque sea mínima. En una elección tan cerrada como la que se registró, era de esperarse, se decía, que en la captura de las actas se observaran alternancias entre los punteros a medida que se iban recabando los datos, por la simple y sencilla razón de que con una ventaja tan estrecha, la aleatoriedad con la que

se suponía que se empezaron a capturar las actas provocaría ese comportamiento en los datos.

Ante la presunción de dichas irregularidades el candidato del PAN rechazó la demanda hecha por la Coalición para aceptar un segundo conteo de los sufragios, lo que le hubiera dado legitimidad a su supuesto triunfo, porque además no implicaba más que un pronunciamiento, toda vez que la autoridad encargada de tomar una decisión al respecto era el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El Tribunal por su parte aprobó la apertura de sólo 11,839 casillas, que representa el 9.07% del total de las casillas instaladas el día de la elección, en 149 de los 300 distritos electorales del país. Con lo cual se descartaba la principal demanda de la Coalición, en sus pretensiones de esclarecer la elección. Aunque sí sirvió para que evidenciara algunas irregularidades del Instituto Federal Electoral durante el cómputo distrital de la votación, ya que éste no permitió la apertura de los paquetes electorales en la inmensa mayoría de las casillas, lo que dejó en entredicho, por lo menos, su imparcialidad, autonomía e independencia.

Por otra parte, el dictamen por el que Tribunal hizo el cómputo final de la elección, se declaró la validez de la misma y se declaró presidente electo, dejó más dudas que certidumbre sobre la legalidad de los comicios:³⁰¹

- a) Se criticó el tono en el que se desarrollaron las propagandas electorales.
- b) Se hizo mención a los llamados del IFE a Vicente Fox para mantenerse al margen del proceso electoral.
- c) Se advirtió sobre el uso de programas sociales en el proceso electoral.
- d) El cómputo final de la elección registró una votación para Felipe Calderón de 14 millones 916 mil 927 votos; seguido por Andrés Manuel López Obrador, 14 millones 683 mil 96 votos; y Roberto Madrazo, de la Alianza por México, 9 millones 237 mil. La ventaja entre el primero y segundo lugar se redujo porcentualmente sólo dos décimas (de 0.58% a 0.56%).

³⁰¹ Véase Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación. *Dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, declaración de validez de la elección y presidente electo*, consultado el 23 de marzo de 2007 en la dirección electrónica: www.trife.gob.mx/acuerdo/dictamen.pdf.

- e) Se reconoció que el Consejo Coordinador Empresarial cometió una violación a lo dispuesto en normas de orden público, con los *spots* de radio y televisión que difundió entre marzo y mayo del 2006: “el CCE violó los principios de igualdad en las contiendas electorales”. El Tribunal reprende que en su promoción del voto, el Consejo haya exhibido una tendencia a favor de la continuidad del gobierno panista, transgrediendo la prohibición legal de que terceras personas contraten publicidad en favor o en contra de algún partido político.
- f) Se manifestó que las declaraciones de Vicente Fox “se constituyeron en un riesgo para la validez de la elección” que hubieran sido un elemento de más peso si se hubieran presentado más irregularidades en el proceso electoral, por lo que se precisó que en el actual contexto, las declaraciones del titular del Ejecutivo no son suficientes para declarar la invalidez de la elección.
- g) También se reconoció que “en un número importante de casillas” hubo deficiencias, pero que tampoco fueron suficientes como para invalidar la elección.

Por estos argumentos vertidos en su dictamen, López Obrador denunció a la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del país de no haber sido imparcial en la calificación de la elección, pese a reconocer todo este conjunto de irregularidades. La Coalición acusó al TEPJF de haberse guiado por criterios meramente subjetivos, de haber renunciado a su facultad para hacerse de las pruebas objetivas necesarias para normar su criterio, y de emitir un dictamen en el que a pesar de reconocer todo un conjunto de irregularidades, arbitrariamente nos las consideró suficientes como para anular la elección. Lo cierto es que en esta elección se abandonó el criterio *garantista* con el que se habían repuesto procesos locales como los de Tabasco (16 de octubre de 2000) y Colima (8 de agosto de 2001), en los cuales, ante la intervención del ejecutivo en los mismos a favor del candidato de su partido se optó por proteger los principios constitucionales de equidad y certeza electoral.

Después de un largo plantón a lo largo de reforma y de movilizaciones multitudinarias para defender el voto, el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador decidió no reconocer a Felipe Calderón como presidente de México y convocó a una Convención Nacional Democrática en la que se le ungió como

“presidente legítimo de México”. Desde entonces el movimiento perdió fuerza pero ganó en cohesión y ha encabezado varias luchas que han tenido por objeto frenar el avance del neoliberalismo en el país, así como denunciar sus estragos. Su estrategia ha contemplado la arena formal de la política, así como la movilización social, y a pesar de estar vetado de los principales medios de comunicación en el país mantiene una importante presencia en la opinión pública.

Este debatido proceso electoral causó una gran polémica en el ámbito de la investigación. Así encontramos diferentes enfoques y puntos de vista contrapuestos sobre la legalidad del proceso, la legitimidad del presidente electo y la vigencia de la democracia en nuestro país. De un lado están quienes han defendido el supuesto triunfo de Calderón en la elección presidencial. Su principal argumento es que la Coalición por el Bien de Todos no logró comprobar el fraude electoral.³⁰² Del otro, están quienes argumentan que el fraude existió,³⁰³ o quienes sostienen que la acumulación de inconsistencias fue tal que mereció tomarse en cuenta la anulación de los comicios presidenciales.³⁰⁴

No es el objeto de este trabajo abundar en esta discusión. Más aún cuando recientemente el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, partido que

³⁰² Alejandra Lajous, argumenta que AMLO acusó al Instituto Federal Electoral de fraude sin jamás comprobar su dicho. Véase de la autora, *Confrontación de agravios. La postelección de 2006*, con la colaboración de Santiago Portilla. México, Oceáno, 2007, p. 11. César Cansino, a pesar de reconocer que los comicios fueron irregulares, en gran medida por los errores de las autoridades electorales, opta por defender la tesis del triunfo de Calderón. Véase del autor, *El evangelio de la transición. Y otras quimeras del presente mexicano...* op. cit. p. 20. Otra tesis que se inscribe en las anteriores es la de Carlos Tello Díaz, quien señala que en un momento de la jornada electoral, López Obrador reconoció su derrota y explícitamente argumenta que el entonces candidato mintió deliberadamente para sostener su triunfo ante los electores. Véase del autor, 2 de julio. *La crónica minuto a minuto del día más importante de nuestra historia contemporánea*. México, Editorial Planeta, 2007, p. 161.

³⁰³ Véase José Valenzuela Feijóo. *México 2006: ¿Una crisis mayor?* México, Horizontes Críticos, CEDA, 2006.

³⁰⁴ Tiempo después de las elecciones el investigador José Antonio Crespo se dio a la tarea de analizar la enorme cantidad de actas con errores aritméticos que se registraron en la elección (se calculan en más de 81 000) en 150 de los 300 distritos electorales. El procedimiento consistió en sumar las casillas de una misma sección electoral (básica y contiguas), con la finalidad de compensar los errores de más o de menos que hay en los rubros fundamentales de las actas: ciudadanos que votaron, boletas encontradas en las urnas y votación total emitida. El resultado de tal procedimiento fue que se encontraron 316,539 sufragios sin justificación alguna. Cantidad superior a los 216,821 votos de diferencia con los cuales de acuerdo con el TEPJF, Calderón le ganó la elección presidencial a López Obrador. El autor no atribuye esta cantidad de votos al candidato por la Coalición por el Bien de Todos, pero sostiene que sí era suficiente como para que se tomara en cuenta la posibilidad de la anulación de los comicios, por la falta de certeza que un resultado tan estrecho en medio de tantas inconsistencias ocasionaría. Véase del autor, 2006: *Hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana*. México, Editorial Debate, 2008.

reconoció públicamente la legitimidad del presidente Calderón, expuso en tribuna que éste “se había robado la presidencia”, en medio de un largo debate originado a raíz de que se hicieron públicos los acuerdos entre éste partido y el PAN para apoyar el paquete fiscal del 2010 presentado por el Ejecutivo Federal, a cambio de que el PAN no hiciera alianzas con el PRD en los comicios locales de este año. Esto originó que de uno y otro lado surgieran revelaciones y confesiones de acuerdos pasados, y en medio de ello, se reconoció que el PRI había legitimado por acuerdo a Calderón, permitiéndole tomar posesión bajo la promesa de que “gobernaría para todos los mexicanos”. Antes de fijar la posición de su partido, el diputado priísta Rubén Moreira Valdez afirmó que “el presidente Calderón también es ilegítimo”, y prosiguió diciendo que “Somos la generación del no. Los que le decimos a Calderón, ‘no vendas la patria’; los que le decimos a Calderón ‘tú no eres legítimo’; los que le decimos a Calderón ‘te robaste la presidencia del República’. Finalmente, remató afirmando que las elecciones debieron haberse repetido.”³⁰⁵

El hecho de que estas declaraciones se hayan dado desde la máxima tribuna del pueblo de México, confirman muchas de las sospechas que en amplios sectores de la sociedad mexicana plantó el proceso electoral de 2006. Pero más allá de ello, lo cierto es que con esos comicios se aborta la democratización iniciada en el país hace ya varios años, ya que sus inconsistencias llevaron a una ruptura entre las fuerzas políticas en torno al consenso sobre la legitimidad del régimen político.

Lo cierto es que viejas prácticas pero con nuevos moldes se hicieron presentes ese 2 de julio de 2006. Destaca el papel activo del corporativismo de viejo cuño representado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su líder Elba Esther Gordillo para promover el voto diferenciado de su partido (el Partido Nueva Alianza) a favor del partido en el gobierno para la elección de presidente; destacan también las graves omisiones de las autoridades electorales durante el proceso y su subordinación a los intereses del partido en el gobierno, que dejan un gran signo de interrogación sobre su imparcialidad; y destaca de igual forma el gran poder presidencial

³⁰⁵ Aquí recuperamos la cobertura hecha por Jesús Cervantes: “PRI y PAN exhiben sus miserias en San Lázaro”, *Página 24*, 11 de marzo de 2010, p. 15. Pero este debate fue ampliamente documentado por diversos medios periodísticos en la misma fecha.

para conducir este proceso de principio a fin en la ilegalidad con un enorme margen impunidad.

El régimen que resulta de la transición dista mucho de ser democrático, su carácter autoritario se evidenció cuando por la vía electoral surgió un proyecto que prendió signos de alerta en los beneficiarios del patrón de crecimiento vigente. La democracia cavó su tumba cuando amenazó con trastocar los intereses de la oligarquía que controla el país.³⁰⁶ Con ello, se apostó a gobernar sin legitimidad y el autoritarismo en el ejercicio del poder político ha sido desnudado.

Reflexiones finales.

Es la relación capital-trabajo la clave para comprender la problemática relación entre desarrollo y democracia, por lo que sólo el análisis de la lucha de clases nos puede ayudar a salir del callejón sin salida en el que han caído los estudios sobre este tema a lo largo de varias décadas.

Comprender las funciones políticas y económicas del Estado, en tanto organización del poder político de la burguesía para ejercer su dominio sobre el proletariado, es fundamental para captar la dinámica del desarrollo y la democracia desde una nueva perspectiva. Esto porque el Estado es producto de las relaciones sociales de explotación que se ejercen en el capitalismo, y de hecho su sola existencia como detentador del monopolio de la violencia, evidencia dicha explotación. Sin embargo, a diferencia de otros modos producción, en el capitalismo la violencia no se ejecuta de manera directa en el proceso productivo, sino que es externa a éste. Ello es posible gracias a que el salario borra toda huella de la diferencia entre plustrabajo y trabajo necesario, y hace aparecer una relación que es desigual como justa para las partes.

³⁰⁶ El interesante libro coordinado por Jorge Zepeda Patterson, *Los amos de México*, más allá del trabajo periodístico desarrollado por sus autores para capturar la biografía de los hombres más poderosos del país, recoge una reflexión muy aguda en relación a la polarización del ingreso en nuestro país: En México, 20 familias concentran el 10 por ciento del PIB y el 50 por ciento del mercado de valores. Según la lista Forbes, 10 empresarios nacionales forman parte de la casta de multimillonarios —con una fortuna de más de mil millones de dólares—, y el hombre más rico del planeta, Carlos Slim, hizo su fortuna en nuestro país. Entonces, ¿por qué 40 millones de individuos viven en la pobreza? Las respuestas a esta interrogante, de acuerdo a los autores deben encontrarse en el análisis de estos personajes, que han sido los protegidos que se han hecho al amparo de los políticos y de leyes antimonopólicas laxas. Véase Jorge Zepeda Patterson. *Los amos de México*. México, Ediciones Temas de Hoy, 2007.

Sobre esta premisa se ha construido todo el edificio ideológico que ha sustentado la democracia liberal, que adquiere su nombre precisamente de la adopción de las ideas del liberalismo, entre las que destacan el individualismo, la igualdad jurídica de los hombres ante la ley y la legitimidad como prerequisite para el ejercicio del poder público.

En este sentido, la democracia es la mejor forma que adopta el Estado en el capitalismo para la dominación burguesa, ya que le permite tener una autonomía relativa en relación a los conflictos que se desarrollan tanto entre las diferentes fracciones de la burguesía por la búsqueda de la ganancia, como entre ésta y los dominados, situación que le permite ejercer el poder con importantes márgenes de legitimidad.

La democracia liberal está diseñada entonces para crear consensos, pero para lograrlo deben existir ciertos requisitos materiales, que le permitan a los miembros de la sociedad ejercer su ciudadanía con la mayor plenitud posible. En este caso nos referimos, no sólo a los derechos civiles y políticos difundidos por la ONU entre las naciones del mundo, sino sobre todo a los derechos económicos, sociales y culturales igualmente promovidos por este organismo internacional. La existencia diferenciada de este último tipo de derechos en los diversos países del orbe está relacionada con el nivel de desarrollo alcanzado y es en este punto donde se esclarecen los nexos entre desarrollo y democracia.

Por otra parte, la persistencia de excedentes de población en nuestro país ha impactado negativamente en la determinación de los salarios y el incremento del desempleo, configurando históricamente la persistencia de la movilización social y la lucha por la mejora en las condiciones de vida de la población. Esto a su vez ha influido en la persistencia del autoritarismo como rasgo estructural del ejercicio del poder político, destacándose la consolidación de regímenes políticos formalmente democráticos pero autoritarios en los hechos. Aquí se han destacado dos momentos, la génesis y consolidación del presidencialismo mexicano durante el patrón de crecimiento relativo, y la transición a la democracia en el patrón de crecimiento absoluto, que terminó dando origen a un régimen que combina rasgos autoritarios con un precario ejercicio de la democracia liberal.

Durante la vigencia del Estado populista, se conforma una alianza de clases que sólo pudo ser posible con la consolidación de un proceso que implicó la organización de los trabajadores y campesinos y sumarlas al nuevo proyecto nacional; acrecentar y echar mano de las facultades que la Constitución de 1917 otorgaba al presidente para emprender las transformaciones requeridas; y comenzar una estrategia para que el PNR, entonces una confederación de cacicazgos regionales de líderes revolucionarios, quedara en manos de la presidencia, y se convirtiera en un instrumento para controlar los espacios de poder dentro de la nueva estructura de poder. Este proceso instituyó una nueva configuración del régimen político mexicano, que desde entonces se caracterizaría por un ejecutivo lo suficientemente poderoso como para ser el eje vertebrador de la vida política nacional.

A partir de la década de los cuarenta, en la caracterización del presidencialismo mexicano durante la vigencia del Estado desarrollista, la subordinación de los intereses de las organizaciones de los trabajadores a la estrategia de desarrollo impulsada por el Estado, es lo que va a definir el carácter autoritario del régimen político constituido entonces, y en consecuencia, hará inviable el funcionamiento de la democracia liberal en nuestro país. El fenómeno del presidencialismo parte de esta condición que subordina el ejercicio de la ciudadanía de los individuos a un proyecto aparentemente colectivo e incluyente, en pos del cual la representación política se hace incompatible con el *ejercicio individual* de los derechos políticos y libertades de la población, a pesar de estar expresamente sancionados de esa forma en el aparato legal. Esta condición es la que hizo del presidencialismo un régimen *sui generis* que concentrará en el Ejecutivo un poder que trastocaba la división de poderes republicana plasmada en el cuerpo legal, apoyándose en cuatro mecanismos fundamentales: el aparato corporativo como mecanismo de control social, las facultades constitucionales y metaconstitucionales del Presidente, la jefatura del Partido de Estado, y el control sobre el sistema electoral.

Con el cambio en el patrón de crecimiento económico, el corporativismo siguió operando bajo los mismos esquemas de antaño, y si ello no representó una ruptura radical con sus bases y un auge de los movimientos sindicales autónomos por la defensa del salario, el empleo y el bienestar de los trabajadores, es porque los cambios que se habían gestado desde el Estado, la economía y en los procesos productivos atentaban

precisamente contra esas variables. En las nuevas condiciones el trabajador no era un elemento trascendente en el funcionamiento del modelo económico –particularmente en el tema de la demanda agregada- como ocurría antaño, ahora era una variable prescindible subordinada totalmente a los dictados del mercado prácticamente sin márgenes de maniobra para hacer frente a las nuevas condiciones en las que se ubicaba dentro del proceso productivo. El creciente desempleo, el empleo precario y la caída de los salarios han consolidado una población excedente que permite la reproducción de este esquema en beneficio de la ganancia capitalista.

Los cambios ocurridos en el sistema electoral transformaron paulatinamente el sistema de partidos haciéndolo más competitivo, lo que se convirtió en el rasgo más importante de un proceso tendiente a la democratización del régimen. Con la alternancia de un partido político distinto al PRI en la presidencia de la República a partir de 2000, muchos especialistas consideraron que la transición había llegado a su fin, y que la misión del nuevo gobierno era consolidar la democracia electoral para alcanzar una democracia liberal, que hiciera plenamente vigente el Estado de Derecho y pusiera fin al corporativismo y al clientelismo político como vínculo de relación entre la sociedad y el Estado. Lo cierto es que el régimen político no fue más lo mismo de antes, pero tampoco terminó por ser una democracia liberal plena.

La presidencia a partir de entonces ya no goza de las facultades “metaconstitucionales” que antaño le permitieron gobernar con amplios márgenes de estabilidad y paz social. El presidente de la República ya no es el presidente de un partido de Estado, y el partido en el gobierno ya no depende de la figura presidencial en su vida interna. El sistema electoral ya no está en manos del Poder Ejecutivo, aunque con la elección de 2006 esa credibilidad se ha mermado. La oposición ha mostrado un importante avance electoral y la conformación del sistema de partidos es plenamente plural, lo que a su vez se refleja en la conformación de ambas Cámaras en el Congreso de la Unión.

Pero por otra parte, las relaciones sindicales, la mayoría en manos de sindicatos corporativos, en los hechos han resultado en la restauración de las relaciones corporativas con el Estado. La realidad ha demostrado que son posibles alianzas entre sindicatos priístas y gobiernos panistas, y que el nuevo régimen en construcción no es un

obstáculo para ello. Las redes de complicidad en todos los niveles del corporativismo han mantenido como eje de la intermediación de intereses el orden y la paz laborales a cambio del monopolio de la representación. El corporativismo ha demostrado una gran vitalidad y vigencia, en gran medida porque le sigue siendo útil al capital dentro de los actuales esquemas de acumulación capitalista en el país.

Por ello es difícil pensar que el Estado dejará de echar mano de éste en condiciones económicas tan adversas en el mundo laboral. Una “liberalización” del sindicalismo corporativo entrañaría la posibilidad de rupturas y reacomodos que podrían consolidar organizaciones más comprometidas con el bienestar de los trabajadores, más comprometidas con el empleo y el salario, e incluso con proyectos políticos menos excluyentes, y ese es precisamente el punto de inflexión por el que el Estado y el corporativismo han mantenido su mutua interdependencia, en beneficio del capital.

La elección presidencial del 2006 fue un parte aguas porque demostró lo endeble del proceso democratizador en el país. Con el fraude se aborta dicho proceso y dota de un carácter autoritario al régimen político surgido de la transición. Viejas prácticas pero con nuevos moldes se hicieron presentes ese 2 de julio de 2006. A la par de las irregularidades reseñadas en este trabajo y que involucran a las autoridades electorales, a la presidencia de la República, partidos políticos y a un conjunto de agentes privados, destaca el papel activo del corporativismo de viejo cuño representado por el SNTE y su líder Elba Esther Gordillo para promover el voto diferenciado de su partido (el Partido Nueva Alianza) a favor del partido en el gobierno para la elección de presidente; destacan también las graves omisiones de las autoridades electorales durante el proceso y su subordinación a los intereses del partido en el gobierno, que dejan un gran signo de interrogación sobre su imparcialidad; y destaca también el gran poder presidencial para conducir este proceso de principio a fin en la ilegalidad con un enorme margen impunidad.

Nuestra explicación sobre los rasgos autoritarios en el ejercicio del poder político en nuestro país, de esta forma encuentran su raíz en una gestión estatal del subdesarrollo que ha dado como resultado la constitución de una formación social donde la acumulación descansa en el trabajo general producido en Estados Unidos principalmente, ello además de generar una compra sin venta e incidir negativamente en

la balanza de pagos, transfiere inversión que redunde en la consolidación de excedentes de población, cuya existencia impacta a la baja en los salarios y en el incremento del desempleo y el empleo precario. Las luchas sociales entonces tienen como contraparte el uso recurrente de mecanismos autoritarios por parte del Estado para garantizar la acumulación capitalista con márgenes importantes de paz social.

Esta condición estructural además se reproduce de conformidad a las necesidades de la acumulación en el imperio, y los patrones de crecimiento económico no son otra cosa que adaptaciones del aparato productivo nacional a esos requerimientos. Por ello, se pueden encontrar especificidades en la forma en que el Estado interviene en la economía y la forma en la que éste influye en aquél, pero los rasgos esenciales, como lo hemos observado son un rasgo común.

Por lo tanto, la lucha por la democracia en México implica también una lucha por un proyecto nacional que tenga por objeto la generación de progreso y su vinculación a los procesos productivos. Implica también una lucha por el empleo y mejores salarios, y por la democratización de las organizaciones de los trabajadores en el campo y las ciudades. Es una lucha contra el imperialismo, y por ello también una lucha contra el autoritarismo en el ejercicio del poder político.

Bibliografía.

- Aguilar Camín, Héctor y Lorenzo Meyer. *A la sombra de la revolución mexicana*. México, Editorial Cal y Arena, 1992.
- Barán, Paul A. y Paul Sweezy. *El capital monopolista*. México, Siglo XXI Editores, 1968.
- Bell Lara, José. *Cambios mundiales y perspectivas*. La Habana, Cuba. Revolución cubana, Editorial de Ciencias Sociales, 1999.
- Bobbio, Norberto. “El futuro de la democracia”, en *El futuro de la democracia*, Fondo de Cultura Económica, México, 1986.
- Bulmer-Thomas, Víctor. *La historia económica de América Latina desde la independencia*. México, FCE, 1998.
- Cansino, César. *El desafío democrático. La transformación del Estado en el México posautoritario*. México, CEPACOM, 2004.
- Cansino, César. *El evangelio de la transición. Y otras quimeras del presente mexicano*. México, Editorial Debate, 2009.
- Carpizo, Jorge. *El presidencialismo mexicano*. México, Siglo XXI, 1983.
- Castañeda, Jorge G. *La herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en México*. México, Extra Alfaguara, 1999.
- Córdova, Arnaldo. *La formación del poder político en México*. México, Era 17ª edición, 1991.
- Córdova, Arnaldo. *La política de masas del cardenismo*. México, Era, 1974.
- Cosío Villegas, Daniel. *El sistema político mexicano. Las posibilidades de cambio*. México, Editorial Joaquín Mortiz, segunda edición, decimocuarta reimpresión, 1986.
- Crespo, José Antonio. 2006: *Hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana*. México, Editorial Debate, 2008.
- Cueva, Agustín. *Problemas y perspectivas de la teoría de la dependencia*. Cuadernos del CELA. México, UNAM, 1974.
- Dahl, Robert. *La democracia y sus críticos*. Barcelona, Paidós, 1992.
- Dahl, Robert. *La Poliarquía. Participación y oposición*. Editorial Tecnos. Madrid. 1989.
- Durand, Jorge. Jorge Durand. *Programas de Trabajadores Temporales. Evaluación y análisis del caso mexicano*. México, Conapo, 2007.

Faletto, Enzo. *Dimensiones sociales, políticas y culturales del desarrollo*, compilado por Manuel Antonio Garretón. Bogotá, Siglo del Hombre Editores/CLACSO, 2009.

Figueroa, Silvana Andrea. *El Estado y el trabajo científico en el proceso de desarrollo. La articulación pendiente en América Latina*. Tesis de Doctorado. Zacatecas. Unidad Académica de Ciencia Política-UAZ, 2009.

Figueroa, Víctor. *Excedentes de población*. Mimeo, 2007.

Figueroa, Víctor. *Reinterpretando el subdesarrollo. Trabajo General, clase y fuerza productiva en América Latina*. México, Siglo XXI, 1986.

Friedman, Milton y Rose. *Libertad de elegir. Hacia un nuevo liberalismo económico*. México, Grijalbo S.A., 1980.

Fukuyama, Francis. *El fin de la historia y el último hombre*. Planeta, Barcelona, 1992.

Garrido, Luis Javier. *El partido de la revolución institucionalizada*. México, Siglo XXI, 1986.

Garrido, Luis Javier. *La ruptura, la corriente democrática del PRI*. México, Grijalbo, 1993.

González Casanova, Pablo. *La democracia en México*. 14ª Edición, México, Ediciones Era, 1983,

Guillén Romo, Héctor. *El sexenio de crecimiento cero. México, 1982-1988*. México, Era, 1990.

Guillén Romo, Héctor. *La contrarrevolución neoliberal*. México. Editorial Océano, 1984.

Hernández Ruíz, Carlos Alejandro y Miguel Ángel Salado Hernández. *El programa de trabajadores agrícolas mexicanos como modelos para la creación de un tratado migratorio*. Tesis de Licenciatura. Puebla, México, UDLAP, 2004.

Huerta, Arturo. *Economía mexicana. Más allá del milagro*. México. Ediciones de Cultura Popular. 1996.

Huntington, Samuel. *La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX*. Barcelona, Paidós, 1994.

Ianni, Octavio. *La formación del Estado populista en América Latina*. México, Era, 1984.

Ibarra, David. *Ensayos sobre economía mexicana*. México, Fondo de Cultura Económica, 2006.

Lajous, Alejandra. *Confrontación de agravios. La postelección de 2006*, con la colaboración de Santiago Portilla. México, Oceáno, 2007.

Lajous, Alejandra. *Los orígenes del partido único en México*. México. UNAM. 3ª Edición, 1985.

Lenin, Vladimir I. *El Estado y la revolución*. China, Ediciones en lenguas extranjeras Pekín, 1966.

Lenin, Vladimir I. *Imperialismo, fase superior del capitalismo*. Ediciones en lenguas extranjeras. Pekín, 1975.

López Obrador, Andrés Manuel. *Fobaproa: expediente abierto*. México, Grijabo, 1999.

López Obrador, Andrés Manuel. *Un proyecto alternativo de nación. Hacia un cambio verdadero*. México, Grijalbo, 2004.

Macpherson, C. B.. *La democracia liberal y su época*. España, Madrid, Alianza Editorial, 1982.

Maldonado, Edelmiro. *Breve Historia del movimiento obrero*. No. 2. Monterrey, N.L. 1977. S/D.

Marx, Karl. *El capital*. Tomo I. México, Siglo XXI Editores, 1975.

Méndez, Luis H. y José Othón Quiróz. *Modernización estatal y respuesta obrera: historia de una derrota*. México, UAM-A, 1994.

Merino, Mauricio. *La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México*. México, FCR, 2003.

Meza Padilla, Eligio. *El trabajo tiene una propuesta democrática para todos*. México. UAZ, 2007.

Miliband, Ralph. *El Estado en la sociedad capitalista*. 17ª Edición. México, Siglo XXI, 1997.

Montoya, A. *Maíz y petróleo: una propuesta estratégica nacional*. México, UIA, 2007.

Moore, Stanley. *Crítica de la democracia capitalista*. México, Editorial Siglo XXI, 1997.

O'Donnell, Guillermo. *El Estado autoritario-burocrático*. Buenos Aires, Belgrano, 1982.

Ocampo Alcántar, Rigoberto. *El sistema político mexicano. El agotamiento de un modelo corporativo*. México, UAS-Publicaciones Cruz O., 2001.

- Petras, James y Henry Veltmeyer. *Imperio con imperialismo. La dinámica globalizante del capitalismo neoliberal*. México, Siglo XXI Editores, 2006.
- Pipitone, Ugo. *La salida del atraso: un estudio histórico comparativo*. México, CIDE-FCE, 1994.
- Poulantzas, Nicos. *Estado, poder y socialismo* México, Editorial Siglo XXI, 1979.
- Reyes Heróles, Federico. *La democracia difícil*. México, Grijalbo, 1991.
- Rivera, Miguel Ángel. *El nuevo capitalismo mexicano*. México, Era, 1992.
- Sagasti, Francisco R.. *Ciencia, tecnología y desarrollo latinoamericano*. México, FCE, 1981.
- Sánchez Daza, Germán. *Ciencia y tecnología en América Latina. El ALCA como proyecto hegemónico*. México, CLACSO-BUAP, 2009, p. 5.
- Sánchez Vázquez, Adolfo. *Entre la realidad y la utopía*. México, FCE, 1999.
- Sartori, Giovanni. *¿Qué es la democracia?* México, Taurus, 2008.
- Sartori, Giovanni. *Ingeniería Institucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados*. México, FCE, 1994.
- Saxe-Fernández, John (coord.). *Globalización: crítica de un paradigma*. Plaza & Janes Editores, UNAM, México, 1999.
- Schumpeter, Joseph. *Capitalismo, Socialismo y Democracia*. España, Orbis, 1983.
- Silva-Herzog Márquez, Jesús. *El antiguo régimen y la transición en México*. México, Planeta/Joaquín Mortiz, 1999.
- So, Alvin Y. *Social chance and development. Modernization, dependency and world-system theories*. California, USA, Sage Publications Inc., 1990.
- Solís, Leopoldo. *La realidad económica mexicana: retrovisión y perspectivas*. Siglo XXI. México. 1975.
- Tello Díaz, Carlos. 2 de julio. *La crónica minuto a minuto del día más importante de nuestra historia contemporánea*. México, Editorial Planeta, 2007.
- Therborn, Göran. *¿Cómo domina la clase dominante? Aparatos de Estado y poder estatal en el feudalismo, el capitalismo y el socialismo*. España, Siglo XXI, Segunda Edición, 1982.
- Valenzuela Feijóo, José. *México 2006: ¿Una crisis mayor?* México, Horizontes Críticos, CEDA, 2006.

Villarreal, René. *La contrarrevolución monetarista. Teoría, política económica e ideología del neoliberalismo*. México, Diana, 1988.

Villarreal, René. *México 2010. De la industrialización tardía a la reestructuración industrial*. México, Diana. 1988.

Von Hayek, Friedrich A.. *Precios y producción*. Madrid, España, Unión Editorial, 1996.

Warman, Arturo. *El campo mexicano en el siglo XX*. México, FCE, 2001.

Weber, Max. *Economía y Sociedad*. México, FCE, 1996.

Wionczek, Miguel S., Gerardo M. Bueno y Jorge Eduardo Navarrete. *La transferencia internacional de tecnología-El caso de México*. México, FCE, 1974.

Zepeda Patterson, Jorge. *Los amos de México*. México, Ediciones Temas de Hoy, 2007.

Zermeño, Jorge. *La sociedad derrotada. El desorden mexicano del fin de siglo*. México, Siglo XXI-IIS UNAM, 1996.

Artículos y Capítulos de Libros.

Alba, Francisco. “Continuidad y cambios de la migración mexicana a Estados Unidos”, en Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer (coords.), *Una historia contemporánea de México, Tomo 1, Transformaciones y permanencias*. México, Océano, 2003.

Altman, David. “Democracia política y desarrollo económico: ¿Existe alguna relación?”, en *Desarrollo Humano e Institucional en América Latina* (DHIAL). 2001. Consultado en Internet el 28 de julio de 2007: http://www.nd.edu/~daltman/Democracia%20y%20desarrollo%20.htm#_ftn6.

Arias, Martha y José María Vera. *Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional ¿Una ayuda para los países pobres?* Consultado en Internet el 23 de julio de 2005 en la página web: www.fespinal.com/espinal%5castellano%5visua%5ces112.ht#c4.

Auyero, Javier. “Clientelismo político en Argentina: doble vida y negociación colectiva”, en *Perfiles Latinoamericanos*, No. 20. México, FLACSO.

Bell Lara, José y Delia Luisa López. *La cosecha del neoliberalismo en América Latina*. Cuba, Flacso, p. 1. Consultado en Internet el 1 de diciembre de 2009: http://www.flacso.uh.cu/sitio_revista/num1/articulos/art_JBell5.pdf

Bellamy Foster, John. “El redescubrimiento del imperialismo”, en Atilio A. Boron, Javier Amadeo y Sabrina González (compiladores), *La teoría marxista hoy: problemas y perspectivas*. 1a ed. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, Buenos Aires. 2006.

Berruecos García Travesí, Susana. "Los nuevos contrapesos en la política mexicana: el TEPJF y la justicia electoral en el contexto de la consolidación democrática" en *Sociológica* números 45-46, enero-agosto de 2001. UAM-A. México.

Bizberg, Ilán. "Auge y decadencia del corporativismo", en ____ y Lorenzo Meyer (coordinadores), *Una historia contemporánea de México*, Tomo I "Transformaciones y permanencias". México, Océano, 2003.

Boríssov, Zhamin y Makárova. *Diccionario de economía política*. URSS, Ed. Moscú, 1965.

Borón, Atilio A. "La cuestión del imperialismo", en _____, Javier Amadeo y Sabrina González (compiladores), *La teoría marxista hoy: problemas y perspectivas*. 1a ed. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, Buenos Aires. 2006.

Borón, Atilio. "Crisis de las democracias y movimientos sociales en América Latina: Notas para una discusión", en *Observatorio Social de América Latina*, Año VII, mayo/agosto 2006, Buenos Aires, CLACSO,

Burkhart, Ross E. y Michael S. Lewis-Beck "Comparative Democracy: The Economic Development Thesis", en *American Political Science Review*, No. 88, 1994.

Calva, José Luis. "México: la estrategia económica 2001-2006. Promesas, resultados y perspectivas", en *Problemas del Desarrollo*, Vol. 36, núm. 143, octubre-diciembre, 2005, p. 62. Consultado en Internet el 30 de julio de 2009: <http://www.ejournal.unam.mx/pde/pde143/PDE14303.pdf>.

Calvento, Mariana. "Fundamentos teóricos del neoliberalismo: su vinculación con las temáticas sociales y sus efectos en América Latina", en *Convergencia*, mayor-agosto, año/vol. 13, núm. 41. México, UAEM, 2006, pp. 42-50.

Casas Guerrero, Rosalba. Ciencia, tecnología y poder. "Elites y campos de lucha por el control de las políticas", en *Convergencia*, mayo-agosto, año/vol. 11, núm. 35. México, Universidad Autónoma del Estado de México, 2004.

Cervantes Niño, José Juan, Esthela Gutiérrez Garza y Lylia Palacios. "El concepto de economía informal y su aplicación en México: factibilidad, inconvenientes y propuestas", en *Revista Estudios Demográficos y Urbanos*, enero-abril, año/vol.. 23, núm. 001. México, El Colegio de México, 2008.

De la Fuente, Héctor. "El presidencialismo mexicano y el preludio neoliberal", en Leonel Álvarez y Eligio Meza Padilla (coords.), *Democracia, cultura y conflicto social*. México, UAZ, 2006.

De la Garza Toledo, Enrique. "La reestructuración del corporativismo en México", en María Lorena Cook et. al. (editores), *Las dimensiones políticas de la reestructuración económica*. México, Cal y Arena, 1994.

De la Garza Toledo, Enrique. *Los límites de la restructuración productiva en México*. Ponencia presentada en el V Congreso de Sociología del Trabajo. Montevideo, Uruguay, 2007, pp. 1-4. Consultado en Internet el 20 de noviembre de 2009: <http://docencia.izt.uam.mx/egt/publicaciones/articulos/los%20limites%20de%20la%20reestructuracion%20productiva.pdf>.

De la Garza Toledo, Enrique. *Modelos de industrialización en México*. STYPS, 1998. Consultado en Internet el 27 de julio de 2009: <http://docencia.izt.uam.mx/egt/publicaciones/libros/mdelosindus/cap2.pdf>.

De la Peña, Sergio. “En los umbrales del capitalismo industrial” en Américo Saldívar et. al. (compiladores) *Historia de México en el contexto mundial*. Ediciones Quinto Sol, México, 1986.

Delgado, Raúl, Víctor Figueroa y Margarita Hoffner. *Zacatecas: sociedad, economía, política y cultura*. Colección: Biblioteca de las entidades federativas. México, CIIH-UNAM, 1994.

Dos Santos, Theotonio. “El nuevo carácter de la dependencia” en Theotonio Dos Santos y Ruy Mauro Marini (coords.), *El pensamiento social Latinoamericano en el siglo XX*, Tomo I, Venezuela, UNESCO, 1999.

Durand, Jorge. “El Programa Bracero (1942-1964). Un balance crítico”, en *Migración y desarrollo*, segundo semestre, número 009. Zacatecas, México, Red Internacional de Migración y Desarrollo, 2007.

El Cotidiano, No. 25 septiembre-octubre, México, 1988.

Estay, Jaime, Alicia Girón y Osvaldo Martínez (coords.). *La globalización de la economía global. Principales dimensiones en el umbral del siglo XXI*. México, Colección Jesús Silva Herzog, 1999.

Estay, Jaime. “La concepción inicial de Raúl Prebisch y sus transformaciones” en Ruy Mauro Marini y Márgara Millán (coords.), *La teoría social latinoamericana. Subdesarrollo y dependencia*, Tomo II. México, Ediciones el Caballito. 1994.

Fernández, Paulina. “Reforma política: viejos ensayos de un nuevo fracaso” en *Elecciones y partidos en México*. México. Ediciones El Caballito. 1986.

Figueroa, Víctor. “América Latina: descomposición y persistencia de lo campesino”, en Problemas del Desarrollo, *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, UNAM, Vol. 36, No 142, julio-septiembre/2005.

Figueroa, Víctor. “América Latina: La actualidad del imperialismo, la actualidad de la crítica”, en _____ (coord.) *América Latina en la crisis del patrón neoliberal de crecimiento*. México, Tribunal Superior de Justicia del Estado-Unidad Académica de Ciencia Política, 2003.

Figuerola, Víctor. "Globalización y lucha de clases", *Glocal*, Magazine Internacional, Año 2, No. 9, agosto de 2003. Consultado en Internet el 19 de agosto de 2003: <http://glocalrevista.com>.

Figuerola, Víctor. "La Gestión Estatal del Desarrollo", en *Problemas del desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*. Vol. 26, No. 103, octubre-diciembre, México, 1995.

Girola, Lidia. "Del desarrollo y la modernización a la modernidad", en *Sociológica*, núm. 67, mayo-agosto. México, UAM, 2008.

Gómez Arnau, Remedios. "La integración económica con México y su impacto en la política interna y externa de Estados Unidos: análisis del ámbito migratorio", en *El Cotidiano*, núm. 97, septiembre-octubre de 1999. México, UAM-A.

González Campeán, Miguel. "La legitimidad de la revolución y la sociedad civil: la presidencia de Luis Donaldo Colosio", en ____ y Leonardo Lomelí (coords.) *El partido de la Revolución. Institución y conflicto (1928-1999)*. México, FCE, 2000.

Guillermo Cano, Jorge. *Políticas del Estado en materia de ciencia y tecnología*. Consultado en Internet el 28 de julio de 2009: http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib11/140.htm

Hernández Muñoz, Edgar. "El clientelismo político: los usos políticos de la pobreza", en *Espacios Públicos*, vol. 9, núm. 17. México, UAEM, 2006.

Hernández, Luis. "¿Reforma y contrarreforma campesina? Notas sobre el impacto de las reformas al 27 constitucional", en *El Cotidiano*, año 10, núm. 61, marzo-abril de 1994. México, UAM-A.

Humberto Márquez. "Controversias en el desarrollo económico local basado en las remesas de los migrantes", en *Análisis Económico* Núm. 47, vol. XXI. México, UAM-A, 2006.

Huntington, Samuel. "After Twenty Years: The future of third wave", en *Journal of Democracy*, vol. 8, núm. 4, octubre de 1997.

Linz, Juan. "Totalitarian and authoritarian regimes", en Fred I. Greensteinan (ed.), *Handbook of Political Science*, vol. 3, Berkeley, University of California, 1975.

Lomelí Venegas, Leonardo y Ciro Murayama. "México frente a la crisis: hacia un nuevo curso de desarrollo", en *Economía UNAM*, No. 018, septiembre 2009.

López Leyva, Santos y Lidyeth Azucena Sandoval. "Un Análisis de la política de ciencia y tecnología en México (2001-2006)", en *Estudios Sociales*, julio-diciembre, año/vol. XV, No. 30. México, Universidad de Sonora, 2006.

Lujambio, Alonso. “Adiós a la excepcionalidad: régimen presidencial y gobierno dividido en México” en Jorge Lanzaro (comp.) Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina. Buenos Aires, Argentina. CLACSO, 2001.

Mainwaring, Scott y Aníbal Pérez Liñán. “Nivel de desarrollo y democracia: el excepcionalismo latinoamericano (1945-1996)”, en *América Latina hoy*, número 36. España, Universidad de Salamanca, 2004.

Manrique Campos, Irma. “México: Modernización financiera integral en la condicionalidad de las políticas de ajuste estructural”, en Emir Sader (comp.), *El ajuste Estructural en América Latina. Costos Sociales y Alternativas*. Buenos Aires, CLACSO, 2001.

Martin Lipset, Seymour. “Algunos requisitos sociales de la democracia: Desarrollo Económico y Legitimidad política”, en Varios autores, *Diez textos básicos sobre ciencia política*. España, Ariel, 1992.

Méndez, Luis H. y Miguel Ángel Romero. “Chiapas: semblanza de un conflicto (enero de 1991-febrero de 1996)”, *Separata de El Cotidiano* núm. 76, mayo-junio, UAM-A, 1996.

Mestries, Francis. “El tema de las migraciones en El cotidiano”, en *El Cotidiano*, año 24, núm. 156, julio-agosto de 2009. México, UAM-A.

Meyer, Lorenzo. “Las presidencias fuertes. El caso de la mexicana”, en *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, núm. 13, setiembre-diciembre de 1992, México, El Colegio de México, 1992.

Morales, Ramiro. “Las remesas internacionales, ¿factor de sobrevivencia o de desarrollo de la población del Pacífico Sur de México?”, en *Estudios Demográficos y Urbanos*, vol. 21, núm. 3. México, Colmex, 2006.

Moreno, Pedro, et. al. “Veinticinco años de políticas de desarrollo social en México”, en *Sociológica* No. 45, enero-abril 2005. UAM-A. México.

O'Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter y Lawrence Whitehead (comps.). *Transiciones desde un gobierno autoritario*. Vol. IV. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas. Buenos Aires, Paidós, 1998.

Ornelas, Jaime. “La economía mexicana en el gobierno de Vicente Fox (2000-2006)”, en *Aportes*, enero-abril, vol. XII, núm. 34. México, BUAP, 2007.

Peschard, Jacqueline, Cristina Puga y Ricardo Tirado. “De Ávila Camacho a Miguel Alemán”, en Cristina Puga et. al., *Evolución del Estado Mexicano*, Vol. III “Consolidación”. México, Ediciones El Caballito 4ta. Edición, 1993.

Peschard, Jacqueline. “Después de la transición: trayectos institucionales en materia electoral” en *Sociológica*, No. 52, mayo-agosto de 2003. UAM-A. México.

Peschard, Jacqueline. "El fin del sistema de partido hegemónico" en *Revista Mexicana de Sociología*, no. 2/93. México, IIS-UNAM.

Pineda Pablos, Nicolás. "Entre el neocorporativismo y el neoliberalismo. Alternativas para el avance de la transición democrática mexicana", en *Espiral*, septiembre-diciembre, vol. XI, núm. 31. México, Universidad de Guadalajara, 2004.

Pinto, Aníbal. "Naturaleza e implicaciones de la "heterogeneidad estructural de América Latina", en *El Trimestre Económico*, vol. 37, núm. 145, enero-marzo de 1970, México, FCE.

Provencio, Enrique y Julia Carabias. "La dimensión ambiental y la nueva Ley Agraria", en *El Cotidiano*, año 8, núm. 48, junio de 1992. México, UAM-A.

Przeworski, Adam. "Compromiso de clase y Estado", en Norbert Lechner (editor), *Estado y política en América Latina*. México, Siglo XXI Editores, 1986.

Punto Crítico. "Economía y Política del gobierno de LEA" en Ismael Colmenares et. al. (recopiladores), *Cien años de lucha de clases en México (1876-1976). Lecturas de Historia de México*. Tomo II. Ediciones Quinto Sol. México. 1985.

Rendón Corona, Armando. "El corporativismo sindical y sus transformaciones", en *Revista Nueva Antropología*, abril, vol. XVIII, núm. 59. México, Nueva Antropología A.C., 2001.

Reyes del Campillo, Juan. "Orden y construcción de un nuevo sistema de partido" en Luis H. Méndez (coord.) *Poder, Ideología y Respuesta social en México (1982-1996)*. México, UAM-A-Grupo Editorial León, 1997.

Reyna, José Luis. "El movimiento obrero en el ruizcortinismo: la redefinición del sistema económico y la consolidación política", en José Luis Reyna y Raúl Trejo Delarbre, *La clase obrera en la historia de México. De Adolfo Ruíz Cortínez a Adolfo López Mateos (1952-1964)*. México, Siglo XXI, 1981.

Roitman Rosenmann, Marcos. "Teoría y práctica de la democracia en América Latina", en González Casanova, Pablo y _____ (coords.). *La democracia en América Latina. Actualidad y perspectivas*. Madrid, España, Editorial Complutense, 1992.

Romero M., Miguel Ángel, "De rupturas, reacomodos y desafíos. La coyuntura del 2 de julio de 2000", *El Cotidiano* núm. 103, septiembre-octubre de 2000. México, UAM-A.

Romero, José. "Crecimiento y comercio", en Ilán Bizberg y Lorenzo Meyer (coords.), *Una historia contemporánea de México. Tomo I, Transformaciones y permanencias*. México, Océano, 2003.

Salinas de Gortari, Carlos. "Reformando al estado" en *Nexos*. No. 148. México, 1990.

Samaniego, Norma. "El mundo del trabajo. Una estructura en terrenos movedizos", en *Economía UNAM*, Vol. 2, Núm. 4. México, UNAM, 2005.

Sánchez Albarrán, Armando. "Movimientos campesinos en El Cotidiano", en *El Cotidiano*, año 24, núm. 156, julio-agosto de 2009. México, UAM-A.

Sánchez Daza, Germán y Nayeli Pérez Juárez. *Empleo y crisis del patrón neoliberal en las entidades del país*. Conferencia impartida en la Unidad Académica de Ciencia Política de la UAZ, en mayo de 2009.

Sánchez Daza, Germán. "Los sistemas de ciencia y tecnología en tensión: su integración al patrón de reproducción global", en *Convergencia*, No. 35 mayo-agosto. México, UAEM, 2004.

Sánchez Daza, Germán. *Retos Tecnológicos frente a la globalización*. Ponencia presentada en el Seminario de Economía Mexicana. Transnacionalización de la economía mexicana. Consecuencias, posibilidades y perspectivas. México, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, mayo de 1998. Consultado en Internet el 21 de julio de 2009 en la página web: <http://74.125.93.132/search?q=cache:http://www.redem.buap.mx/res1daza.htm>.

Schmitter, Philippe. "La consolidación de la democracia y la representación de los grupos sociales", en *Revista Mexicana de Sociología*, No. 3, Julio-Septiembre. México, UNAM, 1992.

Schmitter, Philippe. *Teoría del corporativismo. Ensayos de Philippe C. Schmitter*, compilado por Rigoberto Alcántara Ocampo. México, Ed. de la Universidad de Guadalajara, 1992.

Serrano, María, Joseph F.. *El "Consenso de Washington": ¿paradigma económico del capitalismo triunfante?* Revista Papeles. Localizable en Internet, página Web: <http://www.fespinal.com/espinal/realitat/pap/pap46.htm>. Última consulta: 22 de octubre de 2006.

Stavenhagen, Rodolfo. "Siete tesis equivocadas sobre América Latina", en *Sociología y Subdesarrollo*. México, Nuestro Tiempo, 1981.

Vélez Quero, Silvia. "El perfil de la necesidad en México: emigración y seguridad nacional", en *El Cotidiano*, núm. 67, enero-febrero de 1995, México, UAM-A.

Verduzco, Gustavo. *La migración mexicana a Estados Unidos. Estructuración de una selectividad histórica*. Consultado en Internet el 11 de septiembre de 2009, en la página web: <http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/migracion/MigracionContCamb/01.pdf>

Vilas, Carlos M. "Seis ideas falsas sobre la globalización. Argumentos desde América Latina para refutar una ideología" en John Saxe-Fernández, *Globalización: crítica de un paradigma*. México, Plaza & Janes Editores, UNAM, 1999.

Zapata Schaffeld, Francisco. “¿Democratización o rearticulación del corporativismo? El caso de México”, en *Política*, otoño, núm. 42. Chile, Universidad de Chile, 2004.

Zermeño Fabiola y Moisés Domínguez. “El Estado y las políticas de combate a la pobreza en México: algunas reflexiones para la comprensión del Progreso”, en *El Cotidiano* núm. 99 enero-febrero, México, UAM-A, 2000.

Instituciones, Diarios, Internet y otros recursos.

Banco de México, *Indicadores económicos*, varios años; Banco de información, *Sistema de Información Económica* (SIE), marzo 2001; y página WEB: www.banxico.org.mx.

Banco Mundial, *Ingreso de de las economías*, Julio 2007. (Documento en línea). Disponible en la página Web: [http://www.bancomundial.org/datos/clasificacion_paises.html].

Banco Mundial. *Las remesas de migrantes a sus familias alivian la pobreza en sus países*. Documento consultado 15 de mayo de 2009 en la dirección electrónica: <http://youthink.worldbank.org/es/issues/employment/migration/>

Cámara de Diputados. *Propuesta de Adendo al Acuerdo Nacional para el Campo por el Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y la Seguridad Alimentaria alimentaria*. México, Cámara de Diputados, 2007. Consultado en Internet el 25 de mayo de 2008, en la página web: www.diputados.gob.mx.

Cervantes, Jesús. “PRI y PAN exhiben sus miserias en San Lázaro”, *Página 24*, 11 de marzo de 2010.

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. IFE. México. 1996; y *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. Editorial Porrúa. México. 1996.

Comisión Económica para América Latina. *Panorama social para América Latina 2008, Síntesis*. Chile, ONU, 2008, p. 21. Consultado en Internet el 14 de julio de 2009: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/34732/PSE2008_Versioncompleta.PDF

Economist Intelligence Unit democracy index, *The World in 2007*, The Economist, 2006.

EZLN. *Declaración de la selva lacandona*. México, EZLN, 1993. Consultado en Internet el 18 de marzo de 2009 en la dirección electrónica: <http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1993.htm>.

INEGI. *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo*. México, INEGI, 2006.

La jornada. “Aumentó la pobreza en la actual administración: Julio Boltvinik”, 18 de septiembre de 2005.

Organización de las Naciones Unidas. *Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos*. Nueva York, 1966. Consultado en Internet el 10 de julio de 2009: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ccpr_sp.htm.

Organización de las Naciones Unidas. *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. Nueva York, 1966. Consultado en Internet el 10 de julio de 2009: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_ceschr_sp.htm

Poder Ejecutivo Federal. *Programa Especial de Ciencia y Tecnología*. México, CONACYT, 2001.

PREALC, *Mercado de trabajo en cifras*. Santiago, Chile, PREALC. 1982.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. *Informe sobre la democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos*. México, Editorial Taurus-Alfaguara, 2004.

Reformas a la Constitución en el portal de la Cámara de Diputados: <www.diputados.gob.mx>.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación. *Dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, declaración de validez de la elección y presidente electo*. Consultado en internet el 23 de marzo de 2007: www.trife.gob.mx/acuerdo/dictamen.pdf.

Woldenberg, José. *México: la historia de su democracia*. Documental televisivo en formato DVD. México, Televisa Home, 2004.